INDICE

PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la ciudad de Roma, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve 2

Decreto Promulgatorio del Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Eslovaca, firmado en la ciudad de Monterrey, México, el veinte de marzo de dos mil dos 10

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Acuerdo que autoriza el ajuste y modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y que modifica las disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica 14

SECRETARIA DE ECONOMIA

Decreto por el que se aprueba el Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006 16

Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006 17

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-152-SCFI-2001, Ambar de Chiapas-Especificaciones y métodos de prueba 56

Cédulas del Patrón Nacional de Medición 70

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Norma Oficial Mexicana NOM-145/1-SCT3-2001, Que regula los requisitos y especificaciones para el establecimiento y funcionamiento del taller aeronáutico 73

Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCT2/1995, Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques destinados al transporte de materiales y residuos peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312 92

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

Resolución que declara como terreno nacional el predio El Despreciado, expediente número 508730, Municipio de Tecpatán, Chis. 103

Resolución que declara como terreno nacional el predio El Paraíso, expediente número 508742, Municipio de La Concordia, Chis. 104

Resolución que declara como terreno nacional el predio Los Cerros de Líbano, expediente número 508806, Municipio de La Concordia, Chis. 105

Resolución que declara como terreno nacional el predio Plan de las Toreras, expediente número 509040, Municipio de Jiquipilas, Chis. 106

Resolución que declara como terreno nacional el predio Plan del Higo, expediente número 509128, Municipio de Villa Corzo, Chis. 108

Resolución que declara como terreno nacional el predio El Sacrificio, expediente número 513198, Municipio de Pijijiapan, Chis. 109

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA

Listado de extractos de las resoluciones emitidas por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia 110

PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Aviso por el que se informa al público en general la ubicación del nuevo domicilio del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles 115

BANCO DE MEXICO

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana 115

Tasas de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional 116

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 116

AVISOS

Judiciales y generales 117

SEGUNDA SECCION

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se ratifican diversos acuerdos aprobados durante el Proceso Electoral Federal 1999-2000, que resultan aplicables para el Proceso Electoral Federal 2002-2003 1

Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se da cumplimiento a la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de la resolución respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos correspondientes al ejercicio de 2000, identificada como SUP-RAP-055/2001 27

Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, recaída al recurso de apelación interpuesto por el Partido Acción Nacional, identificada como SUP-RAP-055/2001 35

Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación interpuesto por la Agrupación Política Nacional Movimiento Social de los Trabajadores, identificada como SUP-RAP-063/2001 70

Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación interpuesto por la Agrupación Política Nacional Campesinos de México por la Democracia, identificada como SUP-RAP-064-2001 95

################################ ### ################################

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ, *Director.*

Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Tel. 5093-3200 extensiones: *Dirección* 35006, *Producción* 35094 y 35100,

Inserciones 35079, 35080, 35081 y 35082; Fax 35068

Suscripciones y *quejas:* 35054 y 35056

Correo electrónico: *dof@segob.gob.mx.* Dirección electrónica: *www.gobernacion.gob.mx*

Impreso en Talleres Gráficos de México###México

170103-12.00 Esta edición consta de dos secciones

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION

Tomo DXCII No. 12 México, D. F., Viernes 17 de enero de 2003

CONTENIDO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
BANCO DE MEXICO
AVISOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

DECRETO Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la ciudad de Roma, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a sus habitantes, sabed:

El veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en la ciudad de Roma, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referéndum el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, cuyo texto en español consta en la copia certificada adjunta.

El Acuerdo mencionado fue aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el diecisiete de abril de dos mil, según decreto publicado en el **Diario Oficial de la Federación** del diez de julio del propio año.

Las notificaciones a que se refiere el artículo 11 del Acuerdo, se efectuaron en la Ciudad de México, el veintiuno de julio de dos mil y el cuatro de diciembre de dos mil dos.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el diez de diciembre de dos mil dos.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores, **Jorge Castañeda Gutman**.- Rúbrica.

JUAN MANUEL GOMEZ ROBLEDO, CONSULTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

CERTIFICA:

Que en los archivos de esta Secretaría obra el original correspondiente a México del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la ciudad de Roma, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, cuyo texto en español es el siguiente:

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana, en adelante denominados como las Partes Contratantes;

CON EL PROPOSITO de establecer condiciones favorables para que los inversionistas de alguna Parte Contratante inviertan en el territorio de la otra Parte Contratante;

TENIENDO en mente que la promoción y la mutua protección de estas inversiones requiere que sean mantenidas las favorables condiciones económicas y legales; y

CONSIDERANDO que la promoción y la mutua protección de estas inversiones contribuirán al desarrollo de la cooperación económica-comercial y técnico-científica para beneficio mutuo y estimularán iniciativas económicas en el ámbito de las inversiones;

Han acordado lo siguiente:

ARTICULO 1
Definiciones

Para efectos del presente Acuerdo:

1. El término "inversión" significará toda clase de activos invertidos antes o después de la entrada en vigor de este Acuerdo, por un inversionista de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, de conformidad con la legislación de esa Parte Contratante, en cualquier forma legal. Sin embargo, no será aplicable para las divergencias o controversias que hayan surgido con anterioridad a su entrada en vigor. El término "inversión" comprende en particular; aunque no exclusivamente:

a) propiedades muebles e inmuebles, adquiridos o utilizados para fines económicos, y cualquier derecho "in rem", tales como derechos de prenda, gravámenes e hipotecas;

b) acciones, instrumentos de deuda y otros valores, así como participaciones accionarias y otras formas de participación;

c) reclamaciones pecuniarias o cualquier otra prestación con valor económico, estrictamente relacionadas con una inversión, con excepción de:

- el otorgamiento de créditos relacionados con transacciones comerciales, tales como financiamiento al comercio,
- créditos con una duración menor de tres años,
- una obligación contractual del Estado o una empresa del mismo, o el otorgamiento de un crédito al Estado o a una empresa del mismo;

d) derechos de propiedad intelectual incluyendo, en particular, derechos de autor y derechos de propiedad industrial tales como patentes, marcas, diseños industriales, nombres comerciales, así como conocimientos técnicos (know how), secretos comerciales, y prestigio y clientela (goodwill);

e) derechos conferidos por ley, contrato, o en virtud de licencias y permisos de conformidad con la legislación, para llevar a cabo actividades económicas, incluyendo contratos de llave en mano o de construcción o derechos derivados de una concesión; y

f) derechos derivados de licencias o concesiones otorgadas por una empresa del Estado.

2. El término "inversionista" significará, con respecto a cada Parte Contratante, cualquier persona física
o jurídica autorizada, de conformidad con la legislación de esa Parte Contratante, para realizar inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante.

"Persona física" significa cualquier persona natural que tenga la nacionalidad de una Parte Contratante de conformidad con su legislación.

"Persona jurídica" significa una empresa del Estado, una empresa, una firma, una asociación o cualquier otra entidad que tenga su sede en el territorio de una Parte Contratante y reconocida como persona jurídica de conformidad con su legislación, independientemente si su responsabilidad es limitada o de otra índole.

3. El término "rentas de inversión" significará los rendimientos de una inversión incluyendo, en particular, ganancias, intereses devengados, ganancias de capital, dividendos, regalías o pagos derivados de servicios de asistencia y técnicos, así como cualquier pago en especie.

4. El término "territorio" significará:

- para los Estados Unidos Mexicanos: además de las zonas comprendidas dentro de las fronteras terrestres, las "zonas marítimas". Lo anterior también comprende las zonas marinas
  y la plataforma continental sobre las cuales México ejerce soberanía y derechos de soberanía o de jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional.
- para la República Italiana: además de las zonas comprendidas dentro de las fronteras terrestres, las "zonas marítimas". Lo anterior también comprende, las zonas marina y submarina sobre las cuales Italia ejerce soberanía y derechos de soberanía o de jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional.

ARTICULO 2

Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones

1. Cada Parte Contratante alentará a los inversionistas de la otra Parte Contratante a invertir en su territorio y admitirá sus inversiones de conformidad con su propia legislación.

2. Cada Parte Contratante otorgará a las inversiones realizadas en su territorio por inversionistas de la otra Parte Contratante, trato justo y equitativo y se abstendrá de adoptar medidas discriminatorias que puedan impedir la operación, administración, mantenimiento, uso, disposición, transformación o liquidación de la inversión. Estas inversiones disfrutarán de plena protección legal y seguridad.

3. En caso de reinversión de las rentas de una inversión o de incremento del capital invertido, dicha reinversión o dicho incremento gozará de la misma protección y tratamiento otorgado a la inversión inicial.

4. Cada Parte Contratante deberá, de conformidad con su legislación, permitir a los inversionistas de la otra Parte Contratante, que hayan realizado inversiones en su territorio, emplear personal gerencial, independientemente de su nacionalidad.

5. Los nacionales de una Parte Contratante que estén autorizados para trabajar en el territorio de la otra Parte Contratante, en relación con las inversiones sujetas a este Acuerdo, gozarán de condiciones apropiadas para el desempeño de sus actividades profesionales, de conformidad con la legislación de la última.

6. Cada Parte Contratante deberá, de conformidad con su legislación y sus obligaciones internacionales relativas a la entrada y estancia de extranjeros, permitir que los nacionales de la otra Parte Contratante laboren en relación con las inversiones protegidas por este Acuerdo, así como permitir a los miembros de sus familias la entrada, estancia y salida de su territorio.

ARTICULO 3

Tratamiento

1. Cada Parte Contratante otorgará a los inversionistas de la otra Parte Contratante, así como a sus inversiones y rentas, trato no menos favorable que el que conceda a sus propios inversionistas y a sus inversiones y rentas, o a inversionistas de cualquier tercer Estado.

2. El trato de la nación más favorecida, otorgado de conformidad con el párrafo 1. de este Artículo, no se aplicará a las ventajas y privilegios que la Parte Contratante otorga u otorgará en el futuro en virtud de:

- su participación en Areas de Libre Comercio, Uniones Aduaneras o Económicas;
- acuerdos para evitar la doble tributación u otros arreglos relativos a asuntos tributarios;
- acuerdos para facilitar el comercio transfronterizo.

ARTICULO 4

Indemnización por pérdidas

Si los inversionistas de cualquier Parte Contratante sufren pérdidas en sus inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante como resultado de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia o situaciones similares, la última Parte Contratante deberá, de conformidad con su legislación, ofrecer a los inversionistas el mismo trato que el que otorgue a sus propios inversionistas y, en todo caso, un trato no menos favorable que el otorgado a los inversionistas de cualquier tercer país.

ARTICULO 5

Expropiación

1. Las inversiones de los inversionistas de una de las Partes Contratantes no podrán ser, "de jure" o "de facto", total o parcialmente, nacionalizadas, expropiadas, requisadas o sujetas a cualquier medida con efectos equivalentes (en lo sucesivo "expropiación") en el territorio de la otra Parte Contratante, excepto por causas de utilidad pública o interés nacional, mediante el pago de indemnización, siempre y cuando dichas medidas se apliquen sobre bases no discriminatorias y de conformidad con los procedimientos establecidos por su legislación.

2. La indemnización a que se refiere el párrafo 1. de este Artículo deberá ser equivalente al valor justo de mercado de las inversiones expropiadas, inmediatamente antes de la fecha en que la expropiación se haya llevado a cabo o la decisión de expropiar hubiera sido oficialmente anunciada. La determinación del valor justo de mercado tomará en consideración el valor fiscal declarado de los activos expropiados.

3. La indemnización será pagada sin demora injustificada y en un periodo razonable de tiempo, y será completamente liquidable y libremente transferible.

La indemnización devengará intereses desde la fecha de expropiación hasta la fecha de su pago a una tasa comercial normal, incluyendo LIBOR.

4. La indemnización será pagada en una divisa convertible de acuerdo al tipo de cambio aplicable a la fecha inmediata anterior a aquella en la que se llevó a cabo la expropiación o la decisión relativa a la expropiación fue oficialmente anunciada. Dicha indemnización será libremente transferible.

5. Las disposiciones de este Artículo se aplicarán también a las rentas de inversión y, en el caso de que se dé por concluida la inversión, a los productos derivados de la liquidación, los cuales serán pagados al inversionista sólo en el caso de que cualquiera de ellos sea nacionalizado o expropiado.

6. Si después de la desposesión, la inversión no ha sido utilizada, total o parcialmente, para el propósito por el que fue llevada a cabo la expropiación en cuestión, el propietario anterior o sus causahabientes podrán recuperar la inversión a un valor justo de mercado, de conformidad con los procedimientos previstos en la legislación vigente de la Parte Contratante que llevó a cabo la expropiación.

ARTICULO 6

Transferencia de fondos

1. Cada Parte Contratante asegurará a los inversionistas de la otra Parte Contratante la libre transferencia al exterior de:

a) el capital inicial y las cantidades adicionales para mantener o incrementar la inversión;

b) cualquier renta de inversión;

c) los montos derivados de la venta total o parcial, o de la liquidación total o parcial de una inversión;

d) fondos de amortización de préstamos relacionados con una inversión;

e) remuneraciones y otras indemnizaciones recibidas por nacionales de la otra Parte Contratante con respecto al pago de salarios y prestación de servicios relacionados con la implementación de la inversión en su territorio, en las cantidades y de conformidad con los procedimientos establecidos en su legislación;

f) pagos derivados de indemnización por pérdidas; y

g) pagos derivados de la aplicación de las disposiciones relativas a la solución de controversias.

2. Tomando en consideración las disposiciones del Artículo 3. de este Acuerdo, las Partes Contratantes se comprometen a aplicar a las transferencias mencionadas en el párrafo 1. de este Artículo, el Trato de la Nación más Favorecida.

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 arriba contenidos, cada Parte Contratante podrá impedir una transferencia mediante la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de medidas para proteger los derechos de los acreedores, relativas a, o para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos para la emisión, transmisión y negociación de valores, futuros y derivados, reportes o registros de transferencias, o relacionadas con infracciones penales y resoluciones derivadas de procedimientos administrativos o de adjudicación, siempre que tales medidas y su aplicación no sean utilizadas como un medio para evadir el cumplimiento de los compromisos u obligaciones de la Parte Contratante contenidas en este Acuerdo.

4. En caso de un desequilibrio fundamental de la balanza de pagos o de una amenaza del mismo, cada una de las Partes Contratantes podrá temporalmente restringir las transferencias, siempre y cuando tal Parte Contratante instrumente medidas o un programa de acuerdo con los estándares del Fondo Monetario Internacional. Estas restricciones se impondrán sobre bases equitativas, no discriminatorias y de buena fe.

ARTICULO 7

Subrogación

1. Si una Parte Contratante o su agencia designada realiza un pago de conformidad con una indemnización, garantía o contrato de seguro contra riesgos no comerciales otorgados en relación a una inversión de un inversionista en el territorio de la otra Parte Contratante, la última Parte Contratante reconocerá la cesión de cualquier derecho o reclamación de tal inversionista a la primera Parte Contratante o su agencia designada y el derecho de la primera Parte Contratante o su agencia designada para ejercitar en virtud de subrogación, cualquier derecho o reclamación en la misma medida que su antecesor en título.

No obstante, en caso de una controversia, únicamente el inversionista o una persona legal privada a la cual la Parte Contratante o su agencia designada han asignado sus derechos, podrá iniciar o participar en procedimientos ante un tribunal nacional o someter el caso al arbitraje internacional de conformidad con las disposiciones de la Sección 2 (dos) del Anexo de este Acuerdo.

2. En relación con la transferencia de pagos realizada en virtud de esta cesión a la Parte Contratante o su agencia designada, serán aplicables las disposiciones de los Artículos 4, 5 y 6 de este Acuerdo.

ARTICULO 8

Procedimientos relativos a la Transferencia de Fondos

La transferencia de fondos a que se refieren los Artículos 4, 5, 6 y 7 de este Acuerdo se realizará sin demora injustificada y, después de que el inversionista haya cumplido con todas sus obligaciones en materia fiscal, de conformidad con los procedimientos aplicables por la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio haya sido realizada la inversión.

Dicha transferencia de fondos será realizada en una divisa convertible al tipo de cambio aplicable en la fecha en la que el inversionista solicita la transferencia.

ARTICULO 9

Mecanismos de solución de controversias

Cualquier controversia entre las Partes Contratantes derivada de la interpretación y/o aplicación del presente Acuerdo, así como las controversias entre una Parte Contratante y un inversionista de la otra Parte Contratante, serán resueltas amigablemente.

Si una controversia no pudiera ser resuelta de tal forma, será aplicable el correspondiente mecanismo de solución de controversias, tal y como se dispone en el Anexo que forma parte integrante del presente Acuerdo.

ARTICULO 10

Aplicación de otras disposiciones

1. Si una cuestión se encuentra regulada tanto por este Acuerdo como por otro Acuerdo Internacional en el que ambas Partes Contratantes sean signatarias del mismo, se aplicarán las disposiciones más favorables tanto para las Partes Contratantes como para sus inversionistas.

2. Siempre que el trato otorgado por una Parte Contratante a los inversionistas de la otra Parte Contratante de conformidad con su legislación sea más favorable que el otorgado en virtud de este Acuerdo, se aplicará el trato más favorable.

ARTICULO 11

Entrada en vigor

Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que se reciba la última notificación por escrito entre las Partes Contratantes confirmando el cumplimiento de todos los requisitos constitucionales.

ARTICULO 12

Duración y terminación del Acuerdo

1. Este Acuerdo permanecerá en vigor por diez (10) años, contados a partir de la fecha en que los requisitos establecidos en el Artículo 11 de este Acuerdo hayan sido cumplidos y podrá ser ampliado por periodos subsecuentes de cinco (5) años, salvo que alguna de las dos Partes Contratantes lo dé por terminado por escrito, al menos un año antes de la fecha de terminación del mismo.

2. Con relación a las inversiones realizadas antes de la fecha de terminación del presente Acuerdo, las disposiciones de los Artículos 1 a 10, inclusive, continuarán en vigor por diez (10) años siguientes a la fecha de su terminación.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los representantes debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han suscrito el presente Acuerdo.

HECHO en la ciudad de Roma, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en dos originales en los idiomas español, italiano e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de cualquier divergencia en la interpretación, deberá prevalecer el texto en idioma inglés.- Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.- Rúbrica.- Por el Gobierno de la República Italiana.- Rúbrica.

ANEXO

RELATIVO A LOS MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS

SECCION 1

Mecanismo de solución de controversias entre las Partes Contratantes

1. Cualquier controversia que pueda surgir entre las Partes Contratantes relativa a la interpretación y aplicación del presente Acuerdo deberá ser, en la medida de lo posible, solucionada de manera amigable.

2. En caso de que la controversia no pudiera ser resuelta dentro de los seis meses siguientes a la fecha en la que una de las Partes Contratantes haya notificado, por escrito, a la otra Parte Contratante su intención de acudir al arbitraje, la controversia será sometida a un Tribunal Arbitral ad hoc de conformidad con lo dispuesto por el presente Artículo.

3. El Tribunal Arbitral deberá ser constituido de la siguiente manera: dentro del término de dos meses contados a partir de la recepción de la solicitud de arbitraje, cada una de las dos Partes Contratantes deberá designar a un miembro del Tribunal Arbitral. Los dos miembros deberán entonces seleccionar a un nacional de un tercer Estado quien será designado como Presidente. El Presidente deberá ser designado dentro del término de tres meses contados partir de la fecha de la designación de los otros dos miembros.

4. Si, dentro del periodo a que se refiere el párrafo 3 de este Artículo, no se han realizado las designaciones, cada una de las dos Partes Contratantes podrá, a falta de cualquier otro arreglo, solicitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que realice la designación. En caso de que el Presidente de la Corte sea nacional de una de las Partes Contratantes o se encuentre imposibilitado para llevar a cabo dicha designación por cualquier razón, la solicitud se hará al Vicepresidente de la Corte. Si el Vicepresidente de la Corte es nacional de una de las Partes Contratantes o se encuentra inhabilitado para llevar a cabo dicha designación por cualquier razón, el miembro de la Corte Internacional de Justicia que siga inmediatamente en el orden jerárquico y que no sea nacional de alguna de las Partes Contratantes; será invitado a realizar la designación.

5. El Tribunal Arbitral resolverá por mayoría de votos. Sus decisiones serán obligatorias para ambas Partes Contratantes. Cada Parte Contratante pagará los gastos de su propio miembro del Tribunal Arbitral y de su representación en las audiencias. Los gastos correspondientes al Presidente y cualquier otro gasto serán asumidos por partes iguales entre las Partes Contratantes.

El Tribunal Arbitral determinará sus propios procedimientos.

6. Una Parte Contratante no podrá iniciar procedimientos de acuerdo con esta Sección por una controversia relativa a la violación de los derechos de un inversionista, la cual haya sido sometida por dicho inversionista a los procedimientos conforme a la Sección 2 de este Anexo (Inversionista-Estado), a menos que la otra Parte Contratante incumpla o no acate el laudo dictado en dicha controversia. En este caso, el Tribunal Arbitral establecido de conformidad con este Artículo, ante la presentación de una solicitud de la Parte Contratante cuyo inversionista fue parte en la controversia, podrá ordenar:

a) una declaración en el sentido de que el incumplimiento o desacato de los términos del laudo definitivo es contrario a las obligaciones de la otra Parte Contratante de conformidad con este Acuerdo; y

b) una recomendación de que la otra Parte Contratante cumpla o acate el laudo definitivo.

SECCION 2

Solución de controversias entre una Parte Contratante y un inversionista de la otra Parte Contratante

ARTICULO 1

Ambito de Aplicación y Derecho de Acción

1. Esta Sección se aplica a controversias entre una Parte Contratante y un inversionista de la otra Parte Contratante que surjan a partir de que el presente Acuerdo entre en vigor, respecto de un supuesto incumplimiento de una obligación de la primera Parte Contratante conforme a este Acuerdo que ocasione pérdida o daño al inversionista o a su inversión. Una empresa que sea una inversión en el territorio de una Parte Contratante realizada por un inversionista de la otra Parte Contratante, no podrá someter reclamación alguna a arbitraje de acuerdo con esta Sección.

2. Si un inversionista de una Parte Contratante o su inversión que sea una empresa en el territorio de la otra Parte Contratante, inicia procedimientos ante un tribunal nacional con respecto a una medida que constituya un supuesto incumplimiento del presente Acuerdo, la controversia solamente podrá someterse al arbitraje de conformidad con esta Sección, si el tribunal nacional competente no ha dictado sentencia en primera instancia sobre el fondo del asunto. Lo anterior no se aplica a procedimientos administrativos ante autoridades administrativas que ejecuten la medida presuntamente violatoria.

3. En caso de que un inversionista de una Parte Contratante someta una controversia a arbitraje, ni el inversionista ni su empresa, que sea una inversión realizada en el territorio de la otra Parte Contratante, podrán iniciar o continuar procedimientos ante un tribunal nacional.

ARTICULO 2

Medios de solución, periodos de tiempo

1. De ser posible, la controversia deberá resolverse a través de negociaciones o consultas. De no ser resuelta, el inversionista podrá elegir someter la controversia a resolución:

a) de los tribunales competentes de la Parte Contratante que es parte en la controversia;

b) de acuerdo con cualquier procedimiento de solución de controversias aplicable previamente acordado; o

c) de acuerdo con este Artículo a:

i) el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ("el Centro"), establecido de acuerdo al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados ("el Convenio del CIADI"), si la Parte Contratante
del inversionista y la Parte Contratante que es parte en la controversia son ambas parte del Convenio del CIADI;

ii) el Centro, conforme a las Reglas del Mecanismo Complementario para la Administración de Procedimientos por el Secretariado del Centro, si la Parte Contratante del inversionista o la Parte Contratante que es parte en la controversia, pero no ambas, es parte del Convenio del CIADI;

iii) a un tribunal de arbitraje ad hoc, establecido de acuerdo con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional ("CNUDMI");

iv) la Cámara Internacional de Comercio, a través de un tribunal ad hoc, de acuerdo con sus reglas de arbitraje.

2. Las reglas de arbitraje aplicables regirán al mismo, salvo en la medida de lo modificado por esta Sección.

3. Una controversia podrá ser sometida a resolución, de acuerdo con el párrafo (1) c), una vez que hayan transcurrido seis meses desde que los actos que motivan la reclamación tuvieron lugar, siempre que el inversionista haya entregado a la Parte Contratante que es parte en la controversia, comunicación por escrito de su intención de someter la reclamación al arbitraje por lo menos con 60 días de

anticipación, y siempre y cuando no haya transcurrido un plazo de 3 años a partir de la fecha en que el inversionista por primera vez tuvo o debió haber tenido conocimiento de los actos que dieron lugar a la controversia.

ARTICULO 3

Consentimiento de la Parte Contratante

Cada Parte Contratante otorga su consentimiento incondicional al sometimiento de una controversia a arbitraje internacional de acuerdo con esta Sección.

ARTICULO 4

Integración del Tribunal Arbitral

1. A menos que las partes en la controversia convengan otra cosa, el tribunal arbitral se integrará por tres miembros. Cada parte en la controversia designará un miembro y estos dos miembros, a su vez, deberán nombrar a un tercero como su Presidente.

2. Si un tribunal arbitral no ha sido constituido dentro de un término de 90 días contados a partir de la fecha en que la reclamación fue sometida a arbitraje, ya sea porque una de las partes en la controversia no designó miembro o los nombrados no llegaron a un acuerdo sobre el Presidente, el Secretario General del CIADI, a petición de cualquiera de las partes en la controversia, será invitado para designar, a su discreción, al miembro o miembros aún no designados. No obstante, el Secretario General del CIADI, al momento de designar al Presidente, deberá asegurarse de que el mismo no sea nacional de alguna de las
Partes Contratantes.

ARTICULO 5

Acumulación

1. Un tribunal de acumulación establecido conforme a este Artículo se instalará de acuerdo a las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI y procederá de conformidad con lo establecido en dichas Reglas, salvo lo modificado por esta Sección.

2. Los procedimientos podrán acumularse a petición de una de las Partes Contratantes en los siguientes casos:

a) cuando un inversionista someta una reclamación en representación de una empresa de su propiedad o que esté bajo su control y, simultáneamente, otro inversionista o inversionistas que participen en la misma empresa, pero sin tener el control de ésta, sometan reclamaciones por cuenta propia como consecuencia de las mismas violaciones del presente Acuerdo; o

b) cuando se sometan al arbitraje dos o más reclamaciones derivadas de cuestiones comunes de hecho y de derecho.

3. El tribunal de acumulación resolverá sobre la jurisdicción a la que habrán de someterse las reclamaciones y, a petición de parte, examinará conjuntamente dichas reclamaciones, salvo que determine que los intereses de cualquier parte en la contienda se vean perjudicados.

ARTICULO 6

Lugar del arbitraje

A petición de cualquiera de las partes contendientes, cualquier arbitraje que se lleve a cabo conforme a esta Sección, se realizará en un Estado que sea parte de la Convención de Naciones Unidas para el Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros (Convención de Nueva York). Las reclamaciones sometidas al arbitraje conforme a este Anexo, se considerarán derivadas de una relación u operación comercial para los efectos del Artículo 1 de la Convención de Nueva York.

ARTICULO 7

Indemnización

Una Parte Contratante no aducirá como defensa, reconvención, derecho de compensación u otros, que la indemnización u otra compensación, respecto de una parte o la totalidad de las presuntas pérdidas o daños, ha sido recibida o habrá de recibirse de acuerdo con una indemnización, garantía o contrato de seguro.

ARTICULO 8

Derecho Aplicable

Un tribunal establecido conforme a esta Sección decidirá la controversia de conformidad con este Acuerdo, y con las reglas aplicables y los principios del derecho internacional.

ARTICULO 9

Laudos y Ejecución

1. Los laudos arbitrales pueden tomar las siguientes formas de resolución:

a) indemnización pecuniaria, que deberá incluir interés desde el momento en que se causen las pérdidas o daños hasta la fecha de pago; y

b) restitución en especie en casos apropiados, salvo que la Parte Contratante pague en su lugar indemnización compensatoria, cuando la restitución no sea factible.

2. Los laudos arbitrales serán definitivos y obligatorios solamente respecto de las partes contendientes y solamente con respecto al caso particular.

3. El laudo arbitral final solamente será publicado si existe un convenio por escrito de las partes contendientes.

4. Un tribunal arbitral no podrá ordenar a una Parte Contratante el pago de daños punitivos.

5. Cada Parte Contratante deberá tomar, en su territorio, las medidas necesarias para la efectiva ejecución del laudo de acuerdo con lo establecido en este Artículo, y acatar sin demora cualquier laudo emitido en un procedimiento del cual sea parte.

6. Un inversionista podrá recurrir a la ejecución de un laudo arbitral, conforme al convenio del CIADI o a la Convención de Nueva York.

ARTICULO 10

Exclusiones

No estarán sujetas al mecanismo de solución de controversias de esta Sección, las resoluciones que adopte una Parte Contratante que, por razones de seguridad nacional, prohíban o restrinjan la adquisición por parte de inversionistas de la otra Parte Contratante de una inversión en el territorio de la primera Parte Contratante que sea propiedad o esté controlada por sus nacionales.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los representantes debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han suscrito el presente Acuerdo.

HECHO en la ciudad de Roma, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en dos originales en los idiomas español, italiano e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de cualquier divergencia en la interpretación, deberá prevalecer el texto en idioma inglés.- Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.- Rúbrica.- Por el Gobierno de la República Italiana.- Rúbrica.

La presente es copia fiel y completa en español del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la ciudad de Roma, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Extiendo la presente, en veintidós páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el seis de diciembre de dos mil dos, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Conste.- Rúbrica.

DECRETO Promulgatorio del Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Eslovaca, firmado en la ciudad de Monterrey, México, el veinte de marzo de dos mil dos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a sus habitantes sabed:

El veinte de marzo del dos mil dos, en la ciudad de Monterrey, México, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referéndum el Acuerdo de Comercio
y Cooperación Económica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Eslovaca, cuyo texto en español consta en la copia certificada adjunta.

El Acuerdo mencionado fue aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el treinta y uno de octubre de dos mil dos, según decreto publicado en el **Diario Oficial de la Federación** del cuatro de diciembre del propio año.

Las notificaciones a que se refiere el artículo 13 del Acuerdo, se efectuaron en la Ciudad de México, el quince de mayo de dos mil dos y el nueve de diciembre de dos mil dos.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el diez de diciembre de dos mil dos.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores, **Jorge Castañeda Gutman**.- Rúbrica.

JUAN MANUEL GOMEZ ROBLEDO, CONSULTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

CERTIFICA:

Que en los archivos de esta Secretaría obra el original correspondiente a México del Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Eslovaca, firmado en la ciudad de Monterrey, México, el veinte de marzo de dos mil dos, cuyo texto en español es el siguiente:

ACUERDO DE COMERCIO Y COOPERACION ECONOMICA ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ESLOVACA

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Eslovaca, en adelante denominados "las Partes";

DESEANDO estrechar sus relaciones de amistad y fortalecer el espíritu de cooperación sobre la base de los principios del respeto a la soberanía nacional, a la igualdad de los Estados, a los principios enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los principios democráticos;

ANIMADOS por la esperanza de desarrollar y fortalecer las relaciones comerciales entre los dos países;

TOMANDO EN CUENTA la importancia de promover un entorno más liberal y previsible para el comercio internacional;

BUSCANDO fortalecer los vínculos que las Partes han mantenido históricamente respecto de la cooperación económica;

CONSIDERANDO la necesidad de facilitar un mejor acceso a sus respectivos mercados y evitar el establecimiento de nuevas barreras al comercio recíproco;

BUSCANDO establecer un marco adecuado para llevar a cabo consultas en materia comercial;

CONFIANDO en que el establecimiento de un mecanismo consultivo bilateral mejorará la cooperación económica entre los dos países;

Acuerdan lo siguiente:

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Las Partes establecen como objetivo primordial el fomento y desarrollo de las relaciones económicas entre ambos países, en lo general, y, en lo particular, del intercambio comercial bilateral, de conformidad con la legislación nacional de cada país y ajustándose a lo dispuesto en el presente Acuerdo.

Artículo 2

Las disposiciones de este Acuerdo se aplicarán sin perjuicio de otras obligaciones internacionales contraídas por ambas Partes y de conformidad con su legislación nacional.

Artículo 3

1. Las Partes reafirman su voluntad de conducir el intercambio comercial entre ambos países de conformidad con sus respectivos compromisos en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

2. De conformidad con las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994), en sus relaciones comerciales las Partes se ajustarán a los principios de:

a) Trato de nación más favorecida, y

b) Trato nacional.

Artículo 4

Las disposiciones del Artículo 3 del presente Acuerdo no serán aplicadas a los beneficios y preferencias que cada Parte ya otorga o que otorgue en el futuro:

a) por su participación en alguna zona de libre comercio, unión aduanera, u otros esquemas de integración regional o por su comercio transfronterizo con países limítrofes o en un acuerdo tendiente al establecimiento de una zona de libre comercio o una unión aduanera de conformidad con el GATT de 1994, y

b) a productos originarios de países en vías de desarrollo de conformidad con la Parte IV (Comercio y Desarrollo) del GATT de 1994.

Artículo 5

Las Partes, de conformidad con el GATT de 1994, podrán adoptar o mantener medidas que, sin constituir un medio de discriminación arbitrario o injustificado, sean necesarias para la protección, entre otras, de:

a) la moral pública;

b) la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales;

c) la propiedad intelectual;

d) los recursos naturales y el ambiente, y

e) los tesoros nacionales de valor artístico, histórico o arqueológico.

Artículo 6

1. Las Partes, de conformidad con el Artículo 2 del presente Acuerdo, garantizarán una protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual de acuerdo con las normas internacionales más elevadas, exigidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, concluido en el marco de la OMC.

2. Para los efectos del presente artículo, se considerará propiedad intelectual, los derechos de autor -incluidos los correspondientes a programas de cómputo y compilación de datos- los derechos conexos, las marcas de fábrica o de comercio, las indicaciones geográficas -incluidas las denominaciones de origen- los dibujos y modelos industriales, las patentes, los esquemas de trazado de circuitos integrados,
la protección de la información no divulgada y la protección contra la competencia desleal tal como se

define en el artículo 10 bis del Convenio de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo
de 1883.

Artículo 7

Con el propósito de identificar productos con potencial exportador y facilitar el comercio entre ambos países:

1. Las Partes promoverán la cooperación económica y comercial, a través de la organización de ferias y exposiciones comerciales, reuniones empresariales, misiones, seminarios y simposia.

2. Las Partes concederán, de conformidad con sus respectivas legislaciones, la autorización para exportaciones e importaciones exentas de aranceles aduaneros, impuestos y demás derechos para:

   a) muestras y mercancías sin valor comercial y materiales de publicidad comercial;

   b) objetos y mercancías importados temporalmente y destinados a ferias y exposiciones, siempre que no sean objeto de venta, y

   c) equipos destinados a pruebas, exámenes e investigaciones científicas conforme a los programas que se establezcan en el marco de este Acuerdo.

CAPITULO II
COMISION DE COOPERACION ECONOMICA Y COMERCIAL

Artículo 8

1. Las Partes establecen, a nivel ministerial, la Comisión de Cooperación Económica y Comercial México-República Eslovaca, en adelante denominada "la Comisión".

2. La Comisión estará presidida por los titulares de la Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos y del Ministerio de Economía de la República Eslovaca, o sus sucesoras respectivamente, e integrada por las personas que éstos designen.

3. La Comisión podrá convocar a funcionarios de otras dependencias gubernamentales, establecer y delegar responsabilidades en comités *ad hoc* o permanentes, grupos de trabajo y de expertos, así como solicitar la asesoría de personas o grupos sin vinculación gubernamental.

4. La Comisión se reunirá, de común acuerdo, a solicitud de alguna de las Partes. Las reuniones serán presididas alternadamente por cada una de ellas.

5. El orden del día de las reuniones será establecido previamente y de común acuerdo.

6. Los informes y las recomendaciones de los comités *ad hoc* o permanentes, de los grupos de trabajo y de expertos, así como de personas y grupos sin vinculación gubernamental a que se refiere este artículo, serán sometidos a la atención de la Comisión.

Artículo 9

La Comisión:

a) establecerá las líneas generales de cooperación económica;

b) analizará la evolución y las perspectivas del intercambio comercial;

c) identificará y promoverá las oportunidades para acrecentar las relaciones de comercio;

d) servirá como foro de consulta entre las Partes sobre asuntos específicos de comercio, y

e) evaluará el desarrollo del Acuerdo.

Artículo 10

La Comisión promoverá la cooperación económica y comercial, a través de:

a) el intercambio de información y estadística sobre comercio, inversión y disposiciones legislativas;

b) el intercambio de información relacionada con normas industriales, comerciales, sanitarias, fitosanitarias y otras normas referentes al comercio entre los dos países;

c) la investigación de mercados efectuada por institutos especializados sobre comercio internacional;

d) la elaboración de estudios sobre condicionantes del intercambio comercial, con el propósito de identificar acciones que mejoren los términos y condiciones de acceso a los mercados de los dos países;

e) la identificación y solución de problemas que afecten la cooperación económica bilateral, y

f) la revisión de los desarrollos multilaterales y regionales comerciales de interés común.

CAPITULO III
CONSULTAS

Artículo 11

1. Mediante la cooperación y las consultas, las Partes procurarán alcanzar una solución mutuamente satisfactoria ante cualquier diferencia que pudiera surgir en materia comercial.

2. Las Partes podrán solicitar consultas en todo momento, a petición de alguna de ellas, sobre cualquier asunto o medida que afecte o pueda afectar la interpretación o aplicación de este Acuerdo, o sobre sus relaciones comerciales.

3. Las consultas tendrán lugar dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud por escrito, a menos que las Partes acuerden una fecha posterior.

CAPITULO IV
AMPLIACION Y MODIFICACION DEL ACUERDO

Artículo 12

1. Las Partes podrán convenir cualquier modificación o adición a este Acuerdo. Las modificaciones y las adiciones deberán hacerse por escrito.

2. Las modificaciones y adiciones a este Acuerdo entrarán en vigor de conformidad con el Artículo 13, párrafo 1 una vez que se intercambien las notificaciones escritas que certifiquen que las formalidades jurídicas necesarias han concluido.

CAPITULO V
VIGENCIA

Artículo 13

1. El presente Acuerdo está sujeto a aprobación, de conformidad con la legislación nacional de ambas Partes y entrará en vigor en la fecha acordada en el intercambio de las notificaciones que certifiquen que las formalidades jurídicas de cada Parte han concluido.

2. Desde la fecha de su entrada en vigor, este Acuerdo sustituirá, en lo que se refiere a las relaciones entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Eslovaca, al Convenio Comercial entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia, firmado en la Ciudad de México el 15 de noviembre de 1974.

Artículo 14

1. El presente Acuerdo permanecerá vigente por tiempo indefinido, salvo que alguna de las Partes lo denuncie por escrito. La validez del presente Acuerdo expirará seis meses después de la notificación de la denuncia a la otra Parte.

2. En caso de darse por concluida la vigencia del presente Acuerdo, sus disposiciones seguirán aplicándose a los compromisos suscritos y a los proyectos convenidos a su amparo hasta su total cumplimiento.

Firmado en la ciudad de Monterrey, México, el veinte de marzo de dos mil dos, en dos versiones originales, cada una en el idioma español y eslovaco, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos: el Subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, **Luis Fernando de la Calle Pardo**.- Rúbrica.- Por el Gobierno de la República Eslovaca: el Secretario Mayor del Ministerio de Economía, **Peter Bròo**.- Rúbrica.

La presente es copia fiel y completa en español del Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Eslovaca, firmado en la ciudad de Monterrey, México, el veinte de marzo de dos mil dos.

Extiendo la presente, en diez páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el seis de diciembre de dos mil dos, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Conste.- Rúbrica.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ACUERDO que autoriza el ajuste y modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y que modifica las disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.

JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos 26 y 31 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 fracción V de la Ley de Planeación; y 12 fracción VII, 30, 31 y 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y

CONSIDERANDO

Que el Secretario de Energía, a instancias de las Juntas de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, solicitó a esta Secretaría el ajuste y modificación a las tarifas que rigen la venta de energía eléctrica en el país;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, compete a esta Secretaría, con la participación de las de Economía y de Energía, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijar las tarifas eléctricas, así como su ajuste y modificación;

Que para facilitar la reclasificación a las tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F a los usuarios de la tarifa DAC, Servicio Doméstico de Alto Consumo, que disminuyan su consumo de energía eléctrica, es conveniente reducir el periodo de seguimiento del consumo mensual promedio;

Que para atender las solicitudes de los usuarios de las localidades que registran temperaturas extremas en el verano, y cuyos consumos de energía son más elevados, es necesario modificar para la tarifa 1F y su límite de aplicación de la tarifa DAC;

Que es necesario ofrecer a los usuarios de la tarifa DAC que su nivel de demanda de energía eléctrica lo amerite, la opción de ser reclasificados a la tarifa horaria para servicio general en media tensión;

Que se debe continuar con el esfuerzo del Gobierno Federal por obtener mayores recursos para que las empresas públicas de energía eléctrica puedan otorgar este servicio de manera suficiente y con calidad, mediante la aplicación de las tarifas de energía eléctrica destinada a la producción y provisión de bienes y servicios públicos federales, y

Que habiendo recabado la opinión de las secretarías de Energía y de Economía, esta Secretaría ha tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO QUE AUTORIZA EL AJUSTE Y MODIFICACION A LAS TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGIA ELECTRICA Y QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LAS TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGIA ELECTRICA

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza a los organismos descentralizados Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, a quienes en lo sucesivo se les denominará “el suministrador”, el ajuste y modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y la modificación a las

disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo.

ARTICULO SEGUNDO.- Se continuará con la aplicación de un factor de ajuste mensual acumulativo a los cargos de las tarifas para servicio doméstico (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F), para el servicio de alumbrado público (5 y 5A) y para el servicio de bombeo de aguas negras y potables (6).

El factor será de 1.00469 (uno punto cero cero cuatro seis nueve) para todos los cargos de las tarifas para servicio doméstico (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F) y de 1.00483 (uno punto cero cero cuatro ocho tres) para el servicio de alumbrado público (5 y 5A) y para el servicio de bombeo de aguas negras y potables (6).

En todos los casos los ajustes mensuales serán aplicados a partir del día primero de cada mes.

ARTICULO TERCERO.- Se modifica el numeral 2. Cuotas aplicables mensualmente de la Tarifa 1F, Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 8 de abril de 2002, como se muestra a continuación:

2. Cuotas aplicables mensualmente

Se aplicarán los siguientes cargos por la energía consumida en función de la temporada del año:

2.1 Temporada de verano

2.1.1 Cargos por energía consumida, para consumos de hasta 1200 (mil doscientos) kilowatts-hora

Consumo básico: $0.358 (cero punto tres cinco ocho pesos) por cada uno de los primeros 300 (trescientos) kilowatts-hora.

Consumo intermedio: $0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores.

2.1.2 Cargos por energía consumida, para consumos mayores a 1200 (mil doscientos) kilowatts-hora

Consumo básico: $0.358 (cero punto tres cinco ocho pesos) por cada uno de los primeros 300 (trescientos) kilowatts-hora.

Consumo intermedio bajo: $0.598 (cero punto cinco nueve ocho pesos) por cada uno de los siguientes 900 (novecientos) kilowatts-hora.

Consumo intermedio alto: $1.111 (uno punto uno uno uno pesos) por cada uno de los siguientes 1300 (mil trescientos) kilowatts-hora.

Consumo excedente: $1.761 (uno punto siete seis uno pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores.

...

ARTICULO CUARTO.- A la tarifa DAC, Servicio Doméstico de Alto Consumo, se modifican los numerales 1. Aplicación, 7. Mínimo mensual y 8. Consumo mensual promedio menor al nivel de alto consumo, contenidos en el Acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 7 de febrero de 2002; 4. Límite de alto consumo, contenido en el Acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 8 de abril de 2002, y se adicionan los numerales 9. Depósito de garantía y 10. Suministro en media tensión y tarifa horaria, para quedar como sigue:

1. Aplicación

Esta tarifa se aplicará a los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, considerada de alto consumo o que por las características del servicio así se requiera.

4. Límite de alto consumo

...

Tarifa 1F: 2,500 (dos mil quinientos) kWh/mes.

...

7. Mínimo mensual

El cargo fijo, más el equivalente de 25 (veinticinco) kilowatts-hora.

8. Consumo mensual promedio menor al nivel de alto consumo

Cuando el usuario mantenga un Consumo Mensual Promedio inferior al Límite de Alto Consumo fijado para su localidad, el suministrador aplicará la Tarifa de Servicio Doméstico correspondiente.

9. Depósito de garantía

El Depósito de Garantía deberá cubrir el importe establecido en la tarifa de servicio doméstico correspondiente a la localidad.

10. Suministro en media tensión y tarifa horaria

Los usuarios podrán ser suministrados en media tensión con la tarifa horaria correspondiente.

ARTICULO QUINTO.- Se modifica el numeral 5.2.1 Distrito Federal de las Disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el 31 de octubre de 2000, para quedar como sigue:

5.2.1 Distrito Federal

Todas las Delegaciones del Distrito Federal.

Municipios del Estado de México: Tultepec, Tultitlán, Ixtapaluca, Chalco de Díaz Covarrubias, Huixquilucan de Degollado, San Mateo Atenco, Toluca, Tepotzotlán, Cuautitlán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Naucalpan de Juárez, Ecatepec, Chimalhuacán, San Vicente Chicoloapan, Texcoco, Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz.

Municipios del Estado de Morelos: Cuernavaca.

ARTICULO SEXTO.- El suministrador aplicará hasta el 31 de diciembre de 2003 lo establecido en el artículo séptimo del Acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 7 de febrero de 2002.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

SEGUNDO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en dos periódicos de circulación nacional.

TERCERO.- Se derogan las disposiciones administrativas en materia tarifaria que se opongan a lo establecido en este Acuerdo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 16 de enero de 2003.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, **José Francisco Gil Díaz**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE ECONOMIA

DECRETO por el que se aprueba el Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 9o., 31, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 9o., 16, 22, 23, 27, 28, 29, 30 y 32 de la Ley de Planeación; 69-A, 69-B, 69-C y 69-D de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y

CONSIDERANDO

Que una regulación obsoleta y mal diseñada ha generado obstáculos innecesarios a quienes pretenden poner en marcha un negocio y altos costos a los empresarios, propiciando tal situación que se eleve el precio de los productos, desalentando la inversión productiva y alentando la corrupción y la mala calidad de los servicios gubernamentales;

Que uno de los grandes objetivos nacionales es la construcción de un país donde cualquier mexicana o mexicano pueda hacer valer su iniciativa y talento empresarial en beneficio de su localidad, de otros ciudadanos, de su familia y de sí mismo;

Que para alcanzar ese objetivo, es necesario contar con un marco normativo claro y eficiente, que promueva el establecimiento y la operación de micro, pequeñas y medianas empresas, dentro de un marco regulatorio transparente y confiable que genere más y mejores empleos;

Que con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, la Secretaría de Economía, con la participación de los sectores público, social y privado, ha formulado el Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006, que tiene como propósito constituirse en un instrumento fundamental para reducir la carga de trámites burocráticos que inhiben la formación y el éxito de nuevas empresas, transparentar el marco normativo que regula las actividades de los particulares y reducir la discrecionalidad que promueve la corrupción, otorgando a las empresas igualdad de condiciones para competir, tanto en el mercado interno, como en el externo, y

Que previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía ha sometido el referido Programa a la consideración del Ejecutivo a mi cargo, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Economía, así como las entidades paraestatales coordinadas por la misma, elaborarán los correspondientes programas anuales que incluirán los aspectos administrativos y de política económica y social; dichos programas servirán de base para la integración de sus respectivos anteproyectos de presupuesto, a efecto de prever los recursos presupuestarios necesarios para el eficaz cumplimiento de los objetivos y metas del Programa, en concordancia con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

ARTÍCULO TERCERO.- Dicho programa es de observancia obligatoria para las dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, y conforme a las disposiciones legales aplicables, la obligatoriedad será extensiva a las entidades paraestatales.

ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Economía, con la participación que corresponda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, verificará periódicamente el avance del Programa, los resultados de su ejecución y su incidencia en la consecución de los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, y en su caso, realizará las acciones necesarias para corregir las desviaciones detectadas o proponer las reformas a dicho Programa.

ARTÍCULO QUINTO.- Si en la ejecución del programa se contravienen las disposiciones de la Ley de Planeación, los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, y lo previsto en este Decreto, se procederá en los términos de la propia Ley de Planeación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar.

ARTÍCULO SEXTO.- La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo vigilará, en el ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en este Decreto.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los trece días del mes de enero de dos mil tres.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, **José Francisco Gil Díaz**.- Rúbrica.- El Secretario de Economía, **Luis Ernesto Derbez Bautista**.- Rúbrica.- El Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, **Francisco Javier Barrio Terrazas**.- Rúbrica.

PROGRAMA de Mejora Regulatoria 2001-2006.

PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA 2001-2006

ÍNDICE

Introducción

I. Definiciones de la mejora regulatoria

- ¿Qué es la regulación?
- ¿Por qué regular?
- ¿Qué es la mejora regulatoria?

II. ¿En dónde estamos?

La evolución de la mejora regulatoria en el ámbito internacional

La mejora regulatoria en México

- Inicios de la mejora regulatoria, 1989-1994.
- El Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial (ADAE) y la mejora regulatoria, 1995-2000.

- Reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) y creación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER).

Análisis del marco regulatorio en México

- Estudios sobre la calidad del marco regulatorio en México.
  - Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
  - Foro Económico Mundial (FEM).
  - National Bureau of Economic Research (NBER).
  - PriceWaterhouseCoopers (PWC).
  - International Institute for Management Development (IMD).
  - Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
- Consulta ciudadana en torno al proceso de mejora regulatoria.

III. ¿A dónde queremos llegar?

Principios de la mejora regulatoria

Visión

Misión

IV. ¿Qué camino vamos a seguir?

Objetivos

Estrategias

- Conformar programas bianuales de mejora regulatoria de calidad.
- Conformar, simplificar, actualizar y mantener disponible el sistema electrónico de información sobre trámites y servicios en beneficio de las empresas y los ciudadanos.
- Revisar y mejorar los anteproyectos de disposiciones legislativas y administrativas federales que generen costos de cumplimiento para las empresas y los particulares.
- Promover la incorporación de mejores prácticas regulatorias en la administración pública federal.
- Elaborar diagnósticos y proponer anteproyectos de regulaciones para mejorar el marco regulatorio en sectores económicos y áreas regulatorias específicas.
- Profundizar la colaboración y apoyo técnico sobre el proceso de mejora regulatoria en los tres niveles de gobierno.

V. ¿Cómo medimos los avances?

Indicadores de desempeño

Informe anual de labores

Reuniones del Consejo para la Mejora Regulatoria

Comunicaciones periódicas y documentos públicos de la COFEMER

Participación en foros internacionales

Bibliografía

Abreviaturas y acrónimos

ADAE	Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial	NBER	National Bureau of Economic Research
APEC	Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico	NOM	Norma Oficial Mexicana

ASA	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
CAPUFE	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
CCE	Consejo Coordinador Empresarial
CENAM	Centro Nacional de Metrología
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CICOPLAFEST	Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas
CIDE	Centro de Investigación y Docencia Económicas
CJEF	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
CNBV	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CNSF	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
COFEMER	Comisión Federal de Mejora Regulatoria
CONACYT	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONDUSEF	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros.
CONSAR	Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
DOF	**Diario Oficial de la Federación**
FEM	Foro Económico Mundial
G7	Grupo de los Siete
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
IIE	Instituto de Investigaciones Eléctricas
IMD	International Institute for Management Development
IMPI	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
INEGI	Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
INFONAVIT	Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores
INI	Instituto Nacional Indigenista
ININ	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OIRA	Office of Information and Regulatory Affairs, Estados Unidos
OMB	Office of Management and Budget, Estados Unidos
ORR	Office of Regulatory Review, Australia
PAP	Pronósticos para la Asistencia Pública
PEMEX	Petróleos Mexicanos
PIB	Producto Interno Bruto
PWC	PriceWaterhouseCoopers
RAD	Regulatory Affairs Division, Canadá
RFC	Registro Federal de Contribuyentes
RFTE	Registro Federal de Trámites Empresariales
RFTS	Registro Federal de Trámites y Servicios
RIU	Regulatory Impact Unit, Reino Unido
SAGARPA	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
SCT	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SE	Secretaría de Economía
SECODAM	Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo
SECOFI	Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
SECTUR	Secretaría de Turismo
SEDESOL	Secretaría de Desarrollo Social
SEMARNAT	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SENER	Secretaría de Energía
SEP	Secretaría de Educación Pública
SRA	Secretaría de la Reforma Agraria
SRE	Secretaría de Relaciones Exteriores
SEGOB	Secretaría de Gobernación

IPAB	Instituto de Protección al Ahorro Bancario	SEPOMEX	Servicio Postal Mexicano
LAN	Ley de Aguas Nacionales	SHCP	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
LFCE	Ley Federal de Competencia Económica	SSA	Secretaría de Salud
LFPA	Ley Federal de Procedimiento Administrativo	SSP	Secretaría de Seguridad Pública
LOTENAL	Lotería Nacional para la Asistencia Pública	STPS	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
LyFC	Luz y Fuerza del Centro	TELECOMM	Telecomunicaciones de México
MIR	Manifestación de Impacto Regulatorio	UDE	Unidad de Desregulación Económica

Introducción

La mejora regulatoria es una herramienta esencial para lograr el desarrollo económico del país y un gobierno eficiente que responda a las necesidades de la sociedad. Cuando la regulación está mal diseñada o concebida, impone obstáculos innecesarios a las empresas, especialmente a las de menor tamaño; eleva los precios para los consumidores; desalienta la inversión productiva creadora de empleos; genera corrupción y merma la calidad de los servicios gubernamentales a los ciudadanos.

Durante los últimos 15 años, la mejora regulatoria ha sido una parte fundamental del cambio estructural en México, de la transición hacia una economía abierta y de mercado. El ritmo acelerado, el amplio alcance y la profundidad de la mejora regulatoria han colocado a México entre los países más activos en esta materia.[1] Aproximadamente el 90% de las leyes mexicanas han sido revisadas y reformadas con el fin de mejorar el marco regulatorio y adaptarlo a la economía de mercado.[2]

México es actualmente un país reconocido por su participación activa en la economía mundial y por su capacidad de atraer inversión productiva. La amplia red de acuerdos comerciales internacionales y las mejoras al marco regulatorio nacional han permitido que México reciba más de 88 mil millones de dólares en inversión extranjera entre 1994 y 2000. Asimismo, el dinamismo y la adaptabilidad de la economía han permitido menguar en México las severas dificultades económicas que han afectado a los mercados emergentes en los últimos años.

La mejora regulatoria también ha permitido reducir precios e incrementar la gama de productos y servicios disponibles para los consumidores; mejorar la eficiencia productiva al disminuir los precios de insumos esenciales; apoyar el crecimiento del sector exportador; promover la inversión y la entrada de nuevas empresas al mercado y mejorar la eficacia de los servicios que brinda el gobierno.

Sin embargo, aún falta mucho por hacer. La presente administración redoblará los esfuerzos para eliminar la discrecionalidad innecesaria en las resoluciones de las autoridades y para fomentar las actividades de los particulares. A fin de asegurar la creación de empleos y el crecimiento económico, es necesario incrementar la competitividad del sector empresarial, para que éste pueda competir en igualdad, o incluso en superioridad de condiciones en los mercados nacional e internacional.

Dada la importancia de la política de competencia se consideró necesario el desarrollo de un programa específico en esta materia, que responda a las necesidades del país y del marco institucional existente.

El *Programa Nacional de Competencia Económica 2001-2006* resulta un complemento esencial para establecer un marco normativo que, entre otras cosas, fomente la competencia, promueva el buen funcionamiento de los mercados y procure reformas legislativas y administrativas adecuadas que ofrezcan seguridad jurídica al desarrollo de los agentes económicos, en particular las pequeñas y medianas

[1] OCDE, *Reforma Regulatoria en México*. OCDE: París, 1999.

[2] López-Ayllón, Sergio, *Las transformaciones del sistema jurídico y los significados sociales del derecho. La encrucijada entre tradición y modernidad.* UNAM, México, 1997.

empresas, y les facilite incrementar sus niveles de inversión, financiamiento y productividad en todos los sectores, principalmente en los que se encuentran en proceso de apertura.

Asimismo, este gobierno protegerá los intereses sociales, tales como la salud, la atención a personas con discapacidad, y la sustentabilidad del medio ambiente, pero sin imponer costos innecesarios a las empresas, y haciendo el uso más eficiente posible de los recursos limitados del país. También, promoverá un federalismo que ofrezca gobiernos federal, estatales, y municipales ágiles y responsables a las necesidades locales, con capacidad de respuesta ante los retos que impone el desarrollo nacional. Lo anterior se logrará a través de un programa de mejora regulatoria que cree un marco normativo transparente que establezca reglas claras para todos en los diversos ámbitos de la economía y del gobierno, y que coadyuve al fortalecimiento del Estado de Derecho.

La mejora regulatoria debe ser una actividad continua y sistemática que permita a los particulares adaptarse rápidamente a los incesantes cambios económicos, tecnológicos y sociales de su entorno. Esto sólo se puede lograr con un esfuerzo de todos los sectores de la sociedad, con la participación activa de los grupos afectados por las regulaciones, con el análisis cuidadoso de alternativas regulatorias y con plena transparencia en las decisiones de política pública. En suma, la mejora regulatoria constituye una política pública que genera una nueva forma de gobernar basada en el análisis, la transparencia y la consulta pública.

En el año 2000, el H. Congreso de la Unión aprobó una serie de reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) que institucionalizaron la política de mejora regulatoria. Lo anterior responde a retos que el gobierno ha detectado y que aún persisten para consolidar el proceso de mejora regulatoria en México. Dichos retos son:

- Facilitar la apertura y operación de empresas, particularmente las pequeñas y medianas.
- Lograr que los beneficios de la mejora regulatoria lleguen plenamente a las empresas y los consumidores.
- Capacitar recursos humanos e internalizar la mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno.
- Consolidar la nueva forma de gobernar basada en el análisis, la transparencia y la consulta pública.
- Fortalecer el Estado de Derecho.
- Reducir la corrupción.

De tal forma, el propósito del *Programa Federal de Mejora Regulatoria 2001-2006* es definir las estrategias y líneas de acción necesarias para consolidar, fortalecer e instrumentar plenamente los procesos previstos por la ley, con el fin de enfrentar los principales retos de la mejora regulatoria. Los principales objetivos del programa son:

- *Profundizar el proceso de mejora regulatoria federal y asegurar la ampliación del ámbito de aplicación hacia áreas clave del sector público.* La LFPA deja claro que la mejora regulatoria debe ser un esfuerzo permanente y sistemático. Por ello, se deben instrumentar plenamente las disposiciones en ley que establecen los mecanismos de aplicación y cumplimiento de acuerdo con las disciplinas en la materia. Adicionalmente, es indispensable extender la mejora regulatoria hacia las áreas del gobierno cuya participación en el proceso ha sido limitada.
- *Asegurar la calidad y eficiencia de la regulación y la transparencia en su elaboración.* El perfeccionamiento de los criterios para la elaboración y revisión de las regulaciones propuestas y vigentes, la plena transparencia del proceso regulatorio y el uso efectivo de mecanismos de consulta pública son todos factores determinantes del éxito del programa.
- *Fomentar una cultura de mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno.* El gobierno federal y los sectores productivos han trabajado con autoridades estatales en años recientes para fomentar la difusión de la mejora regulatoria a todas las áreas de la administración pública. Este esfuerzo debe continuar y profundizarse, pero sobre todo extenderse a los municipios.
- *Mejorar los servicios a la población y propiciar el uso extensivo de mejores prácticas regulatorias.* El gobierno debe fomentar la excelencia en el análisis y diseño de regulaciones, a través de la capacitación y difusión de buenas prácticas, y brindar un servicio eficiente para los interesados en consultar información regulatoria.

OBJETIVOS **RETOS**

Consolidar e impulsar la mejora regulatoria	Profundizar en el proceso de mejora regulatoria y asegurar la ampliación del ámbito de aplicación hacia áreas clave del sector público. Asegurar la calidad y eficiencia de la regulación y la transparencia en su elaboración. Fomentar una cultura de mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno. Mejorar los servicios a la población y propiciar el uso extensivo de mejores prácticas regulatorias.	• Facilitar la apertura y operación de empresas, particularmente las pequeñas y medianas. • Lograr que los beneficios de la mejora regulatoria lleguen plenamente a las empresas y los consumidores. • Capacitar recursos humanos e internalizar la mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno. • Consolidar la nueva forma de gobernar basada en el análisis, la transparencia y la consulta pública. • Fortalecer el Estado de Derecho. • Reducir la corrupción.

El *Programa Federal de Mejora Regulatoria 2001-2006* se desprende del *Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006*: en el que se exponen y justifican las acciones a desarrollar por el Gobierno de la República durante su gestión, en particular, *"consolidar e impulsar el marco institucional y la mejora regulatoria que simplifique la carga administrativa de las empresas"*. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en la Ley de Planeación.

La Ley de Planeación establece que las dependencias de la Administración Pública Federal tienen como obligación "*elaborar los programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector y los gobiernos de los estados, así como las opiniones de los grupos sociales interesados.*" De tal forma, el contenido del Programa incorpora las principales inquietudes expresadas a través de la consulta pública llevada a cabo durante el primer trimestre del 2001. Adicionalmente, bajo la coordinación de la Presidencia de la República, se realizó un Reporte Integral de Planeación que vincula el presupuesto de la mejora regulatoria con los objetivos, estrategias, procesos y proyectos derivados del Plan Nacional de Desarrollo. Este ejercicio permitió la identificación precisa de las prioridades, la costo-eficiencia, y los mecanismos de evaluación de las políticas propuestas en este programa sectorial.

El *Programa Federal de Mejora Regulatoria 2001-2006* consta de cinco capítulos:

I. Definiciones de la mejora regulatoria.

II. ¿En dónde estamos?

III. ¿A dónde queremos llegar?

IV. ¿Qué camino vamos a seguir?

V. ¿Cómo medimos los avances?

El primer capítulo define los conceptos básicos para comprender lo que es la mejora regulatoria; en particular, se definen los conceptos de regulación y mejora regulatoria, y se explica la necesidad de regular de manera eficiente.

El segundo capítulo presenta un análisis detallado de la situación actual del marco regulatorio en México. Comienza con un esbozo de la evolución de la mejora regulatoria en los ámbitos internacional y nacional durante los últimos años. Posteriormente, se presentan estudios académicos y empresariales sobre el curso de la mejora regulatoria y la calidad del marco normativo en México. Finaliza con las principales conclusiones de los procesos de consulta pública realizados en el marco del *Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006*.

En el tercer capítulo del programa se presenta una visión a largo plazo de la mejora regulatoria, de la dirección hacia la que se encamina el programa para el año 2025, así como la misión a cumplir en el corto plazo.

El capítulo cuatro presenta las estrategias y líneas de acción que se emplearán para la consecución de los objetivos del programa. Para cada estrategia se presenta un breve diagnóstico de la situación actual de la mejora regulatoria en esa materia.

El programa finaliza con la discusión sobre los mecanismos para evaluar el cumplimiento del programa.

El *Programa Federal de Mejora Regulatoria 2001-2006* permitirá cumplir uno de los grandes objetivos de la nueva administración: lograr el cambio de la cultura regulatoria en México. Su visión es establecer las bases para la creación de un sistema integral de administración regulatoria que mejore la efectividad y eficiencia del gobierno, opere bajo una auténtica cultura de mejora regulatoria, estimule y fortalezca la economía, reduzca al máximo los incentivos institucionales a la corrupción y continuamente revise e incremente la calidad del sistema jurídico nacional.

I. Definiciones de la mejora regulatoria

¿Qué es la regulación?

La regulación es el conjunto de instrumentos jurídicos que emplea un gobierno para establecer obligaciones y procesos con los que tienen que cumplir los particulares, las empresas y el gobierno mismo. Dichos instrumentos son generalmente actos legislativos o administrativos de carácter general, tales como leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, normas, circulares y formatos, así como lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, entre otros. La Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) identifica tres grandes categorías de regulaciones:

- La **regulación económica,** mediante la cual el gobierno interviene directamente en las decisiones empresariales y en los mercados, por ejemplo, emitiendo disposiciones en materia de precios, competencia o barreras al comercio.
- La **regulación social,** que busca proteger, entre otras, la salud, las condiciones laborales y el medio ambiente.
- La **regulación administrativa,** que es la serie de trámites impuesta por el gobierno, necesaria para, entre otras cosas, asegurar la aplicación de las disposiciones o recabar información.

La regulación es indiscutiblemente una de las funciones centrales del gobierno; es el instrumento mediante el cual se promueve el bienestar social y económico. Muchos de los avances de México logrados en los últimos años en materia de estabilidad macroeconómica, empleo, educación, innovación y desarrollo empresarial, se deben a mejoras en la calidad de la política pública y la regulación.

Sin embargo, la velocidad de los cambios económicos, tecnológicos y sociales de hoy en día crea el riesgo de que la regulación se quede estancada y represente un obstáculo al crecimiento económico y al desarrollo social. Existen regulaciones que, a pesar de las buenas intenciones, impiden la innovación, crean barreras innecesarias al comercio y a la competencia en los mercados, incrementan los precios para los consumidores, e impiden el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. En ocasiones, los problemas residen en la falta de coordinación entre las dependencias o los diferentes órdenes de gobierno, en la presión ejercida por grupos de interés particulares, o bien en que el diseño de las regulaciones es inadecuado.
Por ello, la mejora regulatoria es un elemento fundamental de la política pública del país.

¿Por qué regular?

En teoría, el objetivo de la regulación es corregir fallas de mercado tales como externalidades negativas,[3] información asimétrica, monopolios, entre otras.[4] Esto es importante para asegurar la protección de los intereses sociales legítimos (la salud, el medio ambiente o los consumidores), reducir riesgos o favorecer la equidad social.

---

[3] Costos sociales que se derivan de la realización de una actividad privada y no son contabilizados en ésta. Por ejemplo, la contaminación es un daño que sufre la sociedad, pero no un gasto que el productor privado pague en consonancia. *Diccionario de Economía y Negocios*, Arthur Andersen, pág. 250.

[4] Breyer, Sthephen. *Regulation and its Reform.* Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1982; Ogus, Anthony. *Regulation. Legal Form and Economic Theory*. Oxford: Clarendon Press, 1994; Baldwin, Robert and Martin Cave. *Understanding Regulation. Theory, Strategy and Practice*. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Las regulaciones económicas generalmente proponen mejorar la eficiencia económica o productiva. Por ejemplo, si existen economías de escala muy grandes, tal vez convenga, por razones de eficiencia, que una sola empresa provea el servicio en vez de que varias lo hagan, pero en esos casos es necesario limitar el poder monopólico a través de la regulación económica.

Sin una regulación social efectiva, es probable que las empresas no consideren adecuadamente el costo social de sus actividades. Como muestra, es posible que las empresas contaminen en exceso si no incurren en costos específicos por contaminar. Asimismo, los consumidores pueden no contar con la información mínima necesaria en materia de riesgos para tomar decisiones informadas sobre la compra de productos o servicios.

Las regulaciones de tipo administrativo pueden ser necesarias para tener registros confiables o para procesar servicios del gobierno. Los trámites para la obtención de pasaportes son ejemplos de lo anterior. Sin embargo, en el diseño de estas regulaciones, se debe evitar que las mismas se conviertan en trámites burocráticos que no sirvan a los intereses de la sociedad o que transfieran rentas a grupos particulares.

La corrección de las fallas de mercado es una actividad necesaria y deseable. No obstante, en ocasiones la intervención del gobierno es excesiva, ineficiente o responde a intereses particulares. Esta es la razón de ser de la mejora regulatoria, pues impone ciertas disciplinas a la administración que buscan mejorar la calidad y eficiencia de la regulación. Por ejemplo, la regulación económica requiere, en ocasiones, un conocimiento detallado de la estructura de la oferta y demanda del sector regulado, aunque en general los reguladores no tienen acceso perfecto a esta información. De igual manera, las regulaciones en materia de salud y medio ambiente se basan frecuentemente en información imperfecta o limitada. Los trámites onerosos e innecesarios pueden fomentar la corrupción, así como el gasto inútil de recursos y la pérdida de tiempo personal.

Asimismo, dado que la regulación usualmente implica la redistribución de rentas o recursos, existe el peligro de que ésta se utilice para beneficiar a grupos particulares en detrimento del conjunto de la sociedad y no para corregir fallas de mercado. La mejora regulatoria crea mecanismos de supervisión y transparencia continua sobre la regulación con el propósito de controlar, evaluar y hacer explícitos sus efectos.

¿Qué es la mejora regulatoria?

En ocasiones se confunden los términos de desregulación y mejora regulatoria. Por lo tanto, es importante señalar que la desregulación es un componente de la mejora regulatoria que se refiere a la eliminación parcial o total de la regulación vigente en algún sector económico o área regulatoria específica. La mejora regulatoria abarca no sólo la desregulación, sino también la reforma de regulaciones propuestas o vigentes, e incluso la creación de nuevas regulaciones para subsanar vacíos jurídicos existentes u originados por los cambios económicos, sociales y tecnológicos. Por consiguiente, podemos entender por mejora regulatoria la revisión de un solo instrumento jurídico, la construcción, o reconstrucción, del marco regulatorio en sectores económicos o áreas regulatorias específicas, o bien mejoras al conjunto de los procesos mediante los cuales se elaboran y aplican las regulaciones y se aplica la reforma regulatoria.

La mejora regulatoria consiste en aquellos cambios que elevan la calidad del sistema jurídico en su conjunto y de los instrumentos jurídicos en particular, con el propósito de incrementar sus beneficios, reducir sus costos y aumentar su eficiencia. Entre los objetivos centrales de la mejora regulatoria están la protección de los intereses sociales del país al menor costo posible para los ciudadanos y las empresas y, en general, el mejoramiento de la eficiencia de la economía y de su capacidad para adaptarse a situaciones cambiantes.
Al promover la eficiencia y la competencia en los mercados, la mejora regulatoria crea incentivos para la innovación y competitividad empresarial. Al eliminar y simplificar trámites, la mejora regulatoria reduce costos y promueve la iniciativa de los particulares.

La regulación puede tener un impacto fundamental en la capacidad de las empresas y de los trabajadores para adaptarse, competir y aprovechar las oportunidades ligadas a la apertura comercial. Con la reducción progresiva de los aranceles comerciales, las regulaciones pueden ser el último impedimento a la consolidación de un mercado abierto y competitivo. La mejora regulatoria promueve los flujos de bienes, servicios y tecnología, lo que beneficia a los consumidores y permite a las empresas competir en igualdad o superioridad de condiciones en los mercados nacional e internacional. La calidad regulatoria puede ser también un factor determinante en la atracción de inversión productiva, nacional y extranjera, tan necesaria para el crecimiento económico y la creación de empleos. Para aprovechar

plenamente los beneficios potenciales de la integración económica mundial y de la red de tratados de libre comercio que México ha suscrito con más de 32 países (da acceso preferencial a un mercado de más 860 millones de consumidores), se requiere de un marco regulatorio eficiente que facilite la creación y operación de empresas nacionales.
De lo contrario, se erosiona la competitividad y adaptabilidad de industrias reguladas y también de las empresas no reguladas, ya que tienen que pagar más por bienes y servicios.

En cuanto a los efectos generales de la mejora regulatoria, diversos estudios académicos han demostrado que una política de mejora regulatoria congruente y ambiciosa puede elevar significativamente el producto interno bruto (PIB). Se estima que un conjunto de profundas reformas incrementaría el PIB a largo plazo en países como Japón, Alemania y Francia entre 4.5 y 6%.[5] En Estados Unidos, se considera que el simple costo del cumplimiento de las regulaciones puede oscilar entre 6 y 12% del PIB.[6] Otros estudios ubican el costo potencial de las regulaciones entre el 9 y el 19% del PIB.[7] La magnitud de estas cifras es ciertamente alarmante y, considerando las deficiencias que aún existen en el marco regulatorio nacional, no sería aventurado estimar que la proporción de costos es semejante, incluso superior, en México. Si se comparan estas cifras con el total de la recaudación tributaria (10.7% del PIB en 2000)[8], se puede visualizar rápidamente la magnitud del problema de una regulación deficiente.

La mejora regulatoria no sólo es un instrumento de desarrollo económico que promueve la inversión y el establecimiento y creación de empresas, sino también es un instrumento fundamental de buen gobierno. Como proceso sistemático y permanente de revisión del marco normativo basado en la transparencia, la consulta pública y el análisis cuidadoso de alternativas que permite llegar a decisiones óptimas de política pública, la cultura de mejora regulatoria representa un cambio radical en la manera de gobernar, más acorde con el desarrollo democrático del país.

En conclusión, la mejora regulatoria no es un fin en sí mismo, sino una política pública que permite a los gobiernos intervenir en los mercados para corregir sus fallas; constituye un pilar del buen gobierno en casi todas las esferas de la acción pública; y es un elemento central del concepto de Estado de Derecho.

II. ¿En dónde estamos?

La evolución de la mejora regulatoria en el ámbito internacional

Por todas las razones expuestas en el capítulo anterior, la mejora regulatoria es el área de política pública que se ha extendido con mayor rapidez en el ámbito internacional durante la última década. Todos los países desarrollados, independientemente de sus visiones particulares de Estado y mercado, han establecido algún tipo de programa de mejora regulatoria. Esto demuestra que la mejora regulatoria no es un movimiento ideológico o cultural particular, sino un mecanismo pragmático de buena administración pública.

Si bien la mejora regulatoria tiene sus raíces en tiempos antiguos,[9] la época de mayor intensidad y actividad en años recientes inició en década de los setenta y principios de los ochenta, cuando diversos países se abocaron a la desregulación económica en ciertos sectores (principalmente aviación civil, autotransporte, ferrocarriles, mercados financieros, energía y telecomunicaciones) como respuesta al escaso crecimiento económico y a los altos niveles de inflación en los países desarrollados. La reestructuración de estos sectores creó beneficios notables, al incrementar significativamente la competencia y eficiencia en los mercados. Los avances de la desregulación sectorial y el mejor entendimiento de los efectos de las regulaciones en el desarrollo económico de un país, impulsaron esfuerzos cada vez más sistemáticos de revisión, evaluación y modificación de regulaciones económicas.

De manera paralela, ha habido un crecimiento exponencial de nuevas regulaciones sociales en materia de salud, seguridad laboral y medio ambiente, ya que la demanda por regulación de tipo social suele crecer en función de la riqueza de las sociedades. A pesar de los buenos propósitos, y aun cuando

---

5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). *The OECD Report on Regulatory Reform: Volume II, Thematic Studies.* París: OCDE. 1997, p. 65.

6 Hopkins, Thomas. *Regulatory Costs in Profile.* San Luis, EE.UU.: Center for the Study of American Business. 1996.

7 Guasch, Luis y Robert Hahn, "The Costs and Benefits of Regulation: Some Implications for Developing Countries", *World Bank Research Observer* 14(1): 137-58. Washington, EE.UU.: Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. Febrero, 1999.

8 SHCP, *Cuenta de la Hacienda Pública Federal,* en *Primer Informe de Gobierno*, Presidencia de la República, septiembre 2001.

9 El emperador romano Tácito, en el tercer Libro de Anales, explica: "Corrutissima in República plurimae leges"

estén bien diseñadas, la proliferación de regulaciones crea diversos problemas. El incremento en el número de regulaciones implica necesariamente un incremento en los costos para las empresas y la sociedad, y aunque los beneficios también puedan ser significativos, esto puede aumentar sensiblemente la complejidad del marco regulatorio, hacerlo inflexible y rígido, frenar la creación de pequeñas y medianas empresas y crear barreras no arancelarias al comercio internacional.

Esta inflación regulatoria es causada no sólo por el deseo de salvaguardar intereses sociales, sino también por los efectos de los cambios tecnológicos, por la conveniencia política de satisfacer a grupos de presión o de realizar acciones simbólicas, por la falta de transparencia, por el escaso control administrativo y por la falta de escrutinio y revisiones periódicas independientes. Estas regulaciones generan diversos tipos de costos: costos fiscales para el gobierno, costos de cumplimiento para empresas y particulares y costos dinámicos para la economía en su conjunto.

En respuesta a esta proliferación regulatoria, durante la década de los noventa casi todos los países desarrollados emprendieron o profundizaron programas de mejora regulatoria y simplificación administrativa. Generalmente, esto ha implicado la creación de instituciones dedicadas exclusivamente a la mejora regulatoria y la adopción de políticas explícitas. Hoy en día muchos gobiernos están instrumentando diferentes estrategias regulatorias, a fin de medir los efectos agregados de la regulación con mayor precisión, buscar mecanismos para mejorar la coordinación entre autoridades y niveles de gobierno y, en general, para instaurar la cultura de mejora regulatoria dentro de la administración pública.

El siguiente cuadro muestra los resultados de un estudio comparativo sobre las diferentes estrategias de mejora regulatoria en diversos países.

PERSPECTIVA DE LOS ESFUERZOS EN REFORMA REGULATORIA EN EL MUNDO					
País	Oficina de mejora regulatoria	Revisión y supervisión política del programa de mejora regulatoria	Inicio	Análisis requerido	Resultados selectos
Australia	Office of Regulatory Revision (ORR) ubicada dentro del Departamento de Industria. Depende directamente del ministro. Asesora al gobierno en materia regulatoria, supervisa la elaboración de las regulaciones, examina las manifestaciones de impacto regulatorio (MIR), provee capacitación, reporta anualmente y monitorea la reforma regulatoria. Asesora al ministro del Assistant Treasurer como responsable de la mejora regulatoria. Mantiene coordinación con la Small Business Deregulation Task Force respecto al proceso de reforma regulatoria, así como medidas para reducir el impacto y la carga de papeleo para pequeñas empresas.	La ORR examina y monitorea la reforma regulatoria y MIR. Puede vetar las MIR. El Assistant Treasurer promueve la mejora regulatoria, asegurando e instrumentando la reforma. El Consejo Nacional de Competencia monitorea el cumplimiento de todas las jurisdicciones con los Acuerdos de Principios de Competencia.	1985	Costo-beneficio estricto para regulaciones de gran impacto. La MIR debe incluir una sección especial que evalúe el impacto de la regulación en las pequeñas empresas. Si la regulación afecta el desempeño exportador, una manifestación de impacto comercial (MIC) debe ser incorporada a la MIR.	La abrogación de regulaciones anticuadas es parte de un estudio exhaustivo de reformas que se espera alcancen ganancias anuales que representen el 5.5 por ciento del Producto Interno Bruto, o $23 billones de dólares australianos por año, cuando se implemente este sistema completamente (Belconnen Industry Commission, 1995).
Canadá	Regulatory Affairs Division (RAD) ubicada dentro del Departamento del Tesoro de Canadá. Depende directamente del Ministro. Monitorea el desempeño y efectividad de la política regulatoria. Produce el Plan Regulatorio Federal y revisa la calidad de las manifestaciones de impacto regulatorio para su consistencia con la política regulatoria. El Special Committee of Council considera las regulaciones para su aprobación, pre-publicación y publicación en el Canada Gazette.	El Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations revisa las regulaciones y recomienda cambios al gobierno, reporta al parlamento sobre problemas con regulaciones y puede solicitarle la revocación de alguna de éstas.	1977	Costo-beneficio estricto para regulaciones de gran impacto (costos directos superiores a $10 millones). Análisis de riesgo para regulaciones en materia de medio ambiente. Sección de "carga regulatoria" para demostrar que se minimizan los costos para los canadienses.	Para 1993, 835 regulaciones fueron revisadas y eliminadas (OCDE, 1997).
Holanda	Existen cuatro oficinas principales para la mejora regulatoria: Inspectorate of Law Assestment, asesora al Consejo de Ministros en la mejora regulatoria; General Legisative Policy Division maneja el proceso de calidad regulatoria y aunque no tiene la facultad para vetar proyectos legislativos, si éstos o su MIR resultan insatisfactorios, los revisa; Civil Service Commision, en coordinación con los ministerios de justicia y finanzas, crea los grupos de trabajo de revisión de proyectos de regulación; y todo proyecto se reporta al Consejo Ministerial de Mejora Regulatoria para su análisis final.	El Consejo Ministerial de la Mejora Regulatoria, presidido por el Primer Ministro, presenta un informe anual al Parlamento, y la lista de los 10 sectores estratégicos por revisar en el siguiente año.	1985	La MIR es un instrumento comparativo entre todas las alternativas posibles para la solución de un problema. El Ministro de Justicia dictamina la viabilidad de la regulación, y si ésta será presentada al Consejo de Ministros para su aprobación.	Como parte del programa de mejora regulatoria, cada año se escogen algunos sectores específicos para revisar su marco regulatorio. Se realiza una reforma regulatoria que comprende todas las áreas de dichos sectores. Se ha logrado una reducción importante de los trámites que necesita realizar una empresa para iniciar operaciones. Se ha reducido el número de trámites de apertura de 88 a 8.

Reino Unido	Regulatory Impact Unit (RIU) está ubicada dentro del Cabinet Office. Depende directamente del Primer Ministro, quien al jefe de la RIU. Diseña, propone y ejecuta el programa de mejora regulatoria Dentro de sus funciones está la de proponer y auxiliar en la elaboración de las manifestaciones de impacto regulatorio. Se coordina con Better Regulation Taskforce en la que participan miembros notables de la comunidad empresarial.	La RIU presenta un informe anual al Primer Ministro y al Parlamento. Como régimen parlamentario, la supervisión de las acciones de la RIU son reportadas al Cabinet Office, al Primer Ministro y a su Consejo de Ministros. De considerarlo pertinente, el Parlamento puede citar al jefe de la RIU.	1985	La MIR debe evaluar los beneficios netos totales resultantes de las regulaciones propuestas. Se debe presentar una evaluación del riesgo. La RIU ministerial es quien decide si existe riesgo o no.	Para fines de 1996, cerca de 1,000 regulaciones fueron abrogadas o modificadas (Avery, 1997). Adicionalmente, cuarenta y ocho "órdenes" de cambio a la legislación han ahorrado más de 100 millones de libras anuales.
Estados Unidos	Office of Management and Budget (OMB), ubicada dentro de la Casa Blanca, depende directamente del vicepresidente. Supervisa la elaboración de las regulaciones más importantes y sus funciones incluyen preparación del presupuesto, revisión legislativa, política de información y de compras de gobierno. Tiene mucho poder. La Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA) pertenece a OMB, fue creada en 1980 como oficina encargada de coordinar las políticas del Presidente en materia de reforma regulatoria. El director de OIRA es nombrado por el Presidente. Coordina sus esfuerzos con la Small Business Administration en la evaluación de impactos en las empresas de menor tamaño.	Diversos comités del congreso supervisan las acciones de OMB/OIRA. La General Accounting Office del Congreso evalúa la efectividad de regulaciones y actividades del ejecutivo a solicitud de los comités.	1974	Costo-beneficio estricto para regulaciones de gran impacto (superiores a $100 millones). Análisis de riesgo para regulaciones en materia de salud y seguridad laboral. OMB revisa aproximadamente 500 proyectos al año de alto impacto. OMB sólo rechaza el 0.2% de los proyectos (debido al alto grado de consenso). Los proyectos más importantes son revisados por OIRA hasta 3 veces (en la fase de planeación, previo a la consulta pública y a que se publique como regulación final). OIRA puede eliminar cualquier requisito de información que el gobierno exige al particular, de acuerdo con la Paperwork Reduction Act.	Datos muy dispersos
Italia	La Oficina Legislativa de la Presidencia del Consejo de Ministros coordina el programa y revisa todos los proyectos regulatorios de las oficinas legislativas de los diferentes ministerios. Es el Núcleo para la Simplificación de Reglas y Procedimientos integrado por 25 expertos de los sectores gubernamental, empresarial y académico. Tiene cuatro funciones principales: reducir el número o simplificar las regulaciones e incorporarlas en “textos únicos” (registro), preparar reglamentos de “deslegificación-simplificación” que no pueden incorporarse en “textos únicos”, preservar la calidad de la regulación, e instrumentar la manifestación de impacto regulatorio (junto con Oficina Legislativa de la Presidencia del Consejo de Ministros)	La Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministro Delegado para la Función Pública supervisan el programa. Las comisiones parlamentarias competentes pueden solicitar informes sobre las acciones del programa.	1974	Se estableció la obligación de elaborar MIR para proyectos legislativos y normativos en una reforma a la Ley de Procedimientos Administrativos de marzo de 1999. La MIR es aplicable a todo proyecto que tenga efectos en la organización de la administración pública o en las actividades de los ciudadanos y las empresas e incluso a los reglamentos ministeriales e inter-ministeriales.	El proceso de “deslegificación-simplificación” estipula, por decreto del Consejo de Ministros, la consulta obligatoria con un “Observatorio para la Simplificación” que cuenta con la participación de cámaras empresariales, sindicatos, asociaciones para la protección del medio ambiente y de los consumidores, así como representantes de los gobiernos locales. El Presidente del Consejo de Ministros, o el Ministro Delegado para la Función Pública, debe publicar un informe anual que incluya el detalle del presupuesto designado al programa de simplificación, así como la evaluación de la eficacia de las medidas tomadas y del Núcleo para la Simplificación de las Reglas y Procedimientos.

México	La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), creada bajo modificación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se encarga de revisar el marco regulatorio nacional, dictaminar anteproyectos y MIR de disposiciones federales, brindar asesoría técnica y celebrar acuerdos interinstitucionales sobre mejora regulatoria. Es un órgano desconcentrado con autonomía técnica y operativa de la Secretaría de Economía. El director general es designado por el Presidente de la República. Se apoya en un consejo integrado por representantes de los sectores público, social, privado y académico.	La COFEMER revisa regulaciones y recomienda cambios al gobierno. Se requiere su dictamen para la publicación de la regulación en el **Diario Oficial de la Federación**.	1996	Todos los anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos administrativos de carácter general elaborados por las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal deben ir acompañados de una MIR.	Se han eliminado y simplificado un amplio número de trámites federales. Se instrumentan programas bianuales de mejora regulatoria. Se ha extendido la colaboración con los estados y municipios. Hasta el 2000 se han expedido o reformado 26 leyes, 34 decretos presidenciales o reglamentos y 36 decretos secretariales para instrumentar los compromisos de mejora regulatoria. Algunos sectores desregulados son: autotransporte de carga, turismo y de pasajeros, transporte marítimo, puertos y aeropuertos, aviación civil y satélites, gas natural, telecomunicaciones, minería, medicamentos genéricos, entre otros.
Fuente: Elaboración propia de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria con información de los gobiernos correspondientes.					

La mejora regulatoria en México

Inicios de la mejora regulatoria, 1989-1994.

A finales de la década de los ochenta, la regulación de muchas actividades y sectores productivos resultaba excesiva y, en algunos casos, poco aplicable al nuevo entorno económico en el que incursionaba México (incorporación al GATT en 1986), además de imponer altos costos, limitar la competencia, elevar injustificadamente los precios, discriminar entre diversos agentes económicos, desalentar la productividad y asignar de forma ineficiente los recursos.

Lo anterior provocaba distorsiones en los mercados que castigaban a quienes disponían de menor capacidad de inversión, y les obligaba a incumplir sistemáticamente la regulación o a utilizar instrumentos de economía subterránea o informal, situación que afectaba la actividad económica en general.

Era pues urgente tomar medidas para desregular la economía. La estrategia debía ser pragmática y enfocarse en objetivos muy concretos: racionalizar los preceptos legales que afectaban a todas las actividades o sectores de la economía, a fin de proponer medidas horizontales que coadyuvaran a resolver los problemas que generaban y dar prioridad a aquellas actividades o sectores en que los beneficios de la desregulación se sintieran de forma inmediata, o donde el costo por no proceder a tiempo fuese muy alto.

Mediante un Acuerdo Presidencial, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** (DOF) en febrero de 1989, el Presidente encomendó a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI, antecesora de la actual Secretaría de Economía) la revisión del marco regulatorio de la actividad económica nacional a fin de propiciar la libre concurrencia, el desarrollo económico y la creación de empleos. Ese mismo año, se creó la Unidad de Desregulación Económica (UDE) de la SECOFI. La UDE se enfocó primordialmente a la desregulación de sectores económicos clave como el autotransporte, a proponer legislación marco en áreas como competencia económica, procedimiento administrativo y normalización, y a la eliminación de barreras a la entrada y salida de mercados de bienes y servicios.

El Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial (ADAE) y la mejora regulatoria, 1995-2000.

La mejora regulatoria fue uno de los elementos centrales de la estrategia para afrontar la crisis económica de 1995, porque es una herramienta eficaz de fomento económico compatible con la austeridad presupuestal. Ante el escaso financiamiento disponible para las empresas y un consumo interno severamente deteriorado, se modificó el enfoque del programa al diseñar un esquema sistemático de revisión de trámites empresariales vigentes y regulaciones propuestas, con el fin de facilitar el establecimiento y operación de empresas y permitir que éstas enfrentaran con éxito las oportunidades y presiones competitivas de una economía abierta.

Los requisitos que se encontraban en vigor para el establecimiento y operación de las empresas implicaban altos costos y desalentaban la producción. Por lo tanto, se estableció un programa de desregulación y simplificación administrativa, orientado a mejorar la eficacia de la regulación vigente y a eliminar la discrecionalidad innecesaria de la autoridad, así como el exceso de trámites burocráticos que impedían a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, concentrar su atención y esfuerzo en la producción y en las ventas. El programa se concretó con la publicación en el DOF del Acuerdo Presidencial para la Desregulación de la Actividad Empresarial (ADAE), en noviembre de 1995.

El ADAE estableció las características del programa, aplicable a 12 dependencias federales, y creó el Consejo para la Desregulación Económica, el órgano de apoyo técnico para la UDE, conformado por representantes de los sectores empresarial, laboral, académico, agropecuario y gubernamental, con el fin de canalizar las opiniones y sugerencias de los sectores empresarial y social en el proceso de mejora regulatoria. Las cuatro vertientes del programa establecidas por el ADAE fueron:

- Llevar un registro de trámites empresariales y coordinar la desregulación de los trámites empresariales vigentes.

- Revisar y dictaminar proyectos de disposiciones normativas federales, obligando a su justificación legal y económica.
- Elaborar anteproyectos de disposiciones legislativas y administrativas para mejorar la calidad del marco regulatorio de manera generalizada.
- Apoyar a los gobiernos estatales en sus respectivos esfuerzos en la materia.

Este enfoque permitió reducir el número de trámites empresariales federales en más de 45%, dictaminar más de 500 proyectos de disposiciones legislativas y administrativas, firmar convenios de cooperación con todas las entidades federativas del país y proponer anteproyectos de 26 iniciativas legislativas que fueron aprobadas por el H. Congreso de la Unión.

Reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) y creación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER)

Los avances logrados en mejora regulatoria fueron considerables, pero debido al constante cambio del marco regulatorio era necesario asegurar que la mejora regulatoria fuera una labor continua y permanente. En respuesta a la demanda de los sectores social y productivo, el Ejecutivo sometió a consideración del Congreso una iniciativa de reformas a la LFPA que tuvo como propósito institucionalizar la mejora regulatoria, hacer permanente la participación de los sectores productivos en dicho proceso, propiciar la transparencia en la elaboración de regulaciones, otorgar mayor certidumbre jurídica para los ciudadanos en la aplicación de trámites y requisitos, y evitar que los costos del cumplimiento de la normatividad fuesen mayores a sus beneficios.

Estas reformas fueron aprobadas por unanimidad por el poder legislativo en marzo del 2000 y se publicaron en el DOF el 19 de abril del mismo año. Esto significó el reconocimiento, por parte de todos los partidos políticos, de que la mejora regulatoria no es una cuestión ideológica, sino un instrumento económico y eficaz para eficientar la manera en que el gobierno atiende tanto a ciudadanos como a empresas, y que impulsa el crecimiento económico y la creación de empleos. Con esta ley se continuaron y profundizaron las acciones iniciadas con el ADAE y se estableció un esquema moderno y efectivo de mejora regulatoria.

Ampliación del ámbito de aplicación

Las reformas ampliaron el ámbito de aplicación de la mejora regulatoria para incluir los trámites que realizan los ciudadanos, además de los trámites empresariales ya previstos, así como a nuevas materias, tales como las de adquisiciones y obras públicas, seguridad social y normas oficiales mexicanas. Las disposiciones se extendieron además a los organismos descentralizados respecto de sus actos de autoridad y de los servicios que presten de manera exclusiva (v.g. las reglas para otorgar franquicias de PEMEX y los términos para la interconexión de alta tensión con la CFE). Las autoridades financieras, distintas al Banco de México, ahora están también sujetas a las disciplinas de la mejora regulatoria. En suma, mientras que el ADAE aplicaba sólo a 12 dependencias federales, las disposiciones contenidas en la LFPA aplican a 16 dependencias y a más de 30 organismos descentralizados.

Creación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER)

Sin burocracia adicional y con los mismos recursos presupuestales anteriormente dedicados a la materia, se creó la COFEMER como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía con autonomía técnica y operativa. La Comisión, que reemplazó a la UDE de la SECOFI, tiene como funciones, entre otras, evaluar el marco regulatorio federal, diagnosticar su aplicación y elaborar, para consideración del Ejecutivo Federal, proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos. El mandato para la Comisión es también garantizar la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, y que éstas logren beneficios mayores a sus costos.

Consejo para la Mejora Regulatoria

Las reformas también crearon el Consejo para la Mejora Regulatoria (antes Consejo para la Desregulación Económica o CDE), en el cual participan representantes de los sectores público, social, privado y académico, y cuya función es recabar las opiniones en materia de mejora regulatoria y coadyuvar en la instrumentación de este proceso. El Consejo cuenta con la participación de los secretarios de Economía, de Hacienda y Crédito Público, de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, del Trabajo y Previsión Social, del Gobernador del Banco de México y de representantes de sindicatos, asociaciones agropecuarias y universidades. Adicionalmente, con las reformas a la LFPA se añadieron a la lista de miembros el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, el Presidente de la Comisión Federal de Competencia y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. La integración de estos miembros refleja la estrecha relación de trabajo que existe entre la COFEMER y esas instituciones. La calidad legal de los ordenamientos jurídicos firmados por el Presidente de la República, los intereses de los consumidores y la competencia efectiva en los mercados son temas íntimamente ligados con la mejora regulatoria.

Nombramiento de responsables oficiales de mejora regulatoria y obligación de presentar programas bianuales de mejora regulatoria

Es importante recordar que si bien la COFEMER es la institución encargada de coordinar y promover la mejora regulatoria, en última instancia son las dependencias y organismos descentralizados quienes la llevan a cabo. Por ello, la LFPA obliga a que los titulares de las dependencias y organismos descentralizados designen a un subsecretario (o su equivalente) como responsable de la mejora regulatoria, quien debe presentar al menos cada dos años un programa a la COFEMER. Esto tiene por objeto crear una responsabilidad interna en cada entidad reguladora y obligar a rendir cuentas periódicamente sobre las actividades programadas y los avances logrados en mejora regulatoria.

Revisión de anteproyectos de regulaciones y de sus manifestaciones de impacto regulatorio

Para promover la calidad, la transparencia y la participación de los sectores interesados, incluso la ciudadanía, se estableció como obligación que los anteproyectos y las manifestaciones de impacto regulatorio sean públicos y que se sometan a revisión al menos treinta días hábiles antes de la emisión o envío del anteproyecto al Poder Legislativo. Esto permite lograr una mayor congruencia y compatibilidad en las acciones gubernamentales en el orden federal. Las manifestaciones de impacto regulatorio (MIR) permiten a los interesados conocer las razones por las que se proponen proyectos de regulación, las alternativas consideradas en su diseño, los esquemas de aplicación previstos, las consultas llevadas a cabo, así como los costos y beneficios potenciales. La COFEMER, a su vez, está obligada a hacer públicos los anteproyectos, las MIR y sus dictámenes, y a publicar mensualmente la lista de éstos en el DOF. Para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones, se condicionó la publicación en el DOF de modificaciones o nuevas disposiciones por parte de las dependencias y entidades, a la presentación de la MIR y la obtención del dictamen de la COFEMER, a menos que se trate de disposiciones de emergencia.

Registro Federal de Trámites y Servicios

Las reformas dan sustento legislativo al registro, el cual incluirá además de los trámites empresariales, los que se aplican a los ciudadanos (por ejemplo, pasaportes o certificados escolares). Cada dependencia u organismo descentralizado deberá completar el universo íntegro de sus trámites y publicarlos antes de mayo de 2003. A partir de esa publicación, no podrá exigir ningún trámite que no esté inscrito en el registro. Adicionalmente, los trámites que las dependencias hayan incorporado de manera gradual a su registro no pueden aplicarse en forma distinta a como están ahí inscritos, y cualquier inscripción o modificación de un trámite debe hacerse de manera transparente, con el pleno conocimiento de los sectores productivos, el consejo y la previa opinión de la comisión. La ley permite oponerse jurídicamente a una dependencia cuando ésta aplica un trámite de manera distinta a lo inscrito en el registro.

Registro de Personas Acreditadas

Con las reformas se obliga a las dependencias y organismos descentralizados, antes de mayo del 2003, a la creación de un Registro de Personas Acreditadas único para la presentación de trámites federales. Las empresas y los ciudadanos que opten por solicitar su número de inscripción en el registro, sólo volverán a presentar documentos de identificación (credencial de elector, RFC, acta constitutiva de empresa, etc.) ante las secretarías de Estado, e incluso ante organismos como PEMEX y la CFE, cuando

dicha información cambie. El número de registro ante una dependencia de gobierno será válido para todas las demás dependencias y organismos federales, porque los registros deberán estar interconectados electrónicamente antes de mayo del 2003.

Sanciones

Finalmente, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las reformas establecen sanciones específicas para los servidores públicos que actúen en contravención a las disposiciones de la ley, particularmente con relación a la entrega de las MIR y la información y aplicación de los trámites inscritos en el registro. Las disposiciones en esta materia reducen la discrecionalidad en la aplicación de sanciones y garantizan la transparencia, el adecuado funcionamiento de los procedimientos y la correcta actuación de los servidores públicos.

En términos generales, el reto de México, una vez consolidado el cambio democrático, es afianzar la transformación económica e institucional para que se puedan cosechar los beneficios de una economía más eficiente, competitiva y flexible, creada a partir del gran esfuerzo en materia regulatoria que ha realizado el país en los últimos 15 años. En particular, el éxito futuro del programa dependerá de la consolidación de la COFEMER y de los procesos previstos por la LFPA, así como de un cambio gradual de cultura en la administración pública que consista en que las buenas prácticas de mejora regulatoria sean llevadas a cabo por parte de los reguladores y autoridades, con el apoyo de la COFEMER.

Análisis del marco regulatorio en México

El proceso de mejora regulatoria en México se ha ido afinando progresivamente durante la última década. Desde el punto de vista conceptual, no cabe duda que la mejora regulatoria que coordina la COFEMER es de calidad comparable con los países más avanzados en la materia. Sin embargo, el éxito de la mejora regulatoria debe medirse principalmente en términos de resultados concretos, y no del diseño
teórico-institucional.

El proceso de mejora regulatoria es relativamente nuevo, y tomará tiempo para que los diversos cambios al marco legal se traduzcan plenamente en un entorno microeconómico eficiente. En diversos países, se ha notado que el periodo de gestación de reformas sectoriales ambiciosas puede ser de más de 10 años. Sin embargo, para dar seguimiento a los cambios progresivos impulsados por la mejora regulatoria, es importante tener acceso a estudios independientes y comparativos en la materia. Esto permite evaluar la efectividad de las reformas, e identificar las áreas en que se requiere de un esfuerzo adicional. Se considera esencial estudiar las evaluaciones académicas e internacionales del marco normativo mexicano, con el fin de entender por qué ciertas políticas son exitosas y otras no, para comparar las dificultades que enfrentan las empresas y los ciudadanos mexicanos con las de otros países. Asimismo, el estudio detallado de los éxitos y fracasos permite afinar el programa de mejora regulatoria mexicano y asegurar que se proceda conforme a las estrategias más prometedoras. Los resultados de cinco estudios recientes sobre la calidad relativa del marco regulatorio en México se presentan en la primera parte de este capítulo.

Por otra parte, es imprescindible mantener un contacto estrecho con los afectados por las regulaciones y los sujetos a las mismas. El Consejo para la Mejora Regulatoria es muy útil en este sentido, ya que canaliza las opiniones de los representantes de los sectores empresarial, laboral y académico, y permite a la COFEMER mantener una comunicación estructurada y constante con los diferentes sectores de la sociedad. Otro mecanismo útil es la consulta pública directa, para darle una oportunidad a las empresas y a las personas de presentar sus quejas y sugerencias. La COFEMER recibe continuamente este tipo de aportaciones, vía teléfono, fax y correo electrónico, y revisa cuidadosamente la viabilidad de todas las propuestas. En 2001, en el marco de la elaboración del *Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006*, se llevó a cabo un esfuerzo particular de consulta pública para

determinar la dirección del *Programa Federal de Mejora Regulatoria 2001-2006*. Los resultados de la consulta pública se describen en la segunda parte de este capítulo.

Estudios sobre la calidad del marco regulatorio en México

Una premisa central de la mejora regulatoria es el análisis continuo de las acciones gubernamentales que implican costos de cumplimiento para las empresas y los particulares. Además, para que sean de utilidad, los estudios deben ser objetivos y llevados a cabo por instituciones de reconocido prestigio. El interés creciente en México por su ambicioso programa de reforma y por ser un lugar atractivo para la inversión, ha resultado en la publicación de diversos estudios sobre regulación en los que se analiza la situación del país. En este documento se presentan aquéllos elaborados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Foro Económico Mundial, el *National Bureau of Economic Research*, de PriceWaterhouseCoopers, del *International Institute for Management Development* y del Consejo Coordinador Empresarial.

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos

El estudio más completo sobre el proceso de mejora regulatoria en México, *Reforma Regulatoria en México,* fue elaborado en 1999 por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). La publicación comprende un análisis profundo e íntegro del proceso de mejora regulatoria de nuestro país desde sus inicios hasta la fecha de publicación del estudio.

México fue de los primeros países miembros de la OCDE en solicitar una revisión detallada de sus prácticas regulatorias. El reporte presenta una evaluación de la reforma regulatoria en áreas clave, tales como el contexto macroeconómico, la calidad del sector público, la política de competencia y su aplicación, la integración de principios de apertura comercial en los procesos regulatorios, y la mejora regulatoria en los sectores de autotransporte y telecomunicaciones.

El estudio hace notar que los beneficios de la mejora regulatoria en México han sido considerables, ya que provocaron:

- Reducción de precios y diversificación de opciones para los consumidores y las empresas en México.
- Mejoras en la eficiencia productiva, que se han reflejado claramente en el crecimiento del sector exportador de México.
- Innovación en productos y tecnologías por la entrada de nuevas empresas y flujos de inversión.
- Economía más flexible y adaptable a condiciones adversas y crisis en los mercados internacionales.
- Establecimiento de instituciones y métodos que permiten a México lograr sus metas regulatorias de manera más eficiente y eficaz.
- Incremento en productividad en el sector de telecomunicaciones, medida por el número de líneas por empleado, pasando de 95.2 en 1989 a 163.4 en 1997.
- Reducción del 23 por ciento en términos reales de las tarifas de autotransporte de carga en toda la nación, entre 1987 y 1993.
- Caída de los costos de distribución de los productos agrícolas, en aproximadamente 25 por ciento en términos reales, entre 1987 y 1994.

- Disminución de los precios para el manejo por tonelada de productos agrícolas en 42 por ciento y para los minerales entre 35 y 50 por ciento de 1995 a 1998.[10]

El estudio también ofrece recomendaciones de política para construir un programa de trabajo equilibrado tanto para el corto como para el largo plazo, basadas en las mejores prácticas regulatorias internacionales. Muchas de estas recomendaciones quedaron superadas por las reformas a la LFPA de abril del 2000; no obstante, es útil mencionar los aspectos que todavía son relevantes:

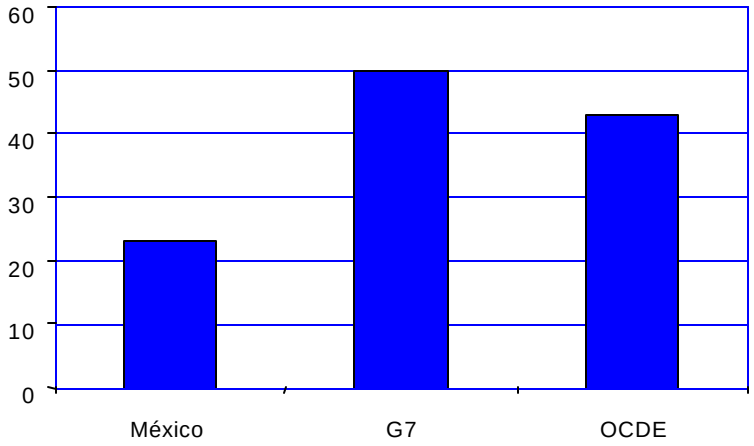
- Consolidar la ampliación del ámbito de aplicación de la LFPA, para asegurar que sectores importantes de la economía no queden fuera de los procesos de mejora y que los beneficios lleguen tanto a empresas como a particulares.
- Reforzar las instituciones encargadas de la mejora regulatoria y proteger la autonomía técnica y operativa que otorgó la LFPA.
- Evaluar y corregir las limitaciones en la reforma llevada a cabo en sectores de gran impacto económico.
- Invertir en el proceso de coordinación regulatoria con estados y municipios, a fin de que los tres niveles de gobierno se muevan en la misma dirección.
- Desarrollar los esquemas de transparencia y consulta pública previstos en ley e instrumentarlos de manera uniforme.
- Considerar un proceso sistemático de revisión de regulaciones vigentes, semejante al de la revisión y dictamen de regulaciones propuestas.
- Sostener el programa varios años y consolidarlo para permitir la gestación completa de los beneficios.

A continuación se presentan algunas gráficas que comparan el proceso de mejora regulatoria mexicano con el de los países del Grupo de los Siete (G7), así como los de la OCDE. Cabe señalar que estas gráficas están basadas en la autoevaluación de los países mencionados, por lo que puede existir cierto sesgo en la información, y que no contemplan los cambios recientemente implementados a raíz de las reformas a la LFPA. A pesar de lo anterior, las gráficas permiten ver la situación en la que se encontraba México a finales de 1999.

10 "*Reforma regulatoria en México*", OCDE, pág. 95.

Transparencia en los sistemas regulatorios de países de la OCDE

Este indicador, basado en la autoevaluación por parte de cada país, refleja la apertura y transparencia relativa de los procesos de elaboración y revisión de regulaciones. Los países mejor clasificados son los que gozan de sistemas regulatorios sin restricciones a la participación en procesos de consulta pública, que ofrecen fácil acceso a información regulatoria y manifestaciones de impacto regulatorio mediante formatos electrónicos, así como a los procesos de revisión de proyectos regulatorios. También se le otorga una clasificación elevada a los programas que cuentan con un sistema de planeación de actividades regulatorias futuras, procedimientos de consulta abiertos al público en general y un registro público de regulaciones.



Fuente: Elaborado con base en OCDE, *Reforma Regulatoria en México, Volumen 2 Reportes Temáticos*, 2000

Foro Económico Mundial

El *Global Competitiveness Report* es un estudio elaborado por el Foro Económico Mundial (FEM), que se publica anualmente desde 1996. Dicho estudio presenta un índice de competitividad directamente relacionado con el crecimiento económico de 59 países, en un horizonte de 5 años. El objetivo del índice es mostrar si las condiciones presentes en el país son las apropiadas para lograr un rápido crecimiento económico. La información utilizada para elaborar el índice incluye, entre otras cosas, una encuesta de opinión entre la comunidad empresarial sobre la percepción que tiene del ambiente económico de su país.

El índice se elabora a partir de ocho factores: grado de apertura económica, gobierno, finanzas, infraestructura, tecnología, negocios, mercado laboral e instituciones. En 1999, México ocupó la posición 31 de la clasificación general, un lugar por arriba del de 1998 y dos por encima del de 1996.

El estudio también presenta un índice de competitividad microeconómica. Algunas de las variables que lo conforman son: independencia del poder judicial, efectividad del recurso legal para el sector privado, las cargas administrativas para iniciar negocios, obstáculos burocráticos y barreras legales a la entrada a mercados. De acuerdo a este índice, México ocupó el lugar 34 en 1999, lo que significó una mejora de 5 posiciones con respecto al año anterior.

El FEM señala que la importancia del índice de competitividad microeconómica está en que las reformas llevadas a cabo por los gobiernos a nivel micro pueden producir beneficios tangibles y visibles

para los ciudadanos en el corto plazo. La eliminación o regulación efectiva de monopolios puede reducir costos de vida tales como alimentación, vivienda, electricidad, y teléfono. Se menciona que la reforma regulatoria puede atenuar ineficiencias y mejorar las condiciones sociales de manera rápida.

Se concluye que las reformas a nivel macro (estabilidad política y macroeconómica) son necesarias, mas no suficientes para el desarrollo económico de un país. Dichas reformas deben ir acompañadas de mejoras en las bases microeconómicas, tales como el entorno regulatorio para las empresas. Sin reformas a nivel microeconómico, el crecimiento económico de un país no es sostenible.

National Bureau of Economic Research

Otro importante estudio, publicado en marzo del 2001 por el reconocido instituto de investigaciones económicas *National Bureau of Economic Research* (NBER), analiza el costo en tiempo y recursos que implica abrir un negocio en 75 países. Específicamente, se enfoca en: (i) los requisitos necesarios para la apertura de un negocio, (ii) el costo total de cumplir con dichos requisitos y (iii) el tiempo que se requiere para obtener la resolución definitiva de las autoridades.

Según el estudio, *The regulation of entry*, en México se requiere cumplir con 15 trámites (federales, estatales y municipales), cubrir un costo aproximado de $24,000 pesos y esperar 112 días para abrir un negocio. De los 75 países seleccionados, el estudio sitúa a México en el lugar 67 en cuanto a mayor número de trámites por realizar para abrir un negocio, y en el lugar 66 en cuanto al tiempo requerido para iniciar operaciones. Esto indica claramente que los esfuerzos en materia de apertura de empresas deben ser prioritarios en los tres órdenes de gobierno.

De la publicación se puede concluir que la constitución legal de una empresa en México es muy costosa, y que una regulación excesiva en este aspecto está generalmente asociada con mayores niveles de corrupción y con un sector informal grande. Finalmente, se constata que los gobiernos menos democráticos suelen ser los que más intervienen en el proceso de apertura de negocios.

PriceWaterhouseCoopers

Otra publicación que analiza aspectos específicos del marco regulatorio de México es *The Opacity Index*, publicado en enero del 2001 por la empresa PriceWaterhouseCoopers (PWC). Este estudio analiza la transparencia de los procesos gubernamentales en 35 países (incluye EE.UU., Singapur, Hong Kong, Reino Unido, China, Italia, Argentina, Brasil y Chile, entre otros) mediante la determinación de un índice de “opacidad” (o falta de transparencia). Concretamente, se estudia la transparencia y eficacia de cinco áreas
de la política pública: corrupción, sistema legal, política macroeconómica y fiscal, gobierno corporativo y estructura regulatoria. El estudio se basa en encuestas realizadas a altos ejecutivos en cada uno de los países.

De acuerdo a PWC, la transparencia en la operación del gobierno es equivalente a una reducción de la carga tributaria para las empresas y los particulares, pero sin el efecto negativo de una menor recaudación. A mayor opacidad, mayores son los obstáculos para el progreso económico de los países y sus ciudadanos. En particular, la opacidad representa costos significativos para la inversión, al generar mayores costos de capital y limitar su disponibilidad. Por lo anterior, los gobiernos deben dar prioridad en sus políticas gubernamentales a reducir la opacidad e incrementar la transparencia; esto traerá beneficios económicos importantes.

La publicación sitúa a México en el sexto lugar de la clasificación general y en el décimo lugar en estructura regulatoria. Estas clasificaciones son muy alentadoras, ya que es el primer estudio que toma en cuenta las recientes reformas a la LFPA en materia de transparencia y consulta pública.

International Institute for Management Development

The World Competitivenss Yearbook es una publicación anual del *International Institute for Management Development* (IMD), organismo especializado en temas relacionados con la competitividad. Esta publicación analiza los esfuerzos llevados a cabo por un país para propiciar un ambiente competitivo para sus empresas. El análisis comprende 47 países y evalúa las áreas de economía, sociedad, internacionalización, ciencia y tecnología, finanzas, gobierno, infraestructura y administración. Cada área a su vez está dividida en aspectos específicos que ofrecen una visión más clara del desempeño de los países en materia de competitividad. En 1999, México ocupó el lugar 36 de la clasificación general.

Comparación de Indices

País	PriceWaterhouseCoopers *The Opacity Index 2000*			World Economic Forum *Global Competitiveness Report, 1999*		IMD *The World Competitiveness yearbook, 1999*	
	Factor de opacidad	Sistema legal	Regulación	Indice de Competitividad	Indice de Competitividad Microeconómica	Indice de Competitividad	Marco legal
Singapur	1	1	1	1	12	2	1
Estados Unidos	2	3	5	2	1	1	32
Chile	3	2	2	21	24	25	23
Reino Unido	4	4	3	8	10	15	14
Hong Kong	5	10	4	3	21	7	2
México	**6**	**13**	**9**	**31**	**34**	**36**	**43**
Italia	7	12	12	35	25	30	41
Hungría	8	5	6	38	33	26	22
Uruguay	9	11	6	-	-	-	-
Israel	10	15	8	28	20	24	17
Brasil	18	14	17	51	35	35	40
Argentina	19	16	24	42	40	33	39
Venezuela	22	20	25	50	51	45	47
Guatemala	25	6	19	-	-	-	-

Fuente: Elaborado con base en (1) *The Opacity Index PriceWaterhouseCoopers*, enero 2001, (2) *Global Competitiveness Repor*t, World Economic Forum, 1999 y (3) *The World Competitiveness yearbook*, IMD International, 1999.

Consejo Coordinador Empresarial (CCE)

A partir de 1998, el CCE realiza estudios sobre la mejora regulatoria en los estados de la República. El más reciente, "*México: calidad del marco regulatorio en las entidades federativas mexicanas. Estudio comparativo 2000*", presenta los resultados de un análisis del marco institucional de la mejora regulatoria y de una encuesta de opinión empresarial en cada estado.

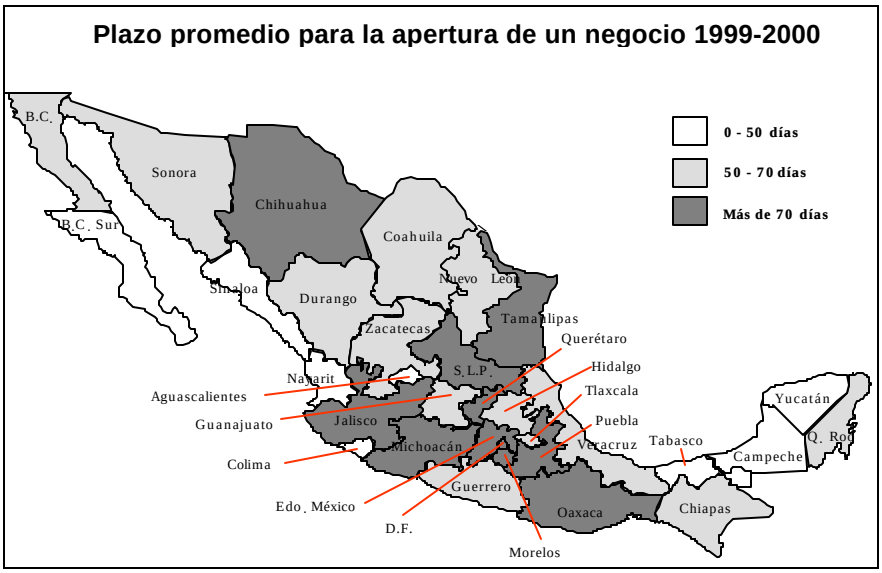
La información obtenida de la investigación y de las encuestas sirvió de insumo para las tres clasificaciones del estudio:

a) La clasificación de las entidades en función del grado de instrumentación de buenas prácticas regulatorias en sus respectivos programas de mejora regulatoria.

b) La clasificación derivada de la encuesta en la que se preguntó a los empresarios de cada entidad su opinión acerca de la calidad de gestión en materia de trámites empresariales.

c) La clasificación en función del número de días promedio que tarda un empresario en tramitar la apertura de un negocio en su entidad.

En términos generales, los estados han mejorado notablemente su desempeño en materia de mejora regulatoria. Por ejemplo, según el estudio, el promedio nacional del grado de instrumentación de buenas prácticas regulatorias subió de 48% en 1999 a 62% en el 2000. Asimismo, el promedio de días para abrir un negocio, según las respuestas presentadas por los empresarios, se redujo de 71 a 56 días durante el mismo lapso.



Fuente: CCE, *México: calidad del marco regulatorio en las entidades federativas mexicanas. Estudio comparativo 2000*.

Sin embargo, el estudio identifica que todavía existen grandes retos a superar, tales como la discrecionalidad, los plazos de respuesta y la coordinación entre autoridades en el procesamiento y resolución de trámites, así como las gestiones específicas que se tienen que realizar en materia de medio ambiente, construcción y uso de suelo, por ejemplo.

Consulta ciudadana en torno al proceso de mejora regulatoria

El programa sectorial se desarrolló incorporando las opiniones expresadas por los ciudadanos durante la fase de elaboración del *Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006*. El proceso consistió en la presentación por parte de expertos y del público en general de su visión acerca de los problemas prioritarios del país, así como sus expectativas para el desarrollo de México. Se organizaron reuniones con grupos de especialistas y personas directamente involucradas en los temas respectivos, así como foros abiertos a la participación ciudadana, y se recibieron comentarios por medio de correo tradicional y electrónico. Se recabaron todas estas opiniones y se incorporaron las viables en el *Programa Federal de Mejora Regulatoria 2001-2006*.

Para el tema de la mejora regulatoria, el esquema de consulta consistió en: (i) la realización de dos foros: uno de expertos en la materia y otro con participación abierta del público, y (ii) los comentarios remitidos a través de los diversos medios disponibles.

El foro de expertos "Desarrollo y Competitividad Empresarial" se llevó a cabo el 19 de marzo del 2001 en el Distrito Federal. En la reunión se contó con la participación de distinguidos expertos de los sectores académico, empresarial, financiero y público para que aportaran y discutieran acciones concretas con el fin de avanzar en el proceso de mejora regulatoria. Asistieron representantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México, de la Comisión Reguladora de Energía, del Banco de México, de la Cámara Minera de México, del Centro de Investigación y Docencia Económica, de la Comisión Federal de Competencia, de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, así como despachos y expertos.

La pregunta a responder en el foro fue: ¿Cómo consolidar la mejora regulatoria en la administración pública federal y en todos los órdenes de gobierno?. De la respuesta a esta pregunta surgieron importantes aportaciones. Destacan las siguientes:

- Fortalecer el marco regulatorio y el diseño de la arquitectura institucional y de mercados para proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, así como su aplicación.
- Mejorar y difundir los instrumentos de la mejora regulatoria, así como ampliarlos a todas las áreas de la administración pública.
- Promover la mejora regulatoria en los Estados y Municipios, así como la educación y publicidad de resultados por parte del sector privado.
- Promover la divulgación de información pública y privada, relevante para el funcionamiento del mercado, protegiendo la privacidad de las personas y la información que se considera confidencial por razones de interés público.

Posteriormente, durante el mismo mes de marzo en Chetumal, Quintana Roo, se realizó el foro de ponencias abierto a todo el público, durante la VII Reunión Nacional de Unidades de Mejora Regulatoria. La reunión abarcó el tema de la mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno. En particular, se buscó responder a la pregunta ¿Cómo promover mayor cooperación y acciones concretas en materia de mejora regulatoria entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales y municipales?. De acuerdo a las diversas opiniones, la mejora regulatoria demanda una revisión sistemática y coordinada de los marcos normativos en los tres órdenes de gobierno a efecto de volverlos más efectivos, ágiles y transparentes, y así facilitar el desarrollo de las actividades productivas. Las principales acciones propuestas para una mejor coordinación en la instrumentación de programas de mejora regulatoria se resumen en:

- Firmar nuevos acuerdos generales de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios.
- Dar un mayor sustento legal a la mejora regulatoria en todos los ámbitos de la administración pública.
- Uniformar los criterios y operación de los programas de mejora regulatoria.
- Crear consejos o comisiones estatales de mejora regulatoria.
- Fomentar la participación de los municipios en el proceso.
- Incrementar la capacitación en materia de prácticas regulatorias.
- Difundir ampliamente el análisis y los resultados de la mejora regulatoria.

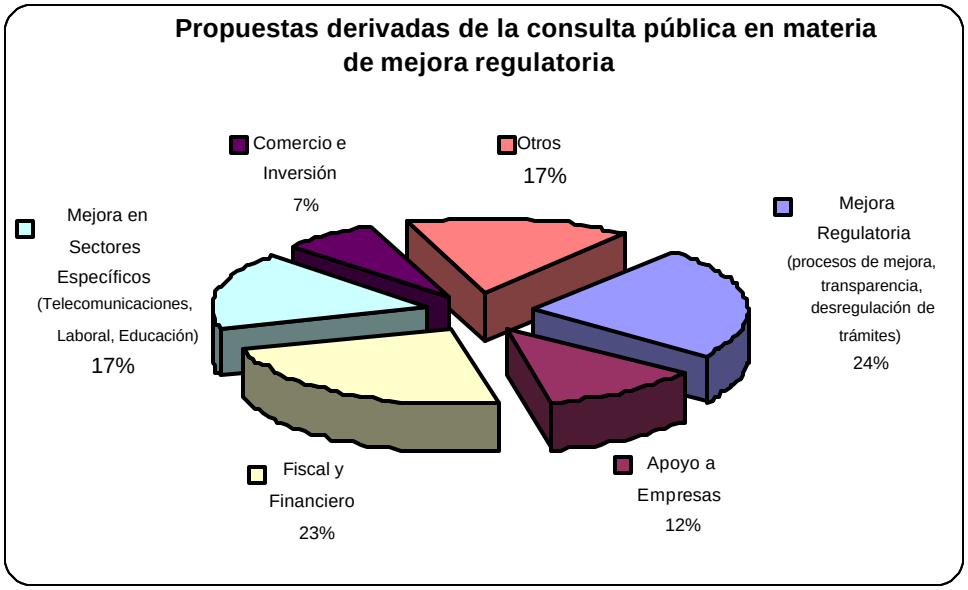
A la reunión asistieron representantes de la iniciativa privada, así como representantes estatales y municipales encargados de la mejora regulatoria y ciudadanos interesados en el tema.

Por lo que se refiere a las opiniones remitidas a través de correo tradicional y electrónico, las cuatro áreas de mayor preocupación en materia regulatoria fueron:

- Acciones genéricas de mejora regulatoria (procesos de revisión, transparencia, simplificación de trámites, etc.).
- Simplificación de obligaciones en materia fiscal.
- Falta de apoyo para el establecimiento y operación de empresas.

- Lagunas o ineficiencias en la regulación de áreas específicas, tales como telecomunicaciones y normatividad laboral.

La gráfica que se presenta a continuación muestra el interés de la ciudadanía en las diversas áreas de la mejora regulatoria.



El ejercicio realizado en el presente capítulo permite tener una percepción mucho más amplia del proceso de mejora regulatoria en México. Incluye la visión de expertos, académicos, organizaciones e instituciones internacionales y, sobre todo, la visión de empresas y ciudadanos, quienes son los principales afectados por las regulaciones.

III. ¿A dónde queremos llegar?

El éxito de la mejora regulatoria en el largo plazo dependerá de la consolidación de un sistema de administración regulatoria como parte integral de las instituciones del Estado. La mejora regulatoria debe ser una política pública sistemática en su enfoque y amplia en su alcance. Esto implica que no será suficiente contar únicamente con un órgano administrativo desconcentrado como la COFEMER para revisar y proponer mejoras a las regulaciones vigentes y sus propuestas de modificación o creación, sino que se tendrán que aplicar las políticas de mejora regulatoria en cada una de las dependencias y organismos descentralizados, en los estados y los municipios, así como la formación de una auténtica cultura de mejora regulatoria en el conjunto de la administración pública. Adicionalmente, se deberá promover la evaluación agregada de los efectos de la regulación y la priorización de las intervenciones del gobierno en función de los riesgos a atenuar y de los beneficios y costos esperados.

La mejora regulatoria es, en el fondo, la búsqueda del buen gobierno, cuyas acciones estén basadas en el análisis, la transparencia, la consulta pública y la rendición de cuentas; un gobierno democrático y responsable que haga el mejor uso de los recursos limitados de la sociedad.

Un elemento importante de este enfoque es el reconocimiento de que se deben transparentar los costos en que incurre la sociedad para cumplir con las regulaciones federales, estatales y municipales. Casi toda regulación impone costos y los recursos de la sociedad son limitados; por ello, es fundamental que toda la administración reflexione a conciencia antes de imponer requisitos nuevos a los particulares. Además, la regulación es una manera de redistribuir recursos que no está sujeta a las disciplinas que existen; por ejemplo, en la administración tributaria y el ejercicio del presupuesto gubernamental. Por lo tanto, existen incentivos para usar la regulación con el fin de beneficiar a grupos determinados de manera velada.

Este problema es complejo, en particular por la falta de mecanismos de evaluación objetiva y comparativa respecto de la manera en que las autoridades desarrollan sus actividades regulatorias. En años recientes, el sector privado ha dado un fuerte impulso a la mejora regulatoria en las entidades federativas con la evaluación de la calidad de la regulación en ese orden de gobierno. Algo similar para las dependencias federales y los gobiernos municipales podría ser de gran utilidad para el progreso de la mejora regulatoria.

Adicionalmente, hay que recordar que el H. Congreso de la Unión también puede jugar un papel importante en este proceso. El Congreso elabora y aprueba las características básicas de las obligaciones para los particulares a través del proceso legislativo. Es esencial, por lo tanto, que los legisladores se involucren en el análisis de los efectos potenciales de modificaciones al marco legislativo y que lleven un seguimiento eficaz de las acciones del poder ejecutivo en la reglamentación de dichas obligaciones. El escrutinio y análisis de los reportes anuales de la COFEMER al H. Congreso de la Unión pueden ser un primer paso en la consolidación de tal proceso.

Por último, será necesario lograr una mayor integración de las acciones de mejora regulatoria y competencia económica que están estrechamente ligadas. "*La nueva economía, las profundas transformaciones en el comercio y los flujos internacionales han traído cambios fundamentales en la estructura de los mercados y en las formas de competencia que transforman el entorno económico en el mundo y en México... En un mundo globalizado, el país requiere un sector productivo más competitivo y sólido para afrontar las exigencias que este entorno presenta.*"[11] La mejora regulatoria deberá promover un marco regulatorio nacional que fomente la competitividad de las empresas en México. Esto se logra en parte al promover sistemáticamente la competencia y evitar las barreras a la entrada de mercados, particularmente en la provisión de servicios no comerciables. En este sentido, diversos objetivos del programa de mejora regulatoria se reflejan claramente en el *Programa Nacional de Competencia Económica 2001-2006.*

Principios de la Mejora Regulatoria en México

Las acciones gubernamentales deben estar basadas en principios generales que buscan procurar los mayores beneficios para la sociedad y apoyar la formación de un marco regulatorio nacional equitativo que fomente la iniciativa de todas las mexicanas y mexicanos.

En consonancia con su propósito central de consolidar la mejora regulatoria en México, el *Programa Federal de Mejora Regulatoria 2001-2006* conformará un marco regulatorio guiado por los siguientes principios: inclusión, federalismo, calidad y transparencia.

El principio de inclusión implica la participación de toda la sociedad y de los tres órdenes de gobierno en el proceso de mejora regulatoria. Por un lado, la participación de la sociedad origina que las regulaciones estén diseñadas de manera equitativa y equilibrada, conforme a los intereses de los diversos sectores afectados. Por otro lado, la participación y colaboración de los diferentes gobiernos evitan obstáculos derivados de la falta de coordinación o contradicciones entre ellos.

Para poder integrar plenamente este principio de inclusión en el campo de la mejora regulatoria, es necesario consolidar el desarrollo del federalismo. Este es otro principio prioritario del *Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006,* cuya realización dependerá de la cooperación estrecha entre los tres órdenes de gobierno a fin de evitar la duplicidad en el diseño y aplicación de regulaciones, así como del fortalecimiento de la capacidad institucional de los estados y municipios para desarrollar políticas sistemáticas y eficientes de mejora regulatoria.

La calidad de las regulaciones es uno de los elementos más importantes para el desarrollo económico del país. Para instrumentar este principio rector y para maximizar los beneficios netos para el país, se

[11] *Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006*, pág. 42.

deben difundir e incorporar plenamente las buenas prácticas de mejora regulatoria en todas las dependencias y organismos descentralizados que elaboran y aplican regulaciones. Una parte importante de lo anterior es el mejoramiento de la calidad de la información en la que se basa la toma de decisiones regulatorias. Esto implica el desarrollo de esquemas de levantamiento de datos, de métodos analíticos, de transparencia y de control de calidad. Lo anterior permitirá lograr una mejor comprensión de los efectos potenciales de las acciones normativas, lo que redundará en regulaciones de mejor calidad.

Por último, el marco regulatorio de México debe ser también transparente. La transparencia en el proceso de mejora regulatoria limita la discrecionalidad en el ejercicio público, así como los incentivos a la corrupción. En particular, la transparencia en la elaboración, revisión y aprobación de disposiciones normativas genera reglas más claras y sencillas que fomentan la competencia y las actividades productivas. Este principio rector está directamente relacionado con los tres anteriores, y en su conjunto son la base para el desarrollo del *Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006*.

Visión

Contar con un sistema integral de administración regulatoria que mejore la efectividad y eficiencia del gobierno, opere bajo una auténtica cultura de mejora regulatoria, estimule y fortalezca la actividad económica, reduzca al máximo los incentivos institucionales a la corrupción y continuamente revise e incremente la calidad del sistema jurídico nacional.

El objetivo a largo plazo de la mejora regulatoria consta del desarrollo de un sistema integral de administración regulatoria que contribuya a crear una economía dinámica mediante reformas microeconómicas que eliminen esquemas regulatorios rígidos, incentivos mal usados y distorsiones de mercado que reducen el desempeño económico.

Se deberá mejorar la efectividad y eficiencia del gobierno, para que logre hacer más con menos y brindar mejores servicios, con la adopción de herramientas avanzadas de política pública, la integración equilibrada de diferentes objetivos económicos y sociales, y el diseño de esquemas de instrumentación y aplicación costo-efectivos y flexibles ante los constantes cambios de un mundo interdependiente. México necesita contar no sólo con regulaciones de calidad, sino también con un gobierno de calidad.

También será indispensable reducir al máximo los incentivos institucionales a la corrupción, e incrementar la calidad, eficiencia y efectividad del conjunto del sistema jurídico nacional. Esto permitirá desarrollar plenamente los valores democráticos como transparencia, participación pública y rendición de cuentas del gobierno ante la sociedad. Lo anterior implica medir el desempeño regulatorio de las diversas autoridades, reducir el control burocrático de la administración pública, limitar la intrusión del gobierno en la vida privada de los particulares y promover la descentralización y el federalismo para acercar más el gobierno a los ciudadanos.

Misión

Estructurar un proceso de mejora regulatoria en la que el gobierno sea riguroso en sus procesos de toma de decisiones, al fundamentarlos en la transparencia, el cuidadoso análisis, la consulta pública y la rendición de cuentas, con el fin de proteger la vida, la salud, el medio ambiente y los intereses de los consumidores, al menor costo posible para los particulares. México requiere de un proceso de mejora regulatoria ambicioso, transparente e incluyente en los tres órdenes de gobierno, que impulse la innovación de la gestión gubernamental, así como la competitividad y el crecimiento económico de nuestra nación.

La mejora regulatoria debe permitir a los particulares adaptarse rápidamente a los cambios económicos, tecnológicos y sociales de su entorno. Esto se logrará con el esfuerzo de toda la sociedad, con la participación activa de los grupos afectados, con el análisis cuidadoso de las alternativas regulatorias y con plena transparencia de las decisiones de política pública. La mejora regulatoria será parte de la nueva forma de gobernar basada en la transparencia, el análisis y la consulta pública.

Asimismo, el proceso de mejora regulatoria debe estar enfocado a proteger los intereses sociales, tales como la vida, la salud, y el medio ambiente, evitando costos innecesarios para la sociedad y haciendo el uso más eficiente posible de los recursos limitados de la misma. Lo anterior a fin de fomentar el desarrollo económico dinámico e incluyente del país y un crecimiento con calidad.

IV. ¿Qué camino vamos a seguir?

Objetivos

Se plantean cuatro objetivos rectores del *Programa Federal de Mejora Regulatoria 2001-2006,* mismos que servirán de base para la creación de un marco normativo sencillo, transparente y eficiente. El cumplimiento de estos objetivos facilitará el establecimiento y operación de empresas; promoverá la inversión productiva y la creación de empleos; mejorará la calidad de los servicios que brinda la administración pública; reducirá la corrupción; y asegurará la transparencia y la rendición de cuentas. Mediante la realización de estos objetivos se logrará el cumplimiento de una de las prioridades del *Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006*: *un desarrollo con calidad que destaque un desarrollo económico, dinámico, incluyente, sustentable y la competitividad nacional*.[12] Dichos objetivos son:

- Profundizar en el proceso de mejora regulatoria y consolidar la ampliación del ámbito de aplicación hacia áreas clave del sector público.
- Asegurar la calidad y eficiencia de la regulación y la transparencia en su elaboración.
- Fomentar una cultura de mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno.
- Mejorar los servicios a la población y propiciar el uso extensivo de mejores prácticas regulatorias.

Estrategias y líneas de acción

Los objetivos planteados se habrán de concretar mediante la instrumentación de seis estrategias directamente relacionadas con las actividades básicas de la COFEMER, por lo que permitirán no sólo cumplir con los objetivos señalados, sino fortalecer los procesos actuales de mejora regulatoria. Estas estrategias son:

1. Conformar programas bianuales de mejora regulatoria de calidad.

2. Conformar, simplificar, actualizar y mantener disponible el sistema electrónico de información sobre trámites y servicios en beneficio de las empresas y los ciudadanos.

3. Revisar y mejorar los anteproyectos de disposiciones legislativas y administrativas federales que generen costos de cumplimiento para las empresas y los particulares.

4. Promover la incorporación de mejores prácticas regulatorias en la administración pública federal.

5. Elaborar diagnósticos y proponer anteproyectos de regulaciones para mejorar el marco regulatorio en sectores económicos y áreas regulatorias específicas.

6. Profundizar la colaboración y apoyo técnico sobre el proceso de mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno.

Objetivos **Estrategias**

[12] Presidencia de la República, *Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006*, pág. 35.

Profundizar en el proceso de mejora regulatoria y consolidar la ampliación del ámbito de aplicación hacia áreas clave del sector público.	➡	1. Conformar programas bianuales de mejora regulatoria de calidad.
		2. Conformar, simplificar, actualizar y mantener disponible el sistema electrónico de información sobre trámites y servicios en beneficio de las empresas y los ciudadanos.
Asegurar la calidad y eficiencia de la regulación y la transparencia en su elaboración.	➡	3. Revisar y mejorar los anteproyectos de disposiciones legislativas y administrativas federales que generen costos de cumplimiento para las empresas y los particulares.
		5. Elaborar diagnósticos y proponer anteproyectos de regulaciones para mejorar el marco regulatorio en sectores económicos y áreas regulatorias específicas.
Fomentar una cultura de mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno.	➡	6. Profundizar la colaboración y apoyo técnico sobre el proceso de mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno.
Mejorar los servicios a la población y propiciar el uso extensivo de mejores prácticas regulatorias.	➡	4. Promover la incorporación de mejores prácticas regulatorias en la administración pública federal.

ESTRATEGIA 1. Conformar programas bianuales de mejora regulatoria de calidad.

La LFPA obliga a las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal a someter a la opinión de la COFEMER, al menos cada dos años, un programa de mejora regulatoria en relación con la normatividad y los trámites de su competencia.

La elaboración de los programas bianuales de mejora regulatoria es una actividad nueva. Su objetivo es crear un esquema claramente definido sobre las acciones en materia regulatoria que las dependencias y organismos descentralizados pretenden llevar a cabo los siguientes dos años. A mediados del 2001, la COFEMER recibió por primera vez los programas de las dependencias y organismos federales. La calidad de los mismos varió de manera sustancial. Para evaluarla se definieron cuatro niveles: bueno, mejorable, regular y malo. Se recibieron 37 programas, de los cuales 16 fueron clasificados como buenos, 16 mejorables, 3 regulares y 2 malos. Los programas fueron puestos a disposición del público para su consulta y comentarios. Las entidades federativas participaron activamente en este proceso e hicieron llegar a la COFEMER una serie puntal de comentarios y propuestas. La respuesta del sector empresarial fue menos significativa, pues se recibió un número reducido de comentarios. Los programas bianuales, así como las opiniones de la COFEMER acerca de los mismos, están disponibles en la página de Internet de la Comisión (*www.cofemer.gob.mx*).

De acuerdo a la "*Guía para la elaboración del Primer Programa Bianual de Mejora Regulatoria 2001-2003*", los programas debían contener al menos dos secciones: a) inscripción de trámites y servicios en el RFTS y b) anteproyectos de disposiciones normativas. Adicionalmente, se dio la opción de añadir una tercera sección sobre acciones que coadyuven a la mejora regulatoria. Sin embargo, la mayoría de los programas se enfocaron únicamente a la sección referente a trámites, mientras que la sección sobre

anteproyectos de disposiciones normativas solamente describió los mismos, sin ofrecer una justificación de las propuestas. La calidad de la tercera sección, “Otras acciones”, varió sustancialmente.

Es fundamental que la administración pública reconozca que la mejora regulatoria va mucho más allá de la eliminación y simplificación de trámites. El ejercicio de mejora regulatoria debe incluir acciones relativas a la reforma de disposiciones vigentes e incluso la propuesta de nuevas regulaciones, para subsanar vacíos jurídicos o marcos regulatorios inadecuados. Las deficiencias en los programas regulatorios se pueden evitar en la siguiente iteración del proceso, al preparar una guía de elaboración más precisa y completa, y al asegurar que las dependencias y organismos tengan pleno conocimiento de las características de la mejora regulatoria, particularmente en lo que se refiere a los aspectos más controvertidos u onerosos de sus respectivos marcos normativos.

Resulta indispensable lograr una mejor coordinación entre la COFEMER, las dependencias y los organismos descentralizados en la conformación de los programas bianuales de mejora regulatoria.

Los programas definitivos de mejora regulatoria de las dependencias y organismos descentralizados serán públicos y estarán disponibles para su consulta en la página de la COFEMER en Internet. Asimismo, se harán públicos los informes sobre su cumplimiento. La COFEMER buscará asegurar, en estrecha colaboración con las dependencias y organismos, el cumplimiento exacto y en tiempo de los compromisos establecidos en los programas.

ESTRATEGIA 1

Conformar programas bianuales de mejora regulatoria de calidad

Líneas de acción

1.1 Hacer una nueva guía para la elaboración de programas de mejora regulatoria.
1.2 Llevar a cabo sesiones de trabajo con las dependencias y organismos descentralizados para apoyar la conformación de los programas bianuales.
1.3 Asegurar la elaboración y ejecución de los programas de mejora regulatoria de los bienios 2001-2003, 2003-2005 y 2005-2007.

Línea de acción 1.1. Hacer una nueva guía para la elaboración de programas de mejora regulatoria.

Es necesario precisar en la nueva guía de elaboración la obligación de justificar las disposiciones normativas propuestas y explicar la importancia de subsanar las omisiones de los programas elaborados en 2001. Se debe trabajar conjuntamente con las dependencias y organismos con el fin de generar un instructivo claro, preciso y completo.

Línea de acción 1.2. Llevar a cabo sesiones de trabajo con las dependencias y organismos descentralizados para apoyar la conformación de los programas bianuales.

Es indispensable trabajar conjuntamente con las dependencias y organismos descentralizados en sus respectivos programas bianuales de mejora regulatoria, con el fin de asegurar que se contemple la simplificación de los aspectos de la regulación federal que más requieren reformarse. Esto será particularmente necesario para las dependencias y organismos descentralizados que no habían participado en los procesos de mejora regulatoria antes de las reformas a la LFPA en el 2000.

Línea de acción 1.3. Asegurar la elaboración y ejecución de los programas de mejora regulatoria de los bienios 2001-2003, 2003-2005 y 2005-2007.

La correcta e íntegra ejecución de los programas de mejora regulatoria resulta imprescindible para la consolidación de la mejora regulatoria en el ámbito federal. Con base en la experiencia adquirida durante la presentación y ejecución de los programas 2001-2003, se trabajará en coordinación con las dependencias y organismos descentralizados, a fin de mejorar la calidad de los programas subsecuentes y asegurar su plena implementación.

ESTRATEGIA 2. Conformar, simplificar, actualizar y mantener disponible el sistema electrónico de información sobre trámites y servicios en beneficio de las empresas y los ciudadanos.

Con las reformas a la LFPA del 2000, el Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS) debe incorporar no sólo los trámites federales empresariales que estaban contenidos en el anterior Registro Federal de Trámites Empresariales (RFTE), sino también los relativos a concesiones, seguridad social, normas oficiales mexicanas, los que realizan las instituciones financieras ante las autoridades que los regulan, así como los ciudadanos. También se incluyen por primera vez todos los trámites que aplican los organismos descentralizados como PEMEX, CFE, el IMSS y el INFONAVIT. La inscripción completa y precisa de los trámites del IMSS y el INFONAVIT, en particular, será una alta prioridad, ya que éstos aplican a toda actividad que implique una relación laboral.

De acuerdo a la LFPA, el registro deberá estar completo a más tardar en mayo del 2003, y los particulares podrán oponerse legalmente a la exigencia de trámites que no se prevean en el mismo o que se apliquen de forma diferente a como se indica en éste. Será necesario prever la inscripción progresiva de los trámites en los programas bianuales de mejora regulatoria, especialmente si se toma en consideración que el universo de trámites que aún faltan por inscribir no se conoce con precisión.

Una enorme cantidad de trámites que los ciudadanos tienen que cumplir ante las autoridades corresponde al área fiscal. Sin embargo, la LFPA excluye a esta materia de la mejora regulatoria en su artículo 1o. Esta situación crea una laguna evidente en el proceso de mejora regulatoria, ya que cualquier esfuerzo de desregulación de trámites que no abarque la parte fiscal será necesariamente incompleto. Este hecho pudiera ser una limitante significativa a los beneficios potenciales derivados de la desregulación de trámites.

Durante 1998 y 1999 se llevó a cabo un programa de mejora regulatoria de los trámites fiscales y financieros de la SHCP. Se identificaron 1,064 trámites en total, 496 fiscales, 562 financieros y 6 de entidades coordinadas. Los resultados del programa no fueron instrumentados, ni se inscribieron los trámites en el Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS). Esto hubiese implicado una reducción del 37% de los trámites (fiscales y financieros), la disminución de plazos de respuesta y la eliminación y precisión de datos y documentos exigidos a los particulares, entre otros. No obstante, los trámites de la SHCP que debieron haber sido inscritos en el RFTE fueron dados a conocer de manera no oficial a través de la página de Internet de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

TRAMITES INSCRITOS EN EL RFTS

	1996	*31-Nov-2000*	*31-Ago-2001*			
Dependencia	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TRAMITES NUEVOS	TRAMITES ELIMINADOS	% TRAMITES ELIMINADOS
SEGOB	81	78	76	0	2	2.6
S.R.E.	24	22	19	1	4	18.2
SEMARNAT	222	205	171	1	35	17.1
SENER	179	115	84	0	31	26.9
SE	227	164	164	0	0	0
SAGARPA	49	43	44	1	0	0
SCT	856	289	289	0	0	0
SEP	146	42	140	98	0	0
SSA	115	81	88	7	0	0
STPS	72	38	16	0	22	57.9
SECTUR	67	49	7	0	42	85.7
SSP[1/]	-		1	1	0	-
	2038	***1126***	***1099***	***109***	***136***	***12.1***

Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria

1/ Dependencia creada en 2001.

A agosto del 2001, el RFTS tenía inscritos 1099 trámites de todas las demás dependencias gubernamentales y organismos descentralizados, por lo que el total de trámites fiscales y financieros identificados prácticamente equivalían al universo de los inscritos en el RFTS.[13] En segundo lugar, es necesario destacar que los representantes empresariales y la ciudadanía en general esperan que esa dependencia tenga un registro de trámites fiscales, ya que el Secretario de Hacienda y Crédito Público se comprometió a establecerlo en la segunda sesión del Consejo para la Mejora Regulatoria de 2001. En otros países esos registros son un elemento clave de transparencia que fortalece el Estado de Derecho y promueve el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Por otro lado, el RFTS tiene una estrecha relación con el programa de gobierno electrónico denominado *e-México,* ya que se prevé realizar un número significativo de trámites y servicios gubernamentales en línea durante los próximos años. La conformación del Registro de Personas Acreditadas que permitirá presentar trámites sin acompañar documentos de identificación de personas físicas o morales (identificación oficial, RFC, acta constitutiva de empresa, etc.) una vez obtenido el número de registro, también será un componente importante del programa *e-México*.

Finalmente, será indispensable que se intensifiquen los esfuerzos de vigilancia sobre la aplicación correcta y transparente de las regulaciones y sus requisitos, a fin de asegurar que la desregulación legal de trámites se traduzca en beneficios concretos para las empresas y los particulares. Para lo anterior, será necesario contar con la participación activa de la SECODAM y de su programa de usuarios simulados, por ejemplo.

[13] Todavía no están inscritos la mayoría de los trámites ciudadanos, ni los correspondientes a los organismos descentralizados.

ESTRATEGIA 2

Conformar, simplificar, actualizar y mantener disponible el sistema electrónico de información sobre trámites y servicios en beneficio de las empresas y los ciudadanos.

Líneas de acción

2.1 Concluir la conformación del Registro Federal de Trámites y Servicios.
2.2 Crear un sistema de apertura rápida de empresas.
2.3 Proponer misceláneas de mejora regulatoria
2.4 Instaurar un esquema de revisión y eliminación sistemático de trámites y formatos, a través de auditorías regulatorias.
2.5 Elaborar un manual de utilización del sistema electrónico de trámites y formatos para los ciudadanos y las empresas.

Línea de acción 2.1. Concluir la conformación del Registro Federal de Trámites y Servicios.

Se debe concluir la conformación del Registro Federal de Trámites y Servicios antes de mayo de 2003, conforme a lo dispuesto en la LFPA. Para lo anterior, será necesario prever la inscripción progresiva de trámites en los programas bianuales de mejora regulatoria de las dependencias y organismos descentralizados como PEMEX, la CFE, el IMSS y el INFONAVIT.

Los trámites requeridos por la SHCP a la fecha no están inscritos en el RFTS, ni siquiera plenamente identificados. Los trámites financieros deberán ser inscritos, y la SHCP conformará registros de trámites fiscales y aduaneros, con el fin de brindar mayor seguridad legal a los particulares y mejorar la transparencia en estas materias.

Para lograr la instrumentación eficiente del sistema *e-México* y la plena integración del RFTS y del Registro de Personas Acreditadas en el mismo, es necesario trabajar en forma conjunta con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la SECODAM y la Presidencia de la República.

Línea de acción 2.2. Crear un sistema de apertura rápida de empresas

Actualmente, existen ocho trámites federales universalmente obligatorios para la creación de empresas con al menos un empleado y tres para las empresas que no tienen empleados (todos basados en ley).
Los demás trámites federales son de servicio y promoción, o circunstancialmente obligatorios (para actividades empresariales en condiciones particulares; por ejemplo, trámites de transporte de residuos peligrosos). Sin embargo, según diversos estudios, se calcula que en promedio un empresario en México tarda entre 70 a 120 días en abrir un negocio, considerando los trámites federales, estatales y municipales requeridos.[14]

En junio de 2001 el Presidente de la República expidió el *Acuerdo para la desregulación y simplificación de trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, y la aplicación de medidas de mejora regulatoria que beneficien a las empresas y ciudadanos*, el cual permite incorporar, mediante un proceso abierto, las opiniones y sugerencias de los ciudadanos. Como resultado de ello, se ha iniciado la desregulación y simplificación de 20 por ciento de los trámites inscritos en el RFTS, así como la identificación, mejora y simplificación de los cinco trámites de mayor impacto en cada una de las dependencias y organismos públicos descentralizados. Lo anterior se ha llevado a cabo a través de un proceso abierto que incorpora las opiniones y sugerencias del público.

Asimismo, el Acuerdo presidencial obliga a las dependencias y organismos descentralizados a contemplar en sus programas bianuales de mejora regulatoria las acciones necesarias para mantener

[14] Consejo Coordinador Empresarial, *Calidad del Marco Regulatorio en las Entidades Federativas Mexicanas*, México, DF: 1998-2000. López de Silanes, Florencio, et al, *The Regulation of Entry*, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, EE.UU., 2001.

cuando menos una cuarta parte de sus trámites, es decir un 25%, con carácter de trámites de conservación de información o avisos, o de prever la afirmativa ficta.

La meta del sistema de apertura rápida de empresas es que sólo se requieran diez horas y dos trámites federales para la constitución de una empresa, en el caso de aquellas que no desarrollen actividades riesgosas. Para establecer este sistema, son necesarias varias acciones de mejora regulatoria, entre las que destacan:

(i) Reducir al mínimo indispensable el número y los plazos de los trámites federales obligatorios.

(ii) Liberar de la regulación federal las actividades económicas en las que no exista un riesgo público (*v.g.* salud y medio ambiente), o bien, en las que habiendo concurrencia entre los órdenes de gobierno, las actividades no ameriten intervención federal y puedan ser reguladas por los estados y municipios en su caso.

(iii) Celebrar convenios de coordinación con los estados y municipios en su caso, para que éstos liberen de toda regulación actividades económicas que no revistan un riesgo público, y para que regulen aquéllas en las que haya concurrencia con la federación de manera coordinada y evitando duplicidades.

Es evidente que para instrumentar un esquema de esta naturaleza es necesario sumar esfuerzos con los estados y municipios. La experiencia al respecto muestra que los trámites de apertura de empresas son mínimos en el orden federal, pero asimétricos y en ocasiones numerosos en los órdenes estatal y municipal.

Línea de acción 2.3. Proponer misceláneas de mejora regulatoria.

Las propuestas de modificación de trámites federales que deriven del *Acuerdo presidencial para la desregulación y simplificación de trámites y de la conformación del sistema de apertura rápida de empresas*, requerirán de la elaboración de un paquete de modificaciones legislativas y administrativas para su plena instrumentación. Se elaborarán dos propuestas de "misceláneas de mejora regulatoria". La primera abordará leyes y podrá ser presentada en el periodo ordinario de sesiones del Congreso septiembre-diciembre de 2001. La segunda modificará reglamentos, acuerdos y decretos presidenciales, así como acuerdos generales de las dependencias y los organismos descentralizados, y podrá ser emitida en todo momento.

Línea de acción 2.4. Instaurar un esquema de revisión y eliminación sistemática de trámites y formatos, a través de auditorías regulatorias.

A fin de asegurar que la mejora regulatoria ofrezca beneficios en el mediano y largo plazos, se requiere de una revisión continua de los trámites y formatos vigentes. Por tal motivo, además de conformar plenamente el RFTS, es necesario desarrollar un esquema de auditorías regulatorias que obligue a la revisión y justificación de los trámites y formatos vigentes, y así impulsar la simplificación o eliminación de los que sean obsoletos o innecesariamente costosos.

Línea de acción 2.5. Elaborar un manual de utilización del sistema electrónico de trámites y formatos para los ciudadanos y las empresas.

Con el fin de obtener los máximos beneficios posibles del RFTS para los ciudadanos y las empresas, se elaborará y difundirá un manual que describa con precisión las características de este sistema, la información disponible en el mismo y su metodología de uso. Este esfuerzo será realizado cuando se concluya la conformación del RFTS, a más tardar en mayo de 2003.

ESTRATEGIA 3. Revisar y mejorar los anteproyectos de disposiciones legislativas y administrativas federales que generen costos de cumplimiento para las empresas y los particulares.

La revisión y dictaminación de los anteproyectos de disposiciones legislativas y administrativas federales constituye una práctica fundamental para propiciar un marco normativo más congruente y eficiente que no imponga costos innecesarios a la sociedad. Actualmente, la lista de los anteproyectos regulatorios del Gobierno Federal está disponible en línea y en el DOF al menos 30 días antes de que se expidan, y las dependencias tienen la obligación de justificar sus propuestas públicamente, mediante una MIR, también disponible en línea a través de la COFEMER.

Desde 1996, se han recibido y revisado cerca de 1000 anteproyectos de disposiciones legislativas y administrativas y poco menos de 850 MIR.[15] A raíz de las nuevas disciplinas establecidas por las reformas a la LFPA de abril de 2000, el número de anteproyectos recibidos y revisados por la COFEMER se incrementó notablemente. En los últimos 15 meses (junio del 2000 a agosto del 2001) se recibieron alrededor de 470 anteproyectos con sus respectivas MIR, es decir poco menos del 50% del total recibido en los 6 años anteriores.

Un aspecto a mejorar en el proceso de revisión de los anteproyectos se refiere a los criterios de dictaminación de la Comisión. Para asegurar un proceso eficiente de revisión de regulaciones propuestas, particularmente con el gran incremento que se ha registrado en el volumen de anteproyectos recibidos, será necesario definir criterios homogéneos y transparentes para la emisión de dictámenes de la COFEMER.

En particular, se deberá asegurar que las dependencias consideren detenidamente los efectos en los consumidores, la competencia en los mercados, el comercio y las pequeñas y medianas empresas. Al saber con mayor claridad cuáles son los criterios de revisión de la COFEMER, las dependencias y organismos descentralizados podrán anticipar el contenido de los dictámenes y realizar modificaciones preventivas a sus anteproyectos, con el fin de incorporar mejores prácticas regulatorias en sus propuestas, incluso antes de enviarlas a la COFEMER.

PROYECTOS RECIBIDOS A PARTIR DE LA INSTRUMENTACION DE LA MIR

	1997	1998	1999	2000	2001
SEP			1	42	22
PGR		1			
SAGARPA	1	5	14	16	21
SCT	4	15	23	98	17
SE	5	23	17	42	25
SECODAM				1	
SECTUR		2	1	2	
SEDESOL				1	6
SEGOB			2		
SEMARNAT	4	34	33	74	5
SENER	1	18	21	8	28
SHCP				40	42
SRE				3	1
SSA		33	22	32	8
STPS	1	7	9	12	
Total general	16	138	143	371	175
TOTAL	843				

Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria

[15] Esto se debe a que en 1996 se establece la obligación de remitir los anteproyectos de disposiciones acompañados de una manifestación de impacto regulatorio.

ESTRATEGIA 3

Revisar y mejorar los anteproyectos de disposiciones legislativas y administrativas federales que generen costos de cumplimiento para las empresas y los particulares.

Líneas de acción

3.1 Continuar con la revisión y mejora de anteproyectos de disposiciones normativas y sus respectivas manifestaciones de impacto regulatorio y definir claramente los criterios para su dictaminación.

3.2 Desarrollar un sistema en línea para la elaboración de manifestaciones de impacto regulatorio y la entrega de anteproyectos de regulaciones a la COFEMER.

Línea de acción 3.1. Continuar con la revisión y mejora de anteproyectos de disposiciones normativas y sus respectivas manifestaciones de impacto regulatorio, y definir claramente los criterios para su dictaminación.

Fortalecer el proceso de revisión y mejora de anteproyectos de disposiciones legislativas y administrativas federales es una prioridad de la COFEMER. Será importante aclarar los criterios de revisión y dictaminación, así como los requisitos para la elaboración y revisión de MIR.

Los criterios de revisión de la COFEMER que se deberán plasmar en un reglamento de la LFPA en materia de mejora regulatoria son, entre otros:

- Que se justifique la intervención del gobierno.
- Que los beneficios de las regulaciones excedan los costos.
- Que no existan alternativas regulatorias que pudieran lograr los objetivos de la regulación a menor costo.
- Que las regulaciones minimicen el impacto negativo para las empresas, particularmente las pequeñas y medianas.
- Que no se impongan barreras innecesarias a la competencia o al comercio, con el fin de no perjudicar a los consumidores.
- Que se cuente con los recursos humanos y presupuestales para asegurar la instrumentación y aplicación de la regulación.

Asimismo, se deberá asegurar que las MIR contengan justificaciones claras y precisas sobre la problemática que se pretende resolver, las facultades jurídicas para expedir la regulación, las características específicas de la regulación, la determinación de los efectos potenciales (costos y beneficios) y la creación o modificación de trámites y formatos.

Estos objetivos se lograrán con la expedición de un reglamento de la LFPA en materia de mejora regulatoria y la expedición de un nuevo manual para la elaboración de la MIR. Ambos serán elementos evolutivos en función de la evaluación permanente que la COFEMER y las dependencias hagan sobre su uso y función.

Línea de acción 3.2. Desarrollar un sistema en línea para la elaboración de manifestaciones de impacto regulatorio y la entrega de anteproyectos de regulaciones a la COFEMER.

Se diseñará un sistema en línea para facilitar la elaboración y mejorar la calidad de las MIR, así como para agilizar el proceso de entrega de las MIR y de los anteproyectos regulatorios correspondientes a la Comisión. Este sistema dará mayor certidumbre a las dependencias y organismos descentralizados que someten anteproyectos a consideración de la COFEMER y será congruente con el proyecto *e-México*.

ESTRATEGIA 4. Promover la incorporación de mejores prácticas regulatorias en la administración pública federal.

Para mejorar la calidad del marco regulatorio, se tiene que lograr una difusión efectiva de las mejores prácticas regulatorias en toda la administración pública federal. La COFEMER es la institución encargada

de coordinar e impulsar la mejora regulatoria, pero este ejercicio debe ser plenamente incorporado en los procesos internos de elaboración de regulaciones por parte de las dependencias y organismos descentralizados. Por ello, es importante no sólo la clarificación de los criterios de revisión y dictaminación, sino también la capacitación a las dependencias y organismos descentralizados en la elaboración de anteproyectos de regulaciones y MIR.

En un análisis llevado a cabo por la COFEMER, se observó que sólo el 22% de las MIR recibidas contienen evaluaciones detalladas y reproducibles de costos y beneficios potenciales; el 40% contiene una mención de alternativas viables regulatorias y el 49%, una descripción mínima del proceso de consulta pública realizado. Dado que el manual de la MIR y los cursos de capacitación se centran en el tema de cómo lograr las mejores prácticas regulatorias, no sólo permiten mejorar la calidad de las MIR, sino también de los proyectos propuestos y del desempeño de la mejora regulatoria en general.

ESTRATEGIA 4

Promover la incorporación de mejores prácticas regulatorias en la administración pública federal.

Líneas de acción

4.1 Instrumentar cursos de capacitación a funcionarios públicos sobre mejores prácticas regulatorias.

Línea de acción 4.1. Instrumentar cursos de capacitación a funcionarios públicos sobre mejores prácticas regulatorias.

La mejora regulatoria va mucho más allá de un esfuerzo intragubernamental de revisión de regulaciones. Su objetivo final es lograr un cambio de cultura dentro de la administración pública, con el fin de que el análisis, la transparencia y la consulta pública no sean meros trámites del proceso regulatorio, sino aspectos esenciales de la política pública nacional que sean adoptados e internalizados por los funcionarios públicos a todos los niveles. Por ello, se emprenderá dentro del programa sectorial de mejora regulatoria un esfuerzo profundo de capacitación y difusión de mejores prácticas regulatorias.

Los cursos de capacitación para funcionarios federales sobre mejores prácticas regulatorias abarcarán la elaboración de proyectos regulatorios y MIR de calidad. Lo anterior traerá como consecuencia regulaciones más sencillas, eficientes y adecuadas al entorno para el que son creadas. Otra consecuencia de la capacitación es que facilitará y simplificará la revisión de anteproyectos de disposiciones normativas, lo que permitirá dedicar más tiempo y recursos a la revisión, actualización y perfeccionamiento de regulaciones existentes, una práctica indispensable. Este proceso de capacitación deberá cubrir temas como:

- La evaluación de riesgos a regular.
- La selección de alternativas regulatorias o no regulatorias.
- Estrategias de consulta pública.
- Mecanismos para asegurar la instrumentación y aplicación.
- Técnicas para la evaluación de costos y beneficios.

Adicionalmente, se deberá trabajar de manera conjunta con los responsables oficiales de la mejora regulatoria de las dependencias y organismos descentralizados, para mejorar los procesos internos en:

- La coordinación del proceso de mejora regulatoria y la supervisión de su cumplimiento.
- La elaboración de programas de mejora regulatoria al menos cada dos años, así como de reportes periódicos de los avances correspondientes.
- La suscripción de los anteproyectos y MIR que se sometan a consideración de la COFEMER, así como de la información que deba inscribirse en el Registro Federal de Trámites y Servicios.

En este proceso se plantea la participación activa de algunas instituciones de enseñanza e investigación superior.

ESTRATEGIA 5. Elaborar diagnósticos y proponer anteproyectos de regulaciones para mejorar el marco regulatorio en sectores económicos y áreas regulatorias específicas.

Las reformas a la LFPA de abril del 2000 establecieron como atribución de la Comisión "*revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar para su propuesta al Titular del Ejecutivo Federal, proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos*". La COFEMER elabora diagnósticos con el fin de señalar áreas en que se puede mejorar la regulación federal. Posteriormente, estos diagnósticos se pueden convertir en propuestas concretas de reformas legislativas o administrativas en sectores económicos o áreas regulatorias específicas. A diferencia de la situación anterior a las reformas a la LFPA, los diagnósticos de la COFEMER ahora son públicos.

Estos diagnósticos y propuestas de la COFEMER complementan la revisión del flujo de disposiciones, ya que permiten realizar análisis de las regulaciones *vigentes* en sectores económicos y áreas normativas clave. Esta labor será esencial para incitar a una reflexión sobre los esquemas regulatorios de mayor impacto en la economía y la sociedad. La elaboración de los diagnósticos y las propuestas de reforma se llevan a cabo con la participación de los miembros del Consejo para la Mejora Regulatoria, y mediante procesos de consulta con los grupos y personas directamente afectadas, así como de reconocidos académicos especialistas en materia de regulación. Los diagnósticos se pueden convertir luego en reformas legislativas y administrativas propuestas directamente por la COFEMER.

En los últimos años, el proceso de mejora regulatoria ha producido diversos diagnósticos y reformas específicas, por ejemplo en leyes y reglamentos en materia de:

- Gas natural
- Inversión extranjera
- Minas
- Competencia económica
- Procedimientos judiciales en materia mercantil y civil
- Metrología y normalización
- Concursos mercantiles
- Garantías crediticias
- Firma electrónica

A continuación se presenta un cuadro que contiene los últimos diagnósticos elaborados por la COFEMER.

DIAGNOSTICOS RECIENTES ELABORADOS POR LA COFEMER

Anteproyecto del Reglamento de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Su objetivo es reglamentar el título pertinente de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a fin de precisar y dar transparencia a diversos aspectos del proceso de mejora regulatoria. La mejora regulatoria será más ágil y eficiente en la medida en que se precisen legalmente sus procesos, plazos, requisitos de transparencia y consulta con los sectores productivos y ámbito de aplicación.

Propuestas para facilitar los procedimientos y trámites para la importación de equipos médicos para personas discapacitadas.

De conformidad con las disposiciones legales, la importación de equipos médicos para uso en personas discapacitadas enfrenta regulaciones arancelarias y no arancelarias lo suficientemente onerosas para desincentivar su importación al menudeo, sobre todo la importación por cuenta de dichas personas. En este sentido se considera que debe existir un trato preferencial, que debe incluir, entre otros, la exención de uso de los servicios del agente o apoderado aduanal y del pago de impuestos de importación. En términos generales, se proponen medidas para hacer más accesible la importación de equipos médicos por parte de pasajeros al menor costo posible, en relación con la obligación de recurrir a los servicios del agente aduanal.

Causas por las que no ha funcionado la CICOPLAFEST, consecuencias y propuestas para su mejoramiento.

La Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST), se creó con el objetivo de coordinar las acciones de las distintas dependencias que la conforman, respecto a plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas (PLAFEST). Sin embargo, dicha Comisión no constituye una entidad nueva de regulación, sino que es un medio utilizado por las dependencias para el logro de sus fines particulares. Bajo este supuesto, el diagnóstico explica las causas del bajo desempeño de la Comisión, así como las consecuencias que esto trae consigo.

Alcance del régimen de excepción constitucional respecto de las áreas estratégicas.

El párrafo cuarto del artículo 28 constitucional permite que el Estado realice en forma exclusiva las actividades estratégicas (sin que por ello sea considerado como monopolio), pero no lo exceptúa de sujetarse a la prohibición de realizar prácticas monopólicas.

La Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) instrumenta el contenido de dicho artículo, mediante el establecimiento de mecanismos para prevenir, investigar y sancionar las concentraciones indebidas y las prácticas monopólicas; sin embargo, lo hace de manera imprecisa.

Con base en lo anterior, se considera conveniente realizar reformas a la LFCE, a fin de reducir el régimen de excepción sólo a las disposiciones relativas a concentraciones.

Situación de la gestión gubernamental y el marco regulatorio en materia de aguas nacionales.

Se determinó que la Ley de Aguas Nacionales y demás disposiciones jurídicas federales que norman la materia contienen vacíos jurídicos, establecen preceptos que promueven una gestión gubernamental inadecuada, e inclusive alientan un uso ineficiente del recurso. Se identifican los principales problemas en la materia, entre los que destacan la falta de control sobre la medición y transferencias de agua, el desperdicio de agua derivado del hecho de que no se internalizan los costos del recurso y la falta de lineamientos para la transferencia de derechos en zonas vedadas o reglamentadas.

Quejas y resolución de controversias contractuales en materia eléctrica.

En la relación de los suministradores del servicio público de energía eléctrica con los usuarios y/o quienes pretenden generar o generan energía como productores externos, existen dos tipos de conflictos en los que dichos suministradores mantienen una ventaja sustancial sobre sus contrapartes. Estas desventajas para los particulares representan ineficiencias que resultan en menor inversión, empleo y bienestar para la sociedad.

Propuestas para una ley estatal prototipo que establezca las bases para la gestión y regulación eficientes de los sistemas de agua potable y saneamiento municipales.

El diagnóstico determina que los organismos operadores de agua potable y saneamiento, así como del drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales, en el mediano plazo, no podrán seguir operando bajo el actual esquema normativo y de gestión. El origen del problema es, por una parte, la falta de incentivos para los funcionarios públicos responsables de establecer tarifas adecuadas y hacer efectivo su cobro. De este modo, evitan el costo político de esas acciones. Por otra parte, está la falta de incentivos para realizar inversiones para operar, dar mantenimiento y expandir los sistemas de aguas, independientemente de que se cuente con los recursos.

ESTRATEGIA 5

Elaborar diagnósticos y proponer anteproyectos de regulaciones para mejorar el marco regulatorio en sectores económicos y áreas regulatorias específicas.

Líneas de acción

5.1 Instrumentar programas sistemáticos, transparentes y periódicos de revisión del marco regulatorio nacional.
5.2 Elaborar anteproyectos de reformas en sectores económicos específicos.
5.3 Elaborar y someter a consideración del Titular del Ejecutivo Federal un reglamento de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en materia de mejora regulatoria.

Línea de acción 5.1. Instrumentar programas sistemáticos, transparentes y periódicos de revisión del marco regulatorio nacional.

Se desarrollará la capacidad de la COFEMER para llevar a cabo diagnósticos de la regulación vigente y propuestas de reformas concretas para subsanar las deficiencias que en su caso se detecten. Entre las áreas prioritarias para este tipo de acciones se encuentran:

Regulación de los servicios no comerciables.[16] Los servicios no comerciables son insumos esenciales en muchos procesos de producción y consumo. En lo relativo a esos servicios, difícilmente pueden subestimarse los beneficios de consolidar una reglamentación pro-competitiva en el transporte aéreo y las telecomunicaciones, por ejemplo. Además, independiente de la propiedad de los activos, es indispensable normar el comportamiento de las paraestatales en los servicios provistos de manera exclusiva por el estado en materia de energía. Todos estos servicios tienen economías de redes o recursos esenciales, por lo que el análisis y las recomendaciones contendrán características muy similares.

En la última década, México ha negociado de manera exitosa la apertura recíproca de sus mercados de bienes y servicios comerciables, a través de tratados de libre comercio, y ha avanzado en la reforma de su marco jurídico. Ahora es crucial para la competitividad de las empresas mexicanas que los servicios no comerciables sean altamente competitivos en precio y calidad. De no lograrse esta meta, el sector mexicano de servicios no comerciables impondría una distorsión equivalente a la de un impuesto a los bienes comerciables, pero sin ningún beneficio fiscal y con una incidencia desfavorable sobre el tipo de cambio y los salarios reales.

Regulación financiera. Existen siete autoridades de regulación y supervisión financiera (SHCP, CNBV, CNSF, CONSAR, Banco de México, IPAB y CONDUSEF), lo cual implica una administración de la regulación que es costosa en comparación con los esquemas de otros países y que no siempre ha cumplido con sus objetivos. Las autoridades requieren de un mandato sencillo, claro y congruente con la incorporación de la materia financiera a las disciplinas de transparencia y calidad de la LFPA. También debe evaluarse la emisión de una ley de insolvencia o concursos para las instituciones financieras, ya que la Ley de Concursos Mercantiles sólo incluye a los bancos, y de manera transitoria. La relevancia de dicha disposición sería que cualquier insolvencia o liquidación de una institución financiera se lleve a cabo de manera predecible, con certidumbre jurídica, y al menor costo posible para los contribuyentes.

[16] Los servicios no comerciables son aquellos que no están sujetos a comercio internacional. Los servicios legales y de inmobiliaria, por ejemplo no son comerciables; sólo se pueden consumir en el país en que se producen. Los sectores de transporte y de construcción, no son fácilmente comerciables, aunque existen excepciones. Los principales determinantes de si un sector es comerciable o no, son los costos de transporte (y los derivados de otras barreras naturales) y el grado de proteccionismo (barreras arancelarias y no-arancelarias).

Situación de la gestión gubernamental y el marco regulatorio de aguas nacionales. Si bien la Ley de Aguas Nacionales, expedida en 1992, incorpora algunos de los elementos para propiciar el uso eficiente del agua, esta ley y las demás disposiciones jurídicas federales que norman la materia contienen vacíos jurídicos o establecen preceptos que promueven una gestión gubernamental inadecuada, así como el uso ineficiente del recurso.

Protección y uso de datos en beneficio de las personas y del desarrollo de la economía. Las disposiciones mexicanas están rezagadas en relación con los estándares internacionales para la protección y divulgación de datos por parte de empresas especializadas, tales como los burós de crédito. Para su buen funcionamiento y reducción de costos, es necesario que la información fluya en la economía. La emisión de disposiciones en esta materia permitiría conciliar los objetivos de respeto a la privacidad con los de acceso a la información, con el fin de que los usuarios con comportamiento honrado puedan reducir costos al realizar transacciones (por ejemplo, en la contratación de créditos hipotecarios – aunque no se refiere sólo a transacciones financieras). Este tipo de normatividad promueve además un mercado de empresas de información, que son un ingrediente clave para el funcionamiento de todo un conjunto de servicios cruciales para las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos.

Ordenamiento administrativo federal. No obstante los avances de la mejora regulatoria, las modificaciones normativas han venido enfrentando dos problemas: por una parte, su inclusión en un orden normativo con sus propias formas de interpretación y control constitucional ha generado una serie de conflictos que ponen en discusión la adecuación de tales normas a la Constitución. Por la otra, las propias reformas han ido mostrando una serie de problemas derivados de su propio diseño, presentando una serie de contradicciones o insuficiencias, que provocan fenómenos contraproducentes a los resultados buscados. Por lo anterior, se iniciará un programa en dos partes: la primera consiste en hacer un diagnóstico sobre la constitucionalidad, operación y eficiencia de la normatividad administrativa en México, a la luz del derecho comparado y de los cambios en la estructura del Estado mexicano. La segunda pretende generar propuestas y escenarios sobre las alternativas para modificar el ordenamiento administrativo federal.

Ley de acceso a la información. Se promoverá la creación de una ley que tenga por objeto establecer, explícitamente, el derecho de acceso del ciudadano a la información pública en manos del Ejecutivo Federal, con el fin de establecer claramente los derechos de los ciudadanos respecto a sus solicitudes de información, las obligaciones de la autoridad respecto al acceso de la información, y procedimientos específicos para que el ciudadano tenga acceso a la información. La instrumentación de una ley de este tipo es un requisito básico para el buen funcionamiento de una democracia moderna. El sistema de contrapesos formado por cada uno de los tres poderes se ve reforzado por la vigilancia continua del público. La transparencia también reforzaría la legitimidad y calidad de operación del gobierno, pues establecería un principio de rendición automática de cuentas para que cualquier ciudadano pueda vigilar la eficiencia del gobierno.

Línea de acción 5.2. Elaborar anteproyectos de reformas en sectores económicos específicos.

Como resultado del análisis de los programas de mejora regulatoria, la COFEMER ha identificado los siguientes sectores como áreas con problemas regulatorios especiales: telecomunicaciones, agua, energía, impacto ambiental, manejo de materiales y residuos peligrosos y riesgo sanitario. La COFEMER desarrollará análisis y anteproyectos de reformas para subsanar las deficiencias identificadas. Finalmente, debe señalarse que el área fiscal (fuera del ámbito de aplicación de la LFPA) se identificó también como un área crítica donde se requieren medidas profundas de mejora regulatoria.

Línea de acción 5.3. Elaborar y someter a consideración del titular del Ejecutivo Federal un reglamento de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en materia de mejora regulatoria.

La Comisión y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal elaborarán una propuesta de anteproyecto en el que se propone reglamentar el título tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con el fin de precisar y dar transparencia a diversos aspectos del proceso de mejora regulatoria federal. La mejora regulatoria se volverá más ágil y eficiente en la medida en que se precisen legalmente sus procesos, plazos, requisitos de transparencia y consulta con los sectores productivos, y ámbito de aplicación. La eficiencia de operación de la COFEMER y de su Consejo, así como de los procesos de

revisión, son clave para que la mejora regulatoria no se vuelva un cuello de botella de la administración pública federal.

ESTRATEGIA 6. Profundizar la colaboración y apoyo técnico en el proceso de mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno.

Dado que los particulares interactúan con el marco jurídico no sólo a nivel federal, es necesario continuar el trabajo para lograr total congruencia entre los marcos normativos federal, estatales y municipales. Destacan algunos casos de normatividad incongruente entre los diversos órdenes de gobierno; por ejemplo, en materia de transporte de carga y de medio ambiente.

En años recientes, el gobierno federal realizó ocho reuniones nacionales en materia regulatoria y firmó convenios de cooperación con todas las entidades federativas. Por su parte, 26 estados también han firmado convenios con sus principales municipios. El sector privado igualmente ha contribuido a impulsar la mejora regulatoria a nivel subfederal con la publicación anual de indicadores de la calidad de los marcos regulatorios en las entidades federativas durante los últimos tres años. A raíz de estos esfuerzos, la gran mayoría de los estados han establecido los fundamentos institucionales necesarios para llevar a cabo programas de mejora regulatoria, como oficinas, consejos con participación de los sectores productivos, registros públicos de trámites y procesos de revisión de trámites y proyectos regulatorios.

En cuanto al desarrollo concreto de instrumentos de mejora regulatoria, la COFEMER ha brindado apoyo técnico a los gobiernos de 17 estados para la creación de sus registros estatales de trámites empresariales y a 22 estados en la elaboración de reformas legislativas y administrativas para agilizar juicios, permitir la cesión de créditos hipotecarios, abrogar disposiciones obsoletas y, en general, para mejorar la calidad del marco regulatorio. Adicionalmente, por primera vez, en 2001, la COFEMER invitó a representantes de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico a participar de manera permanente en el Consejo para la Mejora Regulatoria, con el fin de coordinar mejor las acciones entre la federación y los estados.

ESTRATEGIA 6

Profundizar la colaboración y apoyo técnico en el proceso de mejora regulatoria en los tres niveles de gobierno.

Líneas de acción
6.1 Profundizar acciones con estados y municipios en materia regulatoria.

Línea de acción 6.1. Profundizar acciones con estados y municipios en materia regulatoria.

Dado que el nuevo federalismo implica grandes retos y responsabilidades regulatorias para los gobiernos estatales y municipales, es de particular importancia que éstos implanten y afinen sus respectivos programas de mejora regulatoria para liberar plenamente el potencial productivo de las empresas.

La plena cooperación con los estados y municipios en el programa de mejora regulatoria es vital para la consolidación de este proceso en México. Es particularmente importante incorporar a los municipios en estas labores, ya que las autoridades locales crean y aplican gran parte de la regulación para la operación y apertura de empresas, y dado que sus actividades en materia de mejora regulatoria han sido limitadas, salvo en algunos casos notables.

El esquema de trabajo será integral y consistirá en actividades no sólo de cooperación, sino de capacitación de funcionarios estatales en buenas prácticas regulatorias, como la creación de registros de trámites estatales, la instrumentación y correcta elaboración de manifestaciones de impacto regulatorio, la elaboración de diagnósticos conjuntos (entre federación y estados) sobre sectores económicos o áreas normativas específicas, actividades de coordinación entre estados y municipios, entre otros. Esta capacitación deberá hacer hincapié en la necesidad de provocar un cambio de cultura en la

administración pública para transitar de un Estado controlador de las actividades de los particulares a uno promotor.

Para sustentar lo anterior, se ha solicitado al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) un estudio de factibilidad para diseñar el proceso de mejora regulatoria en los municipios. Dicho estudio incluye una evaluación de la situación de la mejora regulatoria, una guía de acciones en la materia y un plan de acción.

A mediados de 2001, se enviaron a todos los estados del país los proyectos de convenios en materia de mejora regulatoria para su opinión, análisis y firma. Se anticipa contar con la firma de todos los convenios y con la implantación de los esquemas concretos de seguimiento correspondientes en los próximos tres años.

Adicionalmente, se lanzará en 2001 un programa piloto de mejora regulatoria en tres de los más importantes municipios del país, y se espera extenderlo a los treinta centros urbanos más importantes durante la presente administración.

Esta línea de acción será un medio más para fortalecer el federalismo, y por ende extender el desarrollo regional a todas las zonas del país, principalmente las más marginadas, mediante esquemas regulatorios sencillos y promotores de las actividades económicas en dichas regiones.

V. ¿Cómo medimos los avances?

El gobierno federal impulsa una nueva cultura regulatoria que exige transparencia en las decisiones gubernamentales y rendición de cuentas de los resultados. El Plan *Nacional de Desarrollo 2001-2006* compromete a la administración pública federal a informar a la ciudadanía sobre los resultados de la ejecución de sus actividades. Por tal motivo, y a fin de que el *Programa Federal de Mejora Regulatoria 2001-2006* logre sus objetivos, se presentan los mecanismos que servirán para (i) informar a los ciudadanos sobre la marcha del programa y (ii) detectar lagunas e ineficiencias que se puedan corregir para mejorar los resultados.

La evaluación y rendición de cuentas del *Programa Federal de Mejora Regulatoria 2001-2006* se realizarán a través de los indicadores de desempeño de la COFEMER y de la presentación de los avances y retos de la mejora regulatoria en diferentes foros y medios, a saber:

- Presentación anual de un informe al Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 69-E fracción VII de la LFPA.
- Reuniones trimestrales del Consejo para la Mejora Regulatoria.
- Comunicaciones periódicas y documentos públicos de la COFEMER sobre los avances y proyectos en materia de mejora regulatoria.
- Foros internacionales para comparar la evolución relativa de la mejora regulatoria en México en el contexto internacional.

Indicadores de desempeño

Los indicadores de desempeño comprenden las funciones realizadas por parte de la Comisión en el cumplimiento de su mandato legal. Estos indicadores se elaboran mensualmente y a más tardar a finales del 2001 estarán disponibles para el público vía Internet:

A la fecha se tienen identificados seis indicadores que han servido de base para medir el desempeño de la COFEMER:

- *Número de programas bianuales de mejora regulatoria presentados y ejecutados*. Este indicador ofrece una visión clara de la instrumentación de los compromisos establecidos por las dependencias y organismos descentralizados en sus programas bianuales. Permite analizar los avances en el ámbito federal en materia regulatoria.
- *Número de trámites inscritos, mejorados y eliminados del Registro Federal de Trámites y Servicios*. El RFTS representa uno de los pilares de la mejora regulatoria, su seguimiento muestra la evolución de las obligaciones exigidas a los ciudadanos, y facilita detectar los principales obstáculos a las actividades de los particulares y empresas.
- *Anteproyectos de disposiciones normativas y manifestaciones de impacto regulatorio dictaminados*. El número de anteproyectos de disposiciones normativas y MIR dictaminados es

un claro indicador de los avances en mejora regulatoria en el gobierno federal. Es importante notar que no necesariamente un mayor número de anteproyectos y MIR recibidas implica un mejor ejercicio regulatorio, debido a que lo anterior puede ser resultado del fenómeno de inflación regulatoria. Por tal motivo, este indicador debe ser interpretado con sumo cuidado.

- *Diagnósticos y propuestas de reformas a sectores económicos y áreas regulatorias específicas realizados*. A la fecha existen muchas áreas del marco normativo nacional que requieren cambios profundos a fin de permitir el desarrollo de actividades económicas y la creación de empleos. Llevar a cabo diagnósticos de áreas claves del sector público para la economía del país resulta indispensable. Conforme se lleven a cabo más estudios de sectores económicos o áreas regulatorias específicas se podrán lograr mayores avances en la mejora regulatoria y por ende mayores beneficios para la sociedad.
- *Cursos de capacitación y asesorías a funcionarios federales, estatales y municipales impartidas*. La mejora regulatoria no consiste únicamente en la simplificación y eliminación de trámites. Comprende un ejercicio integral de buenas prácticas regulatorias que suelen ser escasas y poco conocidas. Los cursos de capacitación y asesorías a funcionarios de la administración pública permitirán difundir e inculcar las buenas prácticas regulatorias, elemento esencial para la consolidación de un sistema integral de administración regulatoria.
- *Convenios firmados con estados*. La colaboración con los estados y municipios es un elemento indispensable para alcanzar plenamente los beneficios de la mejora regulatoria. El número de convenios firmados con los estados es un indicativo de la profundidad que se le está dando a la mejora regulatoria a nivel nacional.

Adicionalmente, la COFEMER trabajará en el diseño de nuevos indicadores que permitan dar un seguimiento más preciso y transparente a los avances y los retos de la mejora regulatoria.

Informe anual de labores

Conforme al artículo 69-E, fracción VII de la LFPA, la Comisión tiene la obligación de "*expedir, publicar y presentar ante el Congreso de la Unión un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la Comisión y los avances de las dependencias y organismos descentralizados en sus programas de mejora regulatoria*". Este informe incluirá las acciones llevadas a cabo por la COFEMER, así como el seguimiento de los indicadores básicos en la materia y el grado de avance de las estrategias y acciones del programa.

Reuniones del Consejo para la Mejora Regulatoria

El Consejo funciona como un órgano de apoyo técnico y consultivo de la Comisión, que participa activamente en la orientación y evaluación de los trabajos en materia regulatoria.

El Consejo sesiona alrededor de cuatro veces por año, y en dichas sesiones se reportan los avances logrados en la mejora regulatoria y se someten a su consideración las acciones a realizar. Por tal motivo, el Consejo opera no sólo como un mecanismo de evaluación y rendición de cuentas de las acciones hechas por la Comisión, sino también como un miembro activo de la mejora regulatoria a través del cual se incluyen las opiniones de los sectores representados. De tal forma, el Consejo constituye un ejercicio integral de evaluación, rendición de cuentas y participación activa en la mejora regulatoria. Cabe señalar, además, que con la incorporación de representantes de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico de los Estados en el Consejo y con la invitación a presidentes municipales, este ejercicio permite también evaluar las actividades y avances en los órdenes estatal y municipal.

Comunicaciones periódicas y documentos públicos de la COFEMER.

Las comunicaciones periódicas y documentos públicos que elabora la Comisión sobre los avances y proyectos en mejora regulatoria son un complemento al informe anual de labores presentado ante el Congreso de la Unión, que permiten observar los avances y acciones de la Comisión con mayor frecuencia. Concretamente, estas comunicaciones y documentos detallan los trabajos que realiza la Comisión, las decisiones que toma, las estrategias que instrumenta y de sus actividades en general. Permiten, además, analizar los impactos logrados por la política regulatoria en general y por las actividades específicas en particular. Todas las comunicaciones y documentos están disponibles al público en la página de Internet de la Comisión, a fin de que cualquier interesado pueda revisarlos y enviar sus comentarios al respecto.

Participación en foros internacionales.

La oportunidad de evaluar las mejores prácticas en el ámbito internacional y de colaborar en la formación de la agenda de mejora regulatoria en organismos como la OCDE y en el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC), ha permitido realizar revisiones detalladas sobre el desempeño de nuestro país en la materia, que a su vez han permitido identificar los principales retos y oportunidades que se presentan para mejorar la política de mejora regulatoria. La continua participación de México en los foros internacionales ha propiciado el desarrollo de un proceso permanente de evaluación objetiva que representa un importante insumo en el proceso de afinación y desarrollo del programa de mejora regulatoria.

La presentación, medición y evaluación transparente de los resultados, avances y rezagos del marco regulatorio nacional, permite y fomenta una participación pública más informada y por ende más productiva, lo cual propicia que el proceso de mejora regulatoria sea más legítimo, eficiente y eficaz.

Bibliografía

Acuerdo por el cual la SECOFI procederá a revisar el marco regulatorio de la actividad económica nacional, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 9 de febrero de 1989.

Acuerdo para la desregulación de la actividad empresarial, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 24 de noviembre de 1995.

Acuerdo presidencial para la desregulación y simplificación de trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, y la aplicación de medidas de mejora regulatoria que beneficien a las empresas y ciudadanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 25 de junio de 2001.

Alianza para la Recuperación Económica, **Diario Oficial de la Federación**.

Arrow, Kenneth, et al., *¿Cuál es el papel que podría desempeñar el análisis de costo-beneficio en la regulación ambiental, de seguridad laboral, y de salud?*, Science, abril 1996.

Baldwin, Robert y Martín Cave, *Understanding Regulation: Theory, Strategy and Practice*, New York, NY: Oxford University Press, 1999.

Breyer, Stephen, *Regulation and its Reform,* Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982.

Breyer, Stephen, *Breaking the Vicious Circle: Toward Effective Risk Regulation*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993.

Ciscomani, Francisco, *Antecedentes y evolución de la mejora regulatoria*, Documento de Trabajo de la COFEMER, 1999.

Comisión Federal de Mejora Regulatoria, *Informe final del Comisionado*, COFEMER, noviembre 2000.

Consejo Coordinador Empresarial, *Calidad del Marco Regulatorio en las Entidades Federativas Mexicanas*, México, DF: 1998-2000.

Epstein, Richard, *Simple Rules for a Complex World*, Harvard University Press, 1995.

Farber, Guillermo y Gabriel Martínez, *Desregulación económica en México*, FCE, México, 1994.

Foro Económico Mundial, *Global Competitiveness Report*, WEF, 1999.

Guasch, Luis y Pablo Spiller, *Regulation and Private Sector Development in Latin America*, Banco Mundial, 1994.

Guasch, Luis y Robert Hahn, *The Costs and Benefits of Regulation: Some Implications for Developing Countries*, World Bank Research Observer 14(1): 137-58, Washington, EE.UU., Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrrollo, Febrero, 1999.

Gil Díaz, Francisco, y Arturo M. Fernández, *El efecto de la regulación en algunos sectores de la economía mexicana*, FCE, México, 1991.

Hahn, Robert, *Risks, Costs and Lives Saved: Getting Better Results form Regulation*, AEI Press, 1996.

Hopkins, Thomas, *Regulatory Costs in Profile*, San Luis, EE.UU., Center for the Study of American Business, 1996.

Instituto Nacional de Administración Pública, *Reforma Regulatoria y Participación Ciudadana*, México, D.F. INAP, 1999.

International Institute for Management Development, *The World Competitivenss Yearbook 1999*, IMD International, May 1999.

Kahn, Alfred, *The Economics of Regulation: Principles and Institutions*, Cambridge, MA: The MIT Press, 1998.

López-Ayllón, Sergio, *Las transformaciones del sistema jurídico y los significados sociales del derecho. La encrucijada entre tradición y modernidad,* UNAM, México, 1997.

López de Silanes, Florencio, et al, *The Regulation of Entry*, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, EE.UU., 2001.

Noll, Roger, *The Economics and Politics of the Slowdown in Regulatory Reform*, Brookings Discussion Paper, 1996.

Noll, Roger, *Reforming Risk Regulation*, Brookings Discussion Paper, 1996.

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), *Strategies for Increasing Market Access Under Regulatory Heterogeneity*, 1996.

OCDE, *The OECD Report on Regulatory Reform*, 1997.

OCDE, *The OECD Report on Regulatory Reform: Volume II, Thematic Studies.* París: OCDE. 1997.

OCDE, *Regualtory Reform and International Standardisation*, Trade Directorate, 1999.

OCDE, *An Assessment of the Costs for International Trade in Meeting Regulatory Requirements*, 2000.

OCDE, *Strengthening Regulatory Transparency: Insights for the GATS from the Regulatory Reform Country Reviews*, 2000.

OCDE, *Reforma Regulatoria en México*, 2000.

OCDE, *La OCDE en Cifras*, 2001.

Ogus, Anthony, *Regulation: Legal Form and Economic Theory*, New York, NY: Oxford University Press, 1994.

Presidencia de la República, *Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994*, 1989.

Presidencia de la República, *Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000*, 1995.

Presidencia de la República, *Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006*, 2001.

Presidencia de la República, *Primer Informe de Gobierno*, septiembre 2001.

PriceWaterhouseCoopers, *The Opacity Index*, PWC January 2001.

Reformas y adiciones a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el 24 de diciembre de 1996.

Reformas y adiciones a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el 19 de abril del 2000.

Reformas y adiciones a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el 20 de mayo de 1997.

Sempé, Carlos, *Técnica Legislativa y Desregulación*, México, D.F. Editorial Porrúa, 1994.

Viscusi, Kip, et al., *Economics of Regulation and Anti-Trust*, MIT Press, 1995.

Viscusi, Kip, *Fatal Tradeoffs*, Harvard University Press, 1996.

Viscusi, Kip, *Improving the Analytical Basis for Regulatory Decision-Making*, OECD Public Management Service, Paris, mayo 1996.

Winston, Clifford, *Economic Deregulation: Days of Reckoning for Microeconomists*, Journal of Economic Literature, septiembre 1993.

PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-152-SCFI-2001, Ambar de Chiapas-Especificaciones y métodos de prueba.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-152-SCFI-2001, AMBAR DE CHIAPAS-ESPECIFICACIONES
Y METODOS DE PRUEBA.

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en los artículos 34 fracciones XIII y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones XII y XV, 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento y 19 fracciones I y XV del Reglamento Interior de esta Secretaría, expide para consulta

pública el siguiente Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-152-SCFI-2001, Ambar de Chiapas-Especificaciones y métodos de prueba.

De conformidad con el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-152-SCFI-2001, se expide para consulta pública a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, ubicado en avenida Puente de Tecamachalco número 6, colonia Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, código postal 53950, Estado de México, teléfono 57 29 93 00, extensión 4125, fax 55 20 97 15, para que en los términos de la ley se consideren en el seno del Comité que lo propuso.

Durante este lapso, la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización puede ser consultada gratuitamente en la biblioteca de la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en el domicilio antes citado o bien en la página de Internet de esta Secretaría: http://www.economia.gob.mx.

México, D.F., a 18 de diciembre de 2002.- El Director General de Normas, **Miguel Aguilar Romo**.- Rúbrica.

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-152-SCFI-2001, AMBAR DE CHIAPAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA

PREFACIO

En la elaboración del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes empresas e instituciones:

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE CAPACITACION Y VINCULACION TECNOLOGICA DEL
ESTADO CHIAPAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATERIALES

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

GRUPOS DE MINEROS Y EXTRACTORES DE AMBAR
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GRUPOS ARTESANALES DE SIMOJOVEL CHIAPAS

CONSEJO REGULADOR DEL AMBAR DE CHIAPAS

GRUPO ARTESANAL DE NUEVA PRIMAVERA

GRUPO ARTESANAL DE HUITIUPAN “TEMPLO GRANDE”

GRUPO ARTESANAL ITZAMNA

ORGANIZACION CAMPESINA OBRERA Y POPULAR DEL ESTADO
DE CHIAPAS (OCOPECH)

INDICE

Capítulo

0. Introducción

1. Objetivo

2. Campo de aplicación

3. Referencias

4. Definiciones

5. Clasificación

6. Especificaciones

7. Muestreo

8. Evaluación de la conformidad

9. Métodos de prueba

10. Trámites ante dependencias

11. Control de calidad

12. Información comercial

13. Evaluación de la conformidad

14. Vigilancia

15. Bibliografía

16. Concordancia con normas internacionales

Transitorio

0. Introducción

Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) se elabora para dar sustento a la denominación de origen del Ambar de Chiapas, cuya titularidad corresponderá al Estado mexicano en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial. La emisión de esta NOM es necesaria de conformidad con la Declaración General
de Protección a la Denominación de Origen Ambar de Chiapas que fue publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el día miércoles 15 de noviembre de 2000 (en lo sucesivo referida como la Declaración) y con
la fracción XV del artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

1. Objetivo

Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones que debe cumplir el Ambar de Chiapas durante su extracción y elaboración, conforme al proceso que más adelante se señala.

2. Campo de aplicación

Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana se aplica al ámbar en bruto de origen vegetal, así como a productos derivados de ésta como joyas, objetos de arte y religiosos, entre otros, y sujeto al proceso que más adelante se detalla, siendo extraída la materia prima en la entidad federativa y municipios señalados en la Declaración, así como el procedimiento para su elaboración.

3. Referencias

Este Proyecto de Norma se complementa con la siguiente norma oficial mexicana y normas mexicanas vigentes o las que las sustituyan:

NOM-030-SCFI-1993	Información comercial-Declaración de cantidad en la etiqueta-Especificaciones.

NOM-106-SCFI-2000	Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 2 de febrero de 2001.
NMX-Z-012-SCFI-2000	Muestreo para la inspección por atributos.

4. Definiciones

Para los efectos de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana se establecen en orden alfabético las definiciones siguientes:

4.1 Ambar

Resina vegetal fosilizada procedente de las exudaciones de diversas plantas, en México es producida por la especie de árbol llamado Hymenaea Courbaril, leguminosa conocida como guapinol.

4.2 Ambar en bruto

Resina sin procesar.

4.3 Ambar con inclusiones

Resina con fósiles de animales o vegetales.

4.4 Engarzado

Incrustado en una pieza de metal.

4.5 Esculpido

Labrado a mano.

4.6 Lapidado

Proceso de labrado de piedras preciosas o semipreciosas.

4.7 Pulido

Proceso de pulir por medio de fricción.

4.8 Dependencia

Cualquier dependencia o entidad de la administración pública federal.

4.9 DGN

La Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía.

4.10 Etiqueta

Todo rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra forma descriptiva o gráfica ya sea que esté impreso, marcado, grabado, en relieve, hueco, estarcido o adherido al empaque del producto.

4.11 Granel

El producto que se cuenta, se pesa o se mide por así solicitarlo el consumidor al momento de su venta y así cumplir con los propósitos de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.

4.12 IMPI

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

4.13 Ley

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

4.14 Límite mínimo y límite máximo

Intervalo fijado por esta NOM.

4.15 Lote

Cantidad de producto elaborado garantizado.

4.16 Transformación del Ambar

Proceso mediante el cual se le da forma.

4.17 NOM

Norma Oficial Mexicana

4.18 Operaciones unitarias

Son las etapas del proceso de elaboración del Ambar, hasta obtener el producto terminado. Existen las siguientes etapas básicas de dicho proceso: extracción, pulido, lapidado, engarzado, esculpido.

4.19 Superficie principal de exhibición

La establecida en la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SCFI-1993 (ver 3. Referencias).

5. Clasificación

El producto objeto de la aplicación del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana de acuerdo a su color y grado de transparencia se clasifica en once tipos con la misma calidad, como sigue:

Tipo 1.- Ambar Claro, casi transparente.

Tipo 2.- Ambar Amarillo Verdoso translúcido.

Tipo 3.- Ambar Amarillo claro rojizo transparente.

Tipo 4.- Ambar Rojo claro transparente.

Tipo 5.- Ambar Rojo rubí translúcido.

Tipo 6.- Ambar Rojo oscuro que luce casi negro.

Tipo 7.- Ambar tono pardo translúcido.

Tipo 8.- Ambar tono pardo muy claro translúcido.

Tipo 9.- Ambar café.

Tipo 10.- Ambar lechoso.

Tipo 11.- Ambar verde.

6. Especificaciones

6.1 Del producto

El producto objeto de este Proyecto de NOM debe cumplir las especificaciones fisicoquímicas establecidas en la tabla 1.

Tabla 1.- Especificaciones fisicoquímicas del Ambar de Chiapas

PARAMETROS	RESULTADOS	METODOS DE PRUEBA
Termogravimétrico (TGA)	Inic. Desc. 218°C Máx. 397°C Desc. t. 479°C	Inciso 9.1.1
Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)	Desc. 270°C	Inciso 9.1.2
Infrarrojo (IR)	Espectro característico del ámbar	Inciso 9.1.3
Relación succinita/retinita, succínico/retinol	0,19 ácido succínico/retinol	Inciso 9.1.4
Solubilidad	Ver tabla 2	Inciso 9.1.5
Gravedad Específica	1,08 g/cm^3 a 23°C	Inciso 9.1.6
Análisis Dieléctrico (DEA)	$E' =$ 4,675	Inciso 9.1.7
Conductividad eléctrica	Conductividad = 1,744x10 ohm/cm material aislante	Inciso 9.1.8
Comportamiento con la luz ultravioleta	Cambio de color con luz uv de onda corta “azul blanquecina.” Sin cambio con luz uv de onda larga	9.1.9
Fluorescencia	Azul a) una longitud de onda = 463 nm.	9.1.10

Color	Pantone 100c –120c Amarillos Pantone Yellow U Amarillos Pantone 114 U Amarillos Pantone 471 tonos rojizos Pantone 481 tonos rojizos	9.1.11
Transparencia	% transmitancia = 95,7% % transmitancia = 95,4%	9.1.12
Indice de refracción	Igual a O-diclorobenceno $n^{20} = 1,552$	9.1.13
Dureza	Shore D del ámbar es de 85,4 unidades. Microdurómetro, 30,48 g/mm	9.1.14
Conductividad térmica	K= 0,002131 cal /s.cm°C	9.1.15
Coeficiente de dilatación térmico lineal	a = 57,98 u/m/°C el coeficiente se calcula entre 20°C y 110°C	9.1.16

7. Muestreo

La aplicación de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana obliga a los fabricantes o artesanos a llevar un control de calidad permanente a través de su propia estructura o por medio de la contratación de los servicios de una persona acreditada y aprobada. Cuando se requiera efectuar el muestreo del producto se recomienda la aplicación de la Norma Mexicana NMX-Z-012/1,2,3-1987 (ver 3. Referencias).

8. Evaluación de la conformidad

La evaluación de la conformidad de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana será realizada por personas acreditadas y aprobadas en términos de la ley y su reglamento.

La comprobación de lo establecido en este Proyecto de Norma Oficial Mexicana se realiza a través de inspección por parte de la persona acreditada y aprobada, independientemente que puede ser corroborado por cualquier dependencia.

Este requisito se cumple a través de la inspección previamente aprobada por la DGN, los cuales, en su caso, deben por lo menos incluir una huella cromatográfica que permita identificar el Ambar de Chiapas y garantizar la integridad del producto.

9. Métodos de prueba

La verificación del cumplimiento de las especificaciones que se establecen en este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, se realiza aplicando los métodos de prueba que se describen a continuación:

9.1 Del producto

9.1.1 Análisis Termogravimétrico (TGA)

a) Aparatos y equipo

Equipo termogravimétrico.

Equipo de análisis térmico

El equipo debe estar calibrado conforme a las recomendaciones del fabricante.

b) Procedimiento

Utilizar un flujo de 100 cm^3/min de nitrógeno para generar una atmósfera inerte y como gas de purga durante el transcurso de la prueba.

Pesar entre 10 y 18 mg de la muestra en el mismo equipo, previamente tarado o ajustado a cero, utilizar una velocidad de calentamiento de 10°C/min hasta 615°C.

Se realizan dos experimentos, uno con un trozo del Ambar y otro con trozos pequeños del material.

c) Expresión de resultados:

Peso inicial del trozo de ámbar	12,2610 mg.
Peso inicial de trozos pequeños de material	16,4130 mg.

El Ambar pierde casi totalmente su peso al llegar la temperatura máxima, en ambos casos. Lo importante es hacer notar que el Ambar no tiene agua o humedad en su estructura y en la superficie, ya que no se observa ningún cambio en el peso al llegar la muestra a los 100°C y tampoco se genera un volátil o solvente que pudiera contener la muestra, se empieza a descomponer en forma normal para los compuestos orgánicos en general.

Las muestras se empiezan a descomponer a los 218°C, tienen un máximo en la descomposición a los 397°C y se empiezan a descomponer totalmente a los 479°C,

9.1.2 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)

a) Aparatos y equipo

Aparato para calorimetría.
Equipo de análisis térmico.
Portamuestras hermético de aluminio.
Portamuestras hermético vacío.

El equipo deberá estar calibrado conforme a las recomendaciones del fabricante.

b) Procedimiento

Se utiliza un flujo de nitrógeno de 100 cm^3/min para ser el gas de arrastre y generar una atmósfera inerte en el interior del horno de calentamiento.

Pesar entre 5 y 8 mg de muestra en el portamuestras hermético de aluminio para el análisis y un portamuestras hermético vacío para utilizarlo como referencia durante la prueba.

Se ajusta al inicio de la prueba y después de 10 minutos de permanencia en el portamuestras hermético de aluminio para equilibrar térmicamente los materiales, el flujo de calor a cero y se inicia la prueba.

La velocidad de calentamiento es de 10°C/min, hasta 315°C.

c) Expresión de resultados

Se comparan dos experimentos como en el caso anterior para comparar polvo y trozo de material.

En el caso del polvo éste debe ser más o menos homogéneo y fino para que exista un buen contacto térmico entre la muestra y el portamuestras. En el trozo de Ambar se debe buscar una muestra que tenga una superficie plana que esté en contacto directo con el portamuestra para que exista un buen contacto térmico.

Ambos experimentos muestran resultados comparables. Lo que resulta no es punto de fusión, sino el punto de reblandecimiento del Ambar, entre los 150 y 162°C, ya que éste es un material amorfo por lo que no representa un punto de fusión bien definido.

Se muestra por medio de calorimetría diferencial de barrido que la temperatura de descomposición del Ambar se inicia a los 270°C.

9.1.3 Infrarrojo (IR)

a) Aparatos y equipo

- Espectrofotómetro de infrarrojo

El equipo se calibra automáticamente cuando se enciende y sólo se verifica el patrón de ajuste.

b) Procedimiento

Pesar alrededor de 3 mg de muestra y se mezcla y muele perfectamente a 300 mg de bromuro de potasio (KBr) que servirá de soporte inerte para sostener la muestra para realizar el experimento, se prepara una pastilla de 5 mm de diámetro, la pastilla debe de ser transparente, si esto no ocurre se debe meter a secar en una estufa por 3 h a 80°C el KBr para que esté perfectamente seco y volver a preparar la muestra.

c) Expresión de resultados

Se obtiene el espectro característico y propio del Ambar, el cual concuerda con el espectro de otros tipos de Ambar reportados en la literatura. Este espectro servirá como estándar o referencia para el Ambar de Chiapas.

9.1.4 Relación sussinita/retinita, succínico/retinol

a) Para esta prueba nos vamos a basar en los espectros de infrarrojo característicos del Ambar, ácido succínico y retinol.

b) Procedimiento

Preparar las muestras en forma similar al inciso 9.1.3 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, tratando de que el peso de las muestras sea muy similar o igual, para que se tenga la misma concentración en peso de muestra con respecto a KBr. Una vez obtenidos los espectros se procede al análisis.

Seleccionar dos bandas de absorción comunes al ácido succínico y al Ambar, y se calcula el área bajo la banda de absorción para la pareja Ambar-ácido succínico, las bandas seleccionadas son: 2952 cm^{-1} y 1461 cm^{-1}.

Con el retinol en forma similar, las bandas seleccionadas son 1461 cm^{-1} y 1632 $cm^{-1.}$

c) Expresión de resultados

Con estos resultados se obtienen las relaciones siguientes:

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

donde:

Ks es la relación ácido succínico.
Ka es la relación ámbar.
Kr es la relación de retinol
S es el ácido succínico.
R es el retinol.

Los %R y %S no necesariamente deben sumar 100% ya que se están midiendo concentraciones relativas de ácido succínico y retinol, así como succinato y retinol que pudiera presentar el Ambar.

Al efectuar los cálculos y efectuar las operaciones se tiene: 0,19 ácido succínico/retinol.

9.1.5. Reacción de solventes.

a) Material

- Acetona.
- Ambar de 3 mg a 9 mg.
- Solvente.

b) Procedimiento

Se seleccionan pequeños trozos de Ambar, con pesos entre 3 mg y 9 mg. Se ponen en un poco de acetona para que las muestras se les quite la grasa o material que no sea de la muestra, polvo o restos de ámbar en polvo que pudiera estar adherido al trozo de ámbar que se utilizará en el análisis.

En la medida de lo posible, las muestras deben estar libres de impurezas internas y fracturas para evitar que las mismas se rompan al efectuar esta prueba, sobre todo al calentar el solvente.

Una vez limpias se dejan secar y se pesa cada una de ellas y se ponen en contacto con el solvente respectivo por 24 h, una vez transcurrido este tiempo, se sacan y se enjuagan con acetona para eliminar rastros que pudieran dejar los solventes en la muestra y se ponen a secar, se pesan otra vez y se calcula el porcentaje en peso perdido por la muestra mediante la relación para el porcentaje de solubilidad:

c) Resultados

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

en donde:

Pm es el peso original de la muestra.
Pme es el peso de la muestra posterior a la extracción.
%Sol es el porcentaje de solubilidad en solvente.

Estos resultados son a temperatura ambiente.

La prueba se efectúa en forma similar al punto anterior, sólo que en este caso, se calientan las muestras en baño María o de aceite según el solvente por espacio de 20 minutos, para intentar disolverlas.

Es muy importante hacer notar que se debe trabajar con extremo cuidado y dependiendo del solvente, seleccionar el baño adecuado de calentamiento, si la ebullición con algún disolvente es violenta se debe bajar la temperatura del baño, para que ésta sea más homogénea.

En el caso de trabajar con éter sulfúrico, se recomienda no hacer esta prueba. Se debe efectuar la prueba dentro de una campana de extracción y con una pantalla de protección entre la parrilla y el baño térmico con el analista.

Una vez terminado el tiempo se sacan los tubos y se dejan enfriar en otro de agua fría y como en el punto anterior, se sacan las muestras, se enjuagan con acetona, se dejan secar y se pesan otra vez, se calcula ahora el porcentaje de solubilidad a otra temperatura, utilizando la misma fórmula.

Tabla 2.- Reacción de solventes

Solvente	Temperatura ambiente	Temperatura en ebullición %
Acetato de etilo	Insoluble	I,60
Cloroformo	Insoluble	18,75
Metanol	Insoluble	2,60
Tetrahidrofurano	Insoluble	19,01
Acetona	Insoluble	11,80
Tolueno	Insoluble	9,42
Metil etil cetona	Insoluble	6,17
Benceno	Insoluble	4,9
Etanol	Insoluble	0,5
Tetracloruro de carbono	Insoluble	18,71
KOH/etanol	Insoluble	Insoluble
Eter sulfúrico	Insoluble	--
Petróleo	Insoluble	Insoluble

1 butanol	Insoluble	Insoluble
Disulfuro de carbono	Insoluble	18,33
Isopropanol	Insoluble	Insoluble
Agua	Insoluble	Insoluble

La tabla 2 da información de la poca solubilidad del Ambar con estos solventes.

Es recomendable que la prueba se haga a temperatura ambiente durante 24 h, para evitar los riesgos que se generan al trabajar con disolventes calientes ya que en general algunos de ellos pueden ser tóxicos, muy inflamables y/o formar peróxidos en general.

9.1.6. Gravedad específica (GE)

a) Aparatos y equipo

- Picnómetro.
- Agua destilada.

Esta prueba se efectúa por el método del picnómetro utilizando agua destilada como líquido de referencia a 23°C + 2°C.

b) Se pesa el picnómetro vacío, limpio y seco, se pesa el picnómetro con agua y con la muestra que previamente se debe de pesar, todo esto a 23°C + 2°C.

c) Resultados:

Los resultados se expresan en g/cm^3 a 23°C + 2°C.

Resultado: 1,08 g/cc a 23°C + 2°C.

9.1.7 Análisis Dieléctrico (DEA)

a) Aparatos y equipo

Equipo para análisis dieléctrico.

El equipo se calibra conforme a las recomendaciones del fabricante.

b) Procedimiento

Se prepara una muestra de 1 cm^2 con un espesor de 1 mm. Se utilizan sensores de placas paralelas para efectuar la prueba.

La muestra se coloca en el equipo y se cierra el horno y el equipo, se da un flujo de nitrógeno de 100 cm^3/min durante el transcurso de la prueba.

Para evitar que la muestra contenga trazas de humedad, se le proporciona a la muestra un precalentamiento dentro del equipo hasta 70°C y se deja isotérmico por 10 minutos, se deja enfriar y se inicia la prueba.

La velocidad de calentamiento es de 0,5°C/min hasta 250°C, se grafica la constante dieléctrica del Ambar a una frecuencia de 1 Hz, con respecto a la temperatura.

Resultado:

Se observa que la constante dieléctrica del material no cambia dentro de los límites de temperatura en los cuales se trabaja

$$^{É}=4,675$$

El resultado es medido a 1 Hz de frecuencia y a una temperatura 25°C y 225°C.

9.1.8 Conductividad eléctrica

a) Aparatos y equipo

Electrómetro/Multímetro.

b) Procedimiento

Se prepara una muestra rectangular de (12 x 14) mm y con un espesor de 8 mm que tenga sus caras paralelas y lisas, libre de impurezas y burbujas. Se mide la resistencia eléctrica dejando un claro entre las puntas de prueba de 10 mm para efectuar la medición, o sea que se tiene un claro de medición de 1 cm x 1 cm.

c) Resultados

Se mide la resistencia eléctrica de la muestra en el electrómetro.

Con este valor se calcula el valor de la resistividad y ésta se convierte en conductividad eléctrica, por medio de la ecuación:

$$R=^{P}A/L$$

en donde:

R es la resistencia.

p es la resistividad.

A es el área transversal.

L es la distancia entre las puntas de prueba.

La conductividad eléctrica es el inverso de la resistividad

La conductividad eléctrica del Ambar (O) es:

$$O = 1{,}744 \times 10^{-9} \text{ ohm/cm}$$

Esto quiere decir que el Ambar es un material muy aislante.

9.1.9 Comportamiento con la luz ultravioleta

a) Aparatos y equipo

Lámpara de ultravioleta con longitud de onda corta y larga.

b) Procedimiento

Se colocan las muestras sobre una hoja de papel blanco como se tengan, en un cuarto oscuro y se ve el reflejo de las muestras al incidir sobre ellas la luz ultravioleta, tanto de onda larga (366 nm) como la de onda corta (254 nm).

Las muestras se excitan al interaccionar con la luz y se ve el color en el cual emiten, para las dos longitudes de onda.

c) Resultados

Las muestras no presentan cambio aparente al incidir sobre la muestra la luz con longitud de onda corta o si la presenta es muy pequeña.

Sin embargo, al incidir sobre las muestras la luz ultravioleta de onda larga, se observa que se excitan a las moléculas del Ambar, lo cual provoca un cambio en el color, de las muestras, emiten con un color azul blanquecino. Este resultado es un antecedente para determinar la fluorescencia, que es el siguiente análisis.

Cabe hacer una aclaración que el Ambar emite en el azul, como se dijo anteriormente, pero las muestras sin cortar ni pulir no emiten color, en la literatura se menciona que el Ambar puede generar en su superficie una capa de material oxidado, esta capa no es capaz de excitarse o bien no permite que la muestra en su interior se excite con la radiación ultravioleta, quizá también debido a la presencia de material como el polvo, restos de tierra o piedras que estén adheridas al Ambar.

9.1.10 Fluorescencia

a) Aparatos y equipo

- Fluorómetro.

Los resultados obtenidos en el inciso 9.1.9 se utilizan como análisis preliminar para la fluorescencia.

b) Procedimiento

Se corta una muestra y se forma una pieza que tenga dos caras paralelas de más o menos 2 mm de espesor, las caras deberán estar libres de impurezas y cortes o defectos del Ambar, para evitar distorsión de los resultados, el tamaño no es muy importante pero se recomienda una pieza de 5 cm^2 o bien alargada, no importa que ésta no sea geométrica, lo importante es que se pueda manipular y colocar en el portamuestras del equipo.

c) Resultados

Con el resultado del experimento anterior, se selecciona la longitud de onda de excitación a 366 nm en el monocromador de excitación y se obtiene un máximo de emisión para la muestra a esa longitud de onda de excitación. Ahora se fija la longitud de onda del máximo de emisión de la muestra y se obtiene el espectro de excitación de la muestra que es de 352 nm. Una vez conocido el máximo del espectro de excitación, se fija esta longitud de onda en el monocromador de excitación y se obtiene el espectro de emisión de la muestra, en el cual se obtiene su máximo de emisión, que es de 463 nm y que corresponde al color azul, lo cual concuerda con el estudio anterior.

Para esta prueba, el máximo de emisión del Ambar es de 463 nm.

Fluorescencia = 463 nm (azul)

9.1.11 Color

a) Aparatos y equipo

- Colorímetro.

Se realiza un análisis comparativo.

b) Procedimientos

Con el equipo se puede determinar el color. Se tiene el inconveniente que se maneja un intervalo muy pequeño de diferencias de color entre cada una de las muestras y para su determinación se requieren muestras muy delgadas, lo cual dificulta su preparación. En este caso, se efectúa la medición en el color amarillo de Ambar, por lo que compara el color del Ambar con los colores de una “Pantone, color fórmula guide”, en la cual se muestran los diferentes tonos de amarillo a los cuales el Ambar se parece.

c) Resultados

Pantone 100 C
Pantone 101 C
Pantone 106 C
Pantone 107 C
Pantone 120 C
Pantone 102 C
Pantone Yellow U
Pantone 114 U

Los tonos de amarillo son muy parecidos, el Ambar presenta la brillantez del color que es algo que depende del pulido de la superficie de comparación y de la naturaleza propia del Ambar.

En una muestra se tiene transparente la parte central de la misma, sin color quizá esto dependa de la pureza de la resina que le dio origen, del lugar donde se encontró o bien de la edad que pueda tener la muestra.

Pantone 471 C
Pantone 484 C

Estos colores son rojizos, parece que en la superficie del material se deposita una película de resina oxidada que le confiere a la muestra este color ya que hacia el centro de la muestra el color es amarillo similar a alguno de los casos anteriores.

En algunas se producen vetas de color rojo que se dirigen hacia dentro del Ambar pero este color se desvanece en algunos casos y en otros no.

En el caso de la muestra marcada como impuro azul, el color se debe a la superficie externa de la pieza, en su parte interna y superficial no presenta este color.

9.1.12 Transparencia.

a) Aparatos y equipo

Espectro Fotómetro Ultravioleta Visible (UV-VIS).

b) Procedimiento

Las muestras se preparan en forma de láminas de 1 mm de espesor y se miden en la región visible del equipo, el equipo nos indica directamente el porcentaje de transmisión de luz que deja pasar la muestra, un promedio de estos valores es el valor de la transparencia del Ambar.

c) Resultados

El resultado se calcula sacando un promedio del valor de transmitancia (T) de 600 nm a 1 100 nm.

Valor promedio curva A %T = 95,7%

Valor promedio curva B %T = 95,4%

Estos resultados están directamente relacionados con el espesor de la muestra, el pulido de las superficies y el color de las mismas, la diferencia entre la curva A y la curva B, es únicamente debida al color de la muestra, ya que el espesor y el pulido de las muestras tiene en el mismo tratamiento.

9.1.13 Indice de refracción

a) Aparatos y equipo

- Refractómetro.

  La prueba se realiza por análisis comparativo.

b) Procedimiento

La medición del índice de refracción del Ambar se efectúa por medio indirecto.

El método indirecto consiste en poner en contacto una pequeña muestra de 1 mm de espesor y perfectamente pulidas sus caras, en lo posible libre de impurezas, con disolventes de índice de refracción conocido, cuando el índice del Ambar coincide con el del solvente, el Ambar parece que desaparece en el solvente, el índice de refracción del Ambar corresponde al del solvente.

Los solventes que presentan mejor resultado son piridina,-O-diclorobenceno y 1, 2, 4, triclorobenceno, la prueba se efectúa a 20°C.

Al colocar la muestra de Ambar en el O-diclorobenceno, la pieza desaparece en la superficie del solvente, ya que en virtud de que la densidad del solvente es mayor que la del Ambar, éste flota.

c) Resultado

N = 1,552

Donde:

N es el valor del índice de refracción del O-diclorobenceno.

Es importante aclarar que el Ambar no se disuelve en estos solventes a temperatura ambiente después de 24 h de estar en contacto.

9.1.14 Dureza

a) Aparatos y equipo

- Durómetro tipo Shore D.

- Microdurómetro.

b) Procedimiento

Se prepara una muestra que tenga dos caras paralelas de más o menos 5 mm de espesor y que esté perfectamente pulida para poder efectuar la prueba.

Para determinar la dureza usando el microdurómetro, las condiciones de la prueba son, tiempo de respuesta de 30 s, velocidad de la carga 50 m/s. Para 10 g y 5 g de carga.

Se prepara una muestra similar a la utilizada para la dureza Shore D del caso anterior.

c) Resultado

La dureza Shore D del Ambar es de 85,4 unidades.

Usando el microdurómetro se obtiene 30,48 g/mm.

9.1.15 Conductividad térmica.

a) Aparatos y equipo

- Arreglo de termopares.
- Sistema de calentamiento.

b) Procedimiento

La medición se lleva a cabo a través del arreglo de termopares y el sistema de calentamiento con poca sensibilidad, el arreglo se calibró con una muestra de tamaño similar al Ambar, de fibra de vidrio.

c) Resultado

$$K = 0{,}002131 \text{ cal/s.cm.°C}$$

donde:

K es la conductividad térmica.

9.1.16 Coeficiente de dilatación térmica lineal

a) Aparatos y equipo

- Equipo para análisis termomecánico.

El equipo se calibra conforme a las indicaciones y recomendaciones del fabricante.

b) Procedimiento

Se prepara una muestra con dos caras paralelas de 6 mm de espesor y de 1 cm^2 de área, deben estar bien pulidas las dos caras paralelas para que la medición sea representativa del Ambar.

La prueba se lleva a cabo con una velocidad de calentamiento de 10°C/min, con un flujo de nitrógeno que sirve como gas de arrastre y de purga de 100 cm^3/min, y con el sensor de medición del coeficiente de dilatación térmica.

b) Resultado

El resultado es de

$$a = 57{,}98 \text{ u/m/°C}$$

donde:

a es el coeficiente de dilatación.

El coeficiente se calcula entre 20°C y 110°C.

9.2 Del proceso de fabricación

9.2.1 Transformación

El proceso de transformación se lleva a cabo en los talleres de los artesanos, los cuales seleccionan las piezas por tamaño, las limpian para después seleccionarlas según la calidad, la cual depende de las fracturas que tengan.

Los mineros ofrecen directamente el ámbar en bruto a los talleres de los artesanos, el cual se vende según el peso de la pieza, los artesanos seleccionan las piezas por tamaño y posteriormente a efecto de retirar la tierra y material ajeno adherido a la resina las sumergen en agua y proceden a limpiarlas, para después seleccionarlas según la calidad, la cual depende de las fracturas que tengan.

Posteriormente se lijan las piezas con lija de agua calibre 80 o 100, con la finalidad de quitarle impurezas pequeñas, para continuar con el proceso de corte en diferentes tamaños dependiendo de la figura que se pretenda realizar; cuando se han clasificado dichas piezas, se les da forma utilizando limas planas o curvas según sea necesario, una vez concluida la figura, se procede a lijar realizándolo con lija de agua utilizando los calibres del 320, 400 o 600 dependiendo la forma de la figura, posteriormente se pule utilizando franela, pasta para pulir plata, y petróleo.

Asimismo, el proceso de tallado del Ambar de Chiapas puede ser manual, de tipo artesanal e industrial, también es importante conocer las características de las inclusiones del ámbar pudiendo con ello decidir los cortes que se habrán de hacer para aprovechar al máximo las piezas, además de reconocer el color sus tonalidades y el peso para decidir su cotización, el método de tallado se verifica visualmente.

9.2.2 Expresión de resultados

El ámbar debe presentar sus características en el tallado, facetado y engarzado en diferentes materiales, ya sea en oro, plata o algún otro metal, clasificar la calidad que le corresponde basándose en el color dentro de los términos, fino, muy bueno, bueno y ordinario pueden darse también en la forma de talla de cada artesano y en los diseños de los joyeros, tomando en cuenta el color de las piezas del ámbar.

El proceso de transformación se lleva a cabo en los talleres de los artesanos, los cuales seleccionan las piezas por tamaño, las limpian para después seleccionarlas según la calidad, la cual depende de las fracturas que tengan. Posteriormente se lijan las piezas con lija de agua calibre 80 o 100, con la finalidad de quitarle impurezas pequeñas, para continuar con el proceso de corte en diferentes tamaños dependiendo de la figura que se pretenda realizar; cuando se han clasificado dichas piezas, se les da forma utilizando limas planas o curvas según sea necesario, una vez concluida la figura, se procede a lijar realizándolo con lija de agua utilizando los calibres del 320, 400 o 600 dependiendo la forma de la figura, posteriormente se pule utilizando franela, pasta para pulir plata, (brasso) y petróleo.

Asimismo, el proceso de tallado del Ambar de Chiapas puede ser manual, de tipo artesanal e industrial, también es importante conocer las características de las inclusiones del ámbar pudiendo con ello decidir los cortes que se habrán de hacer para aprovechar al máximo las piezas, además de reconocer el color sus tonalidades y el peso para decidir su cotización, el método de tallado se verifica visualmente.

9.3 Comercialización

Se permite la venta a granel sin etiquetar, siempre y cuando ésta se realice dentro de la zona protegida por la declaración.

Fuera del área comprendida en la Denominación de Origen, deberá cumplir con lo precisado en los numerales 9.3.1 y 9.3.2.

9.3.1 En una etiqueta llevará impresa el logotipo NOM conforme a las disposiciones de la norma oficial NOM-106-SCFI-2000 (ver capítulo 3. Referencias).

9.3.2 El productor autorizado por la Ley de la Propiedad Industrial debe utilizar la denominación de origen del Ambar de Chiapas y debe satisfacer los lineamientos establecidos por ley en este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, particularmente los siguientes:

a) Estar al corriente en los trámites a que se refiere el capítulo 10 de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, y

b) Contar en todo momento con un certificado de cumplimiento con esta NOM, expedido por una persona acreditada y aprobada.

En ningún momento las etiquetas deben dañar o menoscabar la imagen del Ambar de Chiapas como producto nacional.

9.3.3 Presunción de incumplimiento

Si cualquier dependencia o una persona acreditada y aprobada detecta el incumplimiento de cualquier disposición contenida en este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, particularmente a lo señalado en el presente capítulo, por parte de un artesano o trabajador del ámbar, se presume la comisión de una infracción.

Lo anterior, deja a salvo las facultades que conforme a la ley, a la Ley Federal de Procedimiento administrativo y a otras disposiciones legales, posean en materia de inspección las dependencias.

10. Trámites ante dependencias

El incumplimiento de cualquier trámite necesario para obtener las autorizaciones para extraer laborar y/o comercializar el Ambar de Chiapas, que hayan sido aprobadas por la DGN o el IMPI, en el ámbito de sus respectivas competencias, se considera violatorio de las disposiciones de esta NOM.

11. Control de calidad

De conformidad con el artículo 56 de la ley, los mineros y artesanos del ámbar deben mantener sistemas de control de calidad compatibles con las normas aplicables y las buenas prácticas de la extracción y formato de piezas. Asimismo, deben verificar sistemáticamente las especificaciones contenidas en esta NOM, utilizando equipo suficiente y adecuado, así como métodos de prueba apropiados, llevando un control estadístico de la producción que objetivamente demuestre el cumplimiento de dichas especificaciones.

12. Información comercial

12.1 Marcado y etiquetado

Cada Ambar debe ostentar una etiqueta o marbete en forma destacada y legible con la siguiente información en idioma español:

a) La palabra AMBAR.

b) Tipo al que pertenece conforme al capítulo 5 de esta NOM.

c) Nombre o razón social de los artesanos del ámbar o de los lugares autorizados (región del Ambar según consta en la Denominación de Origen).

d) Domicilio del minero o del artesano del ámbar.

e) Marca registrada.

f) Las leyendas “Hecho en México”, “Manufacturado en México”, “Producto de México”, u otros análogos; así como “Empacado de origen”.

g) Contraseña oficial, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-106-SCFI (ver capítulo 3. Referencias).

h) Otra información comercial exigida por otras disposiciones legales aplicables al Ambar de Chiapas.

12.2 Presentación de la información.

12.2.1 Debe aparecer en la etiqueta o marbete cuando menos, la información señalada en los literales a), b), c), d) y g), del inciso 12.1 del presente Proyecto de NOM. El resto de la información a que se refiere este inciso debe aparecer y puede incorporarse en cualquier otra parte del envase.

12.2.2 Para el producto de exportación, deben aparecer en la superficie principal de exhibición, cuando menos la información señalada en los literales a), b), y g), del inciso 12.1 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana. La información contenida en los literales c), h), e), del inciso 12.1 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, debe aparecer y pueden incorporarse en cualquier otra parte del envase. La información contenida en los literales b), y h), del inciso 12.1 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana puede ser objeto de traducción a otro idioma.

13. Evaluación de la conformidad

La evaluación de la conformidad del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicado en el **Diario Oficial de la Federación** como norma definitiva, se llevará a cabo por personas acreditadas y aprobadas conforme a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.

14. Vigilancia

La vigilancia del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicado en el **Diario Oficial de la Federación** como norma definitiva, estará a cargo de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus respectivas atribuciones.

15. Bibliografía

15.1 Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el
1 de julio de 1992.

15.2 Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 2 de agosto de 1994.

15.3 Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 4 de agosto de 1994.

15.4 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el **Diario Oficial de
la Federación** el 14 de enero de 1999.

16. Concordancia con normas internacionales

El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana no es equivalente con ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su elaboración.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicado como norma definitiva, entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el **Diario Oficial de la Federación** del aviso por el cual la Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, dé a conocer la acreditación del organismo de evaluación de la conformidad del producto objeto de esta NOM, la cual ya cuenta con la Declaratoria general de protección a la Denominación de Origen del "Ambar de Chiapas" publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el miércoles 15 de noviembre de 2000.

México, D.F., a 18 de diciembre de 2002.- El Director General de Normas, **Miguel Aguilar Romo**.- Rúbrica.

CEDULAS del Patrón Nacional de Medición.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

PATRON NACIONAL DE MEDICION.

La Secretaría de Economía por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 24, 25 fracciones IV, VII y VIII de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 18 y 19 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 12 fracciones X y XI, y 19 fracciones VII, XIII, XVI y XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, hace del conocimiento del público las cédulas que describen las características de magnitud, unidades, definición, alcance e incertidumbres de los Patrones Nacionales de Medición que han sido autorizados por esta dependencia y desarrollados por el Centro Nacional de Metrología:

PATRON NACIONAL DE MEDICION

I) Intensidad de corriente continua (c.c.)

Descripción:	Mediante la medición de la caída de tensión a través de un resistor con resistencia conocida, y aplicando la Ley de Ohm se obtiene el valor de la intensidad de corriente continua (c.c.). El patrón nacional de intensidad de corriente continua está formado por un resistor patrón de 10 kΩ, un derivador de corriente y un medidor de tensión en corriente continua, cuyos valores de medición son trazables a los patrones nacionales correspondientes.
Magnitud:	intensidad de corriente continua
Unidad:	ampere (A)
Definición:	La intensidad de corriente continua es la unidad de carga eléctrica que fluye por un conductor por unidad de tiempo. El patrón nacional de intensidad de corriente continua se realiza mediante la Ley de Ohm que relaciona la caída de tensión en un resistor con resistencia conocida $$I = \frac{V}{R}$$
Alcance:	100 µA a 1 A
Incertidumbre expandida: **(k=2)**	### 2 µA/A a ### 7 µA/A

II) Sistema nacional primario de gravimetría para la medición de la cantidad de sustancia

Descripción:	El Sistema Primario de Gravimetría para la Medición de la Cantidad de Sustancia se compone esencialmente de una balanza analítica con 0,01, 0,02 y 0,05 mg de resolución en la cual se mide la masa y mediante ésta se calcula el contenido de cantidad de sustancia de un analito presente en un precipitado insoluble, obtenido a partir de una reacción o serie de reacciones químicas. Las etapas involucradas en la medición son: pesaje de la muestra que contiene al analito de interés en balanza analítica, posteriormente la muestra se pone en disolución a través de un proceso de digestión o fusión, seguido de un proceso de transformación química del analito en solución a un producto insoluble mediante una reacción o reacciones químicas conocidas, se realiza la separación por filtración y se lleva a calcinación o secado en crisoles de platino o de vidrio sinterizado empleando una mufla o estufa a la temperatura de transformación del analito de interés; finalmente el producto insoluble se pesa; el cálculo del contenido de cantidad de sustancia se obtiene empleando la cantidad de sustancia del producto insoluble y la masa de muestra medida.
Magnitud:	cantidad de sustancia de sodio o de silicio
Unidad:	mmol/kg

Definición:	El contenido de cantidad de sustancia, expresada en mmol kg^{-1}, se mide mediante la ecuación que a continuación se enuncia: $$k(E,x) = \frac{b\,n(S,x)}{a\,m_x}$$ Donde, k(E,x) = es el contenido de la cantidad de sustancia de sodio (Na) o silicio (Si), en la matriz acuosa (x). n (S,x) = es la cantidad de sustancia de producto insoluble Na_2SO_4 o SiO_2 (S) que contienen el Na o Si en la matriz acuosa (x). m_X = es la cantidad de disolución espectrométrica medida en la matriz (x). *a* y *b* = enteros estequiométricos, los cuales definen la relación entre la cantidad de sustancia de sodio y silicio a los productos insolubles de Na_2SO_4 y SiO_2 a ser pesados.
Alcance:	Contenido de cantidad de sustancia de sodio (Na) y silicio (Si) en muestras de matriz acuosa de (40 a 400) mmol kg^{-1}.
Incertidumbre expandida relativa de n: (k=2)	(0,6)% de incertidumbre expandida relativa.

III) Ultrasonido

Descripción:	El patrón nacional de ultrasonido está integrado por un sistema de posicionamiento (que consta de dos puentes mecánicos de 5 grados de libertad cada uno), un sistema de control y adquisición de datos y diversos hidrófonos, amplificadores e instrumentos acondicionadores, utilizados para la caracterización de campos ultrasónicos propagándose en agua.
Magnitud:	presión acústica
Unidad:	pascal (Pa)
Definición:	El pascal es la fuerza ejercida en una unidad de superficie normal al frente de onda. También puede ser expresado en decibeles (escala logarítmica), dB, referidos a 1 μPa.
Alcance:	90 dB a 215 dB re 1 μPa (presión acústica) en el intervalo de 20 kHz a 100 kHz y 1 MHz a 20 MHz (frecuencia) 0 m a 1 m (distancia emisor-receptor)
Incertidumbre expandida: **(k=2)**	U = ± (1,6 a 2,4) dB re 1 μPa @ 20 kHz a 100 kHz U = ± 1,1 dB re 1 μPa @ 1 MHz a 20 MHz

IV) Sistema nacional primario para la medición de conductividad electrolítica

Descripción:	El Sistema Nacional Primario para la Medición de Conductividad Electrolítica se compone, esencialmente, de una celda de medición; un puente de medición de impedancias de alta exactitud; un termómetro con dos sensores tipo resistencia de platino (RTD); y un baño termostático. La solución cuya conductividad se desea medir está contenida en la celda (Aprox. 160 ml). Empleando el puente de medición de impedancias, la resistencia electrolítica de la solución se mide a dos separaciones entre los electrodos de la celda. Ya que las características geométricas de ésta son bien conocidas, la conductividad electrolítica de la solución puede calcularse de modo absoluto. Este valor es posteriormente corregido para compensar cualquier desviación de la temperatura de referencia (25°C).
Magnitud:	conductividad electrolítica
Unidad:	µS/cm
Definición:	El modelo matemático en el cual se basa la medición es el siguiente: $$k_c = \frac{\Delta l}{(R_2 - R_1)\pi \cdot r^2}\left[1 - \Theta (T_0 - 25)\right]$$ Donde: k_c : Conductividad electrolítica a 25°C R_2: Resistencia eléctrica a una separación entre electrodos $l + \Delta l$ R_1: Resistencia eléctrica a una separación entre electrodos l r : Radio de la celda T_0: Temperatura de la solución Θ : Coeficiente de corrección por temperatura
Alcance:	Medición de la conductividad electrolítica de soluciones de KCl en matriz acuosa de (147 y 1 408) µS/cm
Incertidumbre expandida: **(k=2)**	0,3% de incertidumbre relativa expandida a un nivel de confianza de 95% aproximadamente.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Las presentes Cédulas de los Patrones Nacionales de Medición entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

SEGUNDO.- Quedan vigentes las Cédulas de los Patrones Nacionales publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** con fechas 18 de agosto de 1997, 30 de noviembre de 1998, 7 de marzo y 29 de septiembre de 2000, 26 de enero, 23 de febrero, 24 de abril, 18 de julio, 10 de diciembre de 2001, 16 de abril y 30 de septiembre de 2002.

México, D.F., a 19 de diciembre de 2002.- El Director General de Normas, **Miguel Aguilar Romo**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NORMA Oficial Mexicana NOM-145/1-SCT3-2001, Que regula los requisitos y especificaciones para el establecimiento y funcionamiento del taller aeronáutico.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

AARON DYCHTER POLTOLAREK, Subsecretario de Transporte y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Aéreo, con fundamento en los artículos 36 fracciones I y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38 fracción II, 40 fracciones I, III y XVI, 41 y 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4, 6 fracción III y 11 antepenúltimo, penúltimo y último párrafos de la Ley de Aviación Civil; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología
y Normalización; 139 al 146 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil; 6 fracción XIII y 18 fracciones XIV, XV y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y demás disposiciones aplicables, y

CONSIDERANDO

Que la Ley de Aviación Civil estipula que para el establecimiento de Talleres Aeronáuticos se requerirá de permiso, el cual podrá otorgarse a personas físicas o morales mexicanas o extranjeras.

Que el Reglamento de la Ley de Aviación Civil introduce la figura del Taller Aeronáutico, como aquella instalación destinada al mantenimiento o la reparación de aeronaves y de sus componentes, que incluyen sus accesorios, sistemas y partes, y también la fabricación o ensamblaje, siempre y cuando se realicen con el fin de dar mantenimiento o para reparar aeronaves en el propio Taller Aeronáutico.

Que el mayor número de las aeronaves que operan en el espacio aéreo mexicano, por el constante desarrollo tecnológico de los sistemas que utilizan, exige el cumplimiento de disposiciones que refuercen la calidad en las tareas de mantenimiento, las cuales se centran en el Taller Aeronáutico.

Que es de vital importancia dictar los requerimientos y especificaciones para el establecimiento y funcionamiento de los Talleres Aeronáuticos, con la finalidad de asegurar que los trabajos de mantenimiento y reparación; así como de fabricación o ensamblaje (para dar mantenimiento y/o reparación) a las aeronaves, se realicen conforme a los lineamientos establecidos en la Ley de Aviación Civil y su Reglamento, así como en los procedimientos establecidos por las entidades responsables del diseño de tipo de las aeronaves, accesorios y/o componentes, y avalados por la Autoridad Aeronáutica, ello con la finalidad de proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios.

Que la Ley de Aviación Civil señala que la navegación civil en el espacio aéreo sobre territorio nacional, se rige además de lo previsto en dicha ley, por los tratados en los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte, siendo el caso que México es signatario del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, celebrado en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, en 1944, en el cual se norma la habilitación
y funcionamiento de Talleres Aeronáuticos.

Que habiéndose dado cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, para la emisión de Normas Oficiales Mexicanas, con fecha 28 de septiembre de 2000, se publicó en el **Diario Oficial de la Federación**, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana
PROY-NOM-145/1-SCT3-2000, Que regula los requisitos y especificaciones para el establecimiento y funcionamiento del Taller Aeronáutico.

Que durante el plazo de 60 días naturales a que hace referencia la fracción I del artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Manifestación de Impacto Regulatorio a que aluden los artículos 45 de la ley mencionada y 32 de su Reglamento, estuvo a disposición del público para su consulta.

Que en el plazo señalado, los interesados presentaron sus comentarios al Proyecto de Norma Oficial Mexicana de referencia, los cuales fueron analizados en el seno del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Aéreo, dándose respuesta a los mismos a través del **Diario Oficial de la Federación** el 31 de agosto de 2001, integrándose a la Norma Oficial Mexicana, las observaciones procedentes, y previas algunas adecuaciones de forma, he tenido a bien expedir la siguiente:

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-145/1-SCT3-2001, QUE REGULA LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL TALLER AERONAUTICO

INDICE

1. Objetivo y campo de aplicación

2. Definiciones y abreviaturas

3. Disposiciones generales

4. Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico

5. Clasificación de Talleres Aeronáuticos

6. Sistema de garantía de calidad

7. Solicitud de permiso

8. Cambios en las especificaciones de operación

9. Responsable del Taller Aeronáutico

10. Personal

11. Instalaciones, equipos y herramientas

12. Operación del Taller Aeronáutico

13. Talleres Aeronáuticos con la modalidad de servicios a terceros

14. Funciones y obligaciones del permisionario

15. Limitaciones del permiso

16. Tareas del permisionario

17. Reporte de las condiciones defectuosas o de no aeronavegabilidad

18. Requisitos para Talleres Aeronáuticos extranjeros

19. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas tomadas como base para su elaboración

20. Bibliografía

21. Observancia de esta Norma

22. De la evaluación de la conformidad

23. Sanciones

24. Vigencia

1. Objetivo y campo de aplicación

El objetivo de la presente Norma Oficial Mexicana, es regular los requisitos y especificaciones para el establecimiento y funcionamiento de los Talleres Aeronáuticos, por lo tanto, su campo de aplicación está representado por aquellos solicitantes que pretendan establecer y operar un Taller Aeronáutico, y por todos los permisionarios, personal técnico aeronáutico y responsables de Talleres Aeronáuticos que se mencionan en la presente Norma Oficial Mexicana.

2. Definiciones y abreviaturas

Para los efectos de la presente Norma Oficial Mexicana, se consideran las siguientes definiciones y abreviaturas:

2.1. Aeronave: Cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio aéreo con personas, carga o correo.

2.2. Aeronavegabilidad: Condición en la que una aeronave, sus componentes y/o accesorios, cumplen con las especificaciones de diseño del certificado de tipo, suplementos y otras aprobaciones de modificaciones menores y, por lo tanto, determina que dicha aeronave, sus componentes y/o accesorios, operan de una manera segura para cumplir con el propósito para el cual fueron diseñados.

2.3. Actuación humana: Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas.

2.4. Alteración o Modificación: Sustituir alguna parte de una aeronave mediante el reemplazo de una unidad de equipamiento, por otra de diferente tipo que no sea parte del diseño de tipo de la aeronave.

2.5. Alteración mayor o Modificación mayor: Alteración o modificación no indicada en las especificaciones del certificado de tipo de una aeronave, planeador, motor, hélice, componente y/o accesorio, según aplique, que puede afectar significativamente su peso, equilibrio, resistencia estructural, rendimientos, funcionamiento de la planta motopropulsora, características de vuelo u otras cualidades que afecten su aeronavegabilidad, o aquella que no se efectúa de acuerdo con prácticas recomendadas o que no puede realizarse mediante operaciones básicas.

2.6. Alteración menor o Modificación menor: Alteración o modificación que no es una alteración mayor.

2.7. Autoridad Aeronáutica: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

2.8. Autoridad de aviación civil: Autoridad rectora de un país extranjero, en materia aeronáutica.

2.9. Certificado de Aeronavegabilidad: Documento oficial que acredita que la aeronave está en condiciones técnicas satisfactorias para realizar operaciones de vuelo.

2.10. Concesionario de transporte aéreo: Sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, a la que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorga una concesión para la explotación del servicio de transporte aéreo de servicio al público nacional regular, y es de pasajeros, carga, correo o una combinación de éstos, está sujeto a rutas nacionales, itinerarios y frecuencias fijos, así como a las tarifas registradas y a los horarios autorizados por la Secretaría.

2.11. ELT: Equipo transmisor localizador de emergencia.

2.12. Garantía de calidad: Todas las actividades planificadas y sistemáticas realizadas dentro del sistema de calidad, que se ha demostrado son necesarias para proporcionar una confianza adecuada de que la entidad cumplirá con los requisitos de calidad.

2.13. hp(s): Caballo(s) de potencia (Horse Power), unidad de medida de potencia en el sistema inglés.

2.14. Información técnica: Toda la información requerida para la actividad aeronáutica sobre diseño, fabricación, armado, mantenimiento, capacitación y operación.

2.15. kg(s).: Kilogramo(s).

2.16. Liberación de mantenimiento o retorno a servicio: Procedimiento mediante el cual se declara en el libro de bitácora de la aeronave o documentos correspondientes, que el trabajo realizado a la aeronave, componente y/o accesorio, cumple con los requisitos técnicos indicados por la entidad responsable del diseño de tipo y/o por la Autoridad Aeronáutica, y que puede regresar a su operación normal.

2.17. Libro de bitácora: Documento oficial que se lleva a bordo de la aeronave, en el cual se lleva un registro de los parámetros operacionales más importantes de la misma, mantenimiento, fallas registradas, antes o durante el vuelo, acciones tomadas al respecto y tiempos de la aeronave.

2.18. Licencia: Documento oficial otorgado por la Autoridad Aeronáutica al personal técnico aeronáutico, necesario para poder ejercer sus funciones, de acuerdo con la clasificación y capacidades

descritos en el mismo.

2.19. Mantenimiento: Cualquier acción o combinación de acciones de inspección, reparación, alteración o corrección de fallas o daños de una aeronave, componente y/o accesorio.

2.20. Mantenimiento correctivo: Acciones requeridas por una aeronave, componente y/o accesorio, para restablecer su condición de operación, ante la ocurrencia de una falla o daño.

2.21. Mantenimiento preventivo: Acciones requeridas en intervalos o sucesos definidos, para evitar o postergar la aparición u ocurrencia de una falla o daño en una aeronave, componente y/o accesorio.

2.22. Operador aéreo: El propietario o poseedor de una aeronave de Estado, de las comprendidas en el artículo 5 fracción II inciso a) de la Ley de Aviación Civil, así como de transporte aéreo privado no comercial, mexicana o extranjera.

2.23. OACI: Organización de Aviación Civil Internacional.

2.24. Permisionario del Taller Aeronáutico: Persona física o moral, mexicana o extranjera, a la cual se le otorga un permiso para establecer un Taller Aeronáutico.

2.25. Permisionario de transporte aéreo: Persona moral o física, en el caso del servicio aéreo privado comercial, nacional o extranjera, a la que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorga un permiso para la realización de sus actividades, pudiendo ser la prestación del servicio de transporte aéreo internacional regular, nacional e internacional no regular y privado comercial.

2.26. Reparación: Acción de mantenimiento a una aeronave, componente y/o accesorio, a fin de restablecer su condición de operación normal.

2.27. Reparación mayor: Reparación que no se puede llevar a cabo con prácticas aceptadas, es decir, aquellas que se encuentran en los manuales de mantenimiento de una aeronave, o que sean realizadas por operaciones elementales, o que si son mal efectuadas pueden afectar apreciablemente el peso, balance, resistencia estructural, rendimientos, operación del motor, características del vuelo u otras cualidades que afecten la aeronavegabilidad de las aeronaves.

2.28. Reparación menor: Aquella reparación que no es mayor.

2.29. Responsable del Taller Aeronáutico: Persona física acreditada por la Autoridad Aeronáutica, responsable de la operación y funcionamiento del Taller Aeronáutico, así como de las actividades de mantenimiento y reparación de aeronaves y sus componentes, conforme a los términos del permiso otorgado por dicha Autoridad, para efectuar las actividades mencionadas.

2.30. Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

2.31. Taller Aeronáutico: Es aquella instalación destinada al mantenimiento y/o reparación de aeronaves y de sus componentes, que incluyen sus accesorios, sistemas y partes, así como a la fabricación o ensamblaje, siempre y cuando se realicen con el fin de dar mantenimiento o para reparar aeronaves en el propio Taller Aeronáutico.

2.32. Unidad de verificación: Persona física o moral que realiza actos de verificación.

2.33. Verificación: La constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de documentos, que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado.

3. Disposiciones generales

3.1. Todo trabajo de reparación y mantenimiento, así como modificación, fabricación o ensamblaje (con el fin de dar mantenimiento y/o reparación), que pretenda efectuarse a las aeronaves con marcas de nacionalidad y matrícula mexicanas, sus componentes y/o accesorios, deberá realizarse en un Taller Aeronáutico, el cual deberá cumplir con lo establecido en la presente Norma Oficial Mexicana.

3.2. Los trabajos de reparación y mantenimiento, así como modificación, fabricación o ensamblaje (con el fin de dar mantenimiento y/o reparación), que pretendan efectuarse a las aeronaves con marcas de nacionalidad y matrícula extranjera, sus componentes y/o accesorios, se llevarán a cabo conforme a las disposiciones establecidas por el país de registro de matrícula de la aeronave o, en su caso, de

acuerdo a los convenios bilaterales celebrados entre México y el país de registro de matrícula de la aeronave.

3.3. Todo trabajo de reparación y mantenimiento, así como modificación, fabricación o ensamblaje (con el fin de dar mantenimiento y/o reparación) a las aeronaves, componentes y/o accesorios que no pueda efectuarse en ningún Taller Aeronáutico en México, se deberá realizar en talleres en el extranjero, de conformidad con los lineamientos que sobre el servicio de mantenimiento y/o reparación de aeronaves y sus componentes en el extranjero, establezca la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

4. Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico

4.1. El solicitante para la emisión de un permiso de Taller Aeronáutico para la reparación y el mantenimiento, así como modificación, fabricación o ensamblaje (con el fin de dar mantenimiento y/o reparación) a aeronaves, sus componentes y/o accesorios, debe proporcionar a la Autoridad Aeronáutica, su Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico, el cual debe concordar con los requisitos descritos en la presente Norma Oficial Mexicana, y contener la información que sobre el contenido del Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico, establezca la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

5. Clasificación de Talleres Aeronáuticos

5.1. Para la modalidad del servicio prestado, los Talleres Aeronáuticos pueden ser de:

5.1.1. Servicio al público y/o

5.1.2. Servicio privado.

5.2. Los Talleres Aeronáuticos, se dividen en tres categorías:

5.2.1. Categoría 1: Fabricación o ensamblaje (con el fin de dar mantenimiento y/o reparación).

5.2.2. Categoría 2: Reparación mayor y alteración mayor.

5.2.3. Categoría 3: Mantenimiento.

5.3. La categoría del Taller Aeronáutico será aplicable a las siguientes especialidades:

5.3.1. Planeadores.

5.3.2. Helicópteros.

5.3.3. Motores.

5.3.4. Hélices.

5.3.5. Radio.

5.3.6. Instrumentos.

5.3.7. Accesorios.

5.3.8. Servicios especializados.

5.3.9. Otros.

5.4. Los Talleres Aeronáuticos en sus diferentes categorías y especialidades, se clasifican por marca, modelo de aeronave y de componente, sobre los cuales puedan realizar los trabajos correspondientes de acuerdo con lo siguiente:

5.4.1. Planeadores.

Clase 1: Aeronaves con un peso máximo de despegue hasta de 3,000 kgs.

Clase 2: Aeronaves con un peso máximo de despegue de más de 3,000 kgs. y hasta 6,000 kgs.

Clase 3: Aeronaves con un peso máximo de despegue de más de 6,000 kgs. y hasta 12,000 kgs.

Clase 4: Aeronaves con un peso máximo de despegue superior a 12,000 kgs.

5.4.2. Helicópteros.

Clase 1: Helicópteros con un peso máximo de despegue hasta 3,000 kgs.

Clase 2: Helicópteros con un peso máximo de despegue superior a 3,000 kgs.

5.4.3. Motores.

Clase 1: Motores alternativos con una potencia de hasta 450 hps (excepto motores radiales).

Clase 2: Motores alternativos con una potencia superior a 450 hps (incluye motores radiales con cualquier potencia).

Clase 3: Motores de Turbina.

5.4.4. Hélices.

Clase 1: Hélices de paso fijo o ajustable en tierra, construidas de madera, metal o construcción compuesta.

Clase 2: Hélices de paso variable.

5.4.5. Radio.

Clase 1: Equipos de radiocomunicación.

Clase 2: Equipos de radionavegación.

Clase 3: Equipos de radar.

5.4.6. Instrumentos.

Clase 1: Instrumentos mecánicos.

Clase 2: Instrumentos giroscópicos.

Clase 3: Instrumentos eléctricos.

Clase 4: Instrumentos electrónicos.

5.4.7. Accesorios.

Clase 1: Accesorios mecánicos: Accesorios mecánicos que dependen para su operación, de la fricción, la energía hidráulica, enlaces mecánicos o presión neumática, incluyendo frenos de rueda de la aeronave, bombas accionadas mecánicamente, carburadores, conjuntos de ruedas de la aeronave, montantes de amortiguadores y mecanismos servo hidráulicos.

Clase 2: Accesorios eléctricos: Accesorios eléctricos que funcionan con energía eléctrica para su operación, y generadores, incluyendo arrancadores, reguladores de voltaje, motores eléctricos, bombas de combustible accionadas eléctricamente, magnetos o accesorios similares.

Clase 3: Accesorios electrónicos: Accesorios electrónicos que funcionan utilizando elementos transistorizados, electrónicos o dispositivos similares, incluyendo controles de sobrecarga, controles de temperatura, de acondicionamiento de aire o controles electrónicos similares.

5.4.8. Servicios especializados.

- Componentes de tren de aterrizaje;
- Dispositivos de flotación (incluye chalecos salvavidas, lanchas y lanchas-tobogán, entre otros);
- Contenedores a presión (tanques de oxígeno, botellas extintoras, entre otros);
- Inspecciones, pruebas y ensayos no destructivos;
- Equipo de emergencia y de supervivencia (toboganes, ELT, botiquines de primeros auxilios, entre otros);
- Palas de rotor;
- Calibración, reparación y/o mantenimiento de equipo y herramienta de precisión;
- Materiales compuestos;
- Maquinado;
- Soldadura;

- Trabajos de fabricación para mantenimiento y/o reparación;
- Pintura de aeronaves, componentes y accesorios, y
- Pesado de aeronaves.

Los Talleres Aeronáuticos que cuenten con esta especialidad, no podrán subcontratar ningún trabajo.

5.4.9. Otros.

Cualquier otra actividad que la Autoridad Aeronáutica considere, de acuerdo a las necesidades y avances tecnológicos de las aeronaves, sus componentes y/o sistemas.

6. Sistema de garantía de calidad

6.1. El sistema de garantía de calidad debe incluirse en el Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico, y deberá cumplir con los requisitos que sobre el contenido del Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico, establezca la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

7. Solicitud de permiso

7.1. Para el establecimiento de Talleres Aeronáuticos, se deberá presentar una solicitud ante la Secretaría, indicándose la categoría y especialidad que se desea incluir en sus especificaciones de operación, de conformidad con el artículo 140 fracción VI del Reglamento de la Ley de Aviación Civil y el numeral 5. de la presente Norma Oficial Mexicana.

7.2. La solicitud deberá estar acompañada con la documentación indicada en el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil.

7.3. Para el cumplimiento del requisito indicado en la fracción IV del artículo 140 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, la calificación técnica del personal técnico aeronáutico a emplear en forma directa o a través de terceros, además de cumplir con los requisitos que para la obtención y revalidación de licencias al personal técnico aeronáutico, establezca la Norma Oficial Mexicana correspondiente, deberá cumplir lo siguiente:

7.3.1. Personal técnico aeronáutico empleado en forma directa.

Se deberá incluir a la relación del personal técnico, los siguientes documentos de cada persona, los cuales, a su vez, deberán cumplir con los requisitos del numeral 10. de la presente Norma Oficial Mexicana:

a) Comprobantes de cursos iniciales y periódicos tomados, y que corresponderán a las especialidades que pretende el solicitante de un permiso del Taller Aeronáutico; estos cursos deberán haber sido tomados por lo menos en el último año, tomando como fecha de referencia la indicada en la solicitud a que se refiere el numeral 7.1.;

b) Copia de las licencias expedidas por la Autoridad Aeronáutica, con la capacidad en la especialidad que el solicitante del permiso del Taller Aeronáutico pretende;

c) El personal técnico que estará designado en las áreas de inspección (denominado también como de control de calidad), deberá tener experiencia en este puesto y en las marcas y modelos de aeronave, componente y/o accesorio que pretende el solicitante del permiso del Taller Aeronáutico, de por lo menos tres años en dicha área, o dos años como técnico en mantenimiento, trabajando en la aeronave componente y/o accesorio de que se trate, y deberá haber completado un curso de instrucción reconocido por la Autoridad Aeronáutica, que le proporcione un grado equivalente de experiencia práctica. En el caso de que el solicitante del permiso del Taller Aeronáutico pretenda realizar el mantenimiento de aeronaves, componentes y/o accesorios, que por el avance tecnológico sean nuevos en el mercado, éste contratará, a personal técnico en la especialidad que pretende y a los asesores necesarios para formar la experiencia de su personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, o bien, le proporcionará al personal técnico aeronáutico a su servicio, un curso de instrucción reconocido por la Autoridad Aeronáutica, que le aporte un grado equivalente de experiencia práctica, y

d) Se deberá demostrar, mediante la verificación que la Autoridad Aeronáutica realice, que el personal asignado a las áreas de producción, para realizar el mantenimiento y reparación, así como modificación, fabricación o ensamblaje (para efectos de mantenimiento y/o reparación), en la marca y modelo de aeronave o componente, ha laborado al menos un periodo de seis meses en los últimos dos años, en el mismo puesto, tomando como fecha de referencia la indicada en la solicitud presentada a la Autoridad Aeronáutica. El personal técnico aeronáutico que no cumpla esta condición, podrá ser contratado únicamente como auxiliar del personal titular que ejecutará los trabajos en el área de producción, por un periodo de 6 meses. Después de este periodo podrá ocupar el puesto que le sea asignado en el área de producción.

7.3.2. Personal técnico aeronáutico empleado a través de terceros.

El solicitante del permiso del Taller Aeronáutico que emplee personal a través de terceros, verificará conjuntamente con la Autoridad Aeronáutica, el cumplimiento de requisitos del numeral 7.3.1. de la presente Norma Oficial Mexicana.

7.4. Para el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 140 fracción VII del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, el solicitante de permiso para establecer un Taller Aeronáutico deberá presentar lo siguiente:

7.4.1. Planos de ubicación del Taller Aeronáutico.

7.4.2. Planos de distribución de las áreas, según aplique, indicando:

(a) Distribución del sistema eléctrico y de iluminación.

(b) Distribución del sistema neumático.

(c) Distribución del sistema hidráulico.

(d) Distribución del sistema de agua.

(e) Distribución del sistema de seguridad industrial y de protección civil.

(f) Distribución de los sistemas de reciclaje y tratamiento de residuos.

La ubicación y distribución de áreas del Taller Aeronáutico deberán cumplir con lo establecido en el numeral 11. de la presente Norma Oficial Mexicana.

7.5. Los permisos del Taller Aeronáutico, a menos que terminen o sean revocados de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 fracciones II, III, IV y V y 15 de la Ley de Aviación Civil, respectivamente, permanecerán vigentes por plazo indefinido.

7.6. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Aviación Civil, y de conformidad con lo señalado en la fracción XIII del artículo antes referido, en los permisos del Taller Aeronáutico que otorgue la Autoridad Aeronáutica, se deberán incluir las siguientes causales de revocación:

7.6.1. Cambio de domicilio del Taller Aeronáutico, sin previa autorización de la Autoridad Aeronáutica.

7.6.2. Enajenación parcial o total del equipo y/o herramientas, instalaciones, información técnica u otros elementos, que sirvieron de base para otorgar el permiso del Taller Aeronáutico.

7.6.3. Liquidación de personal técnico aeronáutico o cancelación de contratos o convenios a través de terceros para emplear personal técnico aeronáutico, lo cual no permita realizar los trabajos de mantenimiento, reparación, modificación, fabricación o ensamblaje (para efectos de mantenimiento y/o reparación), de conformidad con lo establecido con el numeral 10.13.

7.6.4. Por mala ejecución de algún trabajo, el cual haya sido reportado en forma expresa a la Autoridad Aeronáutica y haya sido comprobado fehacientemente por la misma.

7.7. El pago de los derechos correspondientes por el otorgamiento del permiso del Taller Aeronáutico, se realizará conforme a lo establecido en la Ley Federal de Derechos.

7.8. La Autoridad Aeronáutica otorgará el permiso para el establecimiento y funcionamiento del Taller Aeronáutico, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Aviación Civil.

7.9. La continuidad de la vigencia del permiso del Taller Aeronáutico, dependerá de que el mismo siga cumpliendo en todo momento con los requisitos que le fueron solicitados para su establecimiento.

8. Cambios en las especificaciones de operación

8.1. Los permisionarios de un Taller Aeronáutico podrán solicitar modificaciones a las limitaciones de las especificaciones de operación de su permiso, para lo cual deberán cumplir con lo siguiente:

8.1.1. Para incrementar la categoría y especialidad del Taller Aeronáutico, se deberá presentar una solicitud acompañada de la documentación a que hacen referencia las fracciones IV, VI, VIII, IX y X del artículo 140 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil. Respecto al Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico a que hace referencia la fracción X antes mencionada, se deberá presentar la enmienda correspondiente a dicho Manual, por motivo de la ampliación en la capacidad del Taller Aeronáutico; asimismo, deberán cumplir los siguientes requerimientos:

a) Cumplir con lo indicado en el numeral 7.3., si se está contratando nuevo personal técnico aeronáutico o, en su caso, actualizar los documentos indicados en el numeral 7.3.1., que estén relacionados con la capacidad técnica del personal, acorde con la solicitud para incrementar la capacidad del Taller Aeronáutico.

b) Si los incrementos en la capacidad del Taller Aeronáutico implican ampliaciones en las instalaciones del mismo, se deberán cumplir los requisitos del artículo 140 fracción VII del Reglamento de la Ley de Aviación Civil y los indicados en el numeral 7.4., en lo relativo al incremento de capacidad del Taller Aeronáutico.

8.1.2. De conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 140 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, la Autoridad Aeronáutica constatará el cumplimiento de las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del mencionado artículo, antes de que incremente la categoría y especialidad del Taller Aeronáutico al permiso respectivo.

8.2. Sin detrimento a lo establecido con el numeral 12.11., un permisionario del Taller Aeronáutico podrá solicitar cambios de limitaciones de operación del Taller Aeronáutico, para que le sea retirado de su permiso del Taller Aeronáutico, alguna de las clasificaciones indicadas en las especificaciones de operación, de acuerdo a su interés, para lo cual presentará la solicitud correspondiente ante la Autoridad Aeronáutica.

8.3. Los cambios de domicilio en la ubicación del Taller Aeronáutico deberán estar previamente autorizados por la Autoridad Aeronáutica, por lo que será necesario cumplir lo siguiente:

8.3.1. Presentar la solicitud de autorización de cambio de domicilio.

8.3.2. Anexar a su solicitud de autorización de cambio de domicilio, los planos esquemáticos de las nuevas instalaciones, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.4.

8.3.3. La Autoridad Aeronáutica, constatará el cumplimiento del numeral 7.4., en lo referente a las nuevas instalaciones del Taller Aeronáutico, antes de otorgar la autorización correspondiente.

8.4. Todas las demás modificaciones a los permisos del Taller Aeronáutico, no indicadas en esta sección, serán resueltas por la Autoridad Aeronáutica.

9. Responsable del Taller Aeronáutico

9.1. El responsable de un Taller Aeronáutico con las especialidades de planeadores clase 1, motores clase 1 y 2, hélices, radios, instrumentos, accesorios o servicios especializados, deberá cumplir con los requisitos siguientes:

9.1.1. Ser ingeniero en Aeronáutica con título profesional registrado ante la Dirección General de Profesiones, con 6 meses de experiencia, como mínimo, en mantenimiento de aeronaves, o

9.1.2. Ser Técnico en mantenimiento con licencia vigente en la especialidad correspondiente, y con una experiencia no menor de tres años en esa especialidad, la cual demostrará por medio de trabajos efectuados en su especialidad.

9.2. El responsable de un Taller Aeronáutico con las especialidades de planeadores clase 2, 3 y 4, helicópteros clase 1 y 2 o motores clase 3, deberá cumplir con los requisitos siguientes:

9.2.1. Ser ingeniero en Aeronáutica con título profesional registrado ante la Dirección General de Profesiones, con 1 año de experiencia, como mínimo, en mantenimiento de aeronaves.

9.3. El interesado en ocupar el cargo de responsable de un Taller Aeronáutico deberá presentar a la Autoridad Aeronáutica, con una anticipación mínima de diez días hábiles a la fecha de ocupación del cargo, solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:

9.3.1. Copia de la licencia expedida por la Autoridad Aeronáutica, en la especialidad correspondiente, o copia de la cédula y título profesionales para el caso de ser ingeniero en Aeronáutica, según corresponda, conforme a lo requerido en el numeral 9.1. o 9.2., según aplique. Estos documentos deberán ser acompañados de su original para cotejo.

9.3.2. Curriculum vitae actualizado, anexando copias de los comprobantes de cursos recibidos respecto de las aeronaves, componentes y/o accesorios, a los cuales prestará servicios el Taller Aeronáutico, de acuerdo a sus especialidades.

9.3.3. Documento en el que el permisionario del Taller Aeronáutico lo propone como responsable.

9.3.4. Copia de la carta de aceptación de la responsabilidad del interesado, dirigida al permisionario del Taller Aeronáutico del cual pretende ser responsable. Este documento deberá ser acompañado de su original para cotejo.

9.4. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá conceder un nivel de toma de decisión de carácter ejecutivo, al responsable del Taller Aeronáutico.

9.5. La Autoridad Aeronáutica expedirá la autorización correspondiente para los casos en que, previo análisis de la documentación presentada, ésta se considere aceptable, de acuerdo con la operación y funcionamiento del Taller Aeronáutico de que se trate.

9.6. El responsable del Taller Aeronáutico deberá cumplir, además de lo indicado en el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, con las siguientes funciones, atribuciones y responsabilidades:

9.6.1. Conocer la utilización y llenado de los formularios oficiales emitidos por la Autoridad Aeronáutica, en lo referente a trabajos de mantenimiento y certificación de los mismos.

9.6.2. Firmar los formularios correspondientes para la certificación de trabajos que así lo requieran, de acuerdo al Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico.

9.6.3. Firmar la forma DGAC-46 denominada “Certificación de reparación o modificación mayor de planeador, motor o hélice” o el documento equivalente expedido por la Autoridad Aeronáutica, cuando los trabajos efectuados por el Taller Aeronáutico así lo requieran.

9.6.4. Presentar todos los informes técnicos y administrativos que le sean requeridos por la Autoridad Aeronáutica.

9.6.5. Evitar que dentro del Taller Aeronáutico del cual es responsable, se cometan prácticas irregulares u omisiones a los procedimientos aprobados, que pongan en riesgo la operación segura de las aeronaves e instalaciones del Taller Aeronáutico.

9.6.6. Presentar ante la Autoridad Aeronáutica, las enmiendas al Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico, de acuerdo al contenido del Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico, que establezca la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

9.6.7. Verificar, en todo momento, que se cumpla con las condiciones y requisitos de carácter técnico que se establecieron para el otorgamiento del permiso del Taller Aeronáutico.

9.6.8. El responsable del Taller Aeronáutico, o un representante designado por él, deberá participar directamente en las verificaciones que realice la Autoridad Aeronáutica.

9.6.9. Cuando el responsable del Taller Aeronáutico deje de laborar en un Taller, seguirá siendo responsable de las funciones, atribuciones y responsabilidades que le hayan correspondido hasta el último momento que laboró en dicho Taller. Sin embargo, podrá ser liberado de las mismas por el permisionario del Taller Aeronáutico, en cualquier momento, si éste así lo considera pertinente. En ambos casos, el responsable del Taller Aeronáutico y el permisionario de éste, deberán notificar por escrito a la Autoridad Aeronáutica, tales circunstancias.

10. Personal

10.1. Todo Taller Aeronáutico empleará al personal necesario para planificar, efectuar, supervisar, inspeccionar y dar la liberación de mantenimiento o retorno a servicio de los trabajos que realice.

10.2. El personal técnico aeronáutico empleado por el Taller Aeronáutico será el encargado de efectuar, supervisar, inspeccionar y dar liberación de mantenimiento o retorno a servicio de los trabajos que realice el Taller.

10.3. El personal técnico aeronáutico empleado por el Taller Aeronáutico deberá contar con la licencia expedida por la Secretaría, de conformidad con las normas oficiales mexicanas aplicables a la clase y especialidad específica para el tipo y características de los trabajos que vaya a realizar.

10.4. El permisionario del Taller Aeronáutico se asegurará de que todo el personal técnico aeronáutico a su servicio, reciba entrenamiento inicial y periódico, apropiado para las tareas y responsabilidades que le hayan asignado. Se deberá incluir la capacitación en conocimientos y habilidades relacionadas con la actuación humana.

10.5. El personal técnico aeronáutico del Taller Aeronáutico, se dividirá básicamente en:

10.5.1. Personal técnico aeronáutico de producción, y

10.5.2. Personal técnico aeronáutico de inspección (o denominado también como de control de calidad).

10.6. El personal técnico aeronáutico de producción será el que ejecute el trabajo. El personal técnico aeronáutico de inspección será el que complete los trabajos mediante la inspección de los mismos, cuando así se requiera.

10.7. Todo el personal referido en el numeral 10.1., antes de ocupar un puesto dentro del Taller Aeronáutico, ya sea de nuevo ingreso o para ascensos, deberá ser evaluado en sus conocimientos y habilidades, por el permisionario del Taller Aeronáutico, a efecto de que éste determine si dicho personal puede desempeñar las actividades que se le asignarán.

10.8. Los registros sobre las evaluaciones a que se refiere el numeral 10.7. deberán estar integrados en el expediente de dicho personal.

10.9. El permisionario del Taller Aeronáutico, de conformidad con lo establecido en el artículo 143 fracción II del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, deberá integrar un expediente de cada miembro del personal técnico aeronáutico que labore en dicho Taller, el cual contendrá entre otra información, la siguiente:

10.9.1. Curriculum vitae;

10.9.2. Copia de la documentación profesional y/o técnica de capacidades;

10.9.3. Evaluaciones hechas de conformidad con el numeral 10.7.;

10.9.4. Copia de la licencia expedida por la Autoridad Aeronáutica;

10.9.5. Copia de las constancias de capacitación recibida de conformidad con el numeral 10.4., y

10.9.6. Copia del certificado de aptitud psicofísica vigente, expedido por la Autoridad competente.

10.10. El personal técnico aeronáutico deberá ser capacitado en el trabajo o tener experiencia práctica en los procedimientos, prácticas, métodos de inspección, materiales, herramientas, maquinaria y equipo en general, usado en el trabajo al cual ha sido asignado.

10.11. Cualquier cambio de personal técnico aeronáutico o de puesto asignado, deberá ser notificado a la Secretaría mediante las enmiendas al Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico; asimismo, el permisionario del Taller Aeronáutico podrá notificarlo por escrito directamente a la Secretaría, si así lo considera pertinente.

10.12. El personal del Taller Aeronáutico no deberá ejecutar ninguna actividad dentro del mismo, cuando se encuentre en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante. Cuando el personal se encuentre bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante por prescripción médica, dicho personal deberá hacerlo del conocimiento del permisionario del Taller Aeronáutico o del responsable del mismo, quienes, sin afectar los derechos laborales del personal, deberán tomar las medidas pertinentes para evitar se ponga en riesgo la seguridad de los trabajos del Taller o del propio personal.

10.13. La cantidad de personal técnico aeronáutico empleado en el Taller Aeronáutico podrá variar de acuerdo al tipo y volumen de trabajo que éste realice. Sin embargo, el permisionario del Taller Aeronáutico deberá mantener una cantidad suficiente de personal calificado que pueda atender el volumen de trabajo en cada una de las áreas y procesos que las especificaciones de operación del Taller Aeronáutico indique. Cualquier reducción en la cantidad de personal empleado por un Taller Aeronáutico, deberá hacerse sin que con ello se afecte la eficiencia en los trabajos que éste realice, o bien, se provoque el incumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana.

10.14. El personal técnico aeronáutico y demás personal del Taller Aeronáutico, deberá tener conocimiento y acatar las prácticas y lineamientos de seguridad industrial y protección civil, que le sean aplicables.

10.15. El permisionario del Taller Aeronáutico debe mantener un registro de todo el personal técnico aeronáutico que esté a su servicio. Dicho registro debe incluir el alcance de las calificaciones obtenidas por dicho personal, relacionadas con la capacitación, el desempeño en el mismo y los conocimientos de éste.

10.16. El permisionario del Taller Aeronáutico debe informar por escrito a su personal técnico aeronáutico y al responsable del Taller Aeronáutico, el alcance de sus funciones, atribuciones y responsabilidades en el Taller Aeronáutico.

10.17. El registro de una persona que deje de prestar sus servicios al Taller Aeronáutico, y al cual hace referencia el numeral 10.15., debe ser conservado por el permisionario del Taller Aeronáutico, por un lapso de dos años, contados a partir de la fecha en que dicho personal deje de prestar sus servicios.

11. Instalaciones, equipos y herramientas

11.1. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá contar con instalaciones para:

11.1.1. Alojar el equipo de trabajo, herramientas y material necesarios para realizar los trabajos que le sean encomendados y para los cuales esté autorizado.

11.1.2. Realizar el trabajo para el cual está autorizado, designando un espacio adecuado para ello.

11.1.3. Designar áreas apropiadas para almacenar, segregar y proteger materiales, partes, equipos, herramientas y suministros diversos.

11.1.4. Proteger adecuadamente las partes y subensambles durante el desensamble, limpieza, inspección, reparación, modificación y ensamblaje.

11.1.5. Proteger y alojar la información técnica, con objeto de que en la realización de trabajos, se proteja a los mismos de elementos climatológicos o polvo.

11.2. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá designar espacio suficiente en el Taller Aeronáutico, para la operación de maquinaria y equipo, tomando como base las instrucciones para su instalación y uso.

11.3. El equipo y maquinaria deberá estar lo suficientemente aislado para evitar que:

11.3.1. Los residuos que éstos generen, inadvertidamente contaminen a los ensambles o subensambles, durante procesos de armado, limpieza, inspección, entre otros.

11.3.2. Cuando se trate de equipos y/o maquinaria de pintura, al realizar esta actividad, la pintura atomizada se deposite en otros equipos, maquinaria, partes, ensambles o subensambles. Las áreas designadas para pintura deberán cumplir con el numeral 11.12.

11.3.3. Además de lo previsto en los numerales 7.4. y 11.1.2., los Talleres Aeronáuticos deberán contar con sistemas o procedimientos y áreas designadas en las instalaciones del mismo, para el tratamiento y/o reciclado de partes, materiales y productos de uso general, entre otros, clasificado como material de desecho.

11.4. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá destinar un área, en estructura cerrada, para realizar la mayor cantidad posible de trabajo de producción.

11.5. Almacén.

11.5.1. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá contar con un almacén de partes, refacciones, materiales y productos de uso general, entre otros, el cual deberá estar aislado del área de trabajo del Taller Aeronáutico.

11.5.2. Se deberá organizar el almacén, de tal manera que se suministren partes, refacciones y materiales, entre otros, aceptados previamente por los sistemas de control de calidad del almacén.

11.5.3. El personal de almacén se asegurará de que cada parte, refacción, material y producto de uso en general, entre otros, que ingrese al área del almacén, cuente con su factura, certificado de origen, tarjeta de unidad y condición, entre otros, según aplique, de conformidad con los procesos de recepción y aceptación del Taller Aeronáutico.

11.5.4. En el almacén, se deberán preservar y proteger adecuadamente las partes que han sido ensambladas o desensambladas o en espera de ensamble o desensamble para evitar que éstas sean dañadas y/o contaminadas.

11.5.5. En el almacén, se deberá designar un área que cuente con un sistema de control de temperatura, iluminación y humedad para aquellas partes, refacciones y productos en general que así lo requieran, conforme a las indicaciones del fabricante de los mismos y/o de la entidad responsable del diseño de tipo.

11.5.6. Los productos químicos altamente inflamables deberán estar ubicados en un área debidamente identificada y aislada del almacén básico. Esta área también deberá estar lo suficientemente ventilada para evitar la concentración de vapores de tales productos.

11.5.7. En el almacén, se deberá llevar un control de las partes, refacciones y/o productos en general que cuenten con fecha límite de almacenamiento y/o caducidad.

11.5.8. En el almacén, se deberá llevar un inventario y contar con un sistema de abastecimiento que permita proveerlo de partes, refacciones y productos en general, de acuerdo a las necesidades del Taller Aeronáutico.

11.6. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá proporcionar a todas las instalaciones del Taller, la iluminación y ventilación adecuada para la realización de los trabajos.

11.7. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá llevar un registro de mantenimiento y/o reparación de sus instalaciones, relacionado con:

(a) Sistemas de protección contra incendio, tales como programas de recargas de extintores, de verificación de los sistemas fijos de extinción de incendios (sistemas de bombeo, mangueras y líneas de conducción, entre otros), así como de cambios y/o verificaciones de agentes extintores en estos sistemas, según aplique.

(b) Sistemas y/o dispositivos de seguridad, de conformidad con lo requerido con el numeral 11.13. y los programas de seguridad industrial y de protección civil vigentes.

(c) Sistemas de control de temperatura y humedad.

11.8. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá dotar al personal técnico aeronáutico a su servicio, de uniforme y equipo de trabajo y de protección individual, tales como mascarillas, anteojos protectores, guantes, botas, entre otros, de acuerdo a las actividades que realice.

11.9. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá instalar letreros, avisos de precaución, avisos de evacuación, de localización de extintores de incendio, de ubicación de equipos de protección y un pizarrón
de avisos de seguridad.

11.10. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá contar con el equipo necesario para dar protección al personal del mismo, tal como regaderas y lavaojos de emergencia, entre otros, de acuerdo a las actividades que realice y riesgos que representen las mismas.

11.11. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá tener un procedimiento de reciclaje y/o tratamiento de desechos de productos, materiales y partes en general, ya sea que lo efectúe el propio Taller Aeronáutico o un tercero.

11.12. Los Talleres Aeronáuticos dedicados a la pintura de aeronaves deberán tener un lugar específicamente acondicionado para estos trabajos, dicho lugar debe cumplir con lo siguiente:

(a) Contar con sistemas de filtrado y extracción de pintura atomizada y vapores, entre otros.

(b) Contar con instalaciones de reciclaje y/o tratado de desechos de productos y materiales utilizados en todo el proceso de pintura.

(c) El lugar designado deberá estar totalmente cerrado y aislado del medio ambiente durante los procesos de pintura.

Estos requerimientos aplicarán de igual manera a Talleres Aeronáuticos dedicados a la pintura de partes y/o componentes de las aeronaves, debiendo designar los lugares correspondientes tomando en consideración las dimensiones de éstos.

11.13. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá instalar en cantidad suficiente al área a cubrir, extintores fijos o portátiles, tomando en consideración la normas oficiales mexicanas aplicables para tal efecto. De acuerdo a la necesidad y prevención de riesgos de incendio que se determine, deberán instalarse sistemas de detección y extinción de incendios.

11.14. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá implantar un procedimiento de evacuación de emergencia de las instalaciones, y para tal efecto designará zonas y/o pasillos libres de obstáculos, debiendo colocar la señalización correspondiente.

11.15. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá organizar con el personal del mismo, una Brigada de Seguridad que atenderá, guiará y coordinará los procedimientos necesarios en eventos de conato de incendio, temblor o accidentes suscitados en el Taller Aeronáutico; en el caso de que el Taller Aeronáutico tenga integrada una Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, no requerirá formar la Brigada de Seguridad a que refiere el presente numeral.

11.16. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá realizar, programar y promover actividades, simulacros, capacitación sobre la prevención de accidentes, manejo y uso de extintores, entre otros, dirigidos al personal. De igual manera, generará los informes mensuales sobre los mismos. Aquellos Talleres Aeronáuticos que cuenten con una Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, deberán cumplir con los informes que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determine.

11.17. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá instalar en cantidad suficiente, botiquines de primeros auxilios, de acuerdo a la cantidad de personal que labore en el Taller Aeronáutico, y los distribuirá en las diferentes áreas del mismo. El contenido y distribución de los botiquines de primeros auxilios será de acuerdo a lo indicado en la Norma Oficial Mexicana correspondiente. Asimismo, el permisionario del Taller Aeronáutico llevará un programa de verificación de botiquines y un control de caducidad de medicamentos contenidos en los mismos.

11.18. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá llevar un control de los equipos y herramientas sujetos a calibración y/o ajuste. Asimismo, deberá contar con un programa de calibración que permita disponer en todo momento de estos equipos y/o herramientas para la realización de trabajos del Taller Aeronáutico.

11.19. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá disponer del equipo y herramienta especial requerida por la entidad de diseño de tipo de la aeronave, sus componentes y/o accesorios, en el momento en que se efectúen los trabajos, de conformidad con las especificaciones de operación del permiso del Taller Aeronáutico.

11.20. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá contar con equipo y herramienta común, en cantidad suficiente, con relación al personal técnico aeronáutico que ejecute los trabajos.

12. Operación del Taller Aeronáutico

12.1. El Taller Aeronáutico se organizará para la ejecución de los trabajos, de tal manera que, por lo menos, exista dentro del organigrama del mismo, un área dedicada a la ejecución de trabajos o de producción y otra dedicada a vigilar mediante la inspección, el control de calidad de los mismos.

12.2. La liberación de mantenimiento o retorno a servicio será realizado por personal que tenga entrenamiento en los métodos de inspección, técnicas y equipos utilizados para determinar la calidad y

aeronavegabilidad de la aeronave, sus componentes y/o accesorios, conforme a lo indicado en el Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico, sin detrimento de lo prescrito en el numeral 9. de la presente Norma Oficial Mexicana, para la figura del responsable del Taller Aeronáutico.

12.3. La inspección de trabajos solicitada por la entidad responsable del diseño de tipo de la aeronave y/o sus componentes, para cada uno de los trabajos de mantenimiento, será la mínima requerida por ésta en su documentación técnica. La inspección podrá ser incrementada por el permisionario del Taller Aeronáutico, con base en la experiencia obtenida y podrá ser requerida por la Autoridad Aeronáutica en aquellos trabajos de mantenimiento en que no se realice inspección alguna, cuando considere que la falta de la misma pueda constituir un peligro.

12.4. El Taller Aeronáutico deberá contar con las guías de inspección y mantenimiento de la aeronave, aprobadas por la Autoridad Aeronáutica para el concesionario, permisionario u operador aéreo para quien realiza los trabajos de mantenimiento y/o reparación, así como con la información técnica adecuada durante la aplicación de los trabajos contratados para la aeronave.

12.5. Los Talleres Aeronáuticos que presten servicios a terceros, usarán las guías de inspección y mantenimiento que para tal efecto les hayan sido aprobadas a los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos en su programa de mantenimiento.

12.6. El Taller Aeronáutico deberá generar un documento de inicio de trabajo u orden de trabajo, el cual se usará para documentar las actividades de mantenimiento que se realicen, mismo que deberá contener la siguiente información:

12.6.1. La fecha de ingreso o fecha de apertura del documento de inicio u orden de trabajo;

12.6.2. La marca, modelo, número de parte y número de serie, según aplique, de la aeronave, componente y/o accesorio;

12.6.3. El trabajo a que será sometido;

12.6.4. El estado en que se recibe;

12.6.5. Las firmas de aceptación por parte del Taller Aeronáutico para realizar el trabajo correspondiente y del que entrega la aeronave, componente y/o accesorio al mismo;

12.6.6. De manera complementaria, se anexará la documentación que indique la fecha de liberación de mantenimiento o retorno a servicio; los nombres, números de licencia y sellos correspondientes de las personas que realizaron el trabajo; los datos mencionados de aquella otra que lo inspeccionó y de la que efectuó dicha liberación o retorno a servicio, así como el número de página del Libro de Bitácora en donde se efectúa el asentamiento de estos datos, toda vez que la información establecida en el presente numeral también deberá asentarse en el Libro de Bitácora de la aeronave correspondiente o en el documento similar del componente.

12.7. Los procedimientos que el personal técnico aeronáutico y el responsable del Taller Aeronáutico deberán llevar a cabo para dar la liberación de mantenimiento o retorno a servicio correspondiente, su registro y la conservación de dicho documento, deberán estar descritos en el Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico, los cuales deberán cumplir con las disposiciones que para el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves, establezca la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

12.8. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá capacitar al personal técnico aeronáutico a su cargo, que efectúe la liberación de mantenimiento o retorno a servicio, y al encargado de vigilar el control de calidad, en los procedimientos de certificación y/o liberación de mantenimiento o retorno a servicio que requieran ser llevados a cabo ante la Autoridad Aeronáutica, debiendo también capacitarlos en el uso y llenado de los formularios oficiales que emita la Autoridad Aeronáutica.

12.9. Para que el Taller Aeronáutico pueda llevar a cabo cualquier modificación que afecte el diseño original de una aeronave o sus características, éste deberá contar con la previa autorización de la Autoridad Aeronáutica, y presentar la información con el estudio técnico detallado conforme a las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. Estas modificaciones se podrán hacer siempre y cuando el permisionario del Taller Aeronáutico, tenga en sus especificaciones de operación, la marca y el modelo de aeronave a la que pretende efectuar la modificación.

12.10. El Taller Aeronáutico solamente utilizará partes, componentes y repuestos aprobados por la entidad responsable del diseño de tipo de la aeronave y/o por la Autoridad Aeronáutica, los cuales, a su vez, deberán cumplir con las disposiciones que sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves, establezca la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

12.11. Si en un término de 24 meses, a partir de la fecha de otorgamiento del permiso del Taller Aeronáutico, el permisionario del Taller Aeronáutico no ha efectuado ningún trabajo para el cual haya sido autorizado, de conformidad con lo establecido en la presente Norma Oficial Mexicana, se darán de baja todas aquellas limitaciones indicadas en las especificaciones de operación del permiso del Taller Aeronáutico que se encuentren en dicha situación.

12.12. La Autoridad Aeronáutica y/o las unidades de verificación acreditadas, realizarán verificaciones al Taller Aeronáutico, de conformidad con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana correspondiente y demás disposiciones legales aplicables.

12.13. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá entregar a la Autoridad Aeronáutica los originales del permiso del Taller Aeronáutico y de las especificaciones de operación, cuando se dé la terminación o revocación de dicho permiso, conforme a lo establecido en los numerales 7.5. y 7.6.

12.14. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá aplicar las Directivas de Aeronavegabilidad y Boletines de Servicio mandatorios, en todos y cada uno de los trabajos que realice en su Taller Aeronáutico, cuando las aeronaves, componentes y/o accesorios a reparar, se vean afectados por éstos, de conformidad con las disposiciones que para la aplicación de Directivas de Aeronavegabilidad y Boletines de Servicio a aeronaves y sus componentes, establezca la Norma Oficial Mexicana correspondiente. Asimismo, deberá realizar los trabajos de mantenimiento, con apego a los procedimientos establecidos por la entidad responsable del diseño de tipo de la aeronave, componentes y/o accesorios, reglamentos y disposiciones establecidas por la Autoridad Aeronáutica.

12.15. La propaganda y/o promoción del Taller Aeronáutico, indicará con claridad y precisión los trabajos para los cuales está autorizado, en los términos de su permiso del Taller Aeronáutico.

12.16. El permisionario del Taller Aeronáutico incorporará en todas sus formas, guías, tarjetas y demás documentación utilizada en los procesos de trabajo, el nombre o razón social y número de permiso del Taller Aeronáutico.

12.17. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá contar con las especificaciones técnicas civiles o militares que estén en uso en la industria, para la realización de servicios especializados, tales como los de inspecciones, pruebas y procesos no destructivos, entre otros.

12.18. El permisionario del Taller Aeronáutico, el responsable del Taller Aeronáutico y el personal técnico aeronáutico de dicho Taller, serán solidariamente responsables de las violaciones cometidas a la Ley de Aviación Civil, su Reglamento, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables.

12.19. Cuando la Autoridad Aeronáutica tenga constancia fehaciente de la existencia de irregularidades en el Taller Aeronáutico, que debido a su gravedad, comprometan la seguridad de los servicios prestados, podrá suspender las actividades del Taller Aeronáutico, sin más trámite que el aviso correspondiente al permisionario.

12.20. La suspensión a que se refiere el numeral 12.19., podrá ser dejada sin efectos por la Autoridad Aeronáutica, cuando dentro del plazo fijado por dicha Autoridad, hayan desaparecido las causas que la motivaron. En caso contrario, se revocará el permiso correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Aviación Civil y demás disposiciones aplicables.

12.21. Los permisionarios de Talleres Aeronáuticos tendrán hasta un año posterior a la fecha de entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana, para solicitar a la Autoridad Aeronáutica las modificaciones y/o adecuaciones correspondientes a su permiso de Taller Aeronáutico, a efecto de cumplir con lo dispuesto en dicha Norma.

13. Talleres Aeronáuticos con la modalidad de servicio a terceros

13.1. Los Talleres Aeronáuticos de servicio a terceros, al celebrar contratos de mantenimiento, establecerán claramente las responsabilidades del servicio convenido entre éste y el concesionario o

permisionario de transporte aéreo u operador aéreo, mediante un contrato de mantenimiento, el cual deberá cumplir los requisitos establecidos en el numeral 13.2.

13.2. En el contrato tipo para mantenimiento de la aeronave, componente y/o accesorio, deberá especificar como mínimo lo siguiente:

13.2.1. Las partes que participan en el contrato;

13.2.2. Declaraciones de ambas partes;

13.2.3. Aeronave, componente y/o accesorio que se somete a servicio, debiendo incluir, según aplique, marca, modelo, número de serie, matrícula y año de fabricación;

13.2.4. Indicar quién de los que suscriben el contrato será el responsable del control y programación del mantenimiento de la aeronave, componente y/o accesorio. En caso de que el Taller Aeronáutico asuma esta responsabilidad, se deberá convenir que el concesionario, permisionario u operador aéreo de que se trate, proporcionará todo el archivo previo de mantenimiento de su aeronave, componente y/o accesorio, para tal efecto, así como copias del libro de bitácora después de cada vuelo, en lo sucesivo;

13.2.5. Servicios contratados, los cuales serán especificados en horas de vuelo, ciclos y/o tiempo calendario para el planeador, motor, hélices, componente y/o accesorio, hasta el nivel autorizado al Taller Aeronáutico;

13.2.6. Indicar cuál será la responsabilidad del Taller Aeronáutico en la aplicación de Boletines de Servicio mandatorios y Directivas de Aeronavegabilidad;

13.2.7. Incluir una cláusula donde se indique que para aquellos servicios o trabajos en los que se requiera vuelo de prueba, éste será coordinado previamente con el Taller Aeronáutico y la empresa propietaria o poseedora de la aeronave;

13.2.8. Indicar qué parte tendrá la responsabilidad para el suministro de partes y/o refacciones que se utilizarán en el mantenimiento de la aeronave;

13.2.9. Servicios que se realizarán en Talleres Aeronáuticos externos;

13.2.10. Limitaciones del servicio contratado;

13.2.11. Garantías;

13.2.12. Limitaciones de la garantía;

13.2.13. Motivos de cancelación de la garantía;

13.2.14. Vigencia del contrato;

13.2.15. Incluir una cláusula en la que se indique que cualquier modificación, renovación o terminación del contrato será debidamente notificada de forma inmediata a la Autoridad Aeronáutica;

13.2.16. Lugar y fecha de celebración del contrato, y

13.2.17. Firmas de conformidad de ambas partes.

13.3. Todo contrato de mantenimiento celebrado entre el permisionario del Taller Aeronáutico y el concesionario o permisionario de transporte aéreo u operador aéreo, deberá ser enviado a la Autoridad Aeronáutica para su registro y control respectivo.

13.4. Los Talleres Aeronáuticos de servicio a terceros otorgarán una garantía sobre los trabajos realizados. Las garantías sobre las partes, productos y refacciones serán las mismas que las otorgadas por el fabricante de éstos, si el mismo las establece.

13.5. Cuando el Taller Aeronáutico requiera que se realice un vuelo de prueba, éste se efectuará de conformidad con la Norma Oficial Mexicana correspondiente. Si el Taller Aeronáutico proporciona servicio a terceros, este vuelo deberá ser coordinado con el concesionario o permisionario de transporte aéreo u operador aéreo propietario o poseedor de la aeronave.

13.6. El Taller Aeronáutico de servicios a terceros, elaborará por cada contrato de mantenimiento celebrado con un concesionario o permisionario de transporte aéreo u operador aéreo, un expediente por

cada aeronave, en el que registrará todo el historial del mantenimiento llevado a cabo por ese Taller Aeronáutico.

13.7. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá conservar registros detallados del mantenimiento realizado, para demostrar que se han satisfecho todos los requisitos relativos a la liberación de mantenimiento o retorno a servicio.

13.8. Los registros exigidos en el numeral 13.7., se deberán conservar conforme a lo establecido en el artículo 138 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil.

13.9. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá presentar a la Autoridad Aeronáutica un informe semestral de los trabajos realizados por él mismo, de conformidad con sus especificaciones de operación.

14. Funciones y obligaciones del permisionario

14.1. Las funciones y obligaciones de un permisionario de un Taller Aeronáutico son los expuestos a continuación:

14.1.1. Mantener y/o alterar cualquier aeronave, sus componentes y/o accesorios, dentro de los alcances para los cuales han sido emitidas las especificaciones de operación.

14.1.2. Aprobar la liberación de mantenimiento o retorno a servicio de cualquier aeronave, componente y/o accesorio, incluidos en las limitaciones de las especificaciones de operación de su permiso, después que a los mismos les haya sido dado mantenimiento y/o hayan sido alterados de acuerdo a los lineamientos de las normas oficiales mexicanas aplicables, el Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico y los procedimientos aprobados por la entidad responsable del diseño de tipo de la aeronave, parte o componente.

14.1.3. Proporcionar mantenimiento y/o alterar cualquier aeronave, sus componentes y/o accesorios, incluidos en las especificaciones de operación, en un lugar distinto al Taller Aeronáutico, previa autorización de la Autoridad Aeronáutica, siempre que:

a) La tarea se cumpla de la misma forma que en el Taller Aeronáutico;

b) En el lugar para realizar la tarea, se disponga de todo el personal, equipo, materiales y datos técnicos necesarios, y

c) El Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico establezca los procedimientos a ejecutarse en un lugar diferente del Taller Aeronáutico.

15. Limitaciones del permiso

15.1. Un Taller Aeronáutico no podrá realizar el mantenimiento o alteración de ninguna estructura de aeronave, componente y/o accesorio, que no esté incluido en sus especificaciones de operación, y no podrá realizar el mantenimiento, reparación o alteración de ninguna aeronave, componente y/o accesorio, que esté incluido en sus especificaciones de operación, si se requieren datos técnicos, equipos o instalaciones especiales, de las que no dispone.

15.2. Un Taller Aeronáutico no puede emitir la liberación de mantenimiento o retorno a servicio de cualquier aeronave, componente y/o accesorio, después de realizarse una alteración mayor o reparación mayor, a menos que haya dado cumplimiento a las disposiciones que sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad, establezca la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

16. Tareas del permisionario

16.1. El permisionario de un Taller Aeronáutico debe:

16.1.1. Dar cumplimiento a las disposiciones que sobre el contenido del Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico, establezca la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

16.1.2. Observar el cumplimiento de los requisitos aplicables establecidos en esta Norma Oficial Mexicana, mientras esté vigente el permiso del Taller Aeronáutico.

16.2. El permisionario de un Taller Aeronáutico debe asegurarse que:

16.2.1. Todas las personas que estén directamente a cargo de cualquier mantenimiento o inspección realizada en nombre del Taller Aeronáutico, cumpla sus funciones de acuerdo a los requisitos aplicables de la Ley de Aviación Civil, su Reglamento, las normas oficiales mexicanas aplicables, el Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico y su licencia de personal técnico aeronáutico.

16.2.2. Todo el personal que esté autorizado para emitir certificaciones de liberación de mantenimiento o retorno al servicio, a través del permiso del Taller Aeronáutico, deberá poseer la licencia, experiencia y capacitación apropiada, en términos de las disposiciones que sobre el contenido temático de los programas de instrucción para el personal técnico aeronáutico de vuelo y de tierra, establezca la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

16.2.3. El mantenimiento e inspección de aeronaves dedicadas a servicios de transporte aéreo comercial, se cumplan de acuerdo a los lineamientos, procedimientos y programas de inspección, definidos en la documentación aprobada por la Autoridad Aeronáutica, que posean los permisionarios o concesionarios de transporte aéreo, la cual deberá ponerse a disposición del responsable del Taller Aeronáutico.

16.2.4. Se permita que la Autoridad Aeronáutica y/o las Unidades de Verificación acreditadas, realicen la verificación de las instalaciones del Taller Aeronáutico, así como también de sus registros, sistema de inspección y, en general, verifiquen si el Taller Aeronáutico cumple con lo estipulado en la presente Norma Oficial Mexicana y demás disposiciones legales aplicables.

17. Reporte de las condiciones defectuosas o de no aeronavegabilidad

17.1. No obstante las disposiciones que sobre los procedimientos para la presentación del reporte de defectos y fallas ocurridas a las aeronaves, establezca la Norma Oficial Mexicana correspondiente, cuando el permisionario del Taller Aeronáutico sea contratado para realizar tareas de mantenimiento, éste debe informar por escrito al concesionario, permisionario u operador aéreo que solicite sus servicios, cualquier defecto o irregularidad encontrada por el personal de inspección o producción del Taller Aeronáutico, durante la realización de los trabajos, lo que incluirá, si resulta aplicable, un informe declarando que la aeronave no se encuentra en condiciones de aeronavegabilidad.

18. Requisitos para Talleres Aeronáuticos extranjeros

18.1. No obstante las disposiciones que establece la NOM-043/1-SCT3-2001, con respecto a las oportunidades en que un concesionario o permisionario de transporte aéreo u operador aéreo de aeronaves con marcas de nacionalidad y matrícula mexicanas, puede recurrir al uso de un taller aeronáutico extranjero, la presente sección define los requisitos que deben ser cumplidos por un Taller Aeronáutico extranjero, a efecto de que se le pueda convalidar, por parte de la Autoridad Aeronáutica, la habilitación, permiso o documento equivalente, que le haya sido otorgado por su respectiva Autoridad de aviación civil, con la finalidad de que realice trabajos de mantenimiento y/o reparación a aeronaves con marcas de nacionalidad y matrícula mexicanas.

18.2. Un Taller Aeronáutico extranjero puede realizar sólo los servicios y funciones específicos que estén comprendidos en la habilitación, certificado o documento equivalente otorgado por su correspondiente Autoridad de aviación civil y que haya sido convalidado por la Autoridad Aeronáutica.

Para que la Autoridad Aeronáutica pueda convalidar la habilitación, certificado o documento equivalente que haya sido expedido a un Taller Aeronáutico Extranjero, por alguna Autoridad de aviación civil, y éste pueda realizar servicios de mantenimiento y/o reparación a aeronaves con marcas de nacionalidad y matrícula mexicanas, dicho Taller deberá cumplir con los siguientes requisitos:

18.2.1. Presentar ante la Autoridad Aeronáutica una solicitud de convalidación de la habilitación, certificado o documento equivalente que le haya sido expedido por su correspondiente Autoridad de aviación civil. Dicha solicitud, deberá estar acompañada de lo siguiente:

a) Habilitación, certificado o documento equivalente otorgado por la Autoridad de aviación civil respectiva, en la que se exprese la vigencia y el alcance de las actividades de mantenimiento que tenga autorizadas realizar.

b) Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico extranjero o su equivalente, mismo que deberá estar debidamente aprobado o aceptado, según sea el caso, por la Autoridad de aviación civil correspondiente.

c) Listado de trabajos que sean subcontratados por el Taller Aeronáutico Extranjero, así como la relación de las empresas que le proporcionarán dichos trabajos, si dicho listado no se contiene en el manual de procedimientos o su equivalente mencionado en el párrafo anterior.

18.2.2. Antes de convalidar la habilitación, certificado o documento equivalente otorgado por una Autoridad de aviación civil a un Taller Aeronáutico Extranjero, la Autoridad Aeronáutica verificará que éste cumpla lo dispuesto en el numeral 18.2.1. anterior.

18.2.3. Previo a que la habilitación, certificado o documento equivalente otorgado por una Autoridad de aviación civil a un Taller Aeronáutico Extranjero, sea convalidado por la Autoridad Aeronáutica, el Taller Aeronáutico extranjero deberá cubrir el importe de los derechos correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos. Para los efectos de la Ley antes mencionada, la convalidación será equivalente al otorgamiento de un permiso.

18.3. El personal técnico aeronáutico que ejecute el trabajo en el Taller Aeronáutico Extranjero, deberá ser poseedor de la licencia adecuada emitida por la Autoridad de aviación civil correspondiente, así como empleado del taller aeronáutico extranjero al momento de ejecutar el trabajo, salvo que dicho personal forme parte de las empresas que proporcionan servicios subcontratados al Taller Aeronáutico Extranjero.

18.4. Las convalidaciones otorgadas por la Autoridad Aeronáutica a Talleres Aeronáuticos Extranjeros serán revocadas por ésta, cuando habiéndosele suspendido a su titular la convalidación de acuerdo a lo indicado en el inciso b) del numeral 18.7. de la presente Norma Oficial Mexicana, incumpla dentro del término establecido por la Autoridad Aeronáutica, las condiciones fijadas para que dicha Autoridad deje sin efectos la suspensión.

18.5. La convalidación otorgada a un Taller Aeronáutico Extranjero por la Autoridad Aeronáutica, termina por:

a) Vencimiento del plazo establecido en la misma o de la prórroga que, en su caso, se hubiere otorgado;

b) Renuncia del titular;

c) Revocación;

d) Revocación, cancelación o por cualquier otro motivo por el que la habilitación, certificado o documento equivalente otorgado por la Autoridad de aviación civil respectiva, deje de tener vigencia;

e) Desaparezca el objeto de la convalidación, y

f) Liquidación o quiebra definitiva del titular.

La terminación de la convalidación no extingue las obligaciones contraídas por el titular durante su vigencia.

18.6 La Autoridad Aeronáutica podrá suspender la convalidación otorgada a un Taller Aeronáutico Extranjero, de forma inmediata y sin mediar procedimiento alguno más que la notificación respectiva:

a) Cuando le sea suspendida la habilitación, certificado o documento equivalente otorgado por su respectiva Autoridad de Aviación Civil, y

b) Cuando tenga constancia de que dicho Taller realizó algún trabajo de reparación o mantenimiento a alguna aeronave con marcas de nacionalidad y matrícula mexicanas, sin ajustarse a las disposiciones aplicables que regulen el mantenimiento de la aeronavegabilidad de dicha aeronave y, por lo cual, se ponga en riesgo la seguridad de la misma.

18.7. La suspensión de la convalidación podrá ser dejada sin efectos por la Autoridad Aeronáutica, cuando:

a) La Autoridad de Aviación Civil respectiva, deje sin efectos la suspensión de la habilitación, certificado o documento equivalente del cual es titular el Taller Aeronáutico Extranjero, o

b) Dentro del plazo fijado por la Autoridad Aeronáutica, hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión. En caso contrario, se confirmará la revocación de la convalidación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 18.4. anterior y demás disposiciones aplicables.

19. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas tomadas como base para su elaboración

19.1. La presente Norma Oficial Mexicana es equivalente con las disposiciones que establece el Anexo 6 Parte I Capítulo 8; Parte II Capítulo 8 y Parte III Sección II Capítulo 6 y Sección III Capítulo 6 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Este documento forma parte de las normas emitidas por la Organización de Aviación Civil Internacional y que se describen en el artículo 37 del Convenio referido.

19.2. No hay normas mexicanas que hayan servido de base para su elaboración, dado que al momento no existen antecedentes regulatorios publicados en este sentido.

20. Bibliografía

20.1. Manual sobre mantenimiento de la aeronavegabilidad, Documento 9642-AN/941 de la Organización de Aviación Civil Internacional.

20.2. Circular 216 (Compendio sobre factores humanos No. 1-Conceptos fundamentales sobre factores humanos), Organización de Aviación Civil Internacional.

20.3. Circular 253 (Compendio sobre factores humanos No. 12-Los factores humanos en el mantenimiento e inspección de aeronaves), Organización de Aviación Civil Internacional.

20.4. Federal Aviation Regulations FAR Part 145 “Repair Stations”, emitido por la Federal Aviation Administration de los Estados Unidos de América.

20.5. Joint Aviation Regulation JAR Part 145 “Approved Maintenance Organization”, emitido por la Joint Aviation Authorities de Europa.

20.6. Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Chicago, Estados Unidos de América, 1944.

20.7. Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

21. Observancia de esta Norma

21.1. La vigilancia del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana le corresponde a la Autoridad Aeronáutica.

21.2. Lo no contemplado en la presente Norma será resuelto por la Autoridad Aeronáutica.

22. De la evaluación de la conformidad

22.1. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección General de Aeronáutica Civil, verificará el cumplimiento de la presente Norma como sigue:

22.2. A los permisionarios de Talleres Aeronáuticos, a través de la evaluación y aceptación de los respectivos Manuales de Procedimientos del Taller Aeronáutico, así como también a través de la vigilancia de su actualización, la verificación de sus instalaciones, equipos, instrucción y capacitación de su personal, adherencia a las normas que regulan su funcionamiento y las limitaciones de su permiso y especificaciones de operación.

23. Sanciones

23.1. Las violaciones a la presente Norma Oficial Mexicana serán sancionadas en los términos de la Ley de Aviación Civil, sus respectivos Reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables.

24. Vigencia

24.1. La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días posteriores a su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

Dada en la Ciudad de México, a los seis días del mes de enero de dos mil tres.- El Subsecretario de Transporte y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Aéreo, **Aarón Dychter Poltolarek**.- Rúbrica.

PROCEDIMIENTO para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCT2/1995, Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques destinados al transporte de materiales y residuos peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

AARON DYCHTER POLTOLAREK, Subsecretario de Transporte, con fundamento en los artículos 36 fracciones I, IX, XII y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o. fracción II, inciso e, 3o. fracciones I, III, IV-A, XII, XV-A, XVII y XVIII, 38 fracción V, 52, 68, 70 fracción I, 73, 74 y 94 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 5o. fracciones I, VI y IX de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 34, 35 y 36 del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos; 6o. fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y

CONSIDERANDO

Primero.- Que con fecha 17 de noviembre de 1997, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Subsecretaría de Transporte (Dirección General de Autotransporte Federal), expidió a través del **Diario Oficial de la Federación**, la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCT2/1995, Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques destinados al transporte de materiales y residuos peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312.

Segundo.- Que de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, la Evaluación de la Conformidad debe publicarse en el **Diario Oficial de la Federación** para consulta del público en general.

Tercero.- Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 81 de su Reglamento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Subsecretaría de Transporte, ordena la publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, del Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la NOM-020-SCT2/1995, Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques destinados al transporte de materiales y residuos peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312, a efecto de que los interesados dentro de los 60 días naturales siguientes a su fecha de publicación, presenten sus comentarios y observaciones, para su análisis, a la Subsecretaría de Transporte, Dirección General de Autotransporte Federal, sito en Calzada de las Bombas número 411, 9o. piso, colonia Los Girasoles, Delegación Coyoacán, código postal 04920, fax 56 84 01 88, dirección de correo electrónico: iflores@sct.gob.mx.

México, D.F., a 8 de enero de 2003.- El Subsecretario de Transporte, **Aarón Dychter Poltolarek**.- Rúbrica.

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-020-SCT2/1995, REQUERIMIENTOS GENERALES PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE AUTOTANQUES DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIFICACIONES SCT 306, SCT 307 Y SCT 312

INDICE

1. Objetivo

2. Campo de aplicación

3. Referencias

4. Definiciones

5. Disposiciones generales

6. Procedimiento y especificaciones técnicas

7. Consideraciones para el marcado y la certificación

8. Bibliografía

9. Transitorios

10. Anexo

1. Objetivo

Establecer el procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCT2/1995, Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques destinados al transporte de materiales y residuos peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312.

2. Campo de aplicación

La presente Evaluación de la Conformidad es de aplicación para los constructores, reconstructores, transportistas y usuarios de autotanques, de acuerdo a su ámbito de competencia, con especificación SCT 306, SCT 307 y SCT 312, a utilizarse en el transporte de materiales y residuos peligrosos, fabricados a partir del 18 de noviembre de 1997. Los autotanques fabricados con anterioridad a esta fecha, podrán opcionalmente realizar la verificación de las condiciones de integridad de sus autotanques.

3. Referencias

Para la correcta aplicación de este procedimiento, es necesario consultar los siguientes documentos o los que en su momento los sustituyan:

3.1 Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

3.2 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

3.3 NMX-EC-17020-IMNC-2000, Criterios Generales para la Operación de varios tipos de Unidades de Verificación (Organismos de Inspección).

3.4 NMX-EC-065-IMNC-2000/GUIA, ISO/IEC 065:1996 Requisitos Generales para Organismos que operan Sistemas de Certificación de Producto.

3.5 NMX-EC-17025-2000, Criterios Generales para la Operación de Laboratorios de Prueba.

3.6 NOM-012-SCT2, Sobre el Peso y Dimensiones Máximos con que Pueden Circular los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal.

3.7 NOM-019-SCT2/1994, Disposiciones Generales para la limpieza y Control de Remanentes de Sustancias y Residuos Peligrosos en las Unidades que Transportan Materiales y Residuos Peligrosos.

3.8 NOM-023-SCT2/1994, Información Técnica que debe Contener la Placa que Portarán los Autotanques, Recipientes Metálicos Intermedios para Granel (RIG), y Envases de Capacidad Mayor a 450 litros, que Transportan Materiales y Residuos Peligrosos.

4. Definiciones

Para los efectos de estas disposiciones, se entenderá por:

4.1 Ley, se entiende como la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

4.2 Secretaría, se entiende como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

4.3 DGAF, se entiende como la Dirección General de Autotransporte Federal.

4.4 NOM, se entiende como la Norma Oficial Mexicana.

4.5 EA, se entiende como Entidades de Acreditación, autorizadas en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

4.6 Organismo de Certificación, se entiende a las personas morales que tengan por objeto realizar funciones de certificación.

4.7 Unidad de Verificación, se entiende a la persona física o moral que realiza actos de verificación.

4.8 Laboratorio de Prueba, se entiende a aquella instalación que opera en una localidad específicamente determinada y dispone del equipo necesario y personal calificado, para efectuar las mediciones, análisis y pruebas, calibraciones o determinaciones de las características o funcionamientos de materiales, productos o equipos.

4.9 Certificación, se entiende al procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio se ajusta a las normas, lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la normalización nacionales o internacionales.

4.10 Certificado, documento que avala la certificación.

4.11 Certificado de Fabricación, es el documento mediante el cual el fabricante hace constar las características del autotanque o tanque sobre chasis, y que garantiza que cada uno de éstos cumple las especificaciones establecidas en la NOM.

4.12 Comité Técnico de Normalización, es el grupo de trabajo integrado para la elaboración y revisión del presente Procedimiento, en el cual participaron: Nacional de Carrocerías (NACASA); Industria de Remolques Mexicanos (INREMEX); Industrias González (IGSA); Autotanques Bronko; Remolques, Tanques y Equipos, S.A. de C.V. (RETESA); Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR); Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA); Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ); Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Instituto Nacional de Ecología y Secretaría de Salud.

4.13 Verificación, es la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado.

4.14 Dictamen de Pruebas, es el documento que hace constar los resultados de las pruebas efectuadas.

5. Disposiciones generales

5.1 Para el cumplimiento de este Procedimiento de Evaluación de la Conformidad, todo autotanque fabricado a partir del 18 de noviembre de 1997, destinado al transporte de materiales y residuos peligrosos, cuyas características de diseño y construcción, de acuerdo al material peligroso a transportar, deberán observar las especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312, y deberán:

5.1.1 Contar con el Certificado de Fabricación, los autotanques fabricados a partir de la fecha de inicio de vigencia de esta Evaluación de la Conformidad;

5.1.2 Placa metálica de identificación adherida a la pared del tanque;

5.1.3 Memoria de Cálculo o Ficha Técnica expedida por el fabricante;

5.1.4 Dictamen de Verificación (favorable), emitido por el fabricante y en pruebas posteriores por Unidades de Verificación aprobadas y acreditadas.

5.1.5 En los casos de no contar con los documentos de los puntos 5.1.1 y 5.1.3 y para demostrar la vigencia de la periodicidad cuando aplique, la Unidad de Verificación extremará las medidas de seguridad para realizar la verificación con imparcialidad.

5.2 Acreditación y Aprobación.- Los Organismos de Certificación, Laboratorios de Prueba y Unidades de Verificación, interesadas en Evaluar la Conformidad de la presente Norma Oficial Mexicana, deberán contar con la Acreditación de la Entidad de Acreditación respectiva y la Aprobación por parte de la DGAF.

5.3 En las empresas fabricantes de autotanques, se aceptará la utilización de materiales, equipos y procedimientos que cumplan con las normas oficiales mexicanas; a falta de éstas, se pueden utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativos de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

5.4 La Certificación a los fabricantes incluirá la(s) Especificación(es) contenidas en el presente Procedimiento de Evaluación de la Conformidad, y las disposiciones emitidas en la normatividad aplicable para la certificación de producto.

5.5 La vigencia de la Certificación otorgada por los Organismos de Certificación al fabricante, será de 3 años a partir de su fecha de emisión, la cual está sujeta a la verificación anual correspondiente. Las certificaciones realizadas por el fabricante son indefinidas mientras se mantengan las condiciones de integridad de los autotanques, debiendo observar la periodicidad de las pruebas, señaladas en el numeral 6.2 de esta misma Evaluación de la Conformidad.

5.6 Los fabricantes certificados, deberán proporcionar los documentos (certificado, memoria de cálculo, datos de diseño de construcción, croquis de distribución de carga, resultado favorable de pruebas de integridad, etc.), que certifiquen, que los autotanques nuevos se fabricaron de acuerdo con la Norma y especificación respectiva (cuando así le sean requeridos los de uso), así como una placa metálica de identificación y que deberá fijarse a la pared del tanque. La documentación y la placa metálica de identificación deberán cumplir con la información, o especificaciones y características señaladas en esta Norma, o bien, con lo señalado en la NOM-023-SCT2/1994, relativa a la placa metálica que portarán los autotanques establecida con este fin.

5.6.1 La vigencia y periodicidad de las pruebas de integridad estructural de los autotanques se respaldarán con la documentación: Dictamen de Verificación, que otorgue la Unidad de Verificación y un engomado, que se adherirá a un costado de la placa metálica de identificación.

5.6.1.1 Los Laboratorios de Prueba acreditados y aprobados podrán realizar la(s) prueba(s) requerida(s) en este procedimiento y/o en la NOM, o alguna otra prueba específica solicitada por las Unidades de Verificación. Estas serán reconocidas por la DGAF y las Unidades de Verificación correspondientes a efecto de emitir su Dictamen de Verificación.

5.6.1.2 Las pruebas de integridad realizadas por Laboratorios de Prueba que no constituyan una Unidad de Verificación, tendrán una vigencia no mayor a 30 días naturales para efectos de someterlas a consideración de una Unidad de Verificación y obtener el Dictamen de Verificación, para efectos de la periodicidad de las pruebas se tomará la fecha original de las pruebas realizadas por el Laboratorio respectivo, la cual quedará asentada en el Dictamen Final.

5.6.2 El certificado y la placa metálica de identificación de los autotanques nuevos, garantizan el cumplimiento con este procedimiento de Evaluación de la Conformidad y la Norma Oficial Mexicana. El mantenimiento de las condiciones de integridad se demostrará a través del periodo de verificación, de acuerdo a las pruebas señaladas en esta Evaluación de la Conformidad, en el punto 6.2.

5.7 Las Unidades de Verificación elaborarán acta de verificación (inspección), y/o Dictamen de Verificación (inspección), de las pruebas realizadas, por éstas o por Laboratorios de Prueba acreditados y aprobados, anotando las inconformidades detectadas para su corrección, quedando fuera de servicio el autotanque hasta que corrija las deficiencias señaladas y obtenga el Dictamen de Verificación favorable.

5.8 Las Unidades de Verificación para la realización de las pruebas de integridad, solicitarán copia, según sea el caso, de los documentos señalados en el punto 5.1 de esta Evaluación de la Conformidad, excepto a los autotanques fabricados antes del 18 de noviembre de 1997, que soliciten su verificación.

5.9 Toda persona física o moral relacionada en la fabricación, ensamble, carrocería o reconstrucción de un autotanque fabricado con especificación SCT, deberá estar registrada ante la DGAF y contar con las aprobaciones, acreditaciones, autorizaciones, certificaciones, etc., que en el marco de esta Evaluación de la Conformidad se le requieran o por otra dependencia para el desempeño de sus funciones.

5.10 Las Unidades de Verificación, podrán realizar directamente las 6 inspecciones y pruebas básicas señaladas en el punto 6.2, en sus propias instalaciones o bien en los domicilios de los transportistas. La inspección y pruebas en autotanques nuevos, deben realizarse en los domicilios de los fabricantes, previo a su entrega a los transportistas.

5.11 La DGAF realizará periódicamente visitas de supervisión a las Unidades de Verificación, con el objeto de vigilar el cumplimiento de lo establecido en este Procedimiento de Evaluación de la Conformidad, y evitar prácticas discrecionales hacia los particulares.

6. Procedimiento y especificaciones técnicas

6.1 Los autotanques que se encuentren en alguna de las siguientes condiciones requerirán las pruebas
e inspecciones; independiente de la periodicidad señalada en el punto 6.2 de esta misma Evaluación de la Conformidad.

Sin considerar las pruebas o inspecciones periódicas, un autotanque con especificación deberá ser probado y verificado de acuerdo con el procedimiento, antes de proceder a usarse, si:

A) El autotanque muestra evidencia de abolladuras, áreas desgastadas, corroídas, fugas o cualquier otra condición que pueda ser insegura para el servicio del transporte.

B) Si el autotanque estuvo en un accidente y ha sido dañado al grado que afecte la retención del producto.

C) Si el autotanque ha estado fuera de servicio para el transporte de materiales peligrosos por un periodo mayor de un año o más, deben de probarse a presión de acuerdo con el procedimiento antes de volver a utilizarse.

D) El autotanque que haya sido modificado, es decir, cambiado su especificación original.

6.2. Inspección y pruebas periódicas.

INSPECCION Y PRUEBAS

(AUTOTANQUES)

INSPECCION Y/O PRUEBA, ESPECIFICACIONES SCT 306, SCT 307 Y SCT 312	**DESIGNACION Y PERIODICIDAD**	
	Designación	**Periodicidad**
1.- INSPECCION VISUAL EXTERNA: a) Válvulas y accesorios.	V	1 año
2.- INSPECCION VISUAL INTERNA: a) Comparación con las especificaciones de la Norma.	I	1 año
3.- INSPECCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR: a) Todos los autotanques con revestimiento interior.	L	1 año
4.- PRUEBA DE FUGAS	K	1 año
5.- PRUEBA DE PRESION (hidrostática o neumática)	P	5 años
6.- PRUEBAS DE ESPESORES:	T	2 años

En la realización de inspección y pruebas, por parte de las entidades acreditadas y aprobadas, se estará a lo señalado en el numeral 5.3 de este Procedimiento, debiendo observar como mínimo lo dispuesto en el punto 6.3 siguiente.

6.3 Requerimientos mínimos para la verificación y pruebas.

Previo al inicio de la inspección y pruebas, se deberá constatar, que el autotanque haya sido lavado y descontaminado (que esté limpio y desgasificado). Debiendo presentar su certificado de limpieza y descontaminación, o bien la Unidad de Verificación podrá realizar la limpieza y descontaminación como una medida de seguridad preventiva, de conformidad a la NOM-019-SCT2/1994.

6.3.1. Inspección visual externa: (V) cada año.

A) La inspección y prueba visual externa debe incluir como mínimo lo siguiente:

i) El cuerpo y las tapas del tanque deben inspeccionarse buscando áreas corroídas o desgastadas, abolladuras o distorsiones que afecten la integridad del tanque (que induzcan al incumplimiento de la NOM, soldaduras defectuosas o cualquier otra condición, incluyendo fugas o lagrimeo, que puedan hacer que el transporte sea inseguro.

ii) Las tuberías, válvulas y empaques deben ser cuidadosamente inspeccionadas, buscando áreas corroídas, soldaduras defectuosas y otras condiciones incluyendo fugas que pueden hacer que el transporte sea inseguro.

iii) Todos los aditamentos que se usan para apretar las cubiertas de los domos, deben operar correctamente y no existir evidencia de fugas en las cubiertas o tapas y empaques de los domos.

iv) Todos los aditamentos de emergencia y válvulas incluyendo válvulas de cierre automático, válvulas de exceso de flujo y de control remoto, deben de estar libres de corrosión, distorsión, desgaste y cualquier daño externo que obstaculice una operación segura, los aditamentos de cierre de control remoto y las válvulas de cierre automático deben funcionar apropiadamente.

v) Tornillos, tuercas y fusibles faltantes deben reponerse y si están flojos se deberán apretar.

vi) Todas las marcas del autotanque que son requeridas deberán ser legibles.

vii) Todos los accesorios mayores y aditamentos estructurales en autotanques, incluyendo, aditamentos del sistema de suspensión, estructura de conexión y aquellos elementos del ensamble de la quinta rueda que pueden ser inspeccionados sin desmantelar, buscando corrosión o daños con objeto de que se haga una operación segura.

viii) En autotanques que transportan productos corrosivos, se deberán inspeccionar las áreas que están cubiertas por la quinta rueda cuando menos una vez cada dos años, con objeto de buscar áreas corroídas, con distorsión, desgastadas, soldaduras defectuosas o cualquier otra condición que afecte el transporte seguro. El ensamble de la quinta rueda, debe retirarse del tanque para su inspección.

B) El tanque debe probarse hidrostática o neumáticamente cuando:

i) La inspección visual no es posible porque existe revestimiento interno y/o aislamiento externo.

ii) La inspección visual no es posible realizarse por un aislamiento externo, y el autotanque no está equipado con domo (pasa hombre) o abertura de inspección.

C) Todas las válvulas de recierre, de alivio de presión, deben ser inspeccionadas en su parte interna, buscando corrosión o daño con objeto de mantener una operación segura.

Todas las válvulas de recierre, de alivio de presión en autotanques que transporten productos corrosivos se deberán de quitar para inspección y prueba.

Cada una de las válvulas de cierre y alivio de presión se deberán quitar para calibrar a la presión requerida y volverse a cerrar en condición de apriete para evitar fuga. Se deberá calibrar al 90% de la presión indicada de acuerdo con la especificación aplicable a cada autotanque.

D) Las áreas del autotanque que se encuentran corroídas o desgastadas se les tendrá que hacer una prueba de espesores.

E) Los empaques de cualquier abertura de las tapas o cabezas traseras deben ser:

i) Inspeccionadas visualmente buscando fisuras o hendiduras causadas por exposición a la intemperie, y

ii) Remplazarlas si existen grietas o fisuras, las cuales pudieran ocasionar fugas cuando éstas tienen una profundidad considerable.

6.3.2. Inspección visual interna: (I) cada año.

A) La inspección visual interna, debe incluir como mínimo lo siguiente:

i) El cuerpo y las cabezas o tapas del tanque deberán inspeccionarse buscando áreas corroídas, o desgastadas, abolladuras, distorsiones o soldaduras defectuosas, así como cualquier otra condición que pueda ocasionar un transporte inseguro.

ii) El revestimiento de los tanques, debe ser inspeccionado.

B) En las áreas corroídas de las paredes del tanque, se deberá de efectuar una prueba de espesores.

C) Las áreas de revestimiento de un tanque deteriorado o defectuoso, deberán de retirarse. El cuerpo
y las tapas que están por debajo de este revestimiento defectuoso, deberán inspeccionarse. En las áreas corroídas se deben de efectuar una prueba de espesores.

D) Estado general del rompeolas, revisar forma y diseño y su soldadura de unión al cuerpo del tanque.

6.3.3. Inspección del revestimiento interior: (L) cada año.

A) La integridad del revestimiento interno, de acuerdo a este procedimiento, se deberá verificar cuando menos una vez al año.

B) La inspección del revestimiento interior consistirá de:

i) Inspección visual

ii) Prueba de dureza

iii) Prueba dieléctrica

iv) Certificación de control de calidad

6.3.4 Prueba de fugas: (K) cada año.

A) En las pruebas de fugas, independientemente del cuerpo del tanque, se deben de incluir las tuberías y las válvulas, así como los accesorios que estén operando, exceptuando cualquier aditamento de ventilación calibrado para descargar a menos de la presión empleada para la prueba de fugas, las cuales deberán de quitarse o cancelarse durante la prueba. La prueba de fugas debe mantenerse cuando menos cinco minutos. Se deberá proporcionar equipo de protección al personal para evitar accidentes en caso de cualquier falla.

6.3.5 Prueba de presión; (P) cada cinco años.

A) Procedimiento de la prueba.

i) Todas las válvulas de cierre de alivio de presión deben ser removidas del tanque.

ii) En los autotanques que transportan productos corrosivos, se deberán de inspeccionar las áreas cubiertas por la quinta rueda, buscando áreas corroídas, desgastadas, abolladuras,

distorsiones, soldaduras defectuosas o cualquier otra condición que pueda originar un transporte inseguro.

iii) El ensamble de la quinta rueda, debe de ser retirado o removido del autotanque para su inspección.

iv) Cada tanque debe ser probado hidrostática o neumáticamente, a la presión interna mínima especificada en la siguiente tabla:

Tabla IV

ESPECIFICACION	PRESION DE PRUEBA
SCT 306	34.5 Kpa (5 Lbs/inch^2) se cumple con la prueba de fugas.
SCT 307	276 Kpa (40 Lbs/inch^2) o 1.5 veces la presión de diseño o la que resulte mayor.
SCT 312	1.5 veces la presión de diseño.

v) Cada tanque, multitanque o tanque sobre chasis compartimentado, deberá probarse en forma independiente, estando el tanque adyacente, vacío y a presión atmosférica.

vi) Todos los cierres exceptuando la válvula de relevo de presión, deberán de estar en su sitio durante la prueba. Si es dejando los aditamentos éstas deben quedar sin operar, utilizando prensas, tapones o algún aditamento efectivo.

B) Todas las partes de un autotanque que se relacionen con presión, como el sistema de calefacción que emplea como medio el vapor, pero no limitado al mismo o agua caliente para calentar el producto, debe ser probado por presión hidrostática cuando menos una vez cada año. La presión de prueba debe ser de cuando menos 1.5 veces la presión de diseño del sistema de calefacción y deberá mantenerse por cinco minutos. Un sistema de calefacción que emplea tubos para calentar el producto, deberá ser probado para asegurar que no presente fugas en las tuberías de la calefacción que pasen al producto o la atmósfera.

C) Criterios de aprobación.

No puede ser puesto en servicio un autotanque, que presente fugas o pérdida de presión durante la prueba de presión neumática, que muestra distorsión, expansión excesiva permanente o cualquier otra evidencia de debilidad, que pueda representar inseguridad para el transporte.

Se exceptúan los autotanques con sistema de calefacción que ya no les funciona, cuando:

i) El sistema de calefacción permanece en su lugar, estando estructuralmente bien y el producto no se fuga al sistema de calefacción, y

ii) Las placas de información y especificación del sistema de calefacción, se han retirado para indicar que el autotanque no tiene sistema de calefacción en servicio.

6.3.6. Prueba de espesores: (T) cada dos años.

A) Las mediciones deberán de hacerse utilizando de preferencia un calibrador de ultrasonido, que pueda medir espesores con precisión de ±0.05 mm (0.002 de pulgada).

B) Las pruebas de espesores deben de efectuarse en las paredes de un tanque en:

i) En las áreas del cuerpo y tapas del tanque y alrededor de cualquier tubería que retenga producto.

ii) Areas de alta tensión en el cuerpo del tanque tales como la parte inferior central del tanque.

iii) Las áreas cercanas a las aberturas.

iv) Las áreas alrededor de soldaduras.

v) Las áreas alrededor de los refuerzos del cuerpo.

vi) Las áreas alrededor de accesorios.

vii) Areas cerca de los pernos de enganche (quinta rueda) y accesorios.

viii) Areas cerca de los componentes estructurales del sistema de suspensión.

ix) Areas del tanque conocidas como delgadas, cuerpos y líneas de niveles nominales de líquidos.

x) Juntas estructurales en uniones de tanques múltiples de acero al carbón sobre chasis.

xi) Cambiar las placas de especificaciones del tanque, reflejando los nuevos límites de servicio (densidad máxima del producto).

C) Los espesores mínimos para autotanques de especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312 se muestran en las tablas I y II.

Las columnas con descripciones “espesores especificados para manufacturar” muestran los valores mínimos requeridos para construcciones de unidades nuevas y están en las tablas I y II de cada una de las especificaciones “espesores mínimos en servicio”, basadas en 90% del espesor de manufactura indicado en las especificaciones SCT.

El resultado de esta prueba se hará constar en un croquis que señale los puntos de aplicación de las mediciones.

Los requerimientos mínimos señalados para cada una de las inspecciones y pruebas no son limitativos, debiendo ser complementados por las entidades interesadas en evaluar la conformidad al momento de presentar su solicitud de aprobación ante la dependencia.

Tabla I

Espesores mínimos para autotanques de especificación SCT 307 y SCT 312, construidos de acero o aleaciones de acero

ESPESORES ESPECIFICADOS PARA MANUFACTURA			ESPESORES MINIMOS EN SERVICIO	
Calibres	**Milímetros**	**Pulgadas**	**Milímetros**	**Pulgadas**

19”	1.062	0.0422	0.965	0.038
18”	1.214	0.0478	1.092	0.043
17”	1.366	0.0538	1.219	0.048
16”	1.519	0.0598	1.372	0.054
15”	1.709	0.0673	1.549	0.061
14”	1.897	0.0747	1.702	0.067
13”	2.278	0.0897	2.057	0.081
12”	2.657	0.1046	2.388	0.094
11”	3.037	0.1196	2.743	0.108
10”	3.416	0.1345	3.073	0.121
9”	3.797	0.1495	3.429	0.135
8”	4.175	0.1644	3.759	0.148
7”	4.554	0.1793	1.089	0.161
3/16”	4.762	0.1875	4.293	0.169
1/4"	6.350	0.2500	5.715	0.225
5/16”	7.937	0.3125	7.137	0.281
3/8”	9.525	0.3750	8.585	0.338

Tabla II

Espesores mínimos para autotanques de especificación SCT 306, SCT 307 y SCT 312, construidos de aluminio o aleaciones de aluminio

ESPESORES ESPECIFICADOS PARA MANUFACTURA		ESPESORES MINIMOS EN SERVICIO	
Milímetros	**Pulgadas**	**Milímetros**	**Pulgadas**
1.981	0.078	1.778	0.070
2.210	0.087	1.981	0.078
2.438	0.096	2.184	0.086
2.769	0.109	2.489	0.098
3.302	0.130	2.972	0.117
3.581	0.141	3.226	0.127
3.835	0.151	3.454	0.136
4.369	0.172	3.937	0.155
4.394	0.173	3.926	0.156
4.928	0.194	4.445	0.175
4.486	0.216	4.928	0.194
6.020	0.237	5.410	0.213
6.858	0.270	6.172	0.243
9.144	0.360	8.230	0.324
11.430	0.450	10.287	0.405
13.716	0.540	12.344	0.486

7. Consideraciones para el marcado y la certificación

7.1 Marcado de inspección y pruebas para tanques certificados.

A) Cada autotanque que ha pasado favorablemente la inspección y pruebas periódicas de acuerdo con los procedimientos anteriores estipulados, deberá marcarse.

B) El marcado debe ser en forma legible mostrando la fecha y el tipo de inspección y prueba efectuada (calcas autoadheribles). Coincidente con el Dictamen de referencia.

C) El marcado deberá ser en letras y números cuando menos de una medida de 32 mm (1.25") de altura, y deben colocarse en el cuerpo del tanque cerca de la placa metálica de identificación o en la tapa frontal.

D) El tipo de inspección o prueba, deberá ser abreviado como sigue:

Abreviatura	Descripción
"V"	Inspección visual externa.
"I"	Inspección visual interna.
"P"	Prueba de presión.
"L"	Prueba de revestimiento interior.
"K"	Prueba de fugas.
"T"	Prueba de espesores.

Por ejemplo:

Las marcas "02-99 VIPK", indican que en el mes de febrero de 1999 se efectuaron y pasaron las inspecciones y pruebas: Visual Externa, Visual Interna, Presión y Fugas. Complementariamente se adicionarán los datos de registro de la Unidad de Verificación.

E) Para un autotanque compuesto de varios tanques construidos con la misma especificación que fueron inspeccionados y probados en la misma fecha, un juego de marcas de inspección y pruebas puede ser utilizado para satisfacer los requisitos arriba señalados.

Para un autotanque compuesto de varios tanques construidos con diferentes especificaciones y que han sido inspeccionados y probados en diferentes intervalos las marcas deben de aparecer en el orden de localización que corresponden al tanque es decir del frente hacia atrás.

F) La vigencia del Dictamen de Verificación, corresponderá a la periodicidad de las inspecciones y pruebas, señaladas en el punto 6.2 de esta Evaluación de la Conformidad, así como al engomado o placa metálica de identificación, según corresponda.

8. Bibliografía

8.1 Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 1 de julio de 1992 y sus reformas.

8.2 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 14 de enero de 1999.

8.3 Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, publicado el 7 de abril de 1993.

8.4 SNC-02-199, Requisitos Generales para la Acreditación de los Laboratorios de Prueba.

8.5 Cargo Tank Hazardous Material Regulations Published by National Tank Truck Carriers, Inc. Referencia; HM 49 CFR 178.340, DOT., E.U.A.

8.6 Código ASME (American Society of Mechanical Engineers) Boiler and Pressure vessel Code, Sections; II, V, VIII y IX.

8.7 Código Federal de Regulaciones, 49 Transportación, parte 178.340-178.343, serie 300. Autotanques, Administración de Investigación y Programas Especiales, Departamento de Transporte de los Estados Unidos, Washington, D.C., octubre de 1992.

8.8 Ley sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas, capítulo 34, SC-1992, Ministerio de Transporte de Canadá.

8.9 Reglamento sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas del Ministerio de Transporte de Canadá, incluso enmiendas.

9. Transitorios

PRIMERO.- Este Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad entrará en vigor a los 90 días naturales posteriores a su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

SEGUNDO.- El incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana será sancionado de acuerdo a lo establecido en los artículos 34, 35 y 36 en el título noveno del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales
y Residuos Peligrosos.

TERCERO.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitará a la Secretaría de Economía, cumpliendo con los términos y requisitos establecidos por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización
y su Reglamento, que lleve a cabo las formalidades necesarias para concertar acuerdos de reconocimiento mutuo, de los resultados de la Evaluación de la Conformidad, así como de las acreditaciones otorgadas con instituciones oficiales extranjeras e internacionales, en un plazo no mayor a dos años, a partir de la fecha de inicio de vigencia de este procedimiento de Evaluación de la Conformidad.

Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá que las entidades de acreditación
y las personas acreditadas, concerten acuerdos de similar naturaleza a los referidos en el párrafo anterior.

ANEXO 1

DICTAMEN DE VERIFICACION: INSPECCION Y PRUEBAS DE AUTOTANQUES: NOM-020-SCT2/1995, "REQUERIMIENTOS GENERALES PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE AUTOTANQUES DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIFICACIONES SCT 306, SCT 307 Y SCT 312.

RAZON SOCIAL DE LA UNIDAD DE VERIFICACION

DEL AUTOTRANSPORTE (UVA)

No. de Verificación: _____

No. de Registro: _____

No. ECONOMICO DE LA UNIDAD Y PLACAS:	FECHA:	No. DE IDENTIFICACION VEHICULAR:
MARCA:	AÑO/MODELO:	ESPECIFICACION:

INSPECCION Y PRUEBAS

AUTOTANQUES

	PRUEBA O INSPECCION	DESIGNACION	Vo. Bo.	OBSERVACIONES
1.	INSPECCION VISUAL EXTERNA	V		
2.	INSPECCION VISUAL INTERNA	I		
3.	INSPECCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR	L		
4.	PRUEBA DE FUGAS	K		
5.	PRUEBA DE PRESION	P		
6.	PRUEBA DE ESPESORES	T		

NOTA: la lista de revisión complementaria de esta dictaminación, cubrirá como mínimo el desglose para cada prueba, señalado en el punto 6.3 de esta Evaluación de la Conformidad, pudiendo ser complementado por la Unidad de Verificación de acuerdo a las características de cada autotanque. Este documento será archivado en los expedientes de la UVA.

No. DE ORDEN DE TRABAJO:	PROBADO POR: (NOMBRE DE VERIFICADOR)	CLIENTE:
APROBADO		NECESITA CORREGIR DEFICIENCIAS (ANEXAR DETALLE DE ACUERDO A LA REVISION)
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE VERIFICACION		RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE VERIFICACION

NOTA: este documento se acompaña de las especificaciones, condiciones y en caso de diagramas bajo las cuales se desarrollo la prueba correspondiente.

C/CRIS/DOCUMENTOS NOM-020/EVALUACION DE LA CONFORMIDAD

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio El Despreciado, expediente número 508730, Municipio de Tecpatán, Chis.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento
y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 508730, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 508730, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "El Despreciado", con una superficie de 05-87-31 (cinco hectáreas, ochenta y siete áreas, treinta y una centiáreas), localizado en el Municipio de Tecpatán del Estado de Chiapas.

2o.- Que con fecha 23 de julio de 1994 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 880085, de fecha 7 de marzo de 2001 emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 17 grados, 22 minutos, 00 segundos; y de longitud Oeste 93 grados, 35 minutos, 00 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Natividad Jiménez Mendoza

AL SUR: Jorge Alvarez Ramos

AL ESTE: Ejido "Rómulo Calzada"

AL OESTE: Hilario Escobar Méndez

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 7 de marzo de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 880085, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 05-87-31 (cinco hectáreas, ochenta y siete áreas, treinta y una centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 17 grados, 22 minutos, 00 segundos; y de longitud Oeste 93 grados, 35 minutos, 00 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Natividad Jiménez Mendoza

AL SUR: Jorge Alvarez Ramos

AL ESTE: Ejido "Rómulo Calzada"

AL OESTE: Hilario Escobar Méndez

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 05-87-31 (cinco hectáreas, ochenta y siete áreas, treinta y una centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 29 de abril de 2002.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Gilberto José Hershberger Reyes**.- Rúbrica.- La Directora General de Ordenamiento y Regularización, **María del Rosario Garza Alejandro**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio El Paraíso, expediente número 508742, Municipio de La Concordia, Chis.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento
y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 508742, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 508742, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "El Paraíso", con una superficie de 10-66-74 (diez hectáreas, sesenta y seis áreas, setenta y cuatro centiáreas), localizado en el Municipio de La Concordia del Estado de Chiapas.

2o.- Que con fecha 23 de julio de 1994 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 712448, de fecha 2 de agosto de 2001 emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 15 grados, 48 minutos, 13 segundos; y de longitud Oeste 92 grados, 54 minutos, 31 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Belisario Gómez de la Cruz

AL SUR: Miguel López Flores

AL ESTE: Isaías Pérez Martínez

AL OESTE: Abelardo López Flores

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 2 de agosto de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 712448, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 10-66-74 (diez hectáreas, sesenta y seis áreas, setenta y cuatro centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 15 grados, 48 minutos, 13 segundos; y de longitud Oeste 92 grados, 54 minutos, 31 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Belisario Gómez de la Cruz

AL SUR: Miguel López Flores

AL ESTE: Isaías Pérez Martínez

AL OESTE: Abelardo López Flores

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 10-66-74 (diez hectáreas, sesenta y seis áreas, setenta y cuatro centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 30 de mayo de 2002.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Gilberto José Hershberger Reyes**.- Rúbrica.- La Directora General de Ordenamiento y Regularización, **María del Rosario Garza Alejandro**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio Los Cerros de Líbano, expediente número 508806, Municipio de La Concordia, Chis.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento
y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 508806, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 508806, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "Los Cerros de Líbano", con una superficie de 38-60-31 (treinta y ocho hectáreas, sesenta áreas, treinta y una centiáreas), localizado en el Municipio de La Concordia del Estado de Chiapas.

2o.- Que con fecha 20 de diciembre de 1994 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 881040, de fecha 3 de abril de 2001 emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 16 grados, 07 minutos, 00 segundos; y de longitud Oeste 92 grados, 41 minutos, 00 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Idelfonso Velasco Reyes

AL SUR: Oscar Velasco Reyes y Salomón Coutiño Gómez

AL ESTE: Salomón Coutiño Gómez e Idelfonso Velasco Reyes

AL OESTE: Terreno presunto nacional y Oscar Velasco Reyes

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 3 de abril de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 881040, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 38-60-31 (treinta y ocho hectáreas, sesenta áreas, treinta y una centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 16 grados, 07 minutos, 00 segundos; y de longitud Oeste 92 grados, 41 minutos, 00 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Idelfonso Velasco Reyes

AL SUR: Oscar Velasco Reyes y Salomón Coutiño Gómez

AL ESTE: Salomón Coutiño Gómez e Idelfonso Velasco Reyes

AL OESTE: Terreno presunto nacional y Oscar Velasco Reyes

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 38-60-31 (treinta y ocho hectáreas, sesenta áreas, treinta y una centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 30 de mayo de 2002.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Gilberto José Hershberger Reyes**.- Rúbrica.- La Directora General de Ordenamiento y Regularización, **María del Rosario Garza Alejandro**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio Plan de las Toreras, expediente número 509040, Municipio de Jiquipilas, Chis.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 509040, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 509040, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "Plan de las Toreras", con una superficie de 86-95-80 (ochenta y seis hectáreas, noventa y cinco áreas, ochenta centiáreas), localizado en el Municipio de Jiquipilas del Estado de Chiapas.

2o.- Que con fecha 23 de diciembre de 1994 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 881135, de fecha 30 de octubre de 2001 emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 16 grados, 28 minutos, 00 segundos; y de longitud Oeste 93 grados, 35 minutos, 00 segundos, y colindancias:

AL NORTE: César Cal y Mayor Alvarez y Jorge P. Ruiz Cruz

AL SUR: Francisco Zamora León

AL ESTE: Mario Gómez Velázquez

AL OESTE: Eleazar Ramos López

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 30 de octubre de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 881135, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 86-95-80

(ochenta y seis hectáreas, noventa y cinco áreas, ochenta centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 16 grados, 28 minutos, 00 segundos; y de longitud Oeste 93 grados, 35 minutos, 00 segundos, y colindancias:

AL NORTE: César Cal y Mayor Alvarez y Jorge P. Ruiz Cruz

AL SUR: Francisco Zamora León

AL ESTE: Mario Gómez Velázquez

AL OESTE: Eleazar Ramos López

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 86-95-80 (ochenta y seis hectáreas, noventa y cinco áreas, ochenta centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 30 de mayo de 2002.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Gilberto José Hershberger Reyes**.- Rúbrica.- La Directora General de Ordenamiento y Regularización, **María del Rosario Garza Alejandro**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio Plan del Higo, expediente número 509128, Municipio de Villa Corzo, Chis.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 509128, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 509128, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "Plan del Higo", con una superficie de 230-25-78 (doscientas treinta hectáreas, veinticinco áreas, setenta y ocho centiáreas), localizado en el Municipio de Villa Corzo del Estado de Chiapas.

2o.- Que con fecha 18 de agosto de 1997 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 713200, de fecha 9 de abril de 2002 emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 15 grados, 55 minutos, 28 segundos; y de longitud Oeste 93 grados, 10 minutos, 45 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Romeo Coutiño Marina y reserva La Frailescana

AL SUR: Arnulfo Díaz Rodas e Inocente Balbuena

AL ESTE: Inocente Balbuena y reserva La Frailescana

AL OESTE: Reserva La Frailescana

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 9 de abril de 2002 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 713200, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 230-25-78 (doscientas treinta hectáreas, veinticinco áreas, setenta y ocho centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 15 grados, 55 minutos, 28 segundos; y de longitud Oeste 93 grados, 10 minutos, 45 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Romeo Coutiño Marina y reserva La Frailescana

AL SUR: Arnulfo Díaz Rodas e Inocente Balbuena

AL ESTE: Inocente Balbuena y reserva La Frailescana

AL OESTE: Reserva La Frailescana

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 230-25-78 (doscientas treinta hectáreas, veinticinco áreas, setenta y ocho centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 30 de mayo de 2002.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Gilberto José Hershberger Reyes**.- Rúbrica.- La Directora General de Ordenamiento y Regularización, **María del Rosario Garza Alejandro**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio El Sacrificio, expediente número 513198, Municipio de Pijijiapan, Chis.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento
y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 513198, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 513198, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "El Sacrificio", con una superficie de 32-20-53 (treinta y dos hectáreas, veinte áreas, cincuenta y tres centiáreas), localizado en el Municipio de Pijijiapan del Estado de Chiapas.

2o.- Que con fecha 19 de enero de 1998 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 713081, de fecha 19 de marzo de 2002 emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 15 grados, 47 minutos, 58 segundos; y de longitud Oeste 93 grados, 13 minutos, 26 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Poblado Nuevo Tenejapa y Guillermo López Meza

AL SUR: Poblado Porfirio García

AL ESTE: Bartolo Meza Molina y Guillermo López Meza

AL OESTE: Poblado Nuevo Tenejapa

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 19 de marzo de 2002 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 713081, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 32-20-53 (treinta
y dos hectáreas, veinte áreas, cincuenta y tres centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 15 grados, 47 minutos, 58 segundos; y de longitud Oeste 93 grados, 13 minutos, 26 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Poblado Nuevo Tenejapa y Guillermo López Meza

AL SUR: Poblado Porfirio García

AL ESTE: Bartolo Meza Molina y Guillermo López Meza

AL OESTE: Poblado Nuevo Tenejapa

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad

de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 32-20-53 (treinta y dos hectáreas, veinte áreas, cincuenta y tres centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 30 de mayo de 2002.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Gilberto José Hershberger Reyes**.- Rúbrica.- La Directora General de Ordenamiento y Regularización, **María del Rosario Garza Alejandro**.- Rúbrica.

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA

LISTADO de extractos de las resoluciones emitidas por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Federal de Competencia.

EXTRACTO DE RESOLUCIONES

Por instrucciones del Presidente de la Comisión Federal de Competencia y con fundamento en los artículos 28 y 29 de la Ley Federal de Competencia Económica, 2o. de su Reglamento, así como en los artículos 8o. fracciones II y III, 22 fracción IX y 23 fracción XVI del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia, se publican los siguientes extractos de las resoluciones emitidas por el Pleno:

I.- Concentraciones notificadas por las siguientes empresas:

1. *Isis Vermögensverwaltung GMBH/Dragoco, S.A.*

Transacción notificada

Tiene como antecedente una operación a nivel mundial por medio de la cual EQT Northern Europe a través de Isis Vermögensverwaltung GMBH (Isis), adquiere las acciones de Dragoco Gerberding & Co. AG
y Haarmann & Reimer.

Como consecuencia, Isis tendrá el control indirecto de las empresas mexicanas Dragoco, S.A. y Haarmann y Reimer, S.A.

Resolución

El Pleno de la Comisión, en su sesión del 31 de octubre de 2002, resolvió autorizar la transacción notificada.

2. *Northrop Grumman Corporation/TRW, Inc.*

Transacción notificada

Tiene como antecedente una operación a nivel internacional mediante la cual Northrop Grumman Corporation (Grumman), a través de Richmond Acquisition Corp., adquiere TRW, Inc. (TRW).

Como consecuencia Grumman será el propietario indirecto de las acciones representativas del capital social de las subsidiarias mexicanas de TRW.

Resolución

El Pleno de la Comisión, en su sesión del 31 de octubre de 2002, resolvió autorizar la transacción notificada.

3. *Demag Holding, Sarl/Stalibus, S.A. de C.V.*

Transacción notificada

Tiene como antecedente una operación a nivel internacional, por medio de la cual KKR 1996 Fund, Limited Partnership y KKR European Fund, Limited Partnership, a través de Demag Holding, Sarl (Demag), adquirirán diversas compañías y las unidades de negocio de Cerámica, Redes y Medidores de Siemens Aktiengesellschaft.

En México, Demag adquirirá el control accionario de Stalibus, S.A. de C.V., Landis & Gyr, S.A. de C.V. y una sucursal de Krauss-Maffei Corporation.

La concentración actualiza los supuestos de la fracción III del artículo 20 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

Resolución

El Pleno de la Comisión, en su sesión del 24 de octubre de 2002, resolvió autorizar la transacción notificada.

4. *Gas Express Nieto de México, S.A. de C.V./Compañías Unidas de Gas, S.A. de C.V.*

Transacción notificada

Consiste en la fusión de Gas Express Nieto de México, S.A. de C.V. con Compañías Unidas de Gas, S.A. de C.V.; Equipos y Gas, S.A. de C.V. y Carburación del Valle, S.A. de C.V., subsistiendo la primera como fusionante y desapareciendo las siguientes como fusionadas.

La concentración actualiza los supuestos de la fracción II del artículo 20 de la LFCE.

Resolución

El Pleno de la Comisión, en su sesión del 24 de octubre de 2002, resolvió autorizar la transacción notificada.

5. *Vitro Plan, S.A. de C.V./AFG Industries, Inc.*

Transacción notificada

Consiste en una coinversión entre Vitro Plan, S.A. de C.V. y AFG Industries, Inc., para la producción conjunta de vidrio flotado, mediante la aportación de activos, capital y tecnología a una empresa de reciente constitución denominada Vitro AFG, S.A. de C.V.

La concentración actualiza los supuestos de la fracción III del artículo 20 de la LFCE.

Resolución

El Pleno de la Comisión, en su sesión del 10 de octubre de 2002, resolvió autorizar la transacción notificada.

6. *HSBC Holdings PLC/Grupo Financiero Bital, S.A. de C.V.*

Transacción notificada

Consiste en la adquisición de acciones representativas del capital social de Grupo Financiero Bital, S.A. de C.V. por parte de HSBC Holdings PLC, tomando el control de diversas subsidiarias del grupo. Posteriormente, se llevará a cabo la fusión de Bital, Institución de Banca Múltiple y HSBC Bank México, S.A.

La concentración actualiza los supuestos de la fracción I del artículo 20 de la LFCE.

Resolución

El Pleno de la Comisión, en su sesión del 17 de octubre de 2002, resolvió autorizar la transacción notificada.

7. *Centro Distribuidor de Cemento, S.A. de C.V./Xtracril, S.A. de C.V.*

Transacción notificada

Consiste en la fusión de Xtracril, S.A. de C.V. en Centro Distribuidor de Cemento, S.A. de C.V., subsistiendo la última.

La transacción se notifica con fundamento en la fracción II del artículo 20 de la LFCE.

Resolución

El Pleno de la Comisión, en su sesión del 17 de octubre de 2002, resolvió autorizar la transacción notificada.

8. *Pactiv Corporation/Central de Bolsas, S.A. de C.V.*

Transacción notificada

La adquisición por parte de Pactiv Corporation (Pactiv) de acciones representativas del capital social de Central de Bolsas, S.A. de C.V. (Central), propiedad de diversas personas físicas.

La transacción se notifica con fundamento en la fracción III del artículo 20 de la LFCE.

Resolución

El Pleno de la Comisión, en su sesión del 31 de octubre de 2002, resolvió autorizar la transacción notificada.

9. *Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey/Aquanova, S.A. de C.V.*

Transacción notificada

Desc, S.A. de C.V. y Agrobios Corporativo, S.A. de C.V., donan de manera no remunerativa ni onerosa a favor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Enseñanza e Investigación Superior, A.C., las acciones representativas del capital social de Aquanova, S.A. de C.V. y de sus subsidiarias.

La transacción se notifica con fundamento en la fracción II del artículo 20 de la LFCE.

Resolución

El Pleno de la Comisión, en su sesión del 24 de octubre de 2002, resolvió autorizar la transacción notificada.

10. *Tenaris, S.A./Tubos de Acero de México, S.A.*

Transacción notificada

Consiste en la adquisición por parte de Tenaris, S.A., de acciones representativas del capital social de Tubos de Acero de México, S.A. y subsidiarias, propiedad del público inversionista.

La transacción se notifica con fundamento en la fracción I del artículo 20 de la LFCE.

Resolución

El Pleno de la Comisión, en su sesión del 17 de octubre de 2002, resolvió autorizar la transacción notificada.

11. *Asesoría de Grupo, S.A. de C.V./Consorcio Situr, S.A. de C.V.*

Transacción notificada

Consiste en dos operaciones: **i)** la fusión entre Asesoría de Grupo, S.A. (AG) de C.V., y Consorcio Situr, S.A. de C.V., subsistiendo la primera como fusionante, y **ii)** la fusión entre AG y 49 sociedades mexicanas subsidiarias de Grupo Sidek, S.A. de C.V., subsistiendo la primera como fusionante.

La transacción se notifica con fundamento en la fracción II del artículo 20 de la LFCE.

Resolución

El Pleno de la Comisión, en su sesión del 31 de octubre de 2002, resolvió autorizar la transacción notificada.

12. *EchoStar Communications Corporation/Hughes Electronics Corporation*

Transacción notificada

Tiene como antecedente una operación a nivel internacional, que consiste en la adquisición por parte de EchoStar Communications Corporation (Echostar), de acciones representativas del capital social de Hughes Electronics Corporation. Como consecuencia en México, Echostar adquiere indirectamente acciones de Grupo Galaxy Mexicana, S. de R.L. de C.V., Controladora Satelital de México, S. de R.L. de C.V. y W.P. Com, S. de R.L. de C.V.

La transacción se notifica con fundamento en la fracción II del artículo 20 de la LFCE.

Resolución

El Pleno de la Comisión, en su sesión del 31 de octubre de 2002, resolvió autorizar la transacción notificada.

II.- Denuncias

13. *Prácticas monopólicas en los mercados de transporte interurbano y de acceso de señales telefónicas*

Denuncia

El 11 de agosto de 1999, Avantel, S.A. de C.V. (Avantel) denunció a Teléfonos de México, S.A. de C.V. (Telmex).

El 19 de agosto de 1999, Alestra, S. de R.L. de C.V. (Alestra) denunció hechos que fueron integrados a este procedimiento.

El 18 de febrero de 2000, con base en la información recabada a lo largo de la investigación, la Comisión Federal de Competencia resolvió emplazar a Telmex como presunto responsable de prácticas monopólicas relativas violatorias de los artículos 10o. fracciones V y VII de la LFCE y 7o. fracción V de su Reglamento (RLFCE), consistentes en la negativa de recibir solicitudes para tramitar con mayor celeridad servicios prioritarios, pagos para contratación de servicios de acceso e interconexión, reduciendo así la demanda que enfrentan las denunciantes en los servicios que proporcionan, así como el desplazamiento indebido de dichas empresas de los mercados de transporte interurbano, que involucra líneas, el de transporte interurbano, que abarca a los circuitos y afecta directamente a los mercados de larga distancia nacional y larga distancia internacional, inhibiendo y obstaculizando el proceso de competencia y libre concurrencia en dichos mercados. Esta misma fecha la Comisión apercibió a Telmex, filiales y subsidiarias para que se abstuvieran de realizar las prácticas monopólicas investigadas.

Las denunciantes se desistieron de su denuncia mediante escritos presentados con fecha del 16 de enero y 1 de febrero de 2001, respectivamente. La Comisión las tuvo por desistidas y continuó con el procedimiento en virtud de que su sustanciación es de interés público.

Resolución

El Pleno de la Comisión, en su sesión del 20 de febrero de 2002, resolvió por mayoría de votos: 1) declarar a Telmex responsable de la realización de las prácticas monopólicas señaladas; 2) ordenar la supresión inmediata de las mismas, y 3) imponer multas.

Recurso de reconsideración

El 6 de junio de 2002, Telmex interpuso recurso de reconsideración en contra de la resolución antes referida.

Resolución al Recurso

El Pleno de la Comisión, en su sesión del 22 de agosto de 2002, resolvió por mayoría de votos declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por Telmex y confirmar en sus términos la resolución dictada el 20 de febrero de 2002.

III.- Licitaciones

14. *Licitación pública para la adjudicación de un contrato de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica*

Licitación

Licitación Pública Internacional para la adjudicación de un contrato de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica y compraventa de energía eléctrica asociada, mediante el esquema de Productor Independiente de Energía (PIE), correspondiente al Proyecto de Inversión Financiada denominado "17 CC La Laguna II", de conformidad con la convocatoria publicada el 4 de octubre de 2001 en el **Diario Oficial de la Federación** y bases respectivas.

Resolución

El Pleno de la Comisión, en su sesión del 11 de julio de 2002, emitió opinión favorable sobre la participación de Iberdrola Energía, S.A. en la licitación referida.

IV.- Asuntos Diversos

15. ***Licitación de un contrato para construir y explotar una marina turística en Baja California Sur***

Transacción notificada

Licitación pública para el otorgamiento de un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones derivados de concesión, para construir, explotar, usar y aprovechar una marina turística con una superficie de 14,337 m^2 de zona federal marítima, ubicada dentro del recinto portuario de Cabo San Lucas, Baja California Sur (CSL), de conformidad con la Convocatoria Pública Nacional publicada el 15 de marzo de 2002 en el **Diario Oficial de la Federación**.

Resolución

El Pleno de la Comisión, en su sesión del 6 de junio de 2002, resolvió emitir opinión favorable a Marinas del Rey, S. de R.L. de C.V. y opinión no favorable a Cabo Marina, S.A. de C.V. sobre su participación en la licitación referida.

16. ***Solicitud de opinión favorable para la venta del capital social de Frecuenet, S.A. de C.V. a favor de Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.***

Transacción notificada

Solicitud de opinión favorable de Frecuenet, S.A. de C.V. para que Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. y Sercotel, S.A. de C.V. adquieran la totalidad de las acciones representativas de su capital social, propiedad de Impsat Fiber Networks, Inc. y Carope, S.A. de C.V.

Resolución

El Pleno de la Comisión, en su sesión del 11 de junio de 2002, resolvió otorgar opinión no favorable a Frecuenet sobre la realización de la operación descrita anteriormente.

17. ***Licitación pública para el establecimiento y explotación de una instalación portuaria especializada en el puerto de Guaymas, Sonora***

Transacción notificada

Aviso sobre la intención de Cargill de México, S.A. de C.V. (Cargill) y Grupo Contri, S.A. de C.V. (Contri), de participar en la licitación pública para el otorgamiento de un contrato de cesión parcial de los derechos derivados de concesión, para el establecimiento, uso, aprovechamiento y explotación de una instalación portuaria especializada de uso particular o para terceros, para el manejo y procesamiento de granel agrícola en tráfico de cabotaje y de exportación en el puerto de Guaymas, Sonora, de conformidad con la convocatoria publicada el 6 de mayo de 2002 en el **Diario Oficial de la Federación** y con las bases respectivas.

Resolución

El Pleno de la Comisión, en su sesión del 7 de agosto de 2002, emitió opinión favorable sobre la participación de Cargill y Contri en la licitación de referencia.

18. *Solicitud de opinión favorable para la cesión de dos títulos de concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones.*

Transacción notificada

Solicitud de opinión favorable de Sistemas de Comunicaciones Troncales, S.A. de C.V. (Siscot) y Fonotransportes Nacionales, S.A. de C.V. (Fonotransportes), para la cesión de derechos y obligaciones derivados de dos títulos de concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones y bandas de frecuencias asociadas para prestar el Servicio Móvil de Radiocomunicación Especializada de Flotillas (SMREF) de los que son titulares, a favor de Servicios Troncalizados, S.A. de C.V.

Resolución

El Pleno de la Comisión, en su sesión del 12 de septiembre de 2002, emitió opinión favorable sobre la solicitud de Siscot y Fonotransportes respecto a la cesión de referencia.

México, D.F., a 7 de enero de 2003.- El Secretario Ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia, **Luis A. Prado Robles**.- Rúbrica.

(R.- 173108)

PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

AVISO por el que se informa al público en general la ubicación del nuevo domicilio del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura Federal.- Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.

LUIS MANUEL C. MEJAN CARRER, Director General del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en el artículo 324, fracciones I y II, de la Ley de Concursos Mercantiles, informa al público en general por medio del presente:

AVISO

Que la ubicación del nuevo domicilio del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles se encuentra en:

Avenida Insurgentes Sur número 2065, Mezzanine, colonia San Angel, Delegación Alvaro Obregón, código postal 01000, en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Lo que se comunica con el objeto de que la correspondencia, trámites y demás asuntos de la competencia del Instituto, se envíen y realicen en el domicilio antes mencionado.

Expedido en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil dos.- El Director General del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, **Luis Manuel C. Méjan Carrer**.- Rúbrica.

(R.- 173125)

BANCO DE MEXICO

TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley del Banco de México; en los artículos 8o. y 10o. del Reglamento Interior del Banco de México, y en los términos del numeral 1.2 de las Disposiciones Aplicables a la Determinación del Tipo de Cambio para Solventar Obligaciones Denominadas en Moneda

Extranjera Pagaderas en la República Mexicana, publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el 22 de marzo de 1996, el Banco de México informa que el tipo de cambio citado obtenido el día de hoy conforme
al procedimiento establecido en el numeral 1 de las Disposiciones mencionadas, fue de $10.5083 M.N. (DIEZ PESOS CON CINCO MIL OCHENTA Y TRES DIEZMILESIMOS MONEDA NACIONAL) por un dólar de los EE.UU.A.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Atentamente

México, D.F., a 16 de enero de 2003.

BANCO DE MEXICO

Director de Disposiciones de Banca Central	Gerente de Operaciones Nacionales
Fernando Corvera Caraza	**Jaime Cortina Morfin**
Rúbrica.	Rúbrica.

TASAS de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TASAS DE INTERES DE INSTRUMENTOS DE CAPTACION BANCARIA EN MONEDA NACIONAL

	TASA BRUTA		**TASA BRUTA**
I. DEPOSITOS A PLAZO FIJO		II. PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	
A 60 días		A 28 días	
Personas físicas	3.78	Personas físicas	3.42
Personas morales	3.78	Personas morales	3.42
A 90 días		A 91 días	
Personas físicas	3.93	Personas físicas	3.73
Personas morales	3.93	Personas morales	3.73
A 180 días		A 182 días	
Personas físicas	4.09	Personas físicas	3.94
Personas morales	4.09	Personas morales	3.94

Las tasas a que se refiere esta publicación, corresponden al promedio de las determinadas por las instituciones de crédito para la captación de recursos del público en general a la apertura del día 16 de enero de 2003. Se expresan en por ciento anual y se dan a conocer para los efectos a que se refiere la publicación de este Banco de México en el **Diario Oficial de la Federación** de fecha 11 de abril de 1989.

México, D.F., a 16 de enero de 2003.

BANCO DE MEXICO

Director de Disposiciones de Banca Central	Director de Información del Sistema Financiero
Fernando Corvera Caraza	**Cuauhtémoc Montes Campos**
Rúbrica.	Rúbrica.

(R.- 173223)

TASA de interés interbancaria de equilibrio.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO

Según resolución de Banco de México publicada en el **Diario Oficial de la Federación** del 23 de marzo
de 1995, y de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Circular 2019/95, modificada mediante Circular-Telefax 4/97 del propio Banco del 9 de enero de 1997, dirigida a las instituciones de banca múltiple,
se informa que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días, obtenida el día de hoy, fue de 8.8700 por ciento.

La tasa de interés citada se calculó con base a las cotizaciones presentadas por: BBVA Bancomer, S.A., Banca Serfin S.A., Banco Internacional S.A., Banco Nacional de México S.A., Banco Inbursa S.A., Banco Interacciones S.A., Banco Invex S.A., Banco J.P.Morgan S.A., ING Bank México S.A., Banco Credit Suisse First Boston (México), S.A., ScotiaBank Inverlat, S.A. y Banco Mercantil Del Norte S.A.

México, D.F., a 16 de enero de 2003.

BANCO DE MEXICO

Director de Disposiciones de Banca Central	Gerente de Operaciones Nacionales
Fernando Corvera Caraza	**Jaime Cortina Morfin**
Rúbrica.	Rúbrica.

AVISOS
JUDICIALES Y GENERALES

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Quinto de Distrito
Puebla, Pue.

EDICTO

Al ciudadano José Arnulfo Fernández Hernández.

En los autos del juicio de amparo número 864/2002, promovido por Víctor Mauricio Macchetto Navarro, en su carácter de apoderado legal de Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexicano, contra actos del Juez Décimo de lo Civil de esta ciudad, reclamó la resolución de fecha veintisiete de mayo del año dos mil dos, que resolvió el incidente de liquidación de sentencia promovido por dicho apoderado legal, dentro del expediente 165/95, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Rolando Rodríguez López y Rodolfo Vega Domínguez contra José Arnulfo Fernández Hernández y otra; y fue radicado en este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, se ha señalado a usted como tercero perjudicado, y como se desconoce su domicilio actual, se ha ordenado emplazarlo por edictos, que deberán publicarse por tres veces de siete en siete días en el **Diario Oficial de la Federación** y en el periódico El Heraldo de México en Puebla, por ser uno de los de mayor circulación en la República Mexicana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30, fracción II de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos, de aplicación supletoria a la ley citada. Queda a su disposición en la actuaría de este Juzgado copia simple de la demanda de garantías,

haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación y se le hace saber además, que se han señalado las diez horas con veinte minutos del día once de diciembre del año dos mil dos, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este asunto.

Atentamente

Puebla, Pue., a 6 de noviembre de 2002.

El Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado

Lic. Miguel Nahim Nicolás Jiménez

Rúbrica.

(R.- 172466)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Séptimo de Distrito "A" en Materia Civil en el Distrito Federal
EDICTO
En los autos del juicio de amparo número 1021/2002, promovido por Banca Serfin Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfin, por conducto de su apoderado legal Jesús Acosta Pérez, contra actos del Juez Décimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal y subdirector de Procedimientos Registrales del Area Jurídica y del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, con fecha seis de diciembre de dos mil dos, se dictó un auto por el que se ordena emplazar a la parte tercera perjudicada, Constructora Gadsden y Gadsden, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de edictos, que se publicarán por tres veces, de siete en siete días en el **Diario Oficial de la Federación**, y en uno de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana, a fin de que comparezca a este juicio a deducir sus derechos en el término de treinta días contados, a partir del siguiente al en que se efectúe la última publicación, quedando en esta Secretaría a su disposición, copia simple de la demanda de garantías y demás anexos exhibidos, apercibida que de no apersonarse al presente juicio, las anteriores notificaciones se harán en términos de lo dispuesto por la fracción II, del artículo 30 de la Ley de Amparo, asimismo, se señalaron las nueve horas del día treinta y uno de diciembre de dos mil dos, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en acatamiento al auto de mérito, se procede a hacer una relación sucinta de la demanda de garantías, en la que la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Juez Décimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal y subdirector de Procedimientos Registrales del Area Jurídica del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, y como tercera perjudicada Constructora Gadsden y Gadsden, Sociedad Anónima de Capital Variable, y precisa como actos reclamados el auto de siete de noviembre de dos mil, dictado en el expediente número 513/99, por el juez antes mencionado.
La Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito "A" en Materia Civil en el Distrito Federal
Lic. María Dolores López Avila
Rúbrica.
(R.- 172469)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo
Sección Amparos
EDICTO

En el Juicio de Amparo número 912/2002-3 promovido por Heliodoro Vallejo Lazcano, apoderado legal de Grupo Textil "La Trinidad", Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos de la Junta Especial número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, con esta fecha se dictó un auto que a la letra dice: "...con fundamento en lo dispuesto por los artículos 303, 306, 309 fracción I y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con los numerales 30 fracción II, 34 y 157 de este último ordenamiento, tomando en consideración que no ha sido posible el emplazamiento de la empresa tercero perjudicada Servicios Administrativos y Textiles, Sociedad Civil, no obstante de haber agostado este Tribunal los medios que han estado a su alcance para investigar su domicilio, emplácesele por medio de edictos en los que se exprese una relación suscinta de la demanda de garantías, que se publicarán por tres veces de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación** y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, este último a elección del quejoso, haciéndole saber al tercero perjudicado que debe presentarse dentro del término de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación; además, fíjese en la puerta de este Tribunal una copia íntegra de este proveído, por todo el tiempo del emplazamiento; se apercibe al tercero perjudicado que se seguirá el presente juicio, haciéndose las ulterioresn otificaciones por lista que se fijará en los estrados de este Juzgado..."

Lo que comunico para su conocimiento y demás fines legales a que hubiere lugar por vía de notificación en forma.

Atentamente
Pachuca, Hgo., a 9 de diciembre de 2002.
El Secretario del Juzgado

Lic. Julio Paredes Salazar
Rúbrica.
(R.- 172761)

Rescisión Administrativa del Contrato de Obra Pública Número APA-PUE-SOAPAP-98-11A,
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla
NOTIFICACION POR EDICTO

Notificación de la Rescisión Administrativa del Contrato de Obra Pública APA-PUE-SOAPAP-98-11A, denominado Supervisión, Administración y Control de la Obra Alcantarillado de la Unidad Territorial Atlixcayotl, instaurado por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, a través de su Director General licenciado Francisco Eduardo Castillo Montemayor contra de la Constructora Cantábrico Impulsora Industrial, S.A. de C.V., representada por el ingeniero Eduardo Mantilla Martínez o quien legalmente lo represente, mediante el cual se le hace saber las observaciones en la ejecución del contrato de obra pública precisado en líneas anteriores, así como el contenido del acta circunstanciada de fecha tres de agosto de mil novecientos noventa y nueve, y a fin de dar cumplimiento al artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley Federal Administrativa, toda vez que bajo protesta de decir verdad se ignora el domicilio fiscal actual de la empresa Cantábrico Impulsora Industrial, S.A. de C.V., por medio edictos que se publicarán por tres veces de siete en siete días en el **Diario Oficial de la Federación** y en el periódico Universal. Para que se presente en un término no menor de cinco y no mayor de quince días hábiles contando a partir del siguiente al de la última publicación en las oficinas del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, sitas en Río Grijalva número cinco mil trescientos diez de la colonia San Manuel, código postal 72570 de la ciudad de Puebla, Puebla, haciéndole saber que deberá comparecer ante esta autoridad administrativa dentro del término señalado, en el entendido que de no hacerlo se le tendrá por perdido su derecho para ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses convengan con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley Federal Administrativa, quedando a su disposición el expediente, acta circunstanciada y anexos para su consulta en el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. notifíquese:

Puebla, Pue., a 29 de noviembre de 2002.
Director General del SOAPAP
Lic. Francisco Eduardo Castillo Montemayor
Rúbrica.
(R.- 172885)

Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Segundo de Distrito "B" de Amparo en Materia Penal
México, D.F.
EDICTO
Expediente 1988/2001.
En los autos del juicio de amparo número 1988/2001, promovido por María Teresa Muñiz Ruiz, contra actos del Procurador General de Justicia del Distrito Federal y otras autoridades, consistente en el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa A/ISF/440/00-03, donde se señaló a Jorge Pérez Flores y a Rocío Orozco González, como terceros perjudicados, y en virtud de que se desconoce sus domicilios actuales se ha ordenado emplazarlos por edictos que deberán publicarse por tres veces de siete en siete en días en el **Diario Oficial de la Federación** y en uno de los periódicos de mayor circulación en esta capital, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo, haciéndoles saber que deberán presentarse por sí o a través de persona dentro del término de treinta días, contados a partir del día siguiente de la última publicación; a manifestar lo que a su derecho convenga, quedando a su disposición copia simple de la demanda en la actuaría de este Juzgado. Si pasado este término, no comparecieren por sí o por sus apoderados que puedan representarlos, se seguirá el juicio, haciéndoles las subsecuentes notificaciones por lista que se fijarán en los estrados de este Juzgado.
Atentamente
México, D.F., a 19 de noviembre de 2002.
Juez Segundo de Distrito "B" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal
Lic. Diana Lizeth C. Valdez Espinoza
Rúbrica.
(R.- 172894)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California con Residencia en la Ciudad de Ensenada

EDICTO

Ensenada, Baja California, a veinticinco de octubre de dos mil dos.

Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte la imposibilidad de emplazar a las partes tercero perjudicados responsable de la fuente de trabajo denominada Rancho Ocho Hermanos, Alma Guadalupe, Elsa Cristina y José Trinidad, todos ellos de apellidos Rodríguez Enomoto, en el juicio de garantías número 446/2002, radicado en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en la ciudad de Ensenada, promovido por María de Jesús Rico Sanromán de Ramíres, Jorge Roberto Rico Sanromán y Miguel Arturo León Bermúdez, este último en su carácter de apoderado legal de María Bibiana Rico Ramírez, por lo que, ante tal circunstancia se procede a emplazar a dichos terceros por medio de edictos a costa de la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de amparo, debiendo publicarse los mismos por tres veces de siete en siete en el **Diario Oficial de la Federación** y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República. Asimismo, se les comunica al responsable de la fuente de trabajo denominada Rancho Ocho Hermanos, Alma Guadalupe, Elsa, Cristina y José Trinidad, todos ellos de apellidos Rodríguez Enomoto, que deberán comparecer por conducto de sus representantes legales al presente juicio de garantías, dentro del término de treinta días contados a partir de la última publicación de los edictos que se ordenan, haciendo de su conocimiento que la audiencia constitucional se fijó para el día siete de enero de dos mil tres, quedando a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia simple de la demanda de garantías.

La Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California

Lic. Teresa de Jesús Luis Martínez

Rúbrica.

(R.- 172895)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal
EDICTO

En los autos del Juicio Ordinario Civil 42/01-II, promovido por el Instituto Mexicano del Petróleo en contra de Grupo Constructor Viaducto, Sociedad Anónima de Capital Variable, el dos de enero de dos mil tres, se dictó en auto que en lo conducente dice:

"... Téngase por hechas las manifestaciones que vierte en su escrito de mérito; en consecuencia, considerando que no se pudo llevar a cabo la publicación de los edictos ordenada en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil dos, para que se celebrara la audiencia relativa a la prueba de confesión señalada para su desahogo a las diez horas con veinte minutos del seis de enero del presente año, a cargo de la demandada Grupo Constructor Viaducto, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de la persona que acredite tener facultades para absolver posiciones en su nombre, al tenor del pliego de posiciones que exhibió la oferente; por tanto, se deja sin efectos la audiencia señalada y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del veintinueve de enero de dos mil tres, para que se lleve a cabo su desahogo; en tal virtud, toda vez que la citada demandada fue emplazada por medio de edictos, con fundamento en el artículo 118 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cítese publicando este proveído por tres veces consecutivas en el **Diario Oficial de la Federación**, a fin de que comparezca ante éste Juzgado en la hora y fecha señaladas a absolver posiciones en los términos precisados; apercibida que de no hacerlo sin justa causa, se le tendrá por confesa de todas las posiciones que se califiquen de legales, con base en lo dispuesto en los artículos 104 y 124 fracción I, del Código Adjetivo Civil Federal invocado..."

México, D.F., a 8 de enero de 2003.
El Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en
Materia Civil en el Distrito Federal
Lic. Raymundo Esteban Alor García
Rúbrica.
(R.- 173048)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado
Uruapan, Mich.
EDICTO

María Guadalupe González Morales, Pedro Hernández Ramos, Ramiro Gómez Alcázar, Ignacio Béjar Barragán e Inmobiliaria Huatapera, Sociedad Anónima, María Guadalupe González Morales, Promotora de Inversiones Michoacanas, Sociedad Anónima de Capital Variable, Moisés Aguilar Zepeda, Federico Zamora Yague, Venustiano Uribe Jiménez, Francisco Espinoza Valencia, Eleazar Espinoza Valencia, María del Carmen Barragán Sánchez, Ignacio Béjar Ponce, Antonia Leticia Béjar Ponce, Amelia Carranza Rangel, Ignacio Vázquez Béjar, José Manuel Béjar Ponce, Salvador Fabián Martínez y Angel Casanova Carrera

Terceros perjudicados

En los autos del Juicio de Amparo número III-167/2002, promovido por Ana Rosa Fonseca Carrillo, en cuanto albacea de la sucesión a bienes de Claudio Farías Alvarez, contra actos del Juez Primero de lo Civil con residencia en esta ciudad y otra autoridad, se han señalado a ustedes como terceros perjudicados, y como se desconoce su domicilio actual, se ha ordenado emplazar por edictos, que deberán publicarse por tres veces de siete en siete días en el **Diario Oficial de la Federación** y uno de los periódicos de mayor circulación en la República, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30 fracción II de la Ley de Amparo, y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, según su artículo 2o., quedando a su disposición en la Actuaría de éste juzgado copias simples de la demanda de garantías, se hace de su conocimiento también, que deberán presentarse ante éste Tribunal dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación del presente edicto; apercibidos que en caso de no hacerlo, las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, con fundamento en el artículo primeramente citado, se les harán por medio de lista.

Uruapan, Mich., a 21 de noviembre de 2002.
El Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán
Lic. Eduardo López Razo
Rúbrica.
(R.- 173087)

LINEA COLOR Y PUNTOS, S.A. DE C.V.

AVISO DISMINUCION DE CAPITAL

Con fecha 10 de enero de 2002, los accionistas de Línea Color y Punto celebraron en asamblea general extraordinaria en la que se tomo el acuerdo de disminuir el capital social en su parte variable de la cantidad de $500,000 M.N. a la cantidad de $460,000 M.N.

La presente publicación se realiza con fundamento en el artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Delegado Especial

Miguel Angel González Callado

Rúbrica.

(R.- 173133)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito en Materia
Civil en el Estado de Jalisco
Guadalajara, Jal.
EDICTO
A: EDUARDO AURELIO FERNANDEZ PARDO

En el Juicio de Amparo 793/2002-I, promovido por Javier Humberto Barajas Anaya, por su propio derecho en contra de actos del Juez Sexto de lo Mercantil de esta ciudad y otras autoridades, se ordenó emplazarlo por edictos para que comparezca, en treinta días, si a su interés legal conviene.

Para su publicación por tres veces, de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación** y el periódico El Excélsior de México, Distrito Federal.

Guadalajara, Jal., 12 de noviembre de 2002.
El Secretario
Lic. David López Rubio
Rúbrica.

(R.- 173140)

WEYERHAEUSER DE MEXICO, S.A. DE C.V.
WILLAMETTE DE MEXICO, S.A. DE C.V.
WILLAMETTE INDUSTRIES NORTHAMERICA, S.A. DE C.V.
AVISO DE FUSION

Conforme a lo dispuesto por los artículos 222, 223, 224 y 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el suscrito Gerardo Iñigo Heras, en mi calidad de delegado especial de las asambleas de socios de Weyerhaeuser de México, S.A. de C.V., Willamette de México, S.A. de C.V. y Willamette Industries Northamerica, S.A: de C.V., hago constar para todos los efectos legales a que haya lugar que en cada una de las asambleas de socios de Weyerhaeuser de México, S.A. de C.V. Willamette de México, S.A. de C.V. y Willamette Industries Northamerica, S.A: de C.V., celebradas el 8 de enero de 2003, se resolvió aprobar la fusión de Weyerhaeuser de México, S.A. de C.V. como sociedad fusionante y por la otra parte Willamette de México, S.A. de C.V. y Willamette Industries Northamerica, S.A: de C.V. como sociedades fusionadas conforme al siguiente:

UNO.- Las partes del presente convienen en fusionarse de conformidad con los términos y condiciones de este convenio. La fusión y los términos y condiciones del presente convenio han sido previamente aprobados mediante las correspondientes asambleas extraordinarias de accionistas celebradas con anterioridad a la firma de este convenio. **DOS.-** Queda expresamente convenido que en la fusión, Weyerhaeuser será la entidad fusionante y que Willamette y Willamette Industries serán las entidades fusionadas. Consecuentemente, Weyerhaeuser subsistirá y Willamette y Willamette Industries dejarán de existir. **TRES** Como consecuencia de la fusión, todos los activos, pasivos y en general, todo el patrimonio de Willamette y Willamette Industries, sin ninguna reserva o limitación, serán transmitidos y pasarán a Weyerhaeuser en la fecha en que la fusión surta efectos. Como anexo 1 al presente convenio se adjunta una lista de los activos y pasivos de Willamette y Willamette Industries. Consecuentemente los activos y pasivos de Willamette y Willamette Industries se consolidarán en los activos y pasivos de Weyerhaeuser. **CUATRO.-** Las partes convienen expresamente en que la fusión se efectuará tomando en cuenta los valores establecidos en los libros y registros de Willamette y Willamette Industries según el balance que se adjunta al presente convenio como anexo 2. Una vez efectuada la fusión, las acciones representativas del capital social de Willamette y Willamette Industries serán canceladas. **CINCO.-** Como resultado de la fusión, Weyerhaeuser aumentará su capital social en la cantidad de $984'267,924.00 (novecientos ochenta y cuatro millones doscientos sesenta y siete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional). **SEIS.-** Las resoluciones para llevar a cabo la fusión adoptadas por los accionistas de Willamette, Willamette Industries y Weyerhaeuser, así como los balances de Willamette, Willamette Industries y Weyerhaeuser deberán ser publicados en el periódico oficial del domicilio de cada una de dichas sociedades. **SIETE.-** La fusión tendrá efectos entre las partes a partir de la firma de este convenio de fusión. La fusión tendrá efectos frente a terceros en la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio correspondiente al domicilio de cada una de las sociedades previas publicaciones efectuadas en términos de la cláusula sexta anterior. Para tal efecto Willamette, Willamette Industries y Weyerhaeuser ya han obtenido el consentimiento de sus respectivos acreedores, o bien, respecto de aquéllos acreedores que no otorgaron su consentimiento, Willamette, Willamette Industries y Weyerhaeuser han acordado el pago inmediato de las deudas pagaderas a dichos acreedores, previa solicitud de pago de los mismos, reconociendo para tal efecto dichos adeudos como vencidos y exigibles.

México, D.F., a 8 de enero de 2003.
Delegado de las Asambleas de Accionistas
Gerardo Iñigo Heras
Rúbrica.

WEYERHAEUSER DE MEXICO, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2002

pesos		
Activo		
Activo circulante		127,865,463
Efectivo en bancos	16,007,185	
Cuentas por cobrar	56,710,105	
Reserva para clientes	(3,700,013)	
Inventario de rollos	38,336,608	
Inventario de producto terminado	7,083,130	
Inventario de refacciones	2,023,862	
Otras materias primas	2,960,961	
Impuestos a favor	8,443,625	
Activos fijos		175,184,081
Edificio	91,921,885	

Maquinaria y equipo	146,000,662	
Depreciación acumulada	(62,738,465)	
Otros activos		1,412,207
Activos diferidos	1,412,207	
Total activo		304,461,751
Pasivos		(237,671,159)
Cuentas por pagar terceros	(10,014,068)	
Otras provisiones	(2,599,648)	
Impuestos por pagar	(29,782)	
Cuentas por pagar intercompañías	(225,027,661)	
Capital contable		(66,790,592)
Capital social fijo	(50,000)	
Capital variable	(233,220,000)	
Perdidas acumuladas	150,645,975	
Perdidas del ejercicio	15,833,433	
		(0)

Representante Legal
Romeo de J. Ramírez Leal

Rúbrica.

WILLAMETTE DE MEXICO, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2002
pesos

Activo		
Activo circulante		493,899,450
Efectivo en bancos	55,195,232	
Cuentas por cobrar	190,148,045	
Reserva para clientes		
Inventario de rollos	78,575,833	
Inventario de producto terminado	14,595,003	
Inventario de refacciones		
Cuentas por cobrar a afiliadas	121,698,356	
Impuestos a favor	33,686,981	
Activos fijos		504,530,551
Terrenos	24,765,644	
Edificios, maquinaria y equipo	751,331,176	
Depreciación acumulada	(271,566,269)	
Otros activos		18,182,915
Inversiones por cuenta de terceros	18,165,837	
Otros activos	17,078	
Total activo	1,016,612,916	
Pasivo		(217,013,717)
Cuentas por pagar terceros	(53,560,692)	
Otras provisiones	(12,169,692)	
Impuestos por pagar	(46,366,760)	
Obligaciones laborales	(18,598,640)	
Impuestos diferidos	(86,317,933)	
Capital contable		(799,599,199)
Capital social fijo	(50,000)	
Capital variable	(614,830,693)	
Utilidades acumuladas	(139,017,481)	
Resultado por tenencia de activos no monetarios	17,925,956	
Utilidad del ejercicio	(63,626,981)	
		0

Representante Legal
Romeo de J. Ramírez Leal

Rúbrica.

WILLAMETTE INDUSTRIES NORTHAMERICA, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2002
pesos

Activo		
Activo circulante		20,550
Efectivo en bancos	17,795	
Impuestos a favor	2,755	
Otros activos		920,135,622
Inversión en acciones	783,305,496	
Participación en resultados afiliadas	136,830,126	
Total activo		920,156,172
Pasivo		(53,411)
Cuentas por pagar intercompañías	(53,411)	
Capital contable		(920,102,761)
Capital social fijo	(50,000)	
Capital variable	(750,947,625)	
Utilidades acumuladas	(91,852,236)	
Resultado por tenencia de activos no monetarios	(19,757,008)	
Perdidas del ejercicio	(57,495,892)	

Representante Legal
Romeo de J. Ramírez Leal

Rúbrica.
(R.- 173144)

COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PARRAS, S.A. DE C.V.

AVISO A LOS ACCIONISTAS

Se comunica a los accionistas de Compañía Industrial de Parras, S.A. de C.V. (la Sociedad) que, de acuerdo con las resoluciones décimo octava, décimo novena y vigésima, adoptadas por la asamblea general ordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el día 20 de noviembre de 2002, y dado que a esta fecha se han cumplido las condiciones suspensivas previstas al efecto, dichos accionistas podrán ejercer el derecho de preferencia que les concede el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la cláusula séptima de los estatutos sociales de la Sociedad, a efecto de suscribir y pagar en su momento, hasta 5,356,544 acciones serie única, representativas del capital social de la parte variable de la Sociedad, a un precio de suscripción de $3.80843 pesos por acción, en una proporción igual a 0.0595269609 acciones por cada acción en circulación de las que al día de hoy sean titulares; para lo cual se les otorga un plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente aviso.

El precio de suscripción deberá ser pagado en efectivo, en pesos, moneda nacional, por los accionistas que hayan suscrito dichas acciones, en dos exhibiciones iguales pagaderas, por lo que respecta a la primera de dichas exhibiciones, a más tardar el día 17 de febrero de 2003 y por lo que respecta a la segunda, a más tardar el día 16 de junio de 2003, contra la entrega de los títulos de las acciones correspondientes a cada pago.

Los accionistas que deseen suscribir y pagar las acciones objeto de este aviso, deberán hacerlo a través de las instituciones depositantes en la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, con las que mantengan la custodia de los títulos correspondientes, o bien en el domicilio de la Sociedad ubicado en Ramos Arizpe y 16 de Septiembre número 5, Parras de la Fuente, Coahuila, para el caso de que los títulos de acciones de que se trate sean mantenidos en forma física. El derecho de suscripción preferente a que se refiere este aviso es intransferible.

Los fondos en efectivo que sean percibidos por la Sociedad con base en el aumento objeto del presente aviso, se destinarán, en su totalidad, al pago de ciertos pasivos bancarios a cargo de la Sociedad reestructurados con fecha 17 de diciembre de 2002, según lo acordado en la resolución décima novena de la asamblea general ordinaria de accionistas de la Sociedad de fecha 20 de noviembre de 2002.

Parras de la Fuente, Coah., a 17 de enero de 2003.

Presidente del Consejo de Administración

Ing. Rodolfo García Muriel

Rúbrica.

(R.- 173152)

SEGUNDA SECCION

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ACUERDO del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se ratifican diversos acuerdos aprobados durante el Proceso Electoral Federal 1999-2000, que resultan aplicables para el Proceso Electoral Federal 2002-2003.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.- Consejo General.- CG227/2002.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE RATIFICAN DIVERSOS ACUERDOS APROBADOS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 1999-2000, QUE RESULTAN APLICABLES PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2002-2003.

ANTECEDENTES

I. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 1999-2000, EMITIO DIVERSOS ACUERDOS RESPECTO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE DIFERENTES AREAS, NO CONTEMPLADAS EN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL VIGENTE.

II. LA JORNADA ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 1999-2000 SE REALIZO EL 2 DE JULIO DE 2000.

III. LAS FECHAS Y LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 1999-2000 QUE SE PRETENDEN RATIFICAR PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL DE 2002-2003 SON LOS SIGUIENTES:

a. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, POR MEDIO DEL CUAL REGULA EL EQUIPAMIENTO Y LA OPERACION DE LAS BODEGAS ELECTORALES EN LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES.
APROBADO EN LA SESION DEL 30 DE MARZO DE 2000.

b. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE RECOLECCION DE LA DOCUMENTACION DE LAS CASILLAS, QUE AL EFECTO ACUERDEN LOS CONSEJOS DISTRITALES.
APROBADO EN LA SESION DEL 30 DE MARZO DE 2000.

c. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA IDENTIFICACION PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL INSTITUTO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 1999-2000.
APROBADO EN LA SESION DEL 27 DE ABRIL DE 2000.

d. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, POR EL CUAL SE APRUEBAN LAS FORMAS QUE CONTIENEN LOS REQUISITOS Y DATOS QUE DEBERA REUNIR LA DOCUMENTACION EN LA QUE LOS PARTIDOS POLITICOS Y, EN SU CASO, LAS COALICIONES ACREDITARAN A SUS REPRESENTANTES GENERALES Y DE CASILLA PARA LA JORNADA ELECTORAL FEDERAL DEL AÑO 2000.
APROBADO EN LA SESION DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1999.

e. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRATEGIA QUE SEGUIRA EL INSTITUTO PARA LA DIFUSION DE LA CONCLUSION DE LAS ETAPAS Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES TRASCENDENTES EN LA ORGANIZACION DEL PROCESO ELECTORAL.
APROBADO EN LA SESION DEL 31 DE MAYO DE 2000.

f. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, POR EL QUE SE ORDENA LA SISTEMATIZACION DE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y COMPUTO DESTINADAS AL PROGRAMA DE RESULTADOS PRELIMINARES.
APROBADO EN LA SESION DEL 31 DE MAYO DE 2000.

g. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, POR EL QUE SE RATIFICAN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESGUARDO DE FORMATOS DE CREDENCIAL NO RECOGIDOS POR LOS CIUDADANOS, APROBADOS POR EL PROPIO CONSEJO GENERAL EN SESION EXTRAORDINARIA DEL 3 DE JUNIO DE 1994 Y PUBLICADOS EL 17 DE JUNIO DEL MISMO AÑO, ADECUANDOLOS A LOS TIEMPOS Y PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2000.
APROBADO EN LA SESION DEL 30 DE MARZO DE 2000.

h. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, POR EL CUAL SE ESTABLECE EL METODO PARA LA SUSTITUCION DE LOS PRESIDENTES Y SECRETARIOS EN LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DURANTE LAS SESIONES PERMANENTES DE LA JORNADA ELECTORAL Y DE COMPUTO.
APROBADO EN LA SESION DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1999.

CONSIDERANDO

1. QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41, PARRAFO SEGUNDO, FRACCION III DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA ORGANIZACION DE LAS ELECCIONES ES UNA FUNCION ESTATAL QUE SE REALIZA A TRAVES DE UN ORGANISMO PUBLICO AUTONOMO DENOMINADO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, EN CUYA INTEGRACION PARTICIPAN EL PODER LEGISLATIVO DE LA UNION, LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES Y LOS CIUDADANOS, EN LOS TERMINOS QUE ORDENE LA LEY. EN EL EJERCICIO DE ESTA FUNCION ESTATAL LA CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD SERAN PRINCIPIOS RECTORES.

2. QUE EN TERMINOS DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 69, PARRAFO 1, INCISOS a), d), e) Y z) DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES SON FINES DEL INSTITUTO ENTRE OTROS, CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA; ASEGURAR A LOS CIUDADANOS EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; GARANTIZAR LA CELEBRACION PERIODICA Y PACIFICA DE LAS ELECCIONES PARA RENOVAR A LOS INTEGRANTES DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DE LA UNION ASI MISMO QUE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO SE REGIRAN POR LOS PRINCIPIOS RECTORES SEÑALADOS EN EL CONSIDERANDO ANTERIOR.

3. QUE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 73 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, ESTABLECE QUE EL CONSEJO GENERAL ES EL RESPONSABLE DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN MATERIA ELECTORAL, ASI COMO VELAR PORQUE LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD GUIEN TODAS LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.

4. QUE EL ARTICULO 82, PARRAFO 1, INCISOS b), h) Y z) DEL MISMO ORDENAMIENTO, DISPONEN QUE SON ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL VIGILAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DEL INSTITUTO Y QUE LAS ACTIVIDADES DE LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES SE DESARROLLEN CON APEGO A ESTE CODIGO, ASI COMO DICTAR LOS ACUERDOS NECESARIOS PARA HACER EFECTIVAS LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN DICHO CODIGO.

5. QUE EN TERMINOS DEL ARTICULO 173, PARRAFO 1, DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, ESTABLECE QUE EL PROCESO ELECTORAL ES EL CONJUNTO DE ACTOS ORDENADOS POR LA CONSTITUCION Y EL PROPIO CODIGO, QUE REALIZAN LAS AUTORIDADES ELECTORALES, LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES Y LOS CIUDADANOS, Y

QUE TIENE POR OBJETO LA RENOVACION PERIODICA DE LOS INTEGRANTES DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DE LA UNION.

6. QUE SEGUN LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 174, PARRAFO 1 DEL CODIGO ELECTORAL ESTABLECE QUE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO SE INICIA EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO PREVIO A LA ELECCION Y CONCLUYE CON EL DICTAMEN DE DECLARACION DE VALIDEZ DE LA ELECCION DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. EN TODO CASO, LA CONCLUSION SERA UNA VEZ QUE EL TRIBUNAL ELECTORAL HAYA RESUELTO EL ULTIMO DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION QUE SE HUBIERE INTERPUESTO O CUANDO SE TENGA CONSTANCIA DE QUE NO SE PRESENTO NINGUNO.

7. QUE EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 174, PARRAFO 4 DEL CODIGO DE REFERENCIA, LA JORNADA ELECTORAL SE INICIA A LAS 8:00 HORAS DEL PRIMER DOMINGO DE JULIO, Y CONCLUYE CON LA CLAUSURA DE CASILLA.

8. QUE LA JORNADA ELECTORAL DEL AÑO 2003 SERA EL DOMINGO 6 DE JULIO Y SE ELEGIRAN DIPUTADOS DEL PODER LEGISLATIVO POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORIA RELATIVA Y REPRESENTACION PROPORCIONAL.

9. QUE LA COMISION DE ORGANIZACION ELECTORAL DEL CONSEJO GENERAL APROBO POR UNANIMIDAD SOMETER AL MAXIMO ORGANO DE DIRECCION PARA SU DISCUSION, Y EN SU CASO, LA RATIFICACION DE DIVERSOS ACUERDOS APROBADOS EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 1999-2000 RELATIVOS A LOS ENUNCIADOS EN EL CAPITULO DE ANTECEDENTES DEL CUERPO DEL PRESENTE ACUERDO, POR CONSIDERAR QUE SON NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS NO CONTEMPLADAS EN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL VIGENTE.

10. QUE PREVIA LA MODIFICACION DE LAS FECHAS CALENDARIO EN EL TEXTO DE LOS PROYECTOS Y EN VIRTUD DE QUE RESULTA APLICABLE EL OBJETO QUE CON ELLOS SE PERSIGUE, ES NECESARIO QUE EL CONSEJO GENERAL APRUEBE EL PRESENTE ACUERDO.

DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS VERTIDOS Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 41, PARRAFO SEGUNDO, FRACCION III DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 69, PARRAFOS 1 Y 2; 73, PARRAFOS 1, INCISOS a), d), e), Y z) Y 2; 73; 82, 173 PARRAFO 1 Y 174 PARRAFOS 1 Y 4 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EMITE EL SIGUIENTE:

ACUERDO

PRIMERO.- SE RATIFICAN Y ACTUALIZAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, LOS ACUERDOS APROBADOS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 1999-2000 SIGUIENTES:

1. POR EL QUE SE REGULA EL EQUIPAMIENTO Y LA OPERACION DE LAS BODEGAS ELECTORALES EN LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES

2. POR EL QUE SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE RECOLECCION DE LA DOCUMENTACION DE LAS CASILLAS, QUE AL EFECTO ACUERDEN LOS CONSEJOS DISTRITALES

3. POR EL QUE SE APRUEBA LA IDENTIFICACION PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL INSTITUTO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 1999-2000

4. POR EL QUE SE APRUEBAN LAS FORMAS QUE CONTIENEN LOS REQUISITOS Y DATOS QUE DEBERA REUNIR LA DOCUMENTACION EN LA QUE LOS PARTIDOS POLITICOS Y, EN SU CASO, LAS COALICIONES ACREDITARAN A SUS REPRESENTANTES GENERALES Y DE CASILLA PARA LA JORNADA ELECTORAL FEDERAL DEL AÑO 2000

5. POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRATEGIA QUE SEGUIRA EL INSTITUTO PARA LA DIFUSION DE LA CONCLUSION DE LAS ETAPAS Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES TRASCENDENTES EN LA ORGANIZACION DEL PROCESO ELECTORAL

6. POR EL QUE SE ORDENA LA SISTEMATIZACION DE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y COMPUTO DESTINADAS AL PROGRAMA DE RESULTADOS PRELIMINARES

7. POR EL QUE SE RATIFICAN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESGUARDO DE FORMATOS DE CREDENCIAL NO RECOGIDOS POR LOS CIUDADANOS, APROBADOS POR EL PROPIO CONSEJO

GENERAL EN SESION EXTRAORDINARIA DEL 3 DE JUNIO DE 1994 Y PUBLICADOS EL 17 DE JUNIO DEL MISMO AÑO, ADECUANDOLOS A LOS TIEMPOS Y PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2000.

8. POR EL CUAL SE ESTABLECE EL METODO PARA LA SUSTITUCION DE LOS PRESIDENTES Y SECRETARIOS EN LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DURANTE LAS SESIONES PERMANENTES DE LA JORNADA ELECTORAL Y DE COMPUTO.

SEGUNDO.- SERAN APLICABLES LOS ACUERDOS CONSIGNADOS EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, CON LA MODIFICACION EN FECHAS CALENDARIO QUE RESULTEN NECESARIO ADECUAR PARA LA JORNADA ELECTORAL DEL 6 DE JULIO DE 2003.

TERCERO.- HAGASE DEL CONOCIMIENTO DE LOS VOCALES EJECUTIVOS DE LAS JUNTAS EJECUTIVAS LOCALES Y DISTRITALES, ASI COMO DE LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES Y PUBLIQUESE EN EL **DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION**.

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO EN SESION ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2002.- EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, **JOSE WOLDENBERG KARAKOWSKY**.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL, **FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ**.- RUBRICA.

ANEXO 1

CG50/2000

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA EL EQUIPAMIENTO Y LA OPERACION DE LAS BODEGAS ELECTORALES EN LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES.

CONSIDERANDOS

1. QUE EL ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL ESTABLECE QUE LA ORGANIZACION DE LAS ELECCIONES ES UNA FUNCION ESTATAL QUE SE REALIZA A TRAVES DE UN ORGANISMO PUBLICO AUTONOMO DENOMINADO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y QUE EL CONSEJO GENERAL SERA SU MAXIMO ORGANO DE DIRECCION.

2. QUE SEGUN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 73 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EL CONSEJO GENERAL, EN SU CALIDAD DE ORGANO SUPERIOR DE DIRECCION DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ES EL RESPONSABLE DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN MATERIA ELECTORAL, ASI COMO DE VELAR PORQUE LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD GUIEN TODAS LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.

3. QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 82, PARRAFO 1, INCISOS b) Y z) ES ATRIBUCION DEL CONSEJO GENERAL VIGILAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DEL INSTITUTO, ASI COMO DICTAR LOS ACUERDOS NECESARIOS PARA HACER EFECTIVAS SUS ATRIBUCIONES.

4. QUE LOS CONSEJOS LOCALES DEL INSTITUTO DEBEN CONTAR CON UN ESPACIO ADECUADO PARA UTILIZARSE COMO BODEGA EN ATENCION DE QUE LOS MATERIALES Y DOCUMENTOS ELECTORALES SON TRASLADADOS DE LA BODEGA CENTRAL A CADA UNO DE LOS 32 CONSEJOS LOCALES DEL INSTITUTO, QUE A SU VEZ LOS DEBEN DISTRIBUIR A LA BREVEDAD A CADA UNO DE LOS CONSEJOS DISTRITALES.

5. QUE EL ARTICULO 89, PARRAFO 1, INCISO k) DISPONE QUE EL SECRETARIO EJECUTIVO DEBERA PROVEER A LOS ORGANOS DEL INSTITUTO DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

6. QUE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS MATERIALES Y DOCUMENTOS DEPOSITADOS EN CADA UNO DE LOS CONSEJOS LOCALES DEL INSTITUTO RESULTA NECESARIO QUE EL CONSEJO GENERAL ESTABLEZCA LAS MEDIADAS DE SEGURIDAD QUE DEBERAN OBSERVARSE PARA TAL EFECTO.

7. QUE EL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 207 SEÑALA QUE LAS BOLETAS DEBERAN OBRAR EN PODER DEL CONSEJO DISTRITAL VEINTE DIAS ANTES DE LA ELECCION.

8. ASIMISMO, LOS PARRAFOS 2, 3 Y 4 DEL MISMO ARTICULO ESPECIFICAN LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE CONTROL:

   2. PARA SU CONTROL SE TOMARAN LAS MEDIDAS SIGUIENTES:

   A) EL PERSONAL AUTORIZADO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ENTREGARA LAS BOLETAS EN EL DIA, HORA Y LUGAR PREESTABLECIDOS AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL, QUIEN ESTARA ACOMPAÑADO DE LOS DEMAS INTEGRANTES DEL PROPIO CONSEJO;

   B) EL SECRETARIO DEL CONSEJO DISTRITAL LEVANTARA ACTA PORMENORIZADA DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS BOLETAS, ASENTANDO EN ELLA LOS DATOS RELATIVOS AL NUMERO DE BOLETAS, LAS CARACTERISTICAS DEL EMBALAJE QUE LAS CONTIENE, Y LOS NOMBRES Y CARGOS DE LOS FUNCIONARIOS PRESENTES;

   C) A CONTINUACION, LOS MIEMBROS PRESENTES DEL CONSEJO DISTRITAL ACOMPAÑARAN AL PRESIDENTE PARA DEPOSITAR LA DOCUMENTACION RECIBIDA, EN EL LUGAR PREVIAMENTE ASIGNADO DENTRO DE SU LOCAL, DEBIENDO ASEGURAR SU INTEGRIDAD MEDIANTE FAJILLAS SELLADAS Y FIRMADAS POR LOS CONCURRENTES. ESTOS PORMENORES SE ASENTARAN EN EL ACTA RESPECTIVA;

   D) EL MISMO DIA O A MAS TARDAR EL SIGUIENTE, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, EL SECRETARIO Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES PROCEDERAN A CONTAR LAS BOLETAS PARA PRECISAR LA CANTIDAD RECIBIDA, SELLARLAS AL DORSO Y AGRUPARLAS EN RAZON DEL NUMERO DE ELECTORES QUE CORRESPONDA A CADA UNA DE LAS CASILLAS A INSTALAR, INCLUYENDO LAS DE LAS CASILLAS ESPECIALES SEGUN EL NUMERO QUE ACUERDE EL CONSEJO GENERAL PARA ELLAS.
   EL SECRETARIO REGISTRARA LOS DATOS DE ESTA DISTRIBUCION; Y

   E) ESTAS OPERACIONES SE REALIZARAN CON LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS QUE DECIDAN ASISTIR.

   3. LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS BAJO SU MAS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, SI LO DESEAREN, PODRAN FIRMAR LAS BOLETAS, LEVANTANDOSE UN ACTA EN LA QUE CONSTEN EL NUMERO DE BOLETAS QUE SE LES DIO A FIRMAR, EL NUMERO DE LAS FIRMADAS Y, EN SU CASO, EL NUMERO DE BOLETAS FALTANTES DESPUES DE HABER REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE FIRMA. EN ESTE ULTIMO CASO SE DARA NOTICIA DE INMEDIATO A LA AUTORIDAD COMPETENTE.

   4. LA FALTA DE FIRMA DE LOS REPRESENTANTES EN LAS BOLETAS NO IMPEDIRA SU OPORTUNA DISTRIBUCION.

9. QUE EL CODIGO DE LA MATERIA NO ESPECIFICA LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE SE DEBERAN SEGUIR PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD DE LA DOCUMENTACION ELECTORAL MIENTRAS PERMANEZCA EN LAS BODEGAS DE LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES DEL INSTITUTO.

10. QUE EN EL ARTICULO 242 DEL CODIGO DE LA MATERIA SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION, DEPOSITO Y SALVAGUARDA DE LOS PAQUETES QUE CONTENGAN LOS EXPEDIENTES DE CASILLA, QUE EN DICHO PROCEDIMIENTO SE ESPECIFICA QUE EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL DISPONDRA SU DEPOSITO, EN ORDEN NUMERICO DE CASILLAS, COLOCANDO POR SEPARADO LOS DE LAS ESPECIALES, EN UN LUGAR DENTRO DEL LOCAL DEL CONSEJO QUE REUNA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, DESDE EL MOMENTO DE SU RECEPCION Y HASTA EL DIA EN QUE SE PRACTIQUE EL COMPUTO DISTRITAL.

11. QUE EL INCISO d) DEL MISMO ARTICULO 242 DISPONE QUE EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL, BAJO SU RESPONSABILIDAD, SALVAGUARDARA LOS PAQUETES ELECTORALES Y DISPONDRA QUE SEAN SELLADAS LAS PUERTAS DE ACCESO DEL LUGAR EN EL QUE FUERON DEPOSITADOS, EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS.

12. QUE LOS ARTICULOS 246, 247, 248, 249 Y 250 DEL CODIGO DE LA MATERIA ESTABLECEN LAS REGLAS PARA CELEBRAR LA SESION Y REALIZAR LOS COMPUTOS DISTRITALES PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS, SENADORES Y PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

13. QUE EN VIRTUD DE QUE LA LEY ESTABLECE QUE LOS PAQUETES ELECTORALES SE DEBEN RESGUARDAR EN UN LUGAR DENTRO DEL CONSEJO QUE REUNA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y GARANTICE LA CERTEZA DE LA ACTUACION DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES EN SU MANEJO, RESULTA NECESARIO QUE EL CONSEJO GENERAL EMITA Y REGULE EL EQUIPAMIENTO Y LA OPERACION DE LAS BODEGAS ELECTORALES.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL, 73, 89, PARRAFO 1, INCISO k), 242, 245, 246, 247, 248, 249, 250 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y CON BASE EN LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL ARTICULO 82 PARRAFO 1, INCISOS b) Y z), EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EMITE EL SIGUIENTE:

ACUERDO

PRIMERO.- LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBERAN VERIFICAR, A MAS TARDAR EN EL MES DE MAYO, QUE LOS ESPACIOS QUE SE DESTINARAN A LAS BODEGAS ELECTORALES CUENTEN CON LAS CONDICIONES QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LOS PAQUETES ELECTORALES.

SEGUNDO.- EL CONSEJERO PRESIDENTE DE LOS CONSEJOS DISTRITALES DEBERA INFORMAR A MAS TARDAR EN EL MES DE MAYO DEL AÑO DE LA ELECCION A SU RESPECTIVO CONSEJO DISTRITAL LAS CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA CON EL FIN DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO AL ORDEN NUMERICO DE LAS CASILLAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS PAQUETES ESTABLECIDO EN LA FRACCION c), DEL PARRAFO 1, DEL ARTICULO 242 DE LA LEY DE LA MATERIA.

TERCERO.- EN LA SESION ORDINARIA DEL MES DE MAYO DEL AÑO DE LA ELECCION LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES AUTORIZARAN A LOS FUNCIONARIOS QUE PODRAN TENER ACCESO A LA BODEGA Y LOS DOTARAN DE UN GAFETE DISTINTIVO QUE DEBERAN PORTAR PARA ENTRAR.

CUARTO.- LOS CONSEJEROS PRESIDENTES DE LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES DEBERAN OBSERVAR QUE EN TODOS LOS CASOS QUE SE ABRA O CIERRE LA BODEGA PARA REALIZAR LAS LABORES QUE LA LEY LES SEÑALA DEBERAN ESTAR PRESENTES CONSEJEROS ELECTORALES Y REPRESENTANTES
DE PARTIDOS O COALICIONES PARA PRESENCIAR EL RETIRO DE SELLOS Y PARA SELLAR LAS PUERTAS DE ACCESO A LA BODEGA Y ESTAMPAR SUS FIRMAS EN LOS SELLOS QUE SE COLOQUEN.

QUINTO.- UNA VEZ REALIZADO EL CONTEO Y SELLADO DE LAS BOLETAS ELECTORALES LOS CONSEJEROS ELECTORALES PROCEDERAN A INUTILIZAR LAS BOLETAS SOBRANTES. POSTERIORMENTE SE DEPOSITARAN EN UNA CAJA QUE DEBERA SELLARSE Y FIRMARSE POR LOS CONSEJEROS ELECTORALES Y REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS Y COALICIONES PRESENTES. LA CAJA DEBERA RESGUARDARSE EN EL LUGAR QUE PARA EL EFECTO SE LE ASIGNE DENTRO DE LA BODEGA. LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS RESPECTIVOS TENDRAN DERECHO A VERIFICAR QUE LA CAJA CON EL MATERIAL SOBRANTE PERMANECE DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN LA BODEGA. EL SECRETARIO DEL CONSEJO CORRESPONDIENTE DEBERA LEVANTAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE ESPECIFIQUE EL MUNICIPIO Y LOS FOLIOS DE LAS BOLETAS INUTILIZADAS.

SEXTO.- EN DIAS POSTERIORES A LA SESION DE COMPUTO DISTRITAL, EN CASO DE SER NECESARIA LA APERTURA DE LA BODEGA DEBIDO A QUE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL SOLICITARA ALGUN O ALGUNOS PAQUETES ELECTORALES, EL CONSEJERO PRESIDENTE DARA AVISO DE INMEDIATO A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO PARA PROCEDER A LA APERTURA Y CLAUSURA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO CUARTO DEL PRESENTE ACUERDO.

SEPTIMO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE PERMITAN SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO DE LAS BODEGAS, DE ACUERDO CON EL INFORME QUE AL RESPECTO PRESENTEN LOS CONSEJEROS PRESIDENTES DE LOS CONSEJOS CORRESPONDIENTES.

OCTAVO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA QUE NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES DEL INSTITUTO.

NOVENO.- PUBLIQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN EL **DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION**.

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO EN SESION ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2000.

ANEXO 2

CG49/2000

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE RECOLECCION DE LA DOCUMENTACION DE LAS CASILLAS, QUE AL EFECTO ACUERDEN LOS CONSEJOS DISTRITALES.

ANTECEDENTES

1. DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 1993-1994 LOS CONSEJOS DISTRITALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CON BASE AL ARTICULO 238, PARRAFOS 3 Y 4 DE LA LEY ELECTORAL EN ESE ENTONCES VIGENTE, ACORDARON EN SESION CELEBRADA EL 30 DE JULIO

DE 1994, LA INSTALACION DE CENTROS DE ACOPIO DE LOS PAQUETES ELECTORALES DE LAS CASILLAS, EN LOS DISTRITOS EN QUE FUE NECESARIO.

CON BASE EN ESTE ACUERDO, EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL SE INSTALARON 635 CENTROS DE ACOPIO, EN 123 DISTRITOS ELECTORALES UBICADOS EN 25 ENTIDADES FEDERATIVAS.

PARA QUE LOS CONSEJOS DISTRITALES APROBARAN LA INSTALACION DE LOS CENTROS DE ACOPIO SE OBSERVARON LAS SIGUIENTES REGLAS: QUE NO SE INSTALARAN EN MUNICIPIOS CABECERA DISTRITAL; QUE SE INSTALARAN A PARTIR DE LAS 17:00 HORAS DEL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL Y CONCLUYERAN SUS ACTIVIDADES UNA VEZ QUE RECIBIERAN LOS PAQUETES ELECTORALES DE LAS CASILLAS QUE LES CORRESPONDIERON, PERO EN NINGUN CASO DESPUES DE LAS 24:00 HORAS DEL DIA DE LAS ELECCIONES. ADEMAS ANTE CADA UNO DE LOS CENTROS DE ACOPIO LOS PARTIDOS POLITICOS TUVIERON DERECHO A ACREDITAR A UN REPRESENTANTE PARA SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARON.

LOS LUGARES DONDE SE INSTALARON LOS CENTROS DE ACOPIO FUERON OFICINAS MUNICIPALES, O BIEN LOCALES QUE REUNIERON LAS CONDICIONES NECESARIAS Y ADECUADAS DE COMUNICACION Y SEGURIDAD PARA SU CORRECTO Y EFICAZ FUNCIONAMIENTO. LOS CONSEJOS DISTRITALES FUERON RESPONSABLES DE PROVEER A CADA UNO DE LOS CENTROS DE ACOPIO LOS MEDIOS Y PERSONAL DISPONIBLE PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.

2. EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL DE 1996-1997, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 238, PARRAFO 4 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN VIGOR, LOS CONSEJOS DISTRITALES DE 25 ENTIDADES ACORDARON LA INSTALACION DE 548 CENTROS DE ACOPIO, CON EL PROPOSITO DE AGILIZAR EL TRASLADO DE LOS PAQUETES ELECTORALES DE LAS CASILLAS EN LAS QUE ERA NECESARIO, A LAS SEDES DE DICHOS ORGANOS.

   LOS PARTIDOS POLITICOS ACREDITARON PARA LOS CENTROS DE ACOPIO UN TOTAL DE 1732 REPRESENTANTES, DE LOS CUALES ASISTIERON 1186.

   EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL, EL 6 DE JULIO DE 1997, SE INSTALARON 543 CENTROS DE ACOPIO LOS CUALES RECIBIERON UN TOTAL DE 18,889 PAQUETES ELECTORALES, MISMOS QUE FUERON TRASLADADOS A LOS CONSEJOS DISTRITALES.

CONSIDERANDO

1. QUE CONFORME A LO SEÑALADO POR EL ARTICULO 69, PARRAFO 1, INCISO f), DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBERA VELAR POR LA AUTENTICIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SUFRAGIO.

2. QUE EL ARTICULO 73 DEL CODIGO CITADO, OTORGA AL CONSEJO GENERAL, LA ATRIBUCION DE VELAR PORQUE LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD GUIEN TODAS LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.

3. QUE EL ARTICULO 82, NUMERAL PRIMERO, INCISOS b) Y z), DEL MISMO ORDENAMIENTO, ESTABLECEN QUE EL CONSEJO GENERAL DEBERA VIGILAR LA OPORTUNA INTEGRACION Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DEL INSTITUTO Y DICTAR LOS ACUERDOS NECESARIOS PARA HACER EFECTIVAS LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

4. QUE SEGUN LO DISPONE EL PARRAFO 2 DEL ARTICULO 198, LOS PARTIDOS POLITICOS PODRAN ACREDITAR EN CADA UNO DE LOS DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES UN REPRESENTANTE GENERAL POR CADA DIEZ CASILLAS ELECTORALES UBICADAS EN ZONAS URBANAS Y UNO POR CADA CINCO CASILLAS RURALES.

5. QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 238, PARRAFO 1, INCISOS a), b) Y c) UNA VEZ CLAUSURADAS LAS CASILLAS, LOS PRESIDENTES DE LAS MISMAS, BAJO SU RESPONSABILIDAD, HARAN LLEGAR AL CONSEJO DISTRITAL QUE CORRESPONDA LOS PAQUETES Y LOS EXPEDIENTES DE CASILLA DENTRO DE LOS PLAZOS SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA HORA DE CLAUSURA:

   A) INMEDIATAMENTE CUANDO SE TRATE DE CASILLAS UBICADAS EN LA CABECERA DEL DISTRITO;

   B) HASTA 12 HORAS CUANDO SE TRATE DE CASILLAS URBANAS UBICADAS FUERA DE LA CABECERA DEL DISTRITO; Y

   C) HASTA 24 HORAS CUANDO SE TRATE DE CASILLAS RURALES.

6. ASIMISMO, EL NUMERAL 3 DEL MISMO ARTICULO DISPONE QUE LOS CONSEJOS DISTRITALES ADOPTARAN, PREVIAMENTE AL DIA DE LA ELECCION, LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LOS PAQUETES CON LOS EXPEDIENTES DE LAS ELECCIONES SEAN ENTREGADOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y PARA QUE PUEDAN SER RECIBIDOS DE FORMA SIMULTANEA.

7. QUE EL MISMO PRECEPTO, EN SU NUMERAL CUARTO, DETERMINA QUE LOS CONSEJOS DISTRITALES PODRAN ACORDAR QUE SE ESTABLEZCA UN MECANISMO PARA LA RECOLECCION DE LA DOCUMENTACION DE LAS CASILLAS CUANDO FUERE NECESARIO EN LOS TERMINOS DEL CODIGO, BAJO LA VIGILANCIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS QUE ASI DESEAREN HACERLO.

8. QUE EL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, NO ESTABLECE LOS MECANISMOS PARA LA DESIGNACION DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE
   LOS MECANISMOS DE RECOLECCION, NI PARA LA ACREDITACION DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS ANTE LOS MISMOS, NI LOS PROCEDIMIENTOS DE TRASLADO DE LA DOCUMENTACION HACIA LOS CONSEJOS DISTRITALES.

9. QUE CON EL FIN DE DAR CERTEZA AL PROCESO ELECTORAL ES NECESARIO QUE EL CONSEJO GENERAL EMITA LINEAMIENTOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS MECANISMOS DE RECOLECCION, QUE APRUEBEN LOS CONSEJOS DISTRITALES.

10. QUE EN ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL INSTITUTO TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y DE ASEGURAR A LOS CIUDADANOS EL PLENO E IRRESTRICTO EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLITICOS-ELECTORALES, DEBE PROPICIARSE Y ASEGURARSE POR TODOS LOS MEDIOS POSIBLES LA MAS AMPLIA PRESENCIA Y PARTICIPACION DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN LOS MECANISMOS DE RECOLECCION, A FIN DE GARANTIZAR DE ESTA MANERA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO Y LA ADECUADA VIGILANCIA DE LOS MISMOS EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL.

POR LO ANTERIORMENTE SEÑALADO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 69, PARRAFO 1, INCISO f), 73, 198 PARRAFO 2, 238, NUMERALES 1, 3 Y 4; Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 82, NUMERAL PRIMERO, INCISOS b) Y z), EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EMITE EL SIGUIENTE

ACUERDO

PRIMERO.- EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE OTORGA EL ARTICULO 238, PARRAFO 4 DEL COFIPE, LOS CONSEJOS DISTRITALES PODRAN ACORDAR, A MAS TARDAR EL 31 DE MAYO, MECANISMOS PARA LA RECOLECCION DE LA DOCUMENTACION DE LAS CASILLAS EN LOS DISTRITOS ELECTORALES CUYAS CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS ASI LO EXIJAN.

SEGUNDO.- PARA LA RECOLECCION DE LA DOCUMENTACION DE LAS CASILLAS SE PODRAN INSTALAR CENTROS DE RECEPCION Y TRASLADO.

TERCERO.- PARA SU APROBACION Y FUNCIONAMIENTO LOS CENTROS DE RECEPCION Y TRASLADO DEBERAN OBSERVAR LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

- LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS DEBERAN REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA DETERMINAR LOS DISTRITOS QUE NECESITAN LA INSTALACION DE CENTROS DE RECEPCION Y TRASLADO, ASI COMO EL NUMERO DE PAQUETES ELECTORALES A RECOLECTAR. EL ESTUDIO DEBERA PRESENTARSE A MAS TARDAR EL 30 DE ABRIL A LA CONSIDERACION DE LOS CONSEJOS DISTRITALES PARA SU EVALUACION.
- NO SE PROPONDRAN CENTROS DE RECEPCION Y TRASLADO EN LOS MUNICIPIOS QUE SON CABECERA DE DISTRITO, CON EXCEPCION DE LOS CASOS EN QUE SE JUSTIFIQUE, POR CONDICIONES EXTREMAS DE DISTANCIA Y TIEMPOS DE TRASLADO.
- EN NINGUN CASO SE DEBERAN PROPONER CASAS PARTICULARES PARA LA INSTALACION DE CENTROS DE RECEPCION Y TRASLADO.
- LOS CONSEJOS DISTRITALES PODRAN REALIZAR RECORRIDOS PARA VERIFICAR LA PROPUESTA DE INSTALACION DE CENTROS DE RECEPCION Y TRASLADO QUE PRESENTEN LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS.
- EL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE RECEPCION Y DE TRASLADO SERA DE LAS 17:00 HORAS HASTA RECOLECTAR EL ULTIMO PAQUETE ELECTORAL O AL MOMENTO EN QUE ASI LO DETERMINE EL PROPIO CONSEJO DISTRITAL.
- SE DEBERA LEVANTAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA AL INICIO Y CLAUSURA DEL CENTRO DE RECEPCION Y TRASLADO Y SE ENTREGARA COPIA DE LA MISMA A LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS.
- LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LOS CENTROS DE RECEPCION Y TRASLADO ELABORARAN UN LISTADO DE LOS PAQUETES ELECTORALES Y SUS EXPEDIENTES, DE ACUERDO AL NUMERO DE CASILLAS DE QUE SE TRATE.
- EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL CENTRO DE RECEPCION Y TRASLADO EXPEDIRA UN ACUSE DE RECIBO AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL UNO DEL ARTICULO 242, PARRAFO 1, INCISO b) DEL COFIPE.
- LOS PAQUETES SE DEPOSITARAN MOMENTANEAMENTE EN EL CENTRO DE RECEPCION Y TRASLADO Y POSTERIORMENTE SE COLOCARAN EN LOS VEHICULOS QUE LOS TRANSPORTARAN

AL
CONSEJO DISTRITAL.

- CON BASE EN EL NUMERO DE PAQUETES QUE SE RECIBIRAN Y LOS TIEMPOS DE TRASLADO AL CONSEJO DISTRITAL CORRESPONDIENTE, SE PODRAN ESTABLECER DIVERSAS SALIDAS PARA LLEVAR LOS PAQUETES ELECTORALES A LOS CONSEJOS DISTRITALES.
- SEGUN LAS CARACTERISTICAS DE LOS VEHICULOS, LOS PAQUETES ELECTORALES SERAN TRASLADADOS AL CONSEJO DISTRITAL, EN TODOS LOS CASOS, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE UN FUNCIONARIO DESIGNADO POR EL PROPIO CONSEJO DISTRITAL PARA TAL EFECTO Y PODRAN ACOMPAÑARLO LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS Y COALICIONES PREVIAMENTE ACREDITADOS.
- SE DEBERAN PREVER LOS VEHICULOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE LOS PAQUETES ELECTORALES, ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA QUE DURANTE EL ENVIO LOS PAQUETES SEAN RESGUARDADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
- LA LLEGADA DEL PAQUETE ELECTORAL A LOS CENTROS DE RECEPCION Y DE TRASLADO NO SIGNIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO LEGAL PUES ESTE SOLO SE CUMPLIRA CUANDO EL PAQUETE LLEGUE AL CONSEJO DISTRITAL.

CUARTO.- LOS CONSEJOS DISTRITALES DESIGNARAN, DE ENTRE EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL Y/O LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL, A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE
LOS CENTROS DE RECEPCION Y TRASLADO.

QUINTO.- LOS CONSEJOS DISTRITALES ACORDARAN EL PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION Y DESIGNACION DEL PERSONAL DE APOYO DE LOS CENTROS DE RECEPCION Y TRASLADO.

SEXTO.- LOS PARTIDOS POLITICOS Y COALICIONES PODRAN ACREDITAR, ANTE LOS CONSEJOS DISTRITALES, AL NUMERO DE REPRESENTANTES QUE AL EFECTO DETERMINE CADA CONSEJO PARA LOS CENTROS DE RECEPCION Y TRASLADO, HASTA 24 HORAS ANTES DEL DIA DE LA ELECCION.

SEPTIMO.- LOS REPRESENTANTES GENERALES DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y COALICIONES, TAMBIEN PODRAN SER ACREDITADOS COMO REPRESENTANTES ANTE LOS CENTROS DE RECEPCION Y TRASLADO.

OCTAVO.- EL VOCAL EJECUTIVO DEL DISTRITO CORRESPONDIENTE DEBERA ENTREGAR, A MAS TARDAR DIEZ DIAS ANTES DE LA JORNADA ELECTORAL, A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DISTRITAL, A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y A LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y COALICIONES UNA RELACION DE LOS PAQUETES ELECTORALES QUE SE ENTREGARAN EN CADA UNO DE LOS CENTROS DE RECEPCION Y TRASLADO.

NOVENO.- LOS PRESIDENTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES DEBERAN NOTIFICAR AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL MATERIAL Y LA DOCUMENTACION ELECTORAL, SI DEBERA LLEVAR LOS PAQUETES Y LOS EXPEDIENTES A UN CENTRO DE RECEPCION Y TRASLADO UNA VEZ CLAUSURADA LA CASILLA.

DECIMO.- LA INFORMACION RELATIVA A LA ENTIDAD, DISTRITO, UBICACION Y NUMERO DE CENTROS DE RECEPCION Y TRASLADO QUE SE INSTALARAN, LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS Y COALICIONES ACREDITADOS, ASI COMO LA RELACION DE CASILLAS Y LOS NOMBRES DE LOS PRESIDENTES DE MESAS DIRECTIVA QUE ENTREGARAN SU DOCUMENTACION EN LOS MISMOS, DEBERA FORMAR PARTE DE LAS BASES DE DATOS QUE AL EFECTO ACUERDE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO.

DECIMO PRIMERO.- COMUNIQUESE EL PRESENTE ACUERDO A LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES DEL INSTITUTO PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO Y PUBLIQUESE EN EL **DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION**.

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO EN SESION ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2000.

ANEXO 3

CG70/2000

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA IDENTIFICACION PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL INSTITUTO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 1999-2000.

CONSIDERANDO

1. QUE EL ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL ESTABLECE QUE LA ORGANIZACION DE LAS ELECCIONES ES UNA FUNCION ESTATAL QUE SE REALIZA A TRAVES DE UN ORGANISMO PUBLICO AUTONOMO DENOMINADO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y QUE EL CONSEJO GENERAL SERA SU MAXIMO ORGANO DE DIRECCION.

2. QUE EL ARTICULO 73 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ESTABLECE QUE EL CONSEJO GENERAL ES EL RESPONSABLE DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN MATERIA ELECTORAL, ASI COMO DE VELAR PORQUE LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD GUIEN TODAS LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.

3. QUE EL ARTICULO 82, PRIMER PARRAFO, INCISO B) DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ESTABLECE COMO ATRIBUCION DEL CONSEJO GENERAL VIGILAR LA OPORTUNA INTEGRACION Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DEL INSTITUTO.

4. QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 241-A LOS CONSEJOS DISTRITALES DESIGNARAN DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO DE LA ELECCION, A UN NUMERO SUFICIENTE DE ASISTENTES ELECTORALES DE ENTRE LOS CIUDADANOS QUE HUBIEREN ATENDIDO LA CONVOCATORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE Y QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS LEGALES.

5. QUE EL PARRAFO 2 DEL MISMO ARTICULO 241-A DISPONE QUE LOS ASISTENTES ELECTORALES AUXILIARAN A LAS JUNTAS Y CONSEJOS EN LOS TRABAJOS DE RECEPCION Y DISTRIBUCION DE LA DOCUMENTACION Y MATERIALES ELECTORALES EN LOS DIAS PREVIOS A LA ELECCION; VERIFICACION DE LA INSTALACION Y CLAUSURA DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA; INFORMACION SOBRE LOS INCIDENTES OCURRIDOS DURANTE LA JORNADA ELECTORAL; APOYO A LOS FUNCIONARIOS DE CASILLA EN EL TRASLADO DE LOS PAQUETES ELECTORALES; Y LOS QUE EXPRESAMENTE LES CONFIERA EL CONSEJO DISTRITAL, PARTICULARMENTE LO SEÑALADO EN LOS PARRAFOS 3 Y 4 DEL ARTICULO 238 DEL CODIGO.

6. QUE EL ARTICULO 208 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ESTABLECE QUE LOS PRESIDENTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES ENTREGARAN A CADA PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA, DENTRO DE LOS CINCO DIAS PREVIOS AL ANTERIOR DE LA ELECCION LOS MATERIALES Y DOCUMENTOS ELECTORALES.

7. QUE EL ARTICULO 238, PARRAFO 1 DEL CODIGO ELECTORAL, ESTABLECE LOS PLAZOS EN LOS QUE LOS PRESIDENTES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, HARAN LLEGAR AL CONSEJO DISTRITAL QUE CORRESPONDA, LOS PAQUETES Y LOS EXPEDIENTES DE CASILLA.

8. QUE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN LOS TRES CONSIDERANDOS ANTERIORES, ASI COMO OTRAS RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL, ES PREVISIBLE QUE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TENGA A SU DISPOSICION LOS MEDIOS DE TRANSPORTE QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LLEVAR A BUEN TERMINO LAS OBLIGACIONES QUE LA CONSTITUCION Y LA LEY LE IMPONEN.

9. QUE CON EL FIN DE BRINDAR CERTEZA EN LAS ACTIVIDADES QUE LLEVARA A CABO EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, RESULTA PERTINENTE DISEÑAR UN MEDIO DE IDENTIFICACION PARA QUE TANTO LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, COMO LA CIUDADANIA EN GENERAL PUEDA DISTINGUIR LOS MEDIOS DE TRANSPORTE QUE TRASLADEN A LOS FUNCIONARIOS ELECTORALES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES.

POR LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS: 41 CONSTITUCIONAL, 73, 241-A, 208, 238 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 82, PARRAFO 1, INCISOS B) Y Z), DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL CONSEJO GENERAL EMITE EL SIGUIENTE:

ACUERDO

PRIMERO.- SE DETERMINA QUE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE AL SERVICIO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBERAN PORTAR LA IDENTIFICACION QUE SE AGREGA COMO ANEXO AL PRESENTE ACUERDO.

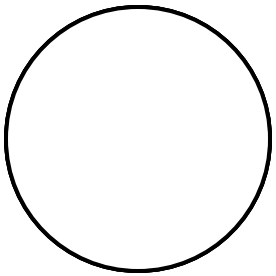
SEGUNDO.- LA IDENTIFICACION DEBERA FIJARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL VEHICULO Y PORTARSE OBLIGATORIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS LABORES DEL INSTITUTO.

TERCERO.- EL NUMERO DE FOLIO ASIGNADO PARA LA IDENTIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE, DEBERA COINCIDIR CON EL ASIGNADO POR EL CONSEJERO PRESIDENTE DISTRITAL DEL INSTITUTO AL FUNCIONARIO ELECTORAL PREDETERMINADO.

CUARTO.- EN CADA CONSEJO DISTRITAL SE DEBERA ELABORAR UNA RELACION EN LA BASE DE DATOS DE LA REDIFE QUE CONTENGA EL NUMERO DE FOLIO DE LAS IDENTIFICACIONES Y EL NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS ELECTORALES A QUIENES SE ASIGNARON. EL SECRETARIO DEL CONSEJO DEBERA CONTAR CON EL DOCUMENTO IMPRESO PARA QUE ESTE A DISPOSICION DE TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO RESPECTIVO QUE DESEEN CONSULTARLA.

QUINTO.- PUBLIQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN EL **DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION**.

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO EN SESION ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2000.



I F E

SELLO DEL CONSEJO DISTRITAL

FIRMA DEL CONSEJERO PRESIDENTE

ESTADO	DISTRITO	FOLIO

TAMAÑO ORIGINAL: DOBLE CARTA

ANEXO 4

CG/147/99

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL CUAL SE APRUEBAN LAS FORMAS QUE CONTIENEN LOS REQUISITOS Y DATOS QUE DEBERA REUNIR LA DOCUMENTACION EN LA QUE LOS PARTIDOS POLITICOS Y, EN SU CASO, LAS COALICIONES ACREDITARAN A SUS REPRESENTANTES GENERALES Y DE CASILLA PARA LA JORNADA ELECTORAL FEDERAL DEL AÑO 2000.

CONSIDERANDO

1. QUE EL ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL ESTABLECE QUE LA ORGANIZACION DE LAS ELECCIONES ES UNA FUNCION ESTATAL QUE SE REALIZA A TRAVES DE UN ORGANISMO PUBLICO AUTONOMO DENOMINADO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y QUE EL CONSEJO GENERAL SERA SU ORGANO SUPERIOR DE DIRECCION.
2. QUE EL ARTICULO 36 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN SUS INCISOS a), b) Y g) ESTABLECE QUE SON DERECHOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS PARTICIPAR, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCION Y EN EL PROPIO CODIGO ELECTORAL, EN LA PREPARACION, DESARROLLO Y VIGILANCIA DEL PROCESO ELECTORAL; GOZAR DE LAS GARANTIAS QUE ESTE CODIGO LES OTORGA PARA REALIZAR LIBREMENTE SUS ACTIVIDADES; Y NOMBRAR REPRESENTANTES ANTE LOS ORGANOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.
3. QUE EL ARTICULO 37 DEL CODIGO ELECTORAL ESTABLECE LOS SUPUESTOS DE LOS CIUDADANOS QUE NO PODRAN ACTUAR COMO REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS ANTE LOS ORGANOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.
4. QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 198 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES TIENEN DERECHO A NOMBRAR DOS REPRESENTANTES PROPIETARIOS Y UN SUPLENTE, ANTE CADA MESA DIRECTIVA DE CASILLA Y UN REPRESENTANTE GENERAL POR CADA DIEZ CASILLAS ELECTORALES EN CADA UNO DE LOS DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES.
5. QUE EL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DISPONE EN SUS ARTICULOS 59, PARRAFO 1, INCISO b); 59-A, PARRAFO 1; 60, PARRAFO 1; 61, PARRAFO 1, INCISO d); 62, PARRAFO 1, INCISO d), PARRAFO 2 INCISO b), QUE LAS COALICIONES DEBERAN ACREDITAR TANTOS REPRESENTANTES COMO CORRESPONDERIA A UN SOLO PARTIDO POLITICO ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA SEGUN CORRESPONDA Y QUE TAL DISPOSICION SE APLICA TANTO A REPRESENTANTES PROPIETARIOS Y SUPLENTES ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, COMO A REPRESENTANTES GENERALES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.
6. QUE SEGUN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 201, PARRAFO 1, INCISO a), DEL CODIGO DE LA MATERIA, LOS PARTIDOS POLITICOS, O EN SU CASO LAS COALICIONES, DEBERAN REGISTRAR EN SU PROPIA DOCUMENTACION Y ANTE EL CONSEJO DISTRITAL CORRESPONDIENTE A SUS REPRESENTANTES GENERALES Y DE CASILLA.
7. QUE EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICION CITADA EN EL CONSIDERANDO ANTERIOR, CORRESPONDE AL CONSEJO GENERAL ESTABLECER LOS REQUISITOS QUE DEBERA REUNIR LA DOCUMENTACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS O COALICIONES QUE SERVIRA PARA ACREDITAR A SUS REPRESENTANTES DE CASILLA Y GENERALES.
8. QUE EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 203, PARRAFOS 1 Y 2 Y 204, DEL ORDENAMIENTO CITADO Y CON EL PROPOSITO DE FACILITAR LA OPORTUNA ACREDITACION DE REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS O COALICIONES, SE HAN ELABORADO LAS FORMAS QUE CONTIENEN LOS REQUISITOS Y LA INFORMACION LEGAL QUE DEBEN REUNIR LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PROPIOS PARTIDOS POLITICOS O COALICIONES, ANTE LAS CASILLAS Y GENERALES.

POR LO ANTERIORMENTE SEÑALADO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 41 CONSTITUCIONAL; 36, PARRAFO 1, INCISOS a), b) Y g), 37, 59, PARRAFO 1, INCISO b); 59-A, PARRAFO 1; 60, PARRAFO 1; 61, PARRAFO 1, INCISO d); 62, PARRAFO 1, INCISO d), PARRAFO 2, INCISO b); 198; 201, PARRAFO 1, INCISO a); 203, PARRAFOS 1 Y 2; 204, PARRAFO 1, Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 82, PARRAFO 1, INCISO z), DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, ESTE CONSEJO GENERAL HA DETERMINADO TOMAR EL SIGUIENTE:

ACUERDO

PRIMERO.- SE APRUEBAN LAS FORMAS QUE CONTIENEN LOS REQUISITOS Y DATOS QUE DEBERA REUNIR LA DOCUMENTACION QUE LOS PARTIDOS POLITICOS Y, EN SU CASO, LAS COALICIONES, UTILIZARAN PARA REGISTRAR A SUS REPRESENTANTES ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y GENERALES, QUIENES DESEMPEÑARAN SUS FUNCIONES DURANTE LA JORNADA ELECTORAL FEDERAL DEL 2 DE JULIO DEL AÑO 2000. LOS FORMATOS APROBADOS QUEDAN AGREGADOS A ESTE ACUERDO COMO ANEXOS UNO Y DOS RESPECTIVAMENTE.

SEGUNDO.- A PARTIR DEL MES DE MARZO DEL AÑO DE LA ELECCION, LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO VERIFICARA QUE UN NUMERO SUFICIENTE DE LAS FORMAS REFERIDAS SE ENCUENTREN A DISPOSICION DE TODOS LOS PARTIDOS POLITICOS O LAS COALICIONES EN CADA UNA DE LAS JUNTAS DISTRITALES DEL INSTITUTO.

TERCERO.- PUBLIQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN EL **DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION**.

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO EN SESION ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1999.

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DE PARTIDO POLITICO O COALICION ANTE MESA DIRECTIVA DE CASILLA

CONSEJO DISTRITAL DEL _____ DISTRITO ELECTORAL FEDERAL, CON
(con número)

CABECERA EN _____, _____
(municipio o delegación) (entidad federativa)

PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, párrafo 1, incisos a), b), g); 37; 62, párrafo 1, inciso d) y párrafo 2, inciso b); 198, 200, 201, 202, 203, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Partido _____

_____ acredita al

C. _____, con clave de elector

| | | | | | | | | | | | | | | | | | y con domicilio en _____

_____

para el cargo de Representante _____ ante la
(propietario o suplente)

Mesa Directiva de Casilla _____ de la sección _____
(número y tipo) (con número)

Del Municipio o Delegación _____ del _____ Distrito Electoral Federal

de esta Entidad.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O DIRIGENTE DEL PARTIDO POLITICO O COALICION QUE REALIZA LA ACREDITACION	FIRMA DEL REPRESENTANTE ACREDITADO (ESTA FIRMA PUEDE ASENTARSE HASTA ANTES DE ACREDITARSE EL REPRESENTANTE EN LA CASILLA)

_____, _____ de _____ de 2000.
(lugar) (día) (mes)

SELLO

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL	EL SECRETARIO DEL CONSEJO DISTRITAL

Este documento debe presentarse en original y copia.

SON DERECHOS QUE EL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ESTABLECE EN FAVOR DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Artículo 198, Párrafo 3.

3. Los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla y generales, podrán firmar sus nombramientos hasta antes de acreditarse en la casilla: asimismo, deberán portar en lugar visible durante todo el día de la jornada electoral, un distintivo de hasta 2.5 por 2.5 centímetros, con el emblema del partido político al que pertenezcan o al que representen y con la leyenda visible de "representante".

Artículo 200, Párrafo 1.

1. Los representantes de los partidos políticos debidamente acreditados ante las mesas directivas de casilla tendrán los siguientes derechos:

a) Participar en la instalación de la casilla y contribuir al buen desarrollo de sus actividades hasta su clausura. Tendrán el derecho de observar y vigilar el desarrollo de la elección;

b) Recibir copia legible de las actas de instalación, cierre de votación y final de escrutinio elaboradas en la casilla;

c) Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación;

d) Presentar al término del escrutinio y del cómputo escritos de protesta;

e) Acompañar al Presidente de la mesa directiva de casilla, al Consejo Distrital correspondiente, para hacer entrega de la documentación y el expediente electoral; y

f) Los demás que establezca este Código.

Artículo 212, Párrafo 3.

3. A solicitud de un partido político, las boletas electorales podrán ser rubricadas o selladas por uno de los representantes partidistas ante la casilla designado por sorteo, quien podrá hacerlo por partes para no obstaculizar el desarrollo de la votación. En el supuesto de que el representante del partido que resultó facultado en el sorteo se negare a firmar o sellar las boletas, el representante que en un principio lo haya solicitado tendrá ese derecho. La falta de rúbrica o sello en las boletas no será motivo para anular los sufragios recibidos...

Artículo 218, Párrafo 5.

5. Los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas, podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados, para lo cual seguirá el procedimiento señalado en éste y el anterior artículo, anotando el nombre completo y la clave de la Credencial para Votar de los representantes al final de la lista nominal de electores.

Artículo 221, Párrafo 1.

1. Los representantes de los partidos políticos podrán presentar al Secretario de la mesa directiva escritos sobre cualquier incidente que en su concepto constituya una infracción a lo dispuesto por este Código.

2. El Secretario recibirá tales escritos y los incorporará al expediente electoral de la casilla sin que pueda mediar discusión sobre su admisión.

Artículo 222, Párrafo 1.

1. Ninguna autoridad podrá detener a los integrantes de las mesas directivas de casilla o a los representantes de los partidos durante la jornada electoral, salvo en el caso de flagrante delito.

SON DERECHOS QUE EL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ESTABLECE EN FAVOR DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Artículo 198, Párrafo 3.

3. Los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla y generales, podrán firmar sus nombramientos hasta antes de acreditarse en la casilla; asimismo, deberán portar en lugar visible durante todo el día de la jornada electoral, un distintivo de hasta 2.5 por 2.5 centímetros, con el emblema del partido político al que pertenezcan o al que representen y con la leyenda visible de "representante".

Artículo 199.

1. La actuación de los representantes generales de los partidos estará sujeta a las normas siguientes:

a) Ejercerán su cargo exclusivamente ante las mesas directivas de casillas instaladas en el distrito electoral para el que fueron acreditados;

b) Deberán actuar individualmente, y en ningún caso podrán hacerse presente al mismo tiempo en las casillas más de un representante general, de un mismo partido político;

c) No sustituirán en sus funciones a los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla, sin embargo, podrán coadyuvar en sus funciones y en el ejercicio de los derechos de éstos ante las propias mesas directivas de casilla;

d) En ningún caso ejercerán o asumirán las funciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla;

e) No obstaculizarán el desarrollo normal de la votación en las casillas en las que se presenten;

f) En todo tiempo podrán presentar escritos de incidentes que se susciten durante el desarrollo de la jornada electoral, pero sólo podrán presentar escritos de protesta al término del escrutinio y cómputo cuando el representante de su partido político ante la mesa directiva de casilla no estuviere presente; y

g) Podrán comprobar la presencia de los representantes de su partido político en las mesas directivas de casilla y recibir de ellos los informes relativos a su desempeño.

Artículo 204, Párrafos 1 y 2.

1. Los nombramientos de los representantes generales deberán contener los mismos datos que los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla, con excepción del número de casilla.

2. De estos nombramientos se formará una lista que deberá entregarse a los Presidentes de las mesas directivas de casilla.

Artículo 222, Párrafo 1.

1. Ninguna autoridad podrá detener a los integrantes de las mesas directivas de casilla o a los representantes de los partidos durante la jornada electoral, salvo en el caso de flagrante delito.

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE GENERAL
DE PARTIDO O COALICION ANTE MESA DIRECTIVA DE CASILLA

CONSEJO DISTRITAL DEL _____ DISTRITO ELECTORAL FEDERAL, CON
(con número)

CABECERA EN _____, _____
(municipio o delegación) (entidad federativa)

PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, párrafo 1, incisos a), b), g); 37; 62, párrafo 1, inciso d) y párrafo 2, inciso b); 198, 199, 201, 202, 204, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Partido _____

_____ acredita al

C. _____, con clave de elector

| | | | | | | | | | | | | | | | | | y con domicilio en _____

_____

para el cargo de Representante General.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O DIRIGENTE DEL PARTIDO POLITICO O COALICION QUE REALIZA LA ACREDITACION	FIRMA DEL REPRESENTANTE ACREDITADO (ESTA FIRMA PUEDE ASENTARSE HASTA ANTES DE ACREDITARSE EL REPRESENTANTE EN LA CASILLA)

_____ , _____ de _____ de 2000.
(lugar) (día) (mes)

SELLO

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL	EL SECRETARIO DEL CONSEJO DISTRITAL

Este documento debe presentarse en original y copia.

ANEXO 5

CG99/2000

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRATEGIA QUE SEGUIRA EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PARA LA DIFUSION DE LA CONCLUSION DE LAS ETAPAS Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES TRASCENDENTES EN LA ORGANIZACION DEL PROCESO ELECTORAL.

CONSIDERANDOS

1.- QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41, PARRAFO SEGUNDO, FRACCION III, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA ORGANIZACION DE LAS ELECCIONES ES UNA FUNCION ESTATAL QUE SE REALIZA A TRAVES DE UN ORGANISMO PUBLICO AUTONOMO DENOMINADO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, EN CUYA INTEGRACION PARTICIPAN EL PODER LEGISLATIVO DE LA UNION, LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES Y LOS CIUDADANOS, EN LOS TERMINOS QUE ORDENE LA LEY. EN EL EJERCICIO DE ESTA FUNCION ESTATAL, LA CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD SERAN PRINCIPIOS RECTORES.

2.- QUE DE ACUERDO CON LO SEÑALADO POR EL ARTICULO 69, PARRAFO 1, INCISOS a) Y g) DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, SON FINES DEL INSTITUTO CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA Y COADYUVAR A LA DIFUSION DE LA CULTURA DEMOCRATICA. QUE ASIMISMO, EL PARRAFO 2 DE DICHO ARTICULO DISPONE QUE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO SE REGIRAN POR LOS PRINCIPIOS RECTORES YA SEÑALADOS.

3.- QUE EL CODIGO EN LA MATERIA, EN SU ARTICULO 73, PARRAFO 1, SEÑALA QUE EL CONSEJO GENERAL ES EL ORGANO SUPERIOR DE DIRECCION, RESPONSABLE DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN MATERIA ELECTORAL, ASI COMO DE VELAR PORQUE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCION ELECTORAL GUIEN TODAS LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.

4.- QUE EL ARTICULO 173 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ESTABLECE QUE EL PROCESO ELECTORAL ES EL CONJUNTO DE ACTOS ORDENADOS POR LA CONSTITUCION Y EL PROPIO CODIGO, QUE REALIZAN LAS AUTORIDADES ELECTORALES, LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES Y LOS CIUDADANOS Y QUE TIENE POR OBJETO LA RENOVACION PERIODICA DE LOS INTEGRANTES DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DE LA UNION.

5.- QUE EL ARTICULO 174, PARRAFO 1, DEL CODIGO ELECTORAL ESTABLECE QUE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO SE INICIA EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO PREVIO A LA ELECCION Y CONCLUYE CON EL DICTAMEN DE DECLARACION DE VALIDEZ DE LA ELECCION DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

6.- QUE EL PARRAFO 7, DEL ARTICULO 174, DEL CODIGO ELECTORAL DISPONE QUE ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN LOS PROCESOS ELECTORALES, A LA CONCLUSION DE CUALQUIERA DE SUS ETAPAS O DE ALGUNO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES TRASCENDENTES DE LOS ORGANOS ELECTORALES, EL SECRETARIO EJECUTIVO O EL VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL O DISTRITAL, SEGUN CORRESPONDA, PODRA DIFUNDIR SU REALIZACION Y CONCLUSION POR LOS MEDIOS QUE ESTIME PERTINENTES.

7.- QUE DE ACUERDO AL INCISO z), PARRAFO 1 DEL ARTICULO 82 DEL CODIGO ELECTORAL, ES FACULTAD DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DICTAR LOS ACUERDOS NECESARIOS PARA HACER EFECTIVAS LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN DICHO CODIGO.

8.- QUE EL INCISO a), PARRAFO 1 DEL ARTICULO 105 ESTABLECE COMO ATRIBUCION DE LOS CONSEJOS LOCALES VIGILAR LA OBSERVANCIA DEL CODIGO ELECTORAL Y LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES.

9.- QUE EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE CERTEZA OBLIGA AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN SU CONJUNTO, ASI COMO LOS ACTORES POLITICOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO, A TRANSMITIR A LA CIUDADANIA EN GENERAL, LA SEGURIDAD DE QUE EN LA ORGANIZACION Y PREPARACION DEL PROCESO ELECTORAL SE OBSERVAN DE MANERA IRRESTRICTA LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE LO RIGEN Y QUE EN TIEMPO Y FORMA SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES DE PREPARACION, PARA LOGRAR CON ELLO QUE EL CIUDADANO PARTICIPANTE, CONVOCADO A EMITIR SU VOTO, TENGA LA CERTEZA DE QUE SU VOLUNTAD SERA EXPRESADA Y SU EJERCICIO DEL SUFRAGIO SERA RESPETADO.

10.- QUE UNA MAYOR DIFUSION ACERCA DE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE PREPARACION Y DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL, DARA MAYOR CONFIANZA A LOS CIUDADANOS EN LA INSTITUCION A CARGO DE LA FUNCION ESTATAL CORRESPONDIENTE, Y LOS RESULTADOS DEL PROPIO PROCESO, DARA CERTEZA Y ELEMENTOS INDUBITABLES PARA JUZGAR CON OBJETIVIDAD, Y CON ELLO SE ESTARA OBSEQUIANDO LA ACTUALIZACION PLENA DE ESTOS PRINCIPIOS RECTORES.

11.- QUE LA MAS AMPLIA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES Y LOS RESULTADOS DE LAS ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL FORMA PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ORIENTADAS A IMPRIMIR CERTEZA Y OBJETIVIDAD, Y A ELEVAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANIA Y LOS ACTORES POLITICOS EN EL PROCESO ELECTORAL, PARA LO CUAL ES NECESARIO, EN CONSECUENCIA, UNA ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LAS ETAPAS Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES TRASCENDENTES EN LA ORGANIZACION DEL PROCESO ELECTORAL.

DE CONFORMIDAD CON LOS CONSIDERANDOS VERTIDOS Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 41, PARRAFO SEGUNDO, FRACCION III, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 48, PARRAFOS 10 Y 11, 69, PARRAFO 1, INCISOS a) Y g), 73, PARRAFO 1, 82, PARRAFO 1, INCISO z), 105, PARRAFO 1, INCISO a), 173 Y 174 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EMITE EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO

PRIMERO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA QUE INCLUYA EN LA PAGINA DE INTERNET DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL UNA SECCION ESPECIAL QUE CONTENGA UNA SINTESIS CRONOLOGICA ORDENADA DE LAS ACTIVIDADES TRASCENDENTES QUE EL INSTITUTO HA REALIZADO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DEL 2000. LA INFORMACION DE DICHA SECCION DEBERA SER ACTUALIZADA PERMANENTEMENTE.

SEGUNDO.- A PARTIR DE LA EMISION DE ESTE ACUERDO Y, EN UN PLAZO MAXIMO DE UNA SEMANA, LA COORDINACION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL CONVOCARA A UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN LA QUE SE DE A CONOCER LA SINTESIS DE LOS AVANCES LOGRADOS HASTA LA FECHA EN LA PREPARACION Y DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL.

TERCERO.- A PARTIR DE LA CONFERENCIA DE PRENSA A QUE SE REFIERE EL PUNTO DE ACUERDO ANTERIOR, PERIODICAMENTE Y HASTA LA CONCLUSION DEL PROCESO ELECTORAL DEBERAN REALIZARSE REUNIONES SIMILARES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD DE LOS

AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS A CARGO DEL INSTITUTO. LA INFORMACION QUE SE DIFUNDA A TRAVES DE LA COORDINACION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL PREVIAMENTE SERA ENVIADA A LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA Y DE ORGANIZACION ELECTORAL.

LA COORDINACION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL PREPARARA BOLETINES INFORMATIVOS PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION. LOS BOLETINES DEBERAN CONTENER LA INFORMACION MAS RELEVANTE Y SE PRESENTARAN DE FORMA TAL QUE SU LECTURA Y UTILIZACION SEAN ACCESIBLES A LA CIUDADANIA EN GENERAL.

CUARTO.- LA SECRETARIA EJECUTIVA, A TRAVES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA DISEÑARA CAPSULAS INFORMATIVAS DE RADIO Y TELEVISION CON LOS AVANCES LOGRADOS EN LA ORGANIZACION DEL PROCESO, PARA SOLICITAR SU TRANSMISION EN TIEMPOS OFICIALES A LA DIRECCION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION. EN TODO CASO, ESAS CAPSULAS NO DEBEN SUSTITUIR LAS CAMPAÑAS ESTABLECIDAS PREVIAMENTE EN LOS PROGRAMAS DE DIFUSION MASIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, NI LOS TIEMPOS SOLICITADOS PARA SU DIVULGACION EN LOS MEDIOS MASIVOS.

PARA EL DISEÑO DE LAS CAPSULAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, LA DIRECCION EJECUTIVA DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA CONTARA CON EL APOYO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACION ELECTORAL Y DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL.

QUINTO.- EL SECRETARIO EJECUTIVO Y LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA Y ORGANIZACION ELECTORAL RENDIRAN UN INFORME AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES CONCLUIDAS Y EL ESTADO QUE GUARDE LA ORGANIZACION DEL PROCESO ELECTORAL EN GENERAL EN LA SESION ORDINARIA DE JUNIO.

SEXTO.- LA SECRETARIA EJECUTIVA, A TRAVES DE LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA Y DE ORGANIZACION ELECTORAL, PROPORCIONARA A LA COORDINACION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL LA INFORMACION NECESARIA PARA QUE LOS AVANCES LOGRADOS EN LA ORGANIZACION DEL PROCESO ELECTORAL, A LA FECHA DEL INFORME DEL MES DE JUNIO, SEAN DIFUNDIDOS EN DIARIOS DE CIRCULACION NACIONAL DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EXISTENTE.

SEPTIMO.- LOS CONSEJEROS PRESIDENTES EN LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES DEBERAN AGENDAR EN LAS SESIONES ORDINARIAS DEL MES DE JUNIO UN PUNTO QUE CONTENGA LA INFORMACION DE LOS AVANCES LOGRADOS EN LA ORGANIZACION DEL PROCESO ELECTORAL EN LOS RESPECTIVOS AMBITOS ESTATALES Y DISTRITALES.

OCTAVO.- LOS CONSEJOS LOCALES Y, EN SU CASO, LOS CONSEJOS DISTRITALES, POR CONDUCTO DE SUS RESPECTIVOS PRESIDENTES, INFORMARAN AL SECRETARIO EJECUTIVO DE LAS ACCIONES QUE SE HAYAN TOMADO EN SU ENTIDAD O DISTRITO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO.

NOVENO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA DAR A CONOCER DE INMEDIATO EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO A LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES DEL INSTITUTO.

DECIMO.- EL PRESENTE ACUERDO DEBERA SER PUBLICADO EN EL **DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION**.

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO EN SESION ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 31 DE MAYO DE 2000.

ANEXO 6

CG92/2000

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE ORDENA LA SISTEMATIZACION DE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y COMPUTO DESTINADAS AL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES.

ANTECEDENTES

1. EN EL PROCESO ELECTORAL DE 1994, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 89, INCISO l) DE LA LEGISLACION ELECTORAL VIGENTE, LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL IMPLEMENTO EL PROGRAMA DE RESULTADOS PRELIMINARES (PREP), CON LA FINALIDAD DE CAPTAR EL MAYOR NUMERO DE RESULTADOS ELECTORALES, CONFORME ESTOS LLEGARON A LAS SEDES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES CORRESPONDIENTES.

   EL PROGRAMA DE RESULTADOS PRELIMINARES SE BASO EN LOS RESULTADOS PRELIMINARES QUE SE GENERARON DE MANERA INMEDIATA AL CIERRE DE LAS CASILLAS, TOMANDO COMO DOCUMENTO FUENTE LA PRIMERA COPIA DE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y COMPUTO ELABORADAS POR LOS FUNCIONARIOS DE CASILLA. ANEXO AL PAQUETE ELECTORAL, SE LLEVO UN SOBRE QUE CONTENIA LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y COMPUTO DESTINADAS PARA EL PREP.

   LA INFORMACION DE LOS RESULTADOS PRELIMINARES SE DIFUNDIO ANTE EL CONSEJO GENERAL A PARTIR DEL 15 POR CIENTO DE LAS CASILLAS COMPUTADAS.

2. DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL DE 1997, TAMBIEN SE IMPLEMENTO EL PROGRAMA DE RESULTADOS PRELIMINARES Y TUVO COMO OBJETIVO DIFUNDIR DE MANERA INMEDIATA, ANTES DE QUE SE REALIZARA EL COMPUTO EN LOS CONSEJOS DISTRITALES, RESULTADOS VERACES Y OPORTUNOS DE LAS ELECCIONES.

   COMO OBJETIVO TAMBIEN SE SEÑALO LA NECESIDAD DE ADECUAR EL PROGRAMA EN SU CONJUNTO, DE TAL FORMA QUE ESTUVIERA DISPONIBLE EN TODO MOMENTO (ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA JORNADA ELECTORAL) PARA LA REVISION Y EVALUACION POR PARTE DE LOS PARTIDOS POLITICOS.

   LA INFORMACION QUE SE TRANSMITIO Y DIFUNDIO A TRAVES DEL PREP FUE TOMADA, AL IGUAL QUE EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL DE 1994, DE ACTAS DESTINADAS AL PROGRAMA DE RESULTADOS PRELIMINARES ELABORADAS POR LOS FUNCIONARIOS DE CASILLA Y LLEVADAS A LOS DISTRITOS ELECTORALES POR LOS PRESIDENTES DE CADA MESA DIRECTIVA DE CASILLA.

   EN CADA DISTRITO ELECTORAL HABIA UNA COMPUTADORA PERSONAL CONECTADA A INTERNET, EN LA QUE PODRIA MOSTRARSE LA INFORMACION TRANSMITIDA DE MANERA QUE LOS CONSEJEROS Y LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS PUDIERAN COTEJAR CON LAS ACTAS.

CONSIDERANDOS

1. QUE EL ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL ESTABLECE QUE LA ORGANIZACION DE LAS ELECCIONES ES UNA FUNCION ESTATAL QUE SE REALIZA A TRAVES DE UN ORGANISMO PUBLICO AUTONOMO

DENOMINADO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y QUE EL CONSEJO GENERAL SERA SU MAXIMO ORGANO DE DIRECCION.

2. QUE EL ARTICULO 69 PARRAFO 1, INCISO f) DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DISPONE QUE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE VELAR POR LA AUTENTICIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SUFRAGIO.

3. QUE SEGUN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 73 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EL CONSEJO GENERAL, EN SU CALIDAD DE ORGANO SUPERIOR DE DIRECCION DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ES EL RESPONSABLE DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN MATERIA ELECTORAL, ASI COMO DE VELAR PORQUE LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD GUIEN TODAS LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.

4. QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 82, PARRAFO 1, INCISOS b) Y z) ES ATRIBUCION DEL CONSEJO GENERAL VIGILAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DEL INSTITUTO, ASI COMO DICTAR LOS ACUERDOS NECESARIOS PARA HACER EFECTIVAS SUS ATRIBUCIONES.

5. QUE EL ARTICULO 89, PARRAFO 1, INCISO l), DISPONE QUE EL SECRETARIO EJECUTIVO TIENE LA ATRIBUCION DE ESTABLECER UN MECANISMO PARA LA DIFUSION INMEDIATA EN EL CONSEJO GENERAL, DE LOS RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS, SENADORES Y PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; PARA ESTE EFECTO SE DISPONDRA DE UN SISTEMA DE INFORMATICA PARA RECABAR LOS RESULTADOS PRELIMINARES. EN ESTE CASO SE PODRAN TRANSMITIR LOS RESULTADOS EN FORMA PREVIA AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS INCISOS a) Y b) DEL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 243 DE ESTE CODIGO. AL SISTEMA QUE SE ESTABLEZCA TENDRAN ACCESO EN FORMA PERMANENTE LOS CONSEJEROS Y REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS ACREDITADOS ANTE EL CONSEJO GENERAL.

6. QUE EXISTE GRAN INTERES ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES POLITICOS POR TENER ACCESO, DESPUES DE LA JORNADA ELECTORAL, A LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y COMPUTO DESTINADAS AL PREP, EN LAS SEDES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES A TRAVES DE UN MECANISMO SEGURO QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD DE LAS ACTAS, PARA REALIZAR LAS CONSULTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS, PREVIO A LA SESION DE COMPUTO DISTRITAL.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL, 69 PARRAFO 1, INCISO f) 73, 82, INCISO b), 89, PARRAFO 1, INCISO l) Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y CON BASE EN LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL ARTICULO 82 PARRAFO 1, INCISO z), EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EMITE EL SIGUIENTE:

ACUERDO

PRIMERO. SE ORDENA EL PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO PARA CONSULTA EN LOS CONSEJOS DISTRITALES DE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y COMPUTO DE CASILLA CONTENIDAS EN EL SOBRE PREP.

SEGUNDO. LOS ARCHIVOS ESTARAN DISPONIBLES EN LAS SEDES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL VOCAL DE ORGANIZACION ELECTORAL, PARA CONSULTA DE LOS CONSEJEROS Y REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y COALICIONES, QUIENES PODRAN SOLICITAR COPIA SIMPLE DE LAS MISMAS.

TERCERO. LAS ACTAS SE ARCHIVARAN JUNTO CON EL ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACION TRANSMITIDA CORRESPONDIENTE Y SE CLASIFICARAN EN ORDEN CONSECUTIVO ASCENDENTE DEL NUMERO DE SECCION Y POR TIPO DE ELECCION, UTILIZANDO UN SISTEMA QUE GARANTICE SU INTEGRIDAD Y FACILITE SU CONSULTA.

CUARTO. SE INSTRUYE A LA DIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACION ELECTORAL, PARA QUE ADOPTE LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO.

QUINTO. SE INSTRUYE AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA QUE COMUNIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

SEXTO. PUBLIQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN EL **DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION**.

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO EN SESION ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 31 DE MAYO DE 2000.

ANEXO 7

CG44/2000

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE RATIFICAN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESGUARDO DE FORMATOS DE CREDENCIAL NO RECOGIDOS POR LOS CIUDADANOS, APROBADOS POR EL PROPIO CONSEJO GENERAL EN SESION EXTRAORDINARIA DEL 3 DE JUNIO DE 1994 Y PUBLICADOS EL 17 DE JUNIO DEL MISMO AÑO, ADECUANDOLOS A LOS TIEMPOS Y PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2000.

CONSIDERANDOS

1. QUE EL ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL ESTABLECE QUE LA ORGANIZACION DE LAS ELECCIONES ES UNA FUNCION ESTATAL QUE SE REALIZA A TRAVES DE UN ORGANISMO PUBLICO AUTONOMO DENOMINADO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y QUE EL CONSEJO GENERAL ES SU MAXIMO ORGANO DE DIRECCION.

2. QUE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 144, PARRAFO 5, DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, "LOS FORMATOS DE CREDENCIAL QUE NO HUBIESEN SIDO UTILIZADOS SE RELACIONARAN DEBIDAMENTE Y SERAN DEPOSITADOS EN UN LUGAR QUE GARANTICE SU SALVAGUARDA HASTA LA CONCLUSION DE LA JORNADA ELECTORAL DE QUE SE TRATE. LA DIRECCION EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO QUE A TAL EFECTO ACUERDE EL CONSEJO GENERAL, TOMARA LAS MEDIDAS PARA SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS VOCALES LOCALES Y DISTRITALES, QUIENES PODRAN ESTAR ACOMPAÑADOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE, PARA QUE VERIFIQUEN QUE SE CUMPLA CON DICHO PROCEDIMIENTO".

3. QUE RESULTA NECESARIO QUE EL CONSEJO GENERAL, EN SU CALIDAD DE ORGANO SUPERIOR DE DIRECCION DEL INSTITUTO, RESPONSABLE DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN MATERIA ELECTORAL, ASI COMO DE VELAR PORQUE LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, LEGALIDAD IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD GUIEN TODAS LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO, DICTE LAS MEDIDAS CONDUCENTES PARA EL DEBIDO RESGUARDO Y CUSTODIA, BAJO LAS MAS ESTRICTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DE LOS FORMATOS DE CREDENCIALES PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA, DE AQUELLOS CIUDADANOS QUE NO HAYAN COMPLETADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE PARA SU OBTENCION.

4. QUE MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN SESION EXTRAORDINARIA DEL 3 DE JUNIO DE 1994 Y PUBLICADO EN EL **DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION** EL 17 DE JUNIO DEL MISMO AÑO, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, DISPUSO LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL RESGUARDO DE FORMATOS DE CREDENCIAL NO RECOGIDOS POR LOS CIUDADANOS AL 12 DE JUNIO DE 1994.

5. QUE MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 1997 Y PUBLICADO EL 3 DE ABRIL DEL MISMO AÑO, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DISPUSO LA RATIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS ALUDIDOS EN EL PUNTO

PRECEDENTE, ADECUANDOLOS A LOS TIEMPOS Y PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY PARA EL PROCESO ELECTORAL DE 1997.

6. QUE LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS EN 1994 Y RATIFICADOS EN 1997, DEMOSTRARON SU EFICACIA DURANTE SU APLICACION EN LOS PASADOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES DE 1994 Y 1997, MISMOS QUE FORMAN PARTE DEL ACERVO DE CONOCIMIENTOS TECNICO-OPERATIVOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

EN RAZON DE LO EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 41 CONSTITUCIONAL Y 73, 82, PARRAFO 1, INCISOS j), Y z), Y 144, PARRAFO 5, DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EMITE EL SIGUIENTE

ACUERDO

PRIMERO.- PARA EL RESGUARDO DE LOS FORMATOS DE CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA, NO RECOGIDOS POR LOS CIUDADANOS AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2000, SE RATIFICAN EN SUS TERMINOS LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL RESGUARDO DE FORMATOS DE CREDENCIAL NO RECOGIDOS POR LOS CIUDADANOS, APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN SESION EXTRAORDINARIA DEL 3 DE JUNIO DE 1994 Y PUBLICADOS EN EL **DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION** EL 17 DE JUNIO DE 1994, ADECUANDOLOS A LOS PLAZOS Y TERMINOS LEGALES VIGENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL DEL AÑO 2000. DICHO PROCEDIMIENTO SE DESCRIBE EN EL ANEXO 1 DEL PRESENTE ACUERDO.

SEGUNDO.- LA DIRECCION EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, POR CONDUCTO DE LAS VOCALIAS DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LAS JUNTAS LOCALES Y DISTRITALES EJECUTIVAS, DESARROLLARA Y APLICARA LOS REFERIDOS PROCEDIMIENTOS ADECUANDOLOS A LOS PLAZOS Y TERMINOS LEGALES VIGENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL DEL AÑO 2000.

TERCERO.- EL PROCEDIMIENTO DE RESGUARDO DE FORMATOS DE CREDENCIAL DEBERA ESTAR CONCLUIDO A MAS TARDAR EL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2000.

CUARTO.- LOS PARTIDOS POLITICOS, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES ANTE LAS COMISIONES LOCALES Y DISTRITALES DE VIGILANCIA, PODRAN ACOMPAÑAR A LOS ORGANOS ELECTORALES LOCALES Y DISTRITALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MATERIA DEL PRESENTE ACUERDO, PARA VERIFICAR SU ADECUADO CUMPLIMIENTO.

QUINTO.- LA DIRECCION EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DEL CONSEJO GENERAL, INFORMARA A LOS INTEGRANTES DE DICHO ORGANO COLEGIADO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE ACUERDO.

SEXTO.- PUBLIQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN EL **DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION**.

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO EN SESION ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2000.

ANEXO 8

CG/144/99

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL CUAL SE ESTABLECE EL METODO PARA LA SUSTITUCION DE LOS PRESIDENTES Y SECRETARIOS EN LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DURANTE LAS SESIONES PERMANENTES DE LA JORNADA ELECTORAL Y DE COMPUTO.

CONSIDERANDOS

1. QUE EL ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL ESTABLECE QUE LA ORGANIZACION DE LAS ELECCIONES ES UNA FUNCION ESTATAL QUE SE REALIZA A TRAVES DE UN ORGANISMO PUBLICO AUTONOMO DENOMINADO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y QUE EL CONSEJO GENERAL SERA SU ORGANO SUPERIOR DE DIRECCION.
2. QUE EL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ESTABLECE, EN SU ARTICULO 104, PARRAFO 3, QUE PARA QUE LOS CONSEJOS LOCALES PUEDAN SESIONAR

VALIDAMENTE ES NECESARIA LA PRESENCIA DE LA MAYORIA DE SUS INTEGRANTES, ENTRE LOS QUE DEBERA ESTAR EL PRESIDENTE.

3. QUE EL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ESTABLECE, EN SU ARTICULO 115, PARRAFO 3, QUE PARA QUE LOS CONSEJOS DISTRITALES PUEDAN SESIONAR VALIDAMENTE ES NECESARIA LA PRESENCIA DE LA MAYORIA DE SUS INTEGRANTES, ENTRE LOS QUE DEBERA ESTAR EL PRESIDENTE.

4. QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 104, PARRAFO 3 Y 115, PARRAFO 3, DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DURANTE LAS SESIONES QUE CELEBREN LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL LOS PRESIDENTES DE CONSEJOS DEBERAN DESIGNAR AL CONSEJERO ELECTORAL QUE LOS SUPLIRA DURANTE SUS AUSENCIAS MOMENTANEAS.

5. QUE EL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ESTABLECE, EN SU ARTICULO 246, PARRAFO 1, QUE LOS CONSEJOS DISTRITALES DEBEN CELEBRAR SESION PERMANENTE, A PARTIR DE LAS 8:00 HORAS DEL MIERCOLES SIGUIENTE AL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL, PARA HACER EL COMPUTO DE CADA UNA DE LAS ELECCIONES.

6. QUE EL PARRAFO 3, DEL MISMO ARTICULO 246, INDICA QUE LOS CONSEJOS DISTRITALES, EN SESION PREVIA A LA JORNADA ELECTORAL, PODRAN ACORDAR QUE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL PUEDAN SUSTITUIRSE O ALTERNARSE ENTRE SI EN LAS SESIONES O QUE PUEDAN SER SUSTITUIDOS POR OTROS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DE LOS QUE APOYEN A LA JUNTA DISTRITAL RESPECTIVA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA SESION PERMANENTE.

7. QUE ES CONVENIENTE ATENDER LA FACULTAD QUE LOS ARTICULOS 104, PARRAFO 4 Y 115, PARRAFO 4, DEL CODIGO CONFIEREN A LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES, PARA DESIGNAR A LA PERSONA QUE DEBA SUSTITUIR AL SECRETARIO ANTE SU AUSENCIA A LA SESION, ESPECIFICANDO LA FORMA Y TERMINOS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD DE LA SESION.

8. QUE EL REGLAMENTO DE SESIONES DE LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL EL 23 DE DICIEMBRE DE 1996 Y MODIFICADO EN SU SESION EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DE 1999, ESTABLECE EN SU ARTICULO 14, PARRAFOS 2 Y 3 LOS MECANISMOS DE SUPLENCIA DEL CONSEJERO PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES.

9. QUE EL SISTEMA DE SUSTITUCIONES PREVISTO POR LOS ARTICULOS 104, PARRAFOS 3 Y 4; 115, PARRAFOS 3 Y 4 Y 246, PARRAFO 3, DEL COFIPE, Y 14, PARRAFOS 3 Y 4, DEL REGLAMENTO DE SESIONES DE LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES, TIENEN COMO FINALIDAD EL GARANTIZAR QUE LOS CONSEJOS DISTRITALES FUNCIONEN Y SESIONEN VALIDA Y PERMANENTEMENTE, GARANTIZANDO LA PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN EN LOS ACTOS DE CADA CONSEJO.

10. QUE EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 82, PARRAFO 1, INCISO b), EL CONSEJO GENERAL TIENE LA ATRIBUCION DE VIGILAR LA OPORTUNA INTEGRACION Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DEL INSTITUTO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 41, CONSTITUCIONAL; 104, PARRAFOS 3 Y 4; 105, PARRAFO 1, INCISO k); 107, PARRAFO 1, INCISO i); 115, PARRAFOS 3 Y 4; 116, PARRAFO 1, INCISO b); 117, PARRAFO 1, INCISO l); 246, PARRAFOS 1 Y 3 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 82, PARRAFO 1, INCISOS b) Y z), DEL CODIGO DE LA MATERIA, EL CONSEJO GENERAL EMITE EL SIGUIENTE:

ACUERDO

PRIMERO. LOS PRESIDENTES DE CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EN SESION PREVIA A LA JORNADA ELECTORAL, DESIGNARAN AL CONSEJERO ELECTORAL QUE LOS SUPLIRA DURANTE SUS AUSENCIAS MOMENTANEAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS SESIONES PERMANENTES DE LA JORNADA ELECTORAL Y DE COMPUTO.

SEGUNDO. EN SESION PREVIA A LA JORNADA ELECTORAL LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES DEL INSTITUTO DESIGNARAN AL MIEMBRO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL FACULTADO PARA SUSTITUIR AL SECRETARIO DEL CONSEJO DURANTE SUS AUSENCIAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS SESIONES PERMANENTES DE LA JORNADA ELECTORAL Y DE COMPUTO.

TERCERO. EL PRESENTE ACUERDO DEBERA SER NOTIFICADO A LOS 300 CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 32 CONSEJOS LOCALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

CUARTO. PUBLIQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN EL **DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION**.

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO EN SESION ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1999.

RESOLUCION del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se da cumplimiento a la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de la resolución respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos correspondientes al ejercicio de 2000, identificada como SUP-RAP-055/2001.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.- Consejo General.- CG105/2002.

RESOLUCION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION RECAIDA AL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL PARTIDO ACCION NACIONAL EN CONTRA DE LA RESOLUCION RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISION DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2000, IDENTIFICADA COMO SUP-RAP-055/2001.

ANTECEDENTES:

I.- POR CONDUCTO DE SU SECRETARIO TECNICO, LA COMISION DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS RECIBIO LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2000, PROCEDIENDO A SU ANALISIS Y EVISION, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 49-A DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; 15, 16, 19 Y 20 DEL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS, INSTRUCTIVOS, CATALOGOS DE CUENTAS Y GUIA CONTABILIZADORA APLICABLES A LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACION DE SUS INFORMES.

II.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 49-A, PARRAFO 2, INCISO A) DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y 19.2 DEL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS, INSTRUCTIVOS, CATALOGOS DE CUENTAS Y GUIA CONTABILIZADORA APLICABLES A LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACION DE SUS INFORMES, LA COMISION DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS EJERCIO EN DIVERSAS OCASIONES SU FACULTAD DE SOLICITAR A LOS ORGANOS RESPONSABLES DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE LO REPORTADO EN LOS INFORMES. ASIMISMO, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 49-A, PARRAFO 2, INCISO B), DEL CODIGO ELECTORAL Y 20 DEL REGLAMENTO ALUDIDO, LA COMISION DE FISCALIZACION NOTIFICO A LOS PARTIDOS POLITICOS LOS ERRORES Y OMISIONES TECNICAS QUE ADVIRTIO DURANTE LA REVISION DE LOS INFORMES, PARA QUE PRESENTARAN LAS ACLARACIONES O RECTIFICACIONES PERTINENTES.

III.- UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DESCRITO, Y CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 49-A, PARRAFO 2, INCISOS C) Y D), Y 80, PARRAFO 3, DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y 21 DEL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS, INSTRUCTIVOS, CATALOGOS DE CUENTAS Y GUIA CONTABILIZADORA APLICABLES A LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACION DE SUS INFORMES, LA COMISION DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS PRESENTO ANTE EL CONSEJO GENERAL, EN SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 9 DE AGOSTO DE 2001, EL

DICTAMEN CONSOLIDADO RESPECTO DE LA REVISION DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES Y ORGANIZACIONES POLITICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2000, JUNTO CON EL PROYECTO DE RESOLUCION CORRESPONDIENTE.

IV.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 41, FRACCION II, ULTIMO PARRAFO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 49-A, PARRAFO 2, INCISO D), Y 49-B, PARRAFO 2, INCISO I), DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y 21.2, INCISO D), DEL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS, INSTRUCTIVOS, CATALOGOS DE CUENTAS Y GUIA CONTABILIZADORA APLICABLES A LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACION DE SUS INFORMES, EN DICHO DICTAMEN CONSOLIDADO LA COMISION DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS DETERMINO QUE SE ENCONTRARON DIVERSAS IRREGULARIDADES DERIVADAS DE LA REVISION DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2000 QUE, A JUICIO DE DICHA COMISION, CONSTITUIAN VIOLACIONES A LAS DISPOSICIONES EN LA MATERIA, DE ACUERDO CON LAS CONSIDERACIONES EXPRESADAS EN EL APARTADO DE CONCLUSIONES DEL DICTAMEN CONSOLIDADO MENCIONADO, POR LO QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 49-A, PARRAFO 2, INCISO E) DEL CODIGO ELECTORAL, Y 21.3 DEL REGLAMENTO APLICABLE A LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES, LA COMISION PROPUSO AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL QUE EMITIERA UNA RESOLUCION IMPONIENDO SANCIONES A DIVERSOS PARTIDOS POLITICOS, ENTRE ELLOS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CON MOTIVO DE LAS IRREGULARIDADES ADVERTIDAS EN SU INFORME ANUAL, LA CUAL FUE APROBADA POR ESTE ORGANO EN SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 9 DE AGOSTO DE 2001.

V.- INCONFORME CON LA RESOLUCION RECIEN SEÑALADA, EL PARTIDO ACCION NACIONAL INTERPUSO RECURSO DE APELACION ANTE LA AUTORIDAD ELECTORAL RESPONSABLE, LA CUAL LE DIO EL TRAMITE PREVISTO EN LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL, Y LO REMITIO A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, QUE ADMITIO EL RECURSO A TRAMITE Y LE ASIGNO EL NUMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-055/2001.

VI.- DESAHOGADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE, LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION RESOLVIO EL RECURSO REFERIDO, EXPRESANDO EN EL PUNTO RESOLUTIVO PRIMERO LO QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBE:

> ***PRIMERO.*** *Se revoca la sanción impuesta al Partido Acción Nacional en el inciso d) del punto resolutivo primero, de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio de 2000, aprobada en su sesión extraordinaria del nueve de agosto de 2001, a efecto de que se proceda en los términos de lo expuesto en el apartado C del considerando tercero de esta sentencia.*

EN EL APARTADO C DEL CONSIDERANDO TERCERO DE LA SENTENCIA SE ESTABLECE LO SIGUIENTE:

> ***CONSIDERANDO TERCERO***
>
> *C. En cambio, por lo que se refiere a la imposición de la sanción prevista en el considerando 5.1, inciso d), y punto resolutivo primero, inciso d), del acto combatido (...) la autoridad responsable efectivamente desatendió lo previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, incisos b) y d), fracción III, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*
>
> *(...)*
>
> *...si la autoridad fiscalizadora advirtió la existencia de errores en el informe rendido por el Partido Acción Nacional, en relación con la información que se desprende del informe de gastos de campaña que como integrante de una coalición presentó, la obligación de la autoridad era hacer del conocimiento del partido político dicha situación, a efecto de que éste tuviera la oportunidad de realizar las aclaraciones pertinentes.*
>
> *(...)*

...al ser fundado el agravio esgrimido por el partido político actor, debe revocarse la sanción impuesta al Partido Acción Nacional en el inciso d) del punto resolutivo primero, de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio de 2000 (...) a efecto de que la autoridad responsable reponga el procedimiento por lo que se refiere exclusivamente a la irregularidad precisada en el inciso d), del considerando 5.1, de la referida resolución impugnada, y respecto del Partido Acción Nacional, haciendo del conocimiento de dicho instituto político las observaciones que sobre el particular se realizaron, brindándole el plazo de diez días a efecto de que presente las aclaraciones o rectificaciones pertinentes, y con ello salvaguardar su garantía de audiencia. Hecho lo anterior, deberá continuar con el correspondiente procedimiento, y en su momento deberá dictar la determinación que conforme a derecho corresponda.

VII.- QUE MEDIANTE OFICIO STCFRPAP/729/01, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2001, DIRIGIDO A LA LIC. GABRIELA RUIZ DEL RINCON, SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO AL MANDATO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION CITADO EN EL PUNTO ANTERIOR, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 49-A, PARRAFO 2, INCISO B) DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, ASI COMO EN EL ARTICULO 3, INCISO B) DEL REGLAMENTO APLICABLE A LAS COALICIONES, EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS SOLICITO AL PARTIDO ACCION NACIONAL, EN SU CALIDAD DE RESPONSABLE DE LAS FINANZAS DE LA COALICION ALIANZA POR EL CAMBIO, PRESENTARA LAS ACLARACIONES QUE A SU DERECHO CONVINIERE RESPECTO DE LAS DIFERENCIAS DETERMINADAS ENTRE LA CONTABILIDAD AGREGADA DE LOS PARTIDOS QUE CONFORMARON LA COALICION ALIANZA POR EL CAMBIO Y SUS RESPECTIVOS INFORMES ANUALES, OTORGANDOLE UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA TAL EFECTO.

VIII.- QUE MEDIANTE OFICIO TESO 074/01, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2001, DIRIGIDO AL MTRO. ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ, SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION DE FISCALIZACION DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS, EL PARTIDO ACCION NACIONAL, POR CONDUCTO DE SU SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DIO CONTESTACION AL OFICIO STCFRPAP/729/01, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2001, CITADO EN EL PUNTO ANTERIOR.

IX.- EN SESION CELEBRADA EL DE 2002, LA COMISION DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS ACORDO REALIZAR MODIFICACIONES AL DICTAMEN CONSOLIDADO RESPECTO DE LA REVISION DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES Y ORGANIZACIONES POLITICAS, CORRESPONDIENTES AL EJERICICIO DE 2000, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION RECAIDA AL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL PARTIDO ACCION NACIONAL EN CONTRA DE LA RESOLUCION MENCIONADA.

X.- EN VIRTUD DE LO SEÑALADO, PROCEDE QUE ESTE CONSEJO GENERAL RESUELVA MODIFICAR LA RESOLUCION RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISION DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2000, POR LO QUE EN VISTA DE LO ANTERIOR, Y

CONSIDERANDO:

1.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 41, FRACCION II, ULTIMO PARRAFO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 3o., PARRAFO 1, 23, 39, PARRAFO 2, 73, PARRAFO 1, 49-A, PARRAFO 2, INCISO e), 49-B, PARRAFO 2, INCISO i), Y 82, PARRAFO 1, INCISOS h) Y w), DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y 22.1 DEL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS, INSTRUCTIVOS, CATALOGOS DE CUENTAS Y GUIA CONTABILIZADORA APLICABLES A LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACION DE SUS INFORMES, ES FACULTAD DE ESTE CONSEJO GENERAL CONOCER DE LAS INFRACCIONES E IMPONER LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES A LAS VIOLACIONES A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS DERIVADAS DE LA REVISION DE LOS

INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2000, SEGUN LO QUE AL EFECTO HAYA DICTAMINADO LA COMISION DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS.

2.- QUE ESTE CONSEJO GENERAL, APLICANDO LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 270, PARRAFO 5, DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y 22.1 DEL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS, INSTRUCTIVOS, CATALOGOS DE CUENTAS Y GUIA CONTABILIZADORA APLICABLES A LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACION DE SUS INFORMES, DEBE DETERMINAR LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES TOMANDO EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS Y LA GRAVEDAD DE LA FALTA, POR LO QUE DEBE SEÑALARSE QUE POR "CIRCUNSTANCIAS" SE ENTIENDE EL TIEMPO, MODO Y LUGAR EN QUE SE PRODUJERON LAS FALTAS; Y EN CUANTO A LA "GRAVEDAD" DE LA FALTA, SE ANALIZA LA TRASCENDENCIA DE LA NORMA TRANSGREDIDA Y LOS EFECTOS QUE PRODUCE LA TRANSGRESION RESPECTO DE LOS OBJETIVOS Y LOS INTERESES JURIDICOS TUTELADOS POR EL DERECHO.

3.- QUE ESTE CONSEJO GENERAL ESTA OBLIGADO A ACATAR LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. EN EL CASO, LA RELATIVA AL RECURSO DE APELACION IDENTIFICADO COMO SUP-RAP-055/2001.

POR LO EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 41, FRACCION II, ULTIMO PARRAFO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 3o., 22, PARRAFO 3, 23, 38, PARRAFO 1, INCISO K), 39, PARRAFO 1, 49, 49-A, 49-B, 73, 80, PARRAFO 3, 82, PARRAFO 1, INCISO h), 269 Y 270, PARRAFO 5, DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN EL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS, INSTRUCTIVOS, CATALOGOS DE CUENTAS Y GUIA CONTABILIZADORA APLICABLES A LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES QUE FORMEN COALICIONES, EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y GASTOS Y EN LA PRESENTACION DE SUS INFORMES Y EN EL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS, INSTRUCTIVOS, CATALOGOS DE CUENTAS Y GUIA CONTABILIZADORA APLICABLES A LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACION DE SUS INFORMES, Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE AL CONSEJO GENERAL OTORGAN LOS ARTICULOS 39, PARRAFO 2 Y 82, PARRAFO 1, INCISO w) DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL

RESUELVE:

PRIMERO.- SE MODIFICA EL INCISO d) DEL APARTADO 5.1 DEL CONSIDERANDO 5 DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISION DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2000, EMITIDA EL 9 DE AGOSTO DE 2001, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

d) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

> *De la revisión efectuada a la contabilidad del Partido Acción Nacional se determinó que existen diferencias entre la contabilidad agregada de los partidos que conformaron la coalición Alianza por el Cambio y sus respectivos informes, en tanto que los partidos que integraron la coalición Alianza por el Cambio presentan en sus respectivos informes anuales diferencias con respecto a los resultados de la revisión de los informes de campaña efectuada por esta autoridad.*
>
> *Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido por los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1.9, 2.6 y 3.1 inciso b), 3.9 y 7.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos e instructivos aplicables a los partidos políticos nacionales que formen coaliciones en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, así como lo ordenado por el artículo 1.1 y 11.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales".*

De la revisión efectuada por la Comisión de Fiscalización a la documentación presentada por el partido, se concluyó que el partido registró efectivamente varias cifras por concepto de Campañas Federales relativas a

los rubros Financiamiento proveniente de Militantes, Financiamiento proveniente de Simpatizantes, Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos, etc., relativos a las actividades financieras desplegadas por la Alianza por el Cambio. Sin embargo, como puede verse en los apartados *4.1.2.3.3 Aportaciones De Militantes En Campañas Políticas, 4.1.2.4.3 Aportaciones De Simpatizantes En Campañas Políticas, 4.1.2.6.3 Otras Operaciones Financieras En Campañas Políticas, Y 4.1.3.4 Gastos Efectuados en Campañas Políticas* del capítulo *4.1 Partido Acción Nacional* del Dictamen Consolidado, las cifras finales reportadas por ambos partidos no se corresponden con las que reportaron juntos como Coalición en el Informe de Campaña que presentaron ante esta autoridad electoral y que ya fue auditado y dictaminado.

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado.

Mediante oficio STCFRPAP/729/01 de fecha 16 de noviembre de 2001, se le solicitó al Partido Acción Nacional, en su calidad de responsable de las finanzas de la Coalición Alianza por el Cambio, que presentara las aclaraciones y rectificaciones que a su derecho conviniera respecto de las diferencias determinadas entre la contabilidad agregada de los partidos que conformaron la Coalición Alianza por el Cambio y sus respectivos informes.

Al respecto, el partido, mediante escrito de fecha 30 de noviembre de 2001, dio respuesta al requerimiento formulado por esta autoridad, mediante el cual expresó lo que a continuación se transcribe:

"*Del Contenido de la resolución de fecha veinticinco de octubre del año en curso, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictada para resolver el recurso de apelación seguido en el expediente número SUP-RAP-055/2001, se desprenden dos cuestiones importantes y que debe tomar en cuenta la Comisión de Fiscalización para llegar a la conclusión de que el Partido Acción Nacional no es responsable de incumplimiento alguno a las normas de fiscalización respecto a los ingresos y egresos ordinarios del año dos mil:*

"Falsamente al criterio sostenido por la Comisión de Fiscalización en el sentido de que las discrepancias aparentes en la contabilidad y en los informes no son susceptibles de ser corregidos por el partido político, el Tribunal Electoral ha sostenido a fojas 64, 65 y 66 de la sentencia, lo siguiente que cito textualmente:

'En este sentido, si la autoridad fiscalizadora advirtió la existencia de errores en el informe rendido por el Partido Acción Nacional, en relación con la información que se desprende del informe de gastos de campaña que como coalición presentó, la obligación de la autoridad era hacer del conocimiento del partido político dicha situación, a efecto de que éste tuviera la oportunidad de realizar las aclaraciones que estimara pertinentes. Consecuentemente, si la autoridad fiscalizadora no le brindó la oportunidad de rectificar los errores, tal y como lo prevé el código electoral, y precisamente le impone una sanción derivada de las irregularidades que advirtió pero no hizo previamente del conocimiento del partido político, dicha autoridad actuó contrariamente al principio de legalidad...'

'EN este sentido, no escapa a este órgano jurisdiccional el hecho de que la autoridad responsable sostiene que no solicitó al Partido Acción Nacional que explicara y, en su caso, corrigiera las diferencias contables detectadas entre la contabilidad agregada de la coalición Alianza por el Cambio y los informes anuales presentados por los partidos políticos que la integraron, porque a su juicio, constituía una irregularidad que no era susceptible de ser subsanada. Dicha afirmación de la hoy responsable sólo podría ser atendible, en su caso, respecto del informe de gastos de campaña de la citada coalición, toda vez que el mismo ya fue objeto de revisión y emisión del dictamen correspondiente, pero no puede serlo en forma alguna respecto del informe anual de ingresos y egresos que se estaba revisando, toda vez que el mismo era susceptible de ser aclarado o rectificado por el propio partido político.'

'Finalmente, cabe señalar que la autoridad responsable actuó en forma incongruente respecto de la imposición de sanción a la irregularidad que en este apartado se analiza, toda vez que en la propia resolución impugnada, tocante al Partido Verde Ecologista de México, sí hizo del conocimiento de este último instituto político las irregularidades que encontró RESPECTO DE QUE DICHO PARTIDO NO INCLUYO EN SUS REGISTROS CONTABLES LO RELATIVO A SU PARTE PROPORCIONAL EN RELACION CON LA COALICION ALIANZA POR EL CAMBIO, DEL REMANENTE DE BANCOS, PASIVOS DOCUMENTADOS, INGRESOS EN ESPECIE Y EFECTIVO POR APORTACIONES DE LOS CANDIDATOS A SUS CAMPAÑAS, APORTACIONES EN ESPECIE RECIBIDAS POR LOS CANDIDATOS DE LA COALICION, INGRESOS POR COLECTAS EN MITINES Y POR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS, LO CUAL LLEVO A LA MISMA AUTORIDAD FISCALIZADORA A REALIZAR LAS OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES, A EFECTO DE QUE EL PARTIDO POLITICO EN CUESTION REALIZARA LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES'.

Lo importante en el caso concreto es precisar que debido al incumplimiento grave del Partido Verde Ecologista de México en el registro contable de los conceptos que tuvo en consideración el Tribunal Electoral al resolver, mismos que cito ahora en el párrafo anterior de este escrito, la autoridad fiscalizadora no puede seguir sosteniendo el criterio de que las discrepancias, aparentes según se aclarará posteriormente, no son susceptibles de ser corregidas o aclaradas por tener su origen en la información contable de la campaña de una colación formada por dos partidos políticos.

Diferente hubiera sido si el Partido Verde Ecologista de México hubiera registrado contablemente los saldos finales de las campañas federales del año dos mil que se le hizo saber oportunamente y que sin embargo, omitió registrar dolosamente y con el ánimo de no reflejar en sus estados financieros la deuda millonaria que pretende desconocer. Esta circunstancia es del conocimiento tanto por parte del Instituto Federal Electoral como del propio Tribunal Electoral, pues tanto en el dictamen consolidado de la revisión de campaña como a fojas 24 de la sentencia SUP-RAP-055/2001 aparece lo siguiente:

'Esta autoridad [La Comisión de Fiscalización] considera que para determinar la sanción que corresponde a cada uno de los partidos coaligados en la Alianza por el Cambio debe tomarse en cuenta si registró o no lo que el órgano de finanzas de la coalición en su momento determinó. Por oficio suscrito por Gabriela Ruíz del Rincón, Secretaria de Administración y Finanzas del Partido Acción Nacional, dirigido al Lic. Francisco Agundis Arias, encargado del órgano responsable de las finazas del Partido Verde Ecologista de México, una de cuyas copias fue turnada a la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización, es dable presumir que el Partido Acción Nacional registró lo que le correspondía según la comunicación de las partes en cita. Sin embargo, en la medida en que la agregación de los montos registrados por cada uno de los partidos en sus informes anuales no coincide con los montos agregados por ellos en tanto que la coalición en el Informe de Campaña entregado por la Alianza por el Cambio, ambos han de ser sancionados. Del contenido del capítulo correspondiente del Dictamen Consolidado, este Consejo General concluye que el Partido Acción Nacional incumplió con la normatividad en tanto que parte integrante de una coalición, toda vez que existen diferencias entre la contabilidad agregada de los partidos que conformaron la coalición Alianza por el Cambio y sus respectivos informes anuales.'

Del párrafo anterior se desprende que una vez concluida la participación en el proceso electoral del año dos mil bajo la forma de coalición electoral, ambos partidos, es decir, el Partido Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista de México, tienen distintos tipos de responsabilidad en la información de los ingresos y egresos ordinarios que reporten al Instituto Federal Electoral por tratarse de partidos políticos nacionales diferentes. A mayor abundamiento, la misma Comisión de Fiscalización reconoce que el Partido Acción Nacional sí cumplió con su obligación de registrar contablemente y de informar tanto al Partido Verde Ecologista de México cuáles son los saldos aplicables a cada partido político. Por lo tanto, es responsabilidad únicamente del Verde Ecologista el registro contable del treinta y uno por ciento de dichos saldos y el Partido Acción nacional no tiene fundamento legal para obligarlo a reconocer, registrar y específicamente cumplir en el pago de las deudas de campaña que se niega a reconocer dolosamente.

Es obvio que si solamente un partido político, como es el caso del Partido Acción Nacional, registra en su contabilidad y da a conocer a la Comisión de Fiscalización en el informe anual sobre sus ingresos y egresos ordinarios el 68% de los saldos de campaña, que son los que le corresponden registrar según el porcentaje de participación en los ingresos de campaña por convenio, jamás van a coincidir los conceptos reportados por aportaciones de militantes, de simpatizantes, rendimientos financieros y gastos de campaña con la suma agregada de los partidos que integraron la Coalición Alianza por el Cambio en sus informes y van a surgir las discrepancias señaladas en su oficio de mérito porque el Partido Verde Ecologista de México no registró en su contabilidad el 31% aproximadamente del saldo de la campaña, que es el que le corresponde registrar, y tan sólo informa parcialmente en el informe anual del año dos mil lo que le conviene. Si el Partido Verde Ecologista de México hubiera registrado el saldo de campaña que obra en el dictamen consolidado de campaña, la suma de los datos reportados por ambos

partidos en los informes anuales hubiera coincidido plenamente con los datos que constan en el dictamen que elaboró la Comisión de Fiscalización.

Por otra parte, en la balanza consolidada al treinta y uno de diciembre del año dos mil, aparece en el renglón de gastos de campaña un total $466'798,685.27. En este monto se incluyó (...) la cantidad de $2'321,104.46 que corresponden al 31% del activo fijo que se gastó durante la campaña de un total de $7'474,101.82. Se planteó la necesidad de establecer el monto neto del pasivo del Partido Verde Ecologista de México por cubrir al Partido Acción Nacional ya que si la coalición gasto (sic) como activo fijo de campaña la cantidad de $7'474,101.82 no existía razón alguna para registrar a dicho partido político, como deudores diversos, por un monto mayor a los 36'251,922.39 que aparece actualmente; es decir, que el porcentaje de distribución (31%) del Partido Verde Ecologista de México en los gastos del activo fijo de campaña, por un total de $2'321,104.46 se aplicó al renglón gastos de campaña del Partido Acción Nacional con la consecuente deducción por dicho importe en el adeudo del Partido Verde Ecologista de México en atención a lo dispuesto por el artículo 1.9 del reglamento de fiscalización aplicable a las coaliciones aprobado a finales del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve".

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización consideró que la contestación del Partido Acción Nacional no era satisfactoria en razón de lo siguiente:

"(...) esta autoridad considera que el Partido Acción Nacional, en la medida en que formaba parte de la Coalición Alianza por el Cambio, es co-responsable con el Partido Verde Ecologista de México del incumplimiento a la normatividad antes apuntada.

Es decir, el partido sostiene que la responsabilidad de la actualización de la conducta antijurídica corresponde única y exclusivamente al Partido Verde Ecologista de México, pues, según alega, informó a éste la parte proporcional que le correspondía registrar en su contabilidad y reportar en su informe anual. La respuesta del partido no se considera satisfactoria puesto que los partidos coaligados estaban obligados, en primer lugar, a acordar los montos a distribuirse una vez extinguida la coalición y, en segundo lugar, a registrar contablemente y reportar en su siguiente informe anual los montos acordados. Si tales conductas hubiesen sido desplegadas por los partidos coaligado, la irregularidad de ninguna manera se hubiere actualizado. En este punto es importante señalar que el Partido Verde Ecologista de México fue sancionado por incumplir con su obligación de registrar contablemente y reportar en su informe anual ingresos obtenidos y egresos realizados por la coalición Alianza por el Cambio.

Debe tenerse en cuenta la trascendencia de la irregularidad en análisis. Como se señaló con anterioridad, el Reglamento aplicable a las coaliciones establece que los partidos que se hubiesen coaligado, tienen la obligación de reportar en sus siguientes informes anuales los resultados contables finales de la operación de la coalición de la que hubiesen formado parte. Las normas que prevén tal obligación indican, incluso, el mecanismo para la distribución entre los partidos.

La finalidad de estas normas guarda estricta relación con la naturaleza jurídica de las coaliciones y con la obligación de los partidos de registrar sus ingresos y egresos. Si bien es cierto que las coaliciones circunscriben su existencia al proceso electoral, también es cierto que existe un conjunto de obligaciones atribuibles a los partidos políticos que las conformaron, que tienen por objeto la extinción administrativa de la misma y la distribución entre los partidos de los pasivos documentados y activos fijos, así como el debido registro de los ingresos y egresos de la coalición, en tanto que ésta no tiene personalidad jurídica distinta a la de los partidos y son éstos los directamente obligados al registro y comprobación de los ingresos recibidos y egresos realizados en una campaña electoral, independientemente de que no hubiesen participado por sí mismos sino agrupados con otros.

La omisión del registro de ingresos y egresos de la coalición en todos y cada uno de los informes anuales de los partidos coaligados, tiene como consecuencia que existan diferencias entre los datos arrojados por el Dictamen Consolidado relativo a la revisión de los informes de campaña y las cifras reportadas en los informes anuales de los partidos en lo individual. En tal virtud, la autoridad se encuentra imposibilitada para compulsar la información y determinar la veracidad de lo reportado en los informes de campaña, o bien, para concluir que los partidos hubiesen registrado debidamente los resultados contables de la operación de la

citada coalición. La falta de coincidencia en los datos es un signo inequívoco de un deficiente registro contable atribuible a todos los partidos que conformaron la coalición, en la medida en la que era responsabilidad de éstos, en primer lugar, distribuir los ingresos y egresos de la coalición y, en segundo lugar, registrarlos en su respectiva contabilidad y reportarlos individualmente en sus informes anuales. En ese sentido, no se justifica que las cifras agregadas reportadas en los informes anuales no coincida con los montos a los que arribó esta autoridad una vez concluida la revisión de los informes de campaña.

Del análisis de la respuesta del partido respecto de la distribución de los Gastos de Campaña, así como de los pasivos de la Coalición Alianza por el Cambio, se determinó que el Partido Acción Nacional, al dividir lo correspondiente a los activos fijos por un total de $7,474,101.82, no le asignó la parte que le correspondía al Partido Verde Ecologista de México de acuerdo con el porcentaje de distribución (31% aproximadamente, según el Partido Acción Nacional) por un monto de $2,321,104.46, ya que se disminuyó de la porción de adeudos que le correspondía a este último.

Dado lo anterior, el pasivo que en realidad le tocaba absorber al Partido Verde Ecologista de México, era por un importe menor. Esta situación provocó que existieran las discrepancias arriba apuntadas puesto que en estos rubros el Partido Acción Nacional no respetó los porcentajes de distribución, en contravención al artículo 1.9 del Reglamento aplicable a las coaliciones".

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que el Partido Acción Nacional, en tanto parte integrante de una coalición, incumplió lo dispuesto por los artículos 1.9, 2.6, 3.1 inciso b), 3.9 y 7.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos e instructivos aplicables a los partidos políticos nacionales que formen coaliciones, en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, en relación con los artículos 1.1 y 11.1 de Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, toda vez que las diferencias encontradas entre la contabilidad agregada de los partidos que conformaron la coalición Alianza por el Cambio y sus respectivos informes, se deben al hecho de que estos partidos presentan en sus respectivos informes anuales diferencias con respecto a los resultados de la revisión de los informes de campaña efectuada por esta autoridad.

En efecto, los partidos políticos coaligados están obligados a registrar contablemente sus ingresos y egresos, y a reportarlos en sus informes anuales y de campaña, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.9, 2.6, 3.1 inciso b), 3.9 y 7.1 del Reglamento aplicable a las coaliciones, en relación con los artículos 1.1 y 11.1 del Reglamento aplicable a partidos políticos, por lo que, como acertadamente consideró la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, las observaciones hechas al Partido Acción Nacional no se consideran subsanadas mediante su respuesta a esta autoridad, pues en la medida en que éste formaba parte de la coalición Alianza por el Cambio, es co-responsable con el Partido Verde Ecologista de México del incumplimiento de la citada normatividad.

La falta, pues, se acredita, y conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Sin embargo, esta autoridad sigue considerando que para determinar la sanción que corresponde a cada uno de los partidos coaligados en la Alianza por el Cambio debe tomarse en cuenta si registró o no lo que el órgano de finanzas de la coalición en su momento determinó. Por oficio suscrito por Gabriela Ruiz del Rincón, Secretaria de Administración y Finanzas del Partido Acción Nacional, fechado el 15 de marzo de 2001, dirigido al Lic. Francisco Agundis Arias, encargado del órgano responsable de las finanzas del Partido Verde Ecologista de México, una de cuyas copias fue turnada a la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización, es dable presumir que el Partido Acción Nacional registró lo que le correspondía según la comunicación entre las partes que se cita. Sin embargo, en la medida en que la agregación de los montos registrados por cada uno de los partidos en sus Informes Anuales no coincide con los montos agregados registrados por ellos en tanto que coalición en el Informe de Campaña entregado por la Alianza por el Cambio, ambos han de ser sancionados. Del contenido del capítulo correspondiente del Dictamen Consolidado, este Consejo General concluye que el Partido Acción Nacional incumplió con la normatividad en tanto que parte integrante de una coalición, toda vez que existen diferencias entre la contabilidad agregada de los partidos que conformaron la coalición Alianza por el Cambio y sus respectivos informes anuales.

La falta se califica como grave, porque provoca dudas en la autoridad respecto de cuál de los datos informados por los partidos en lo individual y por los partidos como Coalición resulta cierto y definitivo. Sin

embargo, esta autoridad toma en consideración que el Partido Acción Nacional sí registró lo que comunicó al Partido Verde Ecologista de México que había lugar a registrar en ambas contabilidades, que dichas cifras cuadraban con los contenidos del Informe de Campaña correspondiente, y que esta es la primera ocasión en que el Partido Acción Nacional incurre en esta irregularidad.

Por otra parte, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer al Partido Acción Nacional una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la multa de 1,283 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal.

SEGUNDO.- POR LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN EL INCISO d) DEL CONSIDERANDO 5.1 MODIFICADO EN EL PUNTO ANTERIOR, EL INCISO d) DEL PUNTO RESOLUTIVO PRIMERO DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISION DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2000, EMITIDA EL 9 DE AGOSTO DE 2001, QUEDA COMO SIGUE:

d) Una multa de **un mil doscientos ochenta y tres días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal**, equivalente a $54, 078.45 (cincuenta y cuatro mil setenta y ocho pesos, 45/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días prorrogables a partir de la fecha en que esta Resolución se dé por notificada al partido, o si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

TERCERO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PARA QUE, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE CONCLUYA EL PLAZO PARA LA INTERPOSICION DEL RECURSO CORRESPONDIENTE EN CONTRA DE LA PRESENTE RESOLUCION ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, O EN CASO DE QUE SE PRESENTE DICHO RECURSO, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SEA NOTIFICADA LA SENTENCIA QUE LO RESOLVIERE, REMITA EL DICTAMEN CONSOLIDADO Y LA RESOLUCION RELATIVOS A LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2000, PARA SU PUBLICACION EN EL **DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION**, EN LOS TERMINOS EN QUE HAN QUEDADO MODIFICADOS POR LA PRESENTE RESOLUCION Y POR EL DIVERSO EMITIDO POR LA COMISION DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS, ASI COMO LA SENTENCIA RECAIDA AL RECURSO DE APELACION RESUELTO POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL EN CONTRA DEL DICTAMEN Y LA RESOLUCION REFERIDA, ASI COMO LA QUE EN SU CASO RECAIGA AL RECURSO QUE SE LLEGARE A INTERPONER EN CONTRA DEL PRESENTE ACUERDO, Y ASIMISMO ESTABLEZCA LOS MECANISMOS PARA LA DIFUSION PUBLICA DEL DICTAMEN CONSOLIDADO Y DE LA RESOLUCION, EN LOS TERMINOS EN QUE QUEDEN FIRMES, HACIENDOLOS DEL CONOCIMIENTO PREVIO DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL ANTE ESTE CONSEJO GENERAL.

LA PRESENTE RESOLUCION FUE APROBADA EN SESION ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2002.- EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, **JOSE WOLDENBERG KARAKOWSKY**.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL, **FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ**.- RUBRICA.

SENTENCIA de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, recaída al recurso de apelación interpuesto por el Partido Acción Nacional, identificada como SUP-RAP-055/2001.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.- Sala Superior.- Secretaría General de Acuerdos.

RECURSO DE APELACION

EXPEDIENTE: SUP-RAP-055/2001

ACTOR: PARTIDO ACCION NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: JOSE DE JESUS OROZCO HENRIQUEZ

SECRETARIO: CARLOS VARGAS BACA

México, Distrito Federal, a veinticinco de octubre de dos mil uno.

VISTOS para resolver los autos del expediente SUP-RAP-055/2001, relativo al recurso de apelación interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de la *Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio de 2000*, y

RESULTANDO

I. El veintiocho de marzo de dos mil uno, el Partido Acción Nacional presentó ante la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral, su informe anual sobre el origen y destino de sus recursos, correspondiente al ejercicio de dos mil.

II. Mediante diversos oficios, durante el periodo de revisión de los informes, el Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral solicitó al partido político hoy actor presentar diversas aclaraciones o rectificaciones al informe referido en el resultando anterior, a los que el propio actor, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Partido Acción Nacional, dio las respectivas respuestas.

III. El nueve de agosto del presente año, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral se conoció el *Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio de 2000* y se aprobó la *Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio de 2000*.

En dicha resolución, en lo que interesa, se expresa lo siguiente:

RESOLUCION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISION DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2000.

VISTO el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de los Informes Anuales de ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales y Organizaciones Políticas, correspondientes al ejercicio de 2000, y

RESULTANDO:

I. Que mediante decreto publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 24 de septiembre de 1993, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se estableció por primera vez que los partidos políticos debían presentar Informes Anuales y de Campaña sobre el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, además de la obligación de que todo partido político contará con un órgano responsable de la administración de su patrimonio, de sus recursos financieros y de la presentación de los referidos informes.

II.- Que mediante Acuerdo publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 6 de enero de 1994, el Consejo General del Instituto Federal Electoral estableció y aprobó, a propuesta de la Comisión de Conejeros magistrados integrada al efecto, los Lineamientos para los Informes Anuales y de Campaña que debían presentar los partidos políticos a dicha Comisión, así como los formatos e instructivos anexos a los referidos Lineamientos que deberían ser utilizados por los partidos políticos en la presentación de los Informes respectivos, excepto el formato "IC-1", y su instructivo; y que mediante aclaración al Acuerdo señalado en el resultando inmediato anterior, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 26 de enero de 1994, se corrigieron algunos errores tipográficos y se precisaron diversos formatos, relativos a la presentación de los Informes Anuales de los partidos políticos.

III.- Que por Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 23 de marzo de 1994, se modificaron el formato "IC" y su correspondiente instructivo, se adicionó un inciso 4) al punto Decimosexto de los Lineamientos del Acuerdo precisado en el Resultando Segundo de esta Resolución, y se determinó no incluir

el formato "IC-1" y su instructivo, entre los que utilizarían los partidos políticos en sus informes de campaña.

IV.- Que mediante Decreto publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 22 de agosto de 1996, se reformó, entre otros, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en varios aspectos, de los cuales interesa en el presente asunto lo establecido en su fracción segunda, inciso c), segundo párrafo, el cual dispone que: "La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos de control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y asimismo, señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones".

V.- Que mediante Acuerdo publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 31 de octubre de 1996, el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinó, a propuesta de la Comisión de Consejeros Ciudadanos a que se refería el párrafo 6 del artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, modificar los Lineamientos, formatos e instructivos que deberán ser utilizados por los partidos políticos en la presentación de sus Informes Anuales y de Campaña.

VI.- Que mediante Decreto publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 22 de noviembre de 1996, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otros ordenamientos legales, se estableció en los artículos 49-A y 49-B de dicho Código, que los partidos políticos deberán presentar sus informes anuales y de campaña, sobre el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, ante la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, organismo permanente inserto en la estructura del Consejo General del Instituto Federal Electoral; y que dicha Comisión tiene como facultad establecer lineamientos para la presentación de los informes por parte de los partidos políticos y para que éstos lleven el registro de sus ingresos y egresos y de la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos; además, se encarga de la revisión de tales informes, así como de la presentación de un Dictamen Consolidado ante el Consejo General que incluya las irregularidades en que hubieren incurrido los partidos políticos derivadas del manejo de sus recursos, debiendo informarle de las sanciones que a su juicio procedan respecto a estas irregularidades.

VII.- Que mediante Acuerdo publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 31 de enero de 1997, el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinó adecuar los Lineamientos, formatos e instructivos que deberán ser utilizados por los partidos políticos en la presentación de sus Informes Anuales y de Campaña, a propuesta de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.

VIII.- Que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en su sesión celebrada el 7 de diciembre de 1998, aprobó el Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, y acordó someterlo a la consideración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, órgano que a su vez aprobó dicho reglamento por acuerdo tomado en sesión ordinaria celebrada el 16 de diciembre de 1998, ordenando su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, lo que aconteció el día 28 del mismo mes y año; reglamento que abrogó, según el artículo 1.T.2 transitorio, los Lineamientos, formatos e instructivos que deberán ser utilizados por los partidos políticos en la presentación de sus Informes Anuales y de Campaña, emitidos por el Consejo General del Instituto el 23 de diciembre de 1993 y reformados el 10 de octubre de 1996 y el 23 de enero de 1997; sin embargo, según el artículo 2.T.3, 2.T.4, 2.T.6 y 2.T.9 transitorio de dicho Reglamento, diversas disposiciones del mismo entrarían en vigor hasta el 1o. de julio de 1999, por lo que respecto a algunas materias habría de verificarse el cumplimiento de los Lineamientos antes aludidos.

IX.- Que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en su sesión celebrada el 8 de octubre de 1999, aprobó reformas y adiciones al Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, y acordó someterlas a la consideración del Consejo General del

Instituto Federal Electoral, que por acuerdo tomado en sesión ordinaria celebrada el 14 del mismo mes y año, aprobó dichas reformas y adiciones y ordenó su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, misma que se efectuó el 25 de octubre de 1999.

X.- Que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en su sesión celebrada el 26 de octubre de 1999 aprobó por unanimidad el Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicables a los Partidos Nacionales que Formen Coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, y acordó someterlo a la consideración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que por acuerdo tomado en sesión ordinaria celebrada el 4 de noviembre del mismo año, aprobó el referido reglamento y ordenó su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, misma que se verificó el 12 de noviembre de 1999.

XI.- Que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en su sesión celebrada el 9 de diciembre de 1999, aprobó por unanimidad el acuerdo por el que se reforma el artículo 17 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, con el objeto de clarificar los términos en los que los partidos políticos y las coaliciones deberán reportar sus gastos de campaña, a efecto de que dichos informes reporten el monto real de recursos aplicados en los conceptos destinados a la obtención del voto, conforme a lo dispuesto en el artículo 182-A de la ley electoral. Asimismo, en esa misma fecha, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas acordó someter a la consideración del Consejo General del Instituto Federal Electoral la reforma referida, que por acuerdo tomado en sesión ordinaria celebrada el 17 de diciembre de 1999, aprobó la reforma y ordenó su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, misma que se verificó el 28 de diciembre de 1999.

XII.- Que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en sesión celebrada el 24 de octubre de 2000, aprobó por unanimidad el acuerdo por el que se reforman los artículos 14 y 15 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, teniendo como objetivo en primer lugar, el establecimiento de un límite máximo a erogaciones por concepto de reconocimientos por actividades políticas. En segundo lugar, la adición de una norma que prohíba modificaciones en los documentos contables que respaldan los informes anuales y de campaña, una vez que éstos han sido entregados a la autoridad electoral, sin que medie solicitud expresa de rectificaciones y/o aclaraciones por parte de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. Por último, introducir la obligación de los partidos y agrupaciones políticas de presentar sus informes anuales y, en su caso, de campaña, a través de medios magnéticos de transmisión de datos. Asimismo, en esa misma fecha, la comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas acordó someter a la consideración del Consejo General del Instituto Federal Electoral las reformas referidas, que por acuerdo tomado en sesión ordinaria celebrada el 14 de noviembre de 2000, aprobó la reforma y ordenó su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, misma que se verificó el 13 de diciembre de 2000.

XIII.- Que por conducto de su Secretario Técnico, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas recibió los Informes Anuales presentados por los partidos políticos y organizaciones políticas respecto de sus ingresos y egresos correspondientes al ejercicio de 2000, procediendo a su análisis y revisión, conforme a los artículos 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 19 y 20 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes.

XIV.- Que, conforme a lo establecido por los artículos 49-A, párrafo 2, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 19.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas ejerció en diversas ocasiones su facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de los partidos políticos la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes. Asimismo, conforme a lo establecido por los artículos 49-A, párrafo 2, inciso b), del Código electoral y 20 del Reglamento aludido, la Comisión de Fiscalización notificó a

los partidos políticos los errores y omisiones técnicas que advirtió durante la revisión de los informes, para que presentaran las aclaraciones y rectificaciones pertinentes.

XV.- Que una vez agotado el procedimiento descrito en los resultandos XIII y XIV de esta Resolución, y cumpliendo con lo establecido en los artículos 49-A, párrafo 2, incisos c) y d), y 80, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 21 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, en esta misma sesión la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas presentó ante este Consejo General el Dictamen consolidado respecto de los Informes Anuales presentados por los partidos políticos y organizaciones políticas correspondientes al ejercicio de 2000.

XVI.- Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 41, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49-A, párrafo 2, inciso d), y 49-B, párrafo 2, inciso i), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 21.2, inciso d), del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, en dicho Dictamen Consolidado la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas determinó que se encontraron diversas irregularidades derivadas de la revisión de los informes Anuales presentados por los partidos políticos que, a juicio de dicha Comisión, constituyen violaciones a las disposiciones en la materia, de acuerdo con las consideraciones expresadas en el apartado de conclusiones del Dictamen Consolidado mencionado, por lo que, con fundamento en los artículos 49-A, párrafo 2, inciso e) del Código Electoral y 21.3 del Reglamento aludido, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y agrupaciones Políticas propone al Consejo General del Instituto Federal Electoral que emita la presente Resolución con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS:

1.- De conformidad con lo establecido en los artículos 41, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3o., párrafo 1, 23, 39, párrafo 2, 73, párrafo 1, 49-A, párrafo 2, inciso e), 49-B, párrafo 2, inciso i), y 82, párrafo 1, incisos h) y w), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 22.1 del Reglamento que establece lo lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes a las violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes Anuales de los partidos políticos, según lo que al efecto haya dictaminado la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.

2.- Como este Consejo General, aplicando lo que establecen los artículos 270; párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 22.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, deberá aplicar las sanciones correspondientes tomando en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, independientemente de las consideraciones particulares que se hacen en cada caso concreto en el considerando 5 de la presente resolución, debe señalarse que por "circunstancias" se entiende el tiempo, modo y lugar en que se produjeron las faltas; y en cuanto a la "gravedad" de la falta, se analiza la trascendencia de la norma transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y los intereses jurídicos tutelados por el derecho.

3.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49-B, párrafo 2, inciso i), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 21.2, inciso d) y 21.3 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, corresponde a este Consejo General pronunciarse exclusivamente sobre las irregularidades detectadas con motivo de la presentación de los Informes Anuales de los partidos políticos correspondientes al ejercicio de 2000, que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas ha determinado hacer del conocimiento de este órgano superior de dirección para efectos de proceder conforme a lo que establece el artículo 269 del Código electoral; calificar dichas irregularidades, y determinar si es procedente imponer una sanción.

4.-. Con base en lo señalado en el considerando anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49-A, párrafo 2, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 22.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, se procede a analizar, con base en lo establecido en el Dictamen Consolidado presentado ante este Consejo General por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, si es el caso de imponer una sanción a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia por la Democracia, de la Sociedad Nacionalista, Alianza Social, por las irregularidades reportadas en dicho Dictamen Consolidado.

5.- En este apartado se analizarán las irregularidades consignadas en el Dictamen Consolidado respecto de cada uno de los partidos políticos nacionales.

5.1.- Partido Acción Nacional.

a) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

El Partido Acción Nacional no realizó mediante cheque, pagos superiores a los 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por un monto total de $215,666.37, registrados en las siguientes cuentas:

Rubro	Monto
Servicios Personales (recibos de honorarios)	$133,157.90
Servicios Generales	$82,508.47
Total	**$215,666.37**

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 11.5 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/514/01 de fecha 25 de junio de 2001, se solicitó al Partido Acción Nacional que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la revisión de la cuenta Servicios Personales, subcuenta de Honorarios, se había observado que existían comprobantes de gastos que debieron cubrirse en forma individual, es decir, elaborarse cheques por cada uno de estos pagos, ya que estas erogaciones exceden los 100 salarios mínimos vigentes para el Distrito Federal, por un importe de $133,157.90.

Para efectos de la determinación de los casos observables, resulta pertinente señalar que el monto de cien veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal equivale a un importe de $3,790.00.

Al respecto, el Partido expresó, mediante escrito de fecha 9 de julio de 2001, dio respuesta al requerimiento formulado por esta autoridad, lo que a continuación se transcribe:

"Se realizó el egreso como transferencia de nómina, debiendo ser como pago de honorarios".

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas manifiesta que no consideró subsanada la observación realizada, por los motivos que a continuación se transcriben:

"La respuesta del instituto político no se considera satisfactoria, en virtud de que el pago realizado no se apegó a lo estipulado en el artículo 11.5 del citado Reglamento, ya que debió realizarse con cheque y no ser parte del cheque de la nómina. Razón por la cual la observación no se consideró subsanada".

Mediante el oficio STCFRPAP/463/01 de fecha 14 de junio de 2001, se solicitó al Partido Acción Nacional que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la revisión de la cuenta Servicios Generales, subcuenta de Viáticos, se

había observado que existían comprobantes de gastos que debieron cubrirse en forma individual, es decir, elaborarse cheques por cada uno de estos pagos, ya que estas erogaciones exceden los 100 salarios mínimos vigentes para el Distrito Federal, por un importe de $82,508.47, por concepto de Hospedaje.

Al respecto, el Partido mediante escrito de fecha 29 de junio de 2001, dio respuesta al requerimiento formulado por esta autoridad, lo que a continuación se transcribe:

"Todas las facturas señaladas en este punto corresponden a comprobación de gastos por viáticos expedidos a nombre de la persona que realiza un viaje por lo que no se ha incumplido en lo establecido en el artículo 11.5 del Reglamento en comento."

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas manifiesta que no consideró subsanada la observación realizada, por los motivos que a continuación se transcriben:

A la respuesta del partido procede aclarar lo siguiente:

En primera instancia, debe resaltarse que tal disposición se refiere a cualquier tipo de pago que se realice por parte del partido y no solamente a los pagos a proveedores. Las únicas excepciones provendrían de lo establecido en el artículo 11.5, respecto de los sueldos y salarios contenidos, y 14.2, respecto a REPAPS:

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Fiscalización consideró insatisfactoria la respuesta, ya que la norma es clara al precisar que todo pago que rebase la cantidad equivalente a cien veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, deberá realizarse mediante cheque. En consecuencia, el partido incumplió con lo dispuesto por el artículo 11.5 del Reglamento aplicable a partidos políticos.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que el Partido Acción Nacional incumplió con lo establecido en el artículo 11.5 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, que establece que todo pago que efectúen los partidos políticos que rebase la cantidad equivalente a cien veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal deberá realizarse mediante cheque, con excepción de los pagos correspondientes a sueldos y salarios contenidos en nóminas. Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación comprobatoria.

En el caso, el partido presenta alegatos que no pueden considerarse suficientes para justificar la falta de presentación de documentación que cumpla con los requisitos exigidos, pues, como bien argumenta la Comisión de Fiscalización en el Dictamen Consolidado, los lineamientos aplicables son claros en cuanto a que los pagos superiores al monto indicado deben realizarse mediante cheque.

Esta autoridad electoral no considera suficiente lo argumentado por el partido en el sentido de que "todas las facturas señaladas en este punto corresponden a comprobación de gastos por viáticos expedidos a nombre de la persona que realiza un viaje", puesto que la normatividad es clara al establecer un límite en el monto de recursos que los partidos pueden otorgar sin la emisión de cheque nominativo, esto es, todo monto inferior a 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para cada pago, por lo que no se cumple con la normatividad si se expide sólo un cheque para todos los gastos que la persona a la que se le otorgan los viáticos tendría que cubrir y que fueran superiores a 100 días de salario mínimo general vigente.

El artículo 11.5 del citado Reglamento es claro al señalar que todo pago que rebase la cantidad equivalente a cien veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, deberá realizarse mediante cheque. En primera instancia, debe resaltarse que tal disposición se refiere a cualquier tipo de pago que se realice por parte de la coalición, y no solamente a los pagos a proveedores. Las dos únicas excepciones provendrían de lo establecido en los artículos 11.5, respecto de los sueldos y salarios contenidos en nóminas y 14.2 referente a pagos de Reconocimientos por Actividades Políticas, casos que no ocurren en el Partido Acción Nacional, por lo que es claro su incumplimiento a la normatividad de la materia.

No está de más señalar que lo establecido en el artículo 11.5 antes referido, es aplicable respecto de los pagos finales que se realicen a nombre y/o por cuenta del partido. No se cumple con la normatividad si solamente se extiende un cheque a nombre de una persona comisionada por el partido político para que se realice a su vez pagos en efectivo a otras personas, sino que el pago

final debe en todo caso realizarse mediante cheque nominativo, cuando rebase la cantidad indicada. Por lo hasta aquí dicho, lo argumentado por el partido no justifica su incumplimiento a lo establecido en el artículo 11.5 del multicitado Reglamento.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como leve, en tanto que no tiene un efecto inmediato sobre la comprobación de los gastos. Sin embargo, sí puede tener efectos sobre la verificación del destino real de los recursos, así como sobre el control del ejercicio de los mismos, pues la realización de pagos mediante cheque hace que la identidad de quien los realiza y los recibe estén claramente determinados, mientras que la realización de pagos en efectivo, sobre todo si se trata de sumas importantes, puede originar poca claridad, e incluso hacer que se confundan con recursos que no hubieren estado debidamente registrados en la contabilidad de un partido político. La norma transgredida pretende evitar precisamente que el efectivo circule profusamente en las operaciones de los partidos y que dichas operaciones dejen huellas verificables e incontrovertibles que ofrezcan certeza del origen de los recursos, así como de la veracidad de lo informado.

Asimismo, se tienen en cuenta las siguientes circunstancias: que no se puede presumir desviación de recursos; que el partido llevó un adecuado control de sus operaciones, en términos generales, que el partido no ocultó información y es la primera vez que incurre en una irregularidad de estas características.

Por otra parte, en la determinación de la gravedad de la falta, se tiene en cuenta que es necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas y que, aun tratándose de una norma de carácter excepcional, el partido no fue capaz de cumplirla a cabalidad, y que el partido fue sancionado por esta misma falta en la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña presentados por los partidos políticos y coaliciones correspondientes al proceso electoral federal de 2000, aprobada el 6 de abril de 2001.

Adicionalmente ha de considerarse, para fijar la sanción, que el monto que rebasaba el límite de 100 días de salario mínimo y no fue pagado mediante cheque suma un total de $215,666.37.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer al Partido Acción Nacional una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269; párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción de una multa de quinientos treinta y cuatro días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

b) En el capítulo de Conclusiones finales del Dictamen Consolidado se señala:

El partido no comprobó, de acuerdo con los lineamientos establecidos, un monto total de $41,360.00, registrado en el rubro Servicios Personales, subcuenta Reconocimientos por Actividades Políticas, correspondientes al monto excedente de recibos "REPAP" que superaron el límite de 400 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal por pagos hechos a una misma persona en el transcurso de un mes, permitido por los mismos lineamientos para ser comprobados mediante tal clase de recibos.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 11.1 y 14.4 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/463/01 de fecha 14 de junio de 2001, se solicitó al Partido Acción Nacional que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la revisión de los Gastos en Actividades Ordinarias Permanentes, cuenta Servicios Personales, subcuenta Reconocimientos por Actividades Políticas, se había observado que el partido otorgó a 3 personas reconocimientos por actividades políticas, sustentados con recibos "REPAP", que excedían el límite de 400 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, por un monto excedente de $28,520.00.

Al respecto, el Partido, mediante escrito de fecha 29 de junio de 2001, dio respuesta al requerimiento formulado por esta autoridad, lo que a continuación se transcribe:

"Tal como lo señala el artículo 14.2 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes. "...los partidos políticos podrán otorgar reconocimientos en efectivo a sus militantes o simpatizantes por su participación en actividades de apoyo a sus militantes o simpatizantes por su participación en actividades de apoyo político. Dichos reconocimientos deberán estar soportados por recibos foliados que especifiquen el nombre y firma de la persona a quien se efectuó el pago, su domicilio y teléfono,... el monto y la fecha de pago, el tipo de servicio prestado al partido político, y el periodo de tiempo durante el que se realizó el servicio". Asimismo el artículo 14.4 del mismo Reglamento señala "...Tampoco podrán comprobarse mediante esta clase de recibos los pagos realizados por una sola persona física, por este concepto, que excedan los cuatrocientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un mes..."

"En ningún momento se está incumpliendo en lo señalado en estos artículos, en ellos no se especifica que se debe tomar como base la fecha del cheque con que se paga, como usted procede a aclararlo en su oficio, sino el lapso de tiempo por el que se prestó el servicio. Los Topes señalados son el transcurso de un año o en el transcurso de un mes y estos límites no están siendo rebasados en los recibos aquí presentados. Se anexa copia para su constatación."

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas manifiesta que no consideró subsanada la observación realizada, por los motivos que a continuación se transcriben:

La respuesta del partido no se considera satisfactoria, ya que el artículo 14.4 del citado Reglamento establece "...Tampoco podrán comprobarse mediante esta clase de recibos los ***pagos realizados*** *a una sola persona física, por ese concepto, que excedan los cuatrocientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal* ***en el transcurso de un mes****...", por lo tanto la norma es clara al especificar que no debe excederse de 400 días en pagos realizados, independientemente del periodo en el que se haya realizado la actividad por la que se efectuó el pago. Por lo que no se consideró subsanada esta observación.*

Mediante el oficio STCFRPAP/514/01 de fecha 25 de junio de 2001, se solicitó al Partido Acción Nacional que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la revisión de la cuenta Servicios Personales en el estado de Nuevo León, subcuenta Reconocimientos por Actividades Políticas, se había observado que el partido otorgó a una persona reconocimientos por actividades políticas, sustentados con recibos "REPAP", que excedían el límite de 400 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, por un monto excedente de $12,840.00.

Al respecto, el Partido, mediante escrito de fecha 9 de julio de 2001, dio respuesta al requerimiento formulado por esta autoridad, lo que a continuación se transcribe:

Tal como lo señala el artículo 14.2 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes "...los partidos políticos podrán otorgar reconocimientos en efectivo a sus militantes o simpatizantes por su participación en actividades de apoyo político. Dichos reconocimientos deberán estar soportados por recibos foliados que especifiquen el nombre y firma de la persona a quien se efectuó el pago, su domicilio y teléfono, ...el monto y la fecha de pago, el tipo de servicio prestado al partido político, y el periodo de tiempo durante el que se realizó el servicio..." Asimismo el artículo 14.4 del mismo Reglamento señala "...Tampoco podrán comprobarse mediante esta clase de recibos los pagos realizados a una sola persona física, por este concepto, que excedan los cuatrocientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un mes..."

"En ningún momento se está incumpliendo en lo señalado en estos artículos, en ellos no se especifica que se debe tomar como base la fecha del cheque con que se paga, como usted procede a aclararlo en su oficio, sino el lapso de tiempo por el que se presentó el servicio. Los topes señalados son en el transcurso de un mes y estos límites no están siendo rebasados en los recibos aquí presentados."

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas manifiesta que no consideró subsanada la observación realizada, por los motivos que a continuación se transcriben:

La respuesta del partido no se considera satisfactoria, ya que el artículo 14.4 del citado Reglamento, estipula que "...Tampoco podrán comprobarse mediante esta clase de recibos los pagos realizados a una sola persona física, por ese concepto, que excedan los cuatrocientos días

de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un mes...". Por lo tanto, la norma es clara al especificar que no deben exceder de 400 días los pagos realizados, independientemente del periodo en el que se haya realizado la actividad por la que se efectuó el pago. Por lo que no se consideró subsanada esta observación.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que el Partido Acción Nacional incumplió con lo establecido en los artículos 11.1 y 14.4 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes.

En el artículo 11.1 del Reglamento aplicable se dispone que los egresos deberán estar comprobados con la documentación que expida a nombre del partido político la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables. Por otra parte, el artículo 14.4 del Reglamento aplicable a los partidos políticos establece que las erogaciones realizadas por los partidos políticos, como reconocimientos a una sola persona física, por una cantidad equivalente o superior a tres mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, dentro del transcurso de un año, ya sea que se paguen en una o en varias exhibiciones, no podrán ser comprobadas a través de los recibos previstos en los dos párrafos anteriores. Tampoco podrán comprobarse mediante esta clase de recibos los pagos realizados a una sola persona física, por ese concepto, que excedan los cuatrocientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un mes. En ambos casos, tales erogaciones deberán estar soportadas de conformidad con lo establecido en el artículo 11.1 del presente Reglamento.

En ningún procedimiento de auditoría, y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos de los partidos políticos nacionales, entidades de interés público según la norma suprema de la Unión, y que ejercen importantes montos de recursos públicos, puede darse por buena la presentación de cualquier clase de documentos como comprobantes de ingresos y egresos, sino que han de cumplir con determinados requisitos que hayan sido previamente establecidos por las normas aplicables, o bien que se justifique según las circunstancias particulares.

En el caso, el partido presenta alegatos que no pueden considerarse suficientes para justificar la falta de presentación de documentación que cumpla con los requisitos exigidos.

Cabe señalar que los documentos que exhiba un partido político a fin de acreditar lo que en ellos se consigna, necesariamente deben sujetarse y cumplir con las reglas establecidas al respecto, en tanto que la fuerza probatoria que la norma les otorga para comprobar lo reportado en sus informes, lo deja a la buena fe de quien los presenta, ya que no exige mayor formalidad que el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos.

En el presente caso, debe señalarse que lo que se toma en cuenta como definitivo para saber si a una persona se le pagaron por vía de reconocimiento por actividades políticas, durante un mes, un monto que excede el límite fijado por la normatividad de 400 días de salario mínimo, es la fecha de pago, no la fecha o periodo que aparece consignado en el recibo correspondiente, o el lapso de tiempo por el que se prestó el servicio. Por lo que lo alegado por este partido no puede considerarse suficiente para subsanar la observación.

Por otra parte, los topes a que se refiere el artículo 14.4 del Reglamento se refieren a pagos efectuados dentro del transcurso de un mes. En el presente caso, el partido excede el límite establecido por la normatividad para el pago de este tipo de reconocimientos.

El partido debe organizarse para realizar los pagos por este concepto de forma que no se superen los topes referidos, pues, se insiste, los requisitos que deben cumplir se basan en la buena fe del propio partido, particularmente cuando se trata de documentación respecto de la cual no están obligados a cumplir con requisitos fiscales, por lo que incumplir con ellos puede llevar a abusos en cuanto a una forma de comprobación más flexible que la establecida en términos generales.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como de mediana gravedad, en tanto que con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual, pues el excedente de los topes establecidos no puede tenerse por debidamente comprobado, en los términos de la normatividad aplicable a los partidos políticos. La documentación sin requisitos fiscales no hace prueba del egreso, pues no cumple con los requisitos que exige el artículo 11.1 del Reglamento aplicable, para acreditar los egresos que se efectúen por el partido político, y la documentación

presentada no está incluida en los únicos casos de excepción que el propio Reglamento permite para presentar documentación sin tales requisitos.

Sin embargo, se tiene en cuenta que el partido presentó los recibos solicitados, con los requisitos exigidos; y que por las características de la infracción, no se puede presumir dolo, ni la intención de ocultar información y que es la primera vez que el partido incurre en este tipo de irregularidad.

Por otra parte, también se ha de tener en cuenta que el partido presenta condiciones adecuadas, en términos generales, en cuanto al registro y control de sus egresos, y que la irregularidad implica un monto de $41,360.00.

Además, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer al Partido Acción Nacional una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción en una multa de ciento cincuenta y tres días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

c) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

El partido no comprobó ingresos por un monto de $1'862,880.15 con documentación comprobatoria que reuniera los requisitos exigidos por los lineamientos aplicables, integrados de la siguiente manera:

-Aportaciones de militantes soportadas con recibos que carecen del Registro de Causantes y firma del aportante, por un monto de $312,880.15.

-Aportaciones de Simpatizantes en efectivo soportadas con documentación comprobatoria en copia fotostática, por un monto total de $50,000.00.

-Aportaciones de Simpatizantes en efectivo soportadas con documentación comprobatoria que carece del Registro Federal de Causantes, por un monto de $1,500,000.00.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.1, 3.5, 3.6, 4.5, 4.6 y 19.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/520/01 de fecha 25 de junio de 2001, se solicitó al Partido Acción Nacional que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la revisión de las Aportaciones de Militantes del Comité Ejecutivo Nacional, se había observado que existían recibos de ingresos "RM", que no contenían Registro Federal de Causantes, o bien, carecían de la firma del aportante, por un importe de $312,880.15.

Al respecto, el Partido, mediante escrito de fecha 9 de julio de 2001, dio respuesta al requerimiento formulado por esta autoridad, lo que a continuación se transcribe:

"Se anexa el ejemplar (...) de los recibos RM según relación anexa, cumpliendo con todos los requisitos señalados por ustedes."

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas manifiesta que no consideró subsanada la observación realizada, por los motivos que a continuación se transcriben:

De la revisión a la documentación proporcionada, se determinó que el partido no entregó la totalidad de los recibos RM, sino solamente un importe de $6,198,557.13, mismos que contienen los requisitos establecidos, por lo que se consideró subsanada la observación al respecto.

Sin embargo, por lo que corresponde a los recibos RM que no fueron proporcionados por un monto de $312,880.15, el partido incumplió lo estipulado en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 3.5, 3.6 y 19.2 del citado Reglamento. A continuación se señalan los recibos faltantes:

NUM. POLIZA	NUM. RM	IMPORTE

NUM. POLIZA	NUM. RM	IMPORTE

I-27/01-00	1916	$2,839.12
I-27/01-00	1921	2,839.12
I-27/01-00	1925	2,839.12
I-26/01-00	1949	287.28
I-46/01-00	1992	1,832.00
I-46/01-00	1997	2,497.56
I-46/01-00	2009	2,497.56
I-46/01-00	2026	2,497.56
I-46/01-00	2066	2,497.56
I-46/01-00	2067	2,497.56
I-54/01-00	2093	525.00
I-29/02-00	2216	525.00
I-142/03-00	2666	530.17
I-134/03-00	2683	2,497.56
I-140/03-00	2713	2,497.56
I.140/03-00	2717	2,497.56
I-140/03-00	2729	2,497.56
I-140/03-00	2745	2,497.56
I-140/03-00	2783	2,497.56
I-140/03-00	2784	2,497.56
I-141/03-00	2828	2,762.79
I-141/03-00	2832	2,762.79
I-141/03-00	2844	2,762.79
I-141/03-00	2860	2,762.79
I-141/03-00	2895	2,762.79
I-141/03-00	2896	2,762.79
I-49/04-00	3000	316.05
I-48/04-00	3019	3,180.63
I-48/04-00	3025	3,180.63
I-48/04-00	3029	3,180.63
I-51/04-00	3049	1,024.53
I-51/04-00	3056	1,024.53

NUM. POLIZA	NUM. RM	IMPORTE
I-51/04-00	3060	1,024.53
I-63/04-00	3174	2,762.64
I-63/04-00	3178	2,762.64
I-63/04-00	3189	2,762.64
I-63/04-00	3207	2,762.64
I-63/04-00	3243	2,762.64
I-63/04-00	3244	2,762.64
I-54/05-00	3298	316.05
I-55/05-00	3315	3,188.83
I-55/05-00	3321	3,188.83
I-55/05-00	3325	3,188.83
I-93/05-00	3373	2,777.97
I-93/05-00	3377	2,777.97
I-93/05-00	3389	2,777.97
I-93/05-00	3406	2,777.97
I-93/05-00	3443	2,777.97
I-93/05-00	3444	2,777.97
I-92/06-00	3604	3,188.83
I-92/06-00	3610	3,188.83
I-92/06-00	3614	3,188.83
I-93/06-00	3636	316.05
I-89/06-00	3656	1,050.00
I-91/06-00	3665	1,050.00
I-232/06-00	3707	2,770.31
I-232/06-00	3711	2,770.31
I-232/06-00	3723	2,770.31
I-232/06-00	3740	2,770.31
I-30/02-00	2227	287.28
I-30/02-00	2244	2,839.12
I-30/02-00	2250	2,839.12
I-30/02-00	2255	2,839.12
I-126/03-00	2533	2,839.12
I-126/03-00	2539	2,839.12
I-126/03-00	2544	2,839.12
I-142/03-00	2594	530.17
I-142/03-00	2600	530.17
I-142/03-00	2612	530.17
I-142/03-00	2628	530.17
I-142/03-00	2665	530.17
I-232/06-00	3776	2,770.31
I-323/06-00	3777	2,770.31
I-15/07-00	3854	3,188.83
I-15/07-00	3864	3,188.83

NUM. POLIZA	NUM. RM	IMPORTE
I-16/07-00	3886	316.05
I-17/07-00	3905	1,050.00
I-55/07-00	3929	1,133.21
I-56/07-00	3960	2,770.31
I-56/07-00	3964	2,770.31
I-56/07-00	3976	2,770.31
I-56/07-00	3993	2,770.31
I-56/07-00	4031	2,770.31
I-56/07-00	4032	2,770.31
I-56/08-00	4193	7,263.57
I-56/08-00	4199	7,263.57
I-56/08-00	4203	7,263.57
I-55/08-00	4224	3,192.72
I-55/08-00	4231	3,192.72
I-55/08-00	4236	3,192.72
I-54/08-00	4256	316.05
I-53/08-00	4275	1,050.00
I-85/08-00	4315	2,777.59
I-85/08-00	4319	2,777.59
I-85/08-00	4331	2,777.59
I-85/08-00	4346	2,777.59
I-85-00	4382	2,777.59
I-85/08-00	4383	2,777.59
I-42/09-00	4462	1,133.21
I-60/09-00	4490	2,773.95
I-60/09-00	4494	2,773.95
I-84/10-00	4896	2,773.95
I-84/10-00	4919	2,773.95
I-84/10-00	4923	2,773.95
I-58/11-00	5374	2,773.95
I-58/11-00	5397	2,773.95
I-58/11-00	5401	2,773.95
I-31/12-00	5669	1,133.21
I-31/12-00	5670	1,133.21
I-31/12-00	5675	1,133.21
I-61/12-00	5708	2,785.26
I-61/12-00	5731	2,785.26
I-61/12-00	5735	2,785.26
I-85/12-00	6020	9,875.36
I-85/12-00	6043	9,875.36
I-85/12-00	6047	9,875.36
I-85/12-00	6066	9,875.36
TOTAL		$312,880.15

Mediante el oficio STCFRPAP/463/01, de fecha 14 de junio de 2001, se solicitó al Partido Acción Nacional que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la revisión de las Aportaciones de Simpatizantes, se había observado que existían recibos de ingresos "RSEF", que no contenían Registro Federal de Causantes del aportante, por un importe de $1'500,000.00.

Al respecto, el Partido expresó, mediante escrito de fecha 29 de junio de 2001, dio respuesta al requerimiento formulado por esta autoridad, lo que a continuación se transcribe:

"Se anexa copia original (...) de los recibos RSEF 503 y 519 con todos los requisitos solicitados por ustedes en este punto."

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas manifiesta que no consideró subsanada la observación realizada, por los motivos que a continuación se transcriben:

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada por el partido, se determinó que los recibos "RSEF" 503 y 519, contienen los requisitos establecidos, razón por la cual se consideró subsanada la observación.

Sin embargo, los recibos "RSEF" 555 y 556 por un importe total de $1,500,000.00, no fueron proporcionados, por lo que no se considera subsanada la observación respectiva, incumpliendo, por tanto, lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como por los artículos 4.5, 4.6 y 19.2 del Reglamento aplicable a partidos políticos.

Mediante el oficio STCFRPAP/473/01, de fecha 14 de junio de 2001, se solicitó al Partido Acción Nacional que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la revisión de las Aportaciones de Simpatizantes, se había observado que existían recibos de ingresos "RSEF" en copia fotostática, por un importe de $50,000.00.

Al respecto, el Partido, mediante escrito de fecha 29 de junio de 2001, dio respuesta al requerimiento formulado por esta autoridad, lo que a continuación se transcribe:

"Se anexa copia original (azul y/o rosa) de los RSEF 503 y 519, (...) y del recibo 474; de los recibos 4 y 5 se anexa copia fiel de la original solicitada al donante para su certificación ante notario, por haber sido éstos robados según carta anexa del 20 de marzo del 2001."

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas manifiesta que no consideró subsanada la observación realizada, por los motivos que a continuación se transcriben:

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada por el partido, se determinó que en relación con los 5 recibos citados por el partido, la observación quedó subsanada. Sin embargo, el partido incumplió lo establecido por el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Electoral, así como por los artículos 4.5, 4.6 y 19.2 del citado Reglamento, al proporcionar copia fotostática del recibo "RSEF" número 461 por un importe de $50,000.00, por lo que, en este caso, no se considera subsanada la observación de la Comisión de Fiscalización.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que el Partido Acción Nacional incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 1.1, 3.5, 3.6, 4.5, 4.6 y 19.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes.

El artículo 38 del Código Electoral establece que los partidos políticos están obligados a proporcionar a la Comisión de Fiscalización la documentación que les solicite respecto de sus ingresos y egresos, y el artículo 1.1 del Reglamento aplicable dispone que tanto los ingresos en efectivo como en especie que reciban los partidos políticos por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán registrarse contablemente y estar sustentados con la documentación correspondiente, en términos de lo establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el presente Reglamento.

En el mismo sentido, los artículos 3.5 y 3.6 establecen que el órgano de finanzas de cada partido político deberá autorizar la impresión de los recibos foliados que se expedirán para amparar las cuotas o aportaciones de militantes recibidas en los términos establecidos por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El artículo 3.6 del citado Reglamento establece que los recibos que amparan las aportaciones de militantes se imprimirán según el formato "RM":

En el formato de recibos de aportaciones de militantes "RM"; claramente se prevé que dichos recibos deben contener tanto la firma como el Registro Federal de Causantes del aportante.

Adicionalmente, los artículos 4.5 y 4.6 del citado Reglamento establecen que el órgano de finanzas de cada partido político deberá autorizar la impresión de los recibos foliados que se expedirán para amparar las aportaciones recibidas de simpatizantes en los términos establecidos por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El artículo 4.6 establece que los recibos se imprimirán según el formato "RSEF" para aportaciones en efectivo, y "RSES" para aportaciones en especie.

En el formato de recibos de aportaciones de Simpatizantes "RSEF", claramente se prevé que dichos recibos deben contener tanto la firma como el Registro Federal de Causantes del aportante.

Por último, el artículo 19.2 del Reglamento estipula que la Comisión de Fiscalización a través de su Secretario Técnico, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes. Durante el periodo de revisión de los informes, los partidos políticos **tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos**, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

En ningún procedimiento de auditoría, y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos de los partidos políticos nacionales, entidades de interés público según la norma suprema de la Unión, y que ejercen importantes montos de recursos públicos, puede darse por buena la presentación de cualquier clase de documentos como comprobantes de ingresos o egresos, sino que han de cumplir con determinados requisitos que hayan sido previamente establecidos por las normas aplicables, o bien que se justifique según las circunstancias particulares y menos aún copia fotostática de la documentación comprobatoria requerida.

En el caso, el partido presenta alegatos que no pueden considerarse suficientes para justificar la falta de presentación de documentación original que cumpla con los requisitos exigidos, ya que omite presentar la totalidad de la documentación que le fue requerida.

Tal y como lo señala la Comisión de Fiscalización en el Dictamen Consolidado, en el caso de los recibos RSEF por un monto de $50,000.00, el partido sólo presentó copia fotostática de la documentación requerida, para la comprobación del ingreso. Tal situación no subsana el hecho de no haber presentado la documentación comprobatoria original, ya que el artículo 19.2 exige que se presente la documentación original, sin que en el propio Reglamento se establezca la alternativa de presentar copias fotostáticas como documentación comprobatoria del ingreso.

Cabe señalar que los documentos que exhiba un partido político a fin de acreditar lo que en ellos se consigna, necesariamente deben sujetarse y cumplir con las reglas establecidas al respecto, en tanto que la fuerza probatoria que la norma les otorga para comprobar lo reportado en sus informes, lo deja a la buena fe de quien los presenta, ya que no exige mayor formalidad que el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos.

Debe recordarse que la copia fotostática de un documento, no hace prueba plena del contenido de ese documento. Así, los ingresos no se consideran debidamente comprobados en tanto que el partido debía presentar la documentación original, pues es de explorado derecho que a las fotocopias de documentos no se les otorga valor probatorio en sí mismas.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como de mediana gravedad, en tanto que con este tipo de faltas se impide a la comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual. La documentación sin requisitos fiscales no hace prueba del ingreso, pues no cumple con los requisitos que exige el artículo 1.1 del Reglamento aplicable, para acreditar los ingresos que se efectúen por el partido político, y la documentación presentada no está incluida en los únicos casos de excepción que el propio Reglamento permite para presentar documentación sin tales requisitos. Adicionalmente, la documentación en copia fotostática no puede otorgársele valor probatorio, en tanto que no consiste en la que el partido otorgó a los simpatizantes como comprobantes de sus aportaciones.

Se tiene en cuenta que el partido presenta condiciones adecuadas, en términos generales, en cuanto al registro y control de sus ingresos y egresos; y el monto implicado en esta falta es de $1'862,880.15.

No obstante, no se puede presumir desviación de recursos; además, que el partido presentó algún documento de soporte, aunque no reúna los requisitos exigidos, y que no puede concluirse que el partido hubiere tenido intención de ocultar información.

Por otra parte, se ha de tener en cuenta que el Partido Acción Nacional presenta antecedentes de haber sido sancionado por esta misma falta, como consta en la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña presentados por los partidos políticos y coaliciones correspondientes al proceso electoral federal de 2000, aprobada el 6 de abril de 2001.

Además, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer al Partido Acción Nacional una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción en la reducción del uno punto ochenta por ciento de la ministración del Financiamiento Público que le corresponda al partido por concepto de Gasto Ordinario Permanente por un mes.

d) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

De la revisión efectuada a la contabilidad del Partido Acción Nacional se determinó que existen diferencias entre la contabilidad agregada de los partidos que conformaron la Coalición Alianza por el Cambio y sus respectivos informes, en tanto que los partidos que integraron la Coalición Alianza por el Cambio presentan en sus respectivos informes anuales diferencias con respecto a los resultados de la revisión de los informes de campaña efectuada por esta autoridad.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido por los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1.9, 2.6 y 3.1 inciso b), 3.9 y 7.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos e instructivos aplicables a los partidos políticos nacionales que formen coaliciones en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, así como lo ordenado por el artículo 1.1 y 11.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales".

De la revisión efectuada por la Comisión de Fiscalización a la documentación presentada por el partido, se concluyó que el partido registró efectivamente varias cifras por concepto de Campañas Federales relativas a los rubros Financiamiento proveniente de Militantes, Financiamiento proveniente de Simpatizantes, Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos, etc., relativos a las actividades financieras desplegadas por la Alianza por el Cambio. Sin embargo, como puede verse a fojas 13, 14, 19, 20, 31, 32, 51 y 52 del capítulo correspondiente del Dictamen Consolidado, las cifras finales reportadas por ambos partidos no se corresponden con las que reportaron juntos como Coalición en el Informe de Campaña que presentaron ante esta autoridad electoral y que ya fue auditado y dictaminado.

La falta, pues, se acredita, y conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Esta autoridad considera que para determinar la sanción que corresponde a cada uno de los partidos coaligados en la Alianza por el Cambio debe tomarse en cuenta si registró o no lo que el órgano de finanzas de la coalición en su momento determinó. Por oficio suscrito por Gabriela Ruiz del Rincón, Secretaria de Administración y Finanzas del Partido Acción Nacional, fechado el 15 de marzo de 2001, dirigido al Lic. Francisco Agundis Arias, encargado del órgano responsable de las finanzas del Partido Verde Ecologista de México, una de cuyas copias fue turnada a la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización, es dable presumir que el Partido Acción Nacional registró lo que le correspondía según la comunicación entre las partes que se cita. Sin embargo, en la medida en que la agregación de los montos registrados por cada uno de los partidos en sus Informes Anuales no coincide con los montos agregados registrados por ellos en tanto que la coalición en el Informe de Campaña entregado por la Alianza por el Cambio, ambos han de ser sancionados. Del contenido del capítulo correspondiente del Dictamen Consolidado, este Consejo General concluye que el Partido Acción Nacional incumplió con la normatividad en tanto que parte integrante de una coalición, toda vez que existen diferencias entre la contabilidad agregada de los partidos que conformaron la coalición Alianza por el Cambio y sus respectivos informes anuales. La falta se califica como grave, porque provoca dudas en la autoridad respecto de cuál de los datos informados por los partidos en lo individual y por los partidos como Coalición resulta cierto y definitivo. Sin embargo, esta autoridad toma en consideración que el Partido Acción Nacional sí registró lo que comunicó al Partido Verde Ecologista de México que había lugar a registrar en ambas contabilidades, que dichas cifras cuadraban con los contenidos del Informe de Campaña correspondiente, y que ésta es la primera ocasión en que el Partido Acción Nacional incurre en esta irregularidad.

Por otra parte, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer al Partido Acción Nacional una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la multa de 1,283 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 41, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3o., 22, párrafo 1, inciso k), 39, párrafo 1, 49, párrafos 3, 5, 6, 7, inciso a), fracción VIII, y párrafo 11, inciso a), fracciones I y II, 49-A, párrafo 1, inciso a), y párrafo 2, 49-B, párrafo 2, incisos a), b), c), e), h) e i), 52, 73, 80, párrafo 3, 82, párrafo 1, inciso h), 269, 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 1.1, 1.2, 1.4, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.5, 4.6, 4.10, 5.1, 6.2, 7.5, 8.1, 8.3, 9.3, 10.1, 10.2, 10.4, 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6, 13.2, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.11, 15.2, 16.1, 16.2, 16.5, 19, 20, 21, 22, 23.1, 23.3, 24.1, 24.3, 24.4, 24.5, 28.1 y 28.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, y 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 2.6, 3.1, 3.9 y 7.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos e instructivos aplicables a los partidos políticos nacionales que formen coaliciones, en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, y en ejercicio de las facultades que al Consejo General otorgan los artículos 39, párrafo 2 y 82, párrafo 1, inciso w) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se

RESUELVE:

PRIMERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **5.1** de la presente Resolución, se imponen al **Partido Acción Nacional** las siguientes sanciones:

a) Una multa de **quinientos treinta y cuatro días de salarios mínimos** general vigente en el Distrito Federal, equivalente a $21,566.64 (Veintiún mil quinientos sesenta y seis pesos 64/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución se dé por notificada al partido, o si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

b) Una multa de **ciento cincuenta y tres días de salarios mínimos** general vigente en el Distrito Federal, equivalente a $6,204.00 (Seis mil doscientos cuatro pesos 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución se dé por notificada al partido, o si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

c) La reducción del **1.80%** (uno punto ochenta por ciento) **de las ministraciones del Financiamiento Público** que le corresponda al partido por concepto de Gasto Ordinario Permanente **durante un mes** a partir del mes siguiente al en que esta resolución haya quedado firme o, si es recurrida, del mes siguiente al en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifique la sentencia en la que resolviere el recurso.

d) Una multa de **un mil doscientos ochenta y tres días de salario mínimo** general vigente en el Distrito Federal, equivalente a $51,750.00 (Cincuenta y un mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución se dé por notificada al partido, o si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

IV. Mediante escrito recibido a las diecisiete horas con veintisiete minutos del dieciséis de agosto del presente año en la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el ciudadano diputado Armando Salinas Torres, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Propio Instituto, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución que se indica en el resultando que antecede. En el escrito de interposición del medio de impugnación citado, el promovente expresó los hechos y agravios que estima le causan los actos recurridos, mismos que a continuación se transcriben a efecto de ser estudiados individualizadamente en el capítulo de considerandos de esta sentencia:

...

5.- ACTO RECLAMADO.

De la autoridad responsable, reclamo el considerando número 5.1, incisos a), b) y d) y el punto resolutivo primero, incisos a), b) y d) de la "Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos correspondientes al ejercicio de 2000" aprobada en la sesión extraordinaria que tuvo lugar el día nueve de agosto del año dos mil uno.

6.- HECHOS EN QUE SE BASA LA IMPUGNACION.

1.- Se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** del día veintidós de diciembre del año dos mil el plazo que tuvieron los partidos políticos nacionales para la presentación de los informes anuales de ingresos y egresos ordinarios correspondientes al ejercicio del año dos mil.

El plazo para la presentación de los informes, mencionado en el párrafo anterior, inició el día primero de enero y terminó el día veintiocho de marzo del año dos mil uno.

2.- Asimismo, el C. Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas notificó al Partido Acción Nacional el cómputo del plazo de presentación de su informe anual, mediante oficio número STCFRPAP/957/00 de fecha cinco de diciembre del año dos mil.

3.- Por su parte, el Partido Acción Nacional, por conducto de la C. Titular del órgano interno de administración de los recursos financieros, presentó el informe anual de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio del año dos mil, el día veintiocho de marzo del año dos mil uno.

4.- Dentro de las diferentes etapas que comprende la revisión del informe anual de ingresos y egresos del año dos mil, se levantó un acta de inicio y de cierre de los trabajos de revisión "en campo" o de "verificación de la documentación soporte".

El inicio tuvo lugar el día veintitrés de abril y el cierre el día veinticinco de junio del año dos mil uno.

5.- Cabe precisar que dentro del procedimiento legal, la Comisión de Fiscalización determinó llevar a cabo como primera etapa, una revisión "de gabinete" en la que se determinarían errores y omisiones de carácter técnico que pudieran presentar los informes anuales, con la finalidad de solicitar a los partidos políticos las aclaraciones correspondientes siendo que al Partido Acción Nacional, no le fue remitido oficio alguno solicitando que fueran aclaradas omisiones o errores contenidos en sus informes, como el señalado por la responsable en el considerando 5.1, inciso d) del acta impugnado.

6.- Esta circunstancia puede apreciarse en el punto número 3.2.1. "Revisión de gabinete" contenida a fojas 22 y siguientes del "Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de la Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales y Organizaciones Políticas, correspondientes al ejercicio de 2000."

7.- Una vez agostadas las etapas de revisión de los informes y de la documentación de soporte, la Comisión de Fiscalización elaboró el dictamen consolidado en fecha que desconozco, pero que debido a los trabajos de revisión de todos los entes públicos fiscalizados, tuvo que ser aproximadamente en el mes de agosto del año en curso.

Posteriormente el dictamen y el proyecto de resolución fue sometido a la consideración del Consejo General el día nueve de agosto del año en curso.

8.- El dictamen consolidado fue entregado al Partido Acción Nacional junto con el proyecto de resolución que impone las sanciones ahora recurridas hasta el día siete de agosto del año dos mil uno, es decir, una vez que concluyó todo el procedimiento de revisión que incluye la etapa de notificación de errores u omisiones y los 10 días para la presentación de aclaraciones o rectificaciones a que se refiere el artículo 49-A, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales sin que se hubiera recibido por parte del Partido Acción Nacional oficio alguno mediante el cual se hiciera saber la discrepancia o diferencia en la contabilidad que señala ahora la responsable y no se le otorgó el plazo de diez días para presentar las aclaraciones o rectificaciones pertinentes.

9.- Es importante resaltar la fecha de entrega del dictamen y del proyecto de resolución sancionatoria, pues es hasta entonces cuando el Partido Acción Nacional tuvo conocimiento de que sería sancionado el día nueve de agosto por la irregularidad señalada en el considerando 5.1, inciso letra d) del acto combatido que dice textualmente:

"De la revisión efectuada a la contabilidad del Partido Acción Nacional se determinó que existen diferencias entre la contabilidad agregada de los partidos que conformaron la coalición Alianza por el Cambio y sus respectivos informes, en tanto que los partidos que integraron la coalición Alianza por el Cambio presentan en sus respectivos informes anuales diferencias con respecto a los resultados de la revisión de los informes de campaña efectuada por esta autoridad.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido por los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1.9, 2.6 y 3.1 inciso b), 3.9 y 7.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos e instructivos aplicables a los partidos políticos nacionales que formen coaliciones en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, así como lo ordenado por el artículo 1.1 y 11.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales."

10.- La conducta imputada, no fue del conocimiento del Partido Acción Nacional ni le fue solicitada la aclaración correspondiente durante el periodo de revisión a que se refiere el artículo 49-A, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, razón por la cual debe ser revocada la sanción impuesta por dejar en estado de indefensión al partido ahora recurrente al dejarse de aplicar el dispositivo legal citado.

11.- A mayor abundamiento, el Partido Acción Nacional hizo saber al C. Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización mediante el oficio número TESO/017/01 de fecha veintiuno de febrero del año en curso y al propio Partido Verde Ecologista de México los montos totales de los pasivos documentados, las balanzas de comprobación y auxiliares a último nivel de donde se localizan los pasivos registrados mediante los oficios sin número de fechas siete de febrero, trece y quince de marzo y el oficio número TESO/057/01 de fecha siete de julio, todos del año en curso, de donde se demuestra que la discrepancia entre los saldos que motivaron la sanción pecuniaria se debe a circunstancias ajenas a la contabilidad del Partido Acción Nacional o de sus informes.

12.- En otro orden de ideas y por lo que se refiere a la sanción contenida en el considerando número 5.1, inciso a) de la resolución combatida, el dictamen consolidado a fojas 45 y 46 señala que se impone al Partido Acción Nacional una sanción pecuniaria tomando en cuenta que en el rubro de servicios generales, en la subcuenta de viáticos "...se localizaron comprobantes de gastos que debieron cubrirse en forma individual, es decir, mediante cheques expedidos por cada uno de estos pagos, ya que exceden de 100 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal que equivale a $3,790.00.

13.- La Comisión de Fiscalización notificó al Partido Acción Nacional en el oficio número STCFRPAP/453/01 que los comprobantes en comento, por un total de $82,508.47, son los siguientes:

REFERENCIA CONTABLE	FACTURA	NOMBRE	IMPORTE
PE-726/08-00	56885	HOTEL REGENT PETITE FRANCE	$8,149.64
PD-25/08-00	10517	MUNDO MAYA OPERADORA, S.A. DE. C.V.	$4,020.61
PE-381-10-00	74124	MABASA, S.A. DE C.V.	$4,479.57
PE-250/07-00	42387	OAXACA COURT'S, S.A. DE C.V.	$5,981.52
PE-86/08-00	679	OASIS CELEBRITY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$4,527.00
PE-110/11-00	111353	HOTELES QUINTA REAL, S.A. DE C.V.	$7,605.00
PE-61/07-00	32774	OPERADORA HOTELERA ROYAL, S.A. DE C.V.	$15,844.74
PD-60/08-00	20207-2	RECEPTIVE TRAVEL SERVICES, INC.	$19,760.76
PE-371/02-00	17820	JOCAVI, S.A. DE C.V.	$5,696.80
PE-70/09-00	65046	BONAMPAK HOTELERA, S.A. DE C.V.	$6,442.83
	Total		$82,508.47

14.- La Comisión de Fiscalización consideró incumplido el artículo 11.5 del reglamento en materia de fiscalización.

15.- La aclaración correspondiente se hizo en tiempo, mediante el oficio TESO/052/01 y se indicó que "...las facturas señaladas corresponden a comprobación de gastos por viáticos expedidos a nombre de la persona que realiza un viaje por lo que no se ha incumplido en lo establecido en el artículo 11.5 del reglamento en comento" pero en este caso, sí notificó la irregularidad mediante el oficio ya mencionado.

16.- Ahora bien, a la responsable no le asiste la razón pues el Partido Acción Nacional expidió los cheques nominativos a cargo de la cuenta maestra número 154179-5 del Banco Nacional de México, S.A., siguientes:

NUM. CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	NUMERO Y FECHA FACTURA	CONCEPTO DEL PAGO
19309	18-OCT-00	74124 03-OCT-00	REEMBOLSO PAGO HABITACION HOTEL
17123	11-JUL-00	42387 05-JUL-00	REEMBOLSO PAGO HABITACION HOTEL
17731	02-AGO-00	679 04-JUL-00	REEMBOLSO DE DIFERENCIA EN PAGO DE HABITACION HOTEL
19632	07-NOV-00	111353 18-OCT-00	REEMBOLSO DE DIFERENCIA EN PAGO DE HABITACION HOTEL
16947	05-JUL-00	32774 05-JUL-00	REEMBOLSO PAGO HABITACION HOTEL
14314	18-FEB-00	17820 11-FEB-00	REEMBOLSO DE DIFERENCIA EN PAGO DE HABITACION HOTEL
18430	05-SEP-00	65046 15-AGO-00	REEMBOLSO DE DIFERENCIA EN PAGO DE HABITACION HOTEL
18306	29-AGO-00	56885 18-MAY-00	REEMBOLSO PAGO HABITACION HOTEL
16758	28-JUN-00	10517 06-JUL-00	ANTICIPO. GASTOS POR COMPROBAR. VIAJE A CAMPECHE
T.C.	MAYO 2000	20207-2	VIAJE N.Y.

17.- Del concepto de los pagos se desprende que se trata de reembolsos a funcionarios y empleados del Partido Acción Nacional, por lo que si éstos efectuaron el gasto de sus hospedajes y con posterioridad se expidió a cada uno el cheque que cubría el monto del servicio prestado o la diferencia a su favor, no le asiste la razón a la responsable para imponer la sanción y menos para considerar insatisfactoria la aclaración ya que los gastos sí se cubrieron en forma individual mediante cheques nominativos a favor de cada empleado o funcionario mencionado en los mismos.

Es importante precisar esta circunstancia, pues cada cheque fue expedido con posterioridad a la fecha de la factura para reembolsar un gasto y no para pagar directamente el servicio de hospedaje siendo que esta forma de pago está contemplada en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación que solicito se tenga en cuenta para los efectos legales conducentes ya que sería absurdo que se entregara a cada empleado o funcionario del partido tantos cheques para cubrir los gastos de hospedaje como facturas se van a expedir ya que ni siquiera se sabe el monto ni la razón social del prestador del servicio de hospedaje, pero puede apreciarse claramente que los cheques se expidieron de manera individualizada para que en cada viaje se cubriera el costo o pago del hospedaje respectivo.

18.- Por lo que se refiere a la sanción que aparece a fojas 37 y 63 del dictamen consolidado, con relación al considerando 5.1, inciso b) y el punto resolutivo primero, inciso b) de la resolución combatida, la responsable sostiene que en el rubro de servicios personales, subcuenta de reconocimientos por actividades políticas se observó que el partido otorgó diversos recibos "REPAP" que exceden el límite de 400 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal por un total de $41,360.00.

19.- La responsable notificó la imputación de referencia mediante los oficios STCFRPAP/463/01 y STCFRPAP/514/01, indicando que "...se debe tomar como base la fecha del cheque con el que se pagó el REPAP, es decir, la fecha del pago y no la fecha del periodo de realización de las actividades por las que se realiza el pago". El partido que represento hizo las aclaraciones pertinentes mediante el oficio TESO/052/01 indicándose que en el reglamento en materia de fiscalización no se especifica "...que se debe tomar como base la fecha del cheque con que se paga, ...sino el lapso de tiempo por el que se prestó el servicio".

20.- Del contenido de los recibos se desprende lo siguiente:

FOLIO REPAP	FECHA REPAP	CHEQUE	NOMBRE	PERIODO DE PAGO
379	10-AGO-00	17917 10-AGO-00	CUTBERTO VEGA	1-30 JUNIO-00
385	18-AGO-00	18124 18-AGO-00	CUTBERTO VEGA	1-15 AGOSTO-00
420	25-AGO-00	18251 25-AGO-00	CUTBERTO VEGA	16-31 AGOSTO-00
470	21-SEP-00	18767 21-SEP-00	LUISA URRECHA	1-30 AGO-00
486	29-SEP-00	18938 28-SEP-00	LUISA URRECHA	1-29 SEP-00
543	21-DIC-00	20551 22-DIC-00	RICARDO VARGAS	01 OCT-00 AL 31-DIC-00
004	06-SEP-00		ARMANDO RODRIGUEZ	AGOSTO-00
005	07-SEP-00		ARMANDO RODRIGUEZ	SEPTIEMBRE-00

21.- Ahora bien, la finalidad de los recibos REPAP fue la de establecer un parámetro o elemento para cuantificar el costo de los servicios esporádicos, no laborales o de apoyo que pudiera prestar un ciudadano mexicano hacia un partido político con el objeto de que las contenidas fueran equitativas, es decir, para efectos de los topes a los gastos de campaña, pero evitando de igual manera que existiera la manera de eludir el pago de las contribuciones fiscales por servicios subordinados e independientes ajustando el pago mensual al tope de los 400 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, que para el caso concreto asciende a la cantidad de $15,160.00 y los 3000 días como tope anual permitido por persona.

La existencia de los REPAP o el límite mensual o anual establecido en el reglamento no prohíbe que se realice una erogación en determinado momento por un concepto de retribución que abarque un periodo de servicio mayor a la fecha de pago. La interpretación de la Comisión de Fiscalización respecto a que se debe de atender a la fecha del pago y no al periodo o fecha de realización de las actividades se aparta de la finalidad de cuantificar objetivamente un servicio que por su breve temporalidad no puede ser considerado dentro de una relación laboral o de un servicio profesional prestado de manera independiente ya que es necesario tomar en cuenta también el concepto por el que se efectuó el gasto mediante el REPAP, es decir, que debe observarse que no se trate de una relación de subordinación o de prestación de un servicio independiente y el correspondiente cumplimiento de las normas fiscales y de seguridad social; por lo que la responsable TAMBIEN DEBE ATENDER LA FECHA DE REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES para determinar si el pago se refiere a aquellas actividades de apoyo político devengadas, pero no pagadas como sucede en la especie. En este supuesto se tiene que cubrir el pago pues de lo contrario no podría cuantificarse objetivamente el servicio y el hecho de que estos pagos no aparezcan en la nómina o acreditados mediante un recibo de pago por honorarios, se aparta de la realidad de los hechos que por su temporalidad no corresponden a servicios subordinados o independientes que implican una relación laboral o de prestación de un servicio independiente. En gran medida se estableció este tipo de documentos para que la autoridad fiscalizadora tuviera un parámetro objetivo para determinar si se excedieron los topes a los gastos de campaña permitidos, es decir, que dichos documentos tienen efectos también para determinar el concepto o duración de la actividad política retribuida.

En conclusión, la responsable no tomó en cuenta que el concepto del reconocimiento tiene un determinado periodo durante el cual se realizó el servicio y que en la especie abarca más de un mes, por lo que no se incumplió el dispositivo legal invocado por la responsable ya que los pagos

efectuados no exceden los límites reglamentarios ni se efectuaron pagos por mensualidades mayores a los 400 salarios mínimos generales diarios del Distrito Federal.

7.- AGRAVIOS, CONCEPTOS DE VIOLACION Y PRECEPTOS VIOLADOS.

PRIMERO.- Con la imposición de la sanción prevista en el considerando 5.1, inciso d) y punto resolutivo primero, inciso d) del acto combatido, la responsable violó los principios de constitucionalidad y de legalidad contenidos en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se dejó de observar lo previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, inciso b) y d), fracción III del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En efecto, si la autoridad responsable consideró procedente imponer una sanción pecuniaria al instituto político que represento por existir unas discrepancias o diferencias entre la contabilidad agregada de los partidos que conformaron la coalición Alianza por el Cambio y sus respectivos informes, situación que no ocurre respecto a la contabilidad del Partido Acción Nacional, debió haber hecho del conocimiento del ente ahora sancionado dicha circunstancia durante el procedimiento de revisión de gabinete del informe anual o documental de soporte y proceder en acatamiento del artículo 49-A, párrafo 2, inciso b) a notificarle y otorgarle el plazo de diez días para que presente las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.

Ahora bien, en la práctica de la revisión, la Comisión de Fiscalización omitió hacer el señalamiento de la supuesta irregularidad mediante la notificación de algún oficio girado por el C. Secretario Técnico de dicha autoridad en el que se hiciera saber la existencia de dicha irregularidad y dejó en estado de indefensión al Partido Acción Nacional por lo que la sanción de referencia, resulta inconstitucional e ilegal ya que no fue oído y vencido y no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento.

SEGUNDO.- Con relación al considerando número 5.1, inciso d) y resolutivo primero, inciso d) del acto combatido, la responsable violó asimismo el principio de legalidad y de constitucionalidad tomando en cuenta que no hubo violación al artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y los artículos 1.9, 2.6, 3.1, inciso b), 3.9 y 7.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos aplicables a los Partidos Políticos Nacionales que forman coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Gastos y en la Presentación de sus Informes; así como los artículos 1.1 y 11.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes.

En efecto a fojas 13, 20, 31 y 51 del dictamen consolidado, la Comisión de Fiscalización sostiene respectivamente que:

1.- Existe una diferencia de $1'040,109.46 en las aportaciones de militantes.

2.- Una diferencia de $1'267,548.28 en las aportaciones de simpatizantes;

3.- Una diferencia de $200,715.53 en otras operaciones financieras, y

4.- Una diferencia de $79'423.10 en el formato "IA" de gastos efectuados en campañas políticas.

El total de la diferencia asciende a $81'931,415.37.

Estas diferencias las obtuvo la Comisión de Fiscalización de verificar el monto total reportado en los informes anuales de los partidos políticos que conformaron la coalición Alianza por el Cambio contra las cantidades reportadas en el dictamen consolidado relativo a los informes de campaña de los partidos y coaliciones correspondientes al proceso electoral del año dos mil.

No obstante lo anterior y la discrepancia advertida por la Comisión de Fiscalización, cabe recordar que esta irregularidad es ajena a la contabilidad del Partido Acción Nacional y, por lo tanto, no procede imponer sanción alguna si tomamos en cuenta lo siguiente:

1.- Los saldos respecto a la balanza de la coalición son idénticos a los saldos referidos en el dictamen de la coalición.

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDOS/BALANZA COALICION	SALDOS S/DICTAMEN COALICION
APORTACIONES DE MILITANTES	$17'371,789.09	$17'371,789.83

APORTACIONES DE SIMPATIZANTES	$21'810,656.95	$21'810,656,95
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$3'238,307.17	$3'328,308.17
GASTOS DE CAMPAÑA	$673'695,813.27	$673,695,813.27

2.- Tomando en cuenta el porcentaje de participación que señala el reglamento aplicable a las coaliciones, debe determinarse el saldo que deben aplicar los dos partidos políticos en sus informes anuales, ya no los de campaña debido a que esto se hizo respecto del informe de ingresos y gastos de campaña y representa el total por aplicar, para quedar como sigue:

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDOS POR APLICAR 100%	PAN 69%	PVEM 31%
APORTACIONES DE MILITANTES	$17'371,789.09	$11'976,928.49	$5'394,860.60
APORTACIONES DE SIMPATIZANTES	$21'810,656,95	$15'065,403.81	$6'745,253.22
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$3'238,308.17	$2'227,475.07	$1'010,833.10
GASTOS DE CAMPAÑA	$673'695,813.27	$466'798,685.27	$206'897,128.00

3.- Los montos efectivamente aplicados por los partidos políticos en los informes anuales, son los siguientes:

NOMBRE DE LA CUENTA	PAN SALDOS POR APLICAR	PAN SALDOS APLICADOS 69%	DIFERENCIA
APORTACIONES DE MILITANTES	$11'976,928.49	$11'976,928.49	$0.00
APORTACIONES DE SIMPATIZANTES	$15'065,403.81	$15'065,403.73	$0.08
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2'227,475.07	$2'227,475.07	$0.00
GASTOS DE CAMPAÑA	$466'798,685.27	$466'798,685.27	$0.00

NOMBRE DE LA CUENTA	PVEM SALDOS POR APLICAR	PVEM SALDOS APLICADOS	DIFERENCIA
APORTACIONES DE MILITANTES	$5'394,860.60	$4'354,750.88	$1'040,109.72
APORTACIONES DE SIMPATIZANTES	6'745,253.22	$5'477,704.94	$1'267,548.28
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1'010,833.10	$810,117.57	$200,715.53
GASTOS DE CAMPAÑA	206'897,128.00	$127'474,085.27	$79'423,042.73

4.- Del cuadro comparativo de los saldos que debieron aplicar y aquellos que efectivamente aplicaron los partidos políticos que conformaron la coalición Alianza por el Cambio, se desprende que las discrepancias y sus montos corresponden a la contabilidad del Partido Verde Ecologista de

México, por lo que no existe responsabilidad alguna por parte del Partido Acción Nacional y de donde deriva la indebida motivación y fundamentación de la sanción impuesta al instituto político que represento.

En conclusión la sanción impuesta en el inciso d) además de ser violatoria de los principios de legalidad y de constitucionalidad ya que el Partido Acción Nacional quedó en estado de indefensión por la falta de notificación durante el procedimiento de revisión y aclaraciones, debe ser revocada tomando en cuenta que las diferencias en las cuentas que señala el dictamen consolidado del informe ordinario del año dos mil se deben a la falta en que incurrió diverso partido al no aplicar los montos que debió aplicar en su contabilidad ordinaria.

TERCERO.- Por las razones indicadas en el capítulo de hechos, la responsable violó los principios de legalidad y constitucionalidad respecto a las sanciones impuestas en el considerando número 5.1 incisos a) y b) y el punto resolutivo primero, incisos a) y b), que en obvio de repeticiones se tengan por reproducidos.

...

V. El veintinueve de agosto de dos mil uno, y una vez que se hizo del conocimiento público la interposición del referido recurso de apelación, sin que compareciera tercero interesado alguno, la Secretaría del Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el oficio SCG-218/2001, remitió el expediente ATG-055/2001 formado con motivo del recurso de mérito y que se integra por la documentación que se detalla: **1)** Original del escrito de presentación del recurso, suscrito por el diputado Armando Salinas Torre, en 1 hoja; **2)** Original del recurso de cuenta, suscrito por el diputado Armando Salinas Torre, en 26 hojas, **3)** Documentos aportados por el promovente; **4)** Original del acuerdo de recepción del recurso de apelación, de veintiuno de agosto de dos mil uno; **5)** Original de la cédula de publicación del recurso y de la razón de fijación del mismo, en el lugar que ocupan los estrados del Instituto Federal Electoral, de veintitrés de agosto de dos mil uno; **6)** Original de la razón de retiro de los estrados del Instituto Federal Electoral, del recurso de apelación, de veintiocho de agosto de dos mil uno; **7)** Copia certificada del Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización de Recursos de los Partidos y las Agrupaciones Políticas, respecto de los informes de campaña de los Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones correspondientes al Proceso Electoral del año dos mil; **8)** Copia Certificada del Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de los informes de la revisión de organizaciones políticas, correspondientes al ejercicio de dos mil; **9)** Copia certificada de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos correspondientes al ejercicio de dos mil; **10)** Copia certificada del oficio STCFRPAP/957/00, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil, suscrito por el Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez, en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas; **11)** Copia certificada del oficio STCFRPAP/514/01, de fecha veinticinco de junio de dos mil uno, suscrito por el Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez, en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas; **12)** Copia certificada del oficio STCFRPAP/463/01, de fecha catorce de junio de dos mil uno, suscrito por el Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez, en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas; **13)** Copia certificada del oficio STCFRPAP/520/01, de fecha veinticinco de junio de dos mil uno, suscrito por el Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez, en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas; **14)** Copia certificada del informe anual sobre el origen y destino de los recursos del Partido Acción Nacional correspondiente al ejercicio de dos mil, en 10 fojas útiles incluyendo certificación; **15)** Originales de las balanzas de comprobación de la coalición Alianza por el Cambio; **16)** Originales de las balanzas de comprobación del Partido Acción Nacional correspondientes al ejercicio de dos mil; **17)** Copia certificada del acta levantada el día veintitrés de abril de dos mil uno; **18)** Copia certificada del acta levantada el día veinticinco de junio de dos mil uno; **19)** Copia certificada del escrito TESO/017/01, de fecha veintiuno de febrero de dos mil uno; **20)** Copia certificada del escrito TESO/052/01, de fecha veintinueve de junio de dos mil uno, y **21)** Copia certificada del escrito TESO/054/01, de fecha nueve de julio de dos mil uno.

VI. Anexo al oficio mencionado en el resultando anterior, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral presentó el informe circunstanciado de ley, en el que consignó los argumentos y consideraciones tendentes a desvirtuar los agravios expresados por el partido recurrente, los cuales, respectivamente, son analizados en el capítulo de considerandos de este fallo.

VII. Mediante acuerdo del veintinueve de agosto de dos mil uno, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó se turnara el expediente de mérito al Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cumplimentándose dicho turno el mismo día mediante oficio número TEPJF-SGA-1033/01 suscrito por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.

VIII. Con fecha tres de octubre de dos mil uno, el Magistrado Electoral encargado de la sustanciación y elaboración del proyecto de sentencia, acordó: **A)** Tener por recibido el expediente número SUP-RAP-055/2001, radicándolo para su sustanciación y resolución; **B)** Requerir al Instituto Federal Electoral para que remitiera a la Sala Superior copia certificada de las páginas que no se enviaron de la *Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio de 2000*; **C)** Reservar el estudio de la causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable, para el momento procesal oportuno, y **D)** Reservar proveer sobre la admisión del presente medio de impugnación, para el momento procesal oportuno, una vez que se encontrara debidamente integrado el expediente.

IX. El cuatro de octubre de dos mil uno, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el oficio número SCG/248/2000, suscrito por el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el cual se remitió copia certificada de la documentación solicitada, en cumplimiento del requerimiento precisado en el resultando anterior.

X. Con fecha veinticuatro de octubre de dos mil uno, el Magistrado Electoral encargado de la sustanciación y elaboración del proyecto de sentencia, acordó: **A)** Tener por desahogado en tiempo y forma el requerimiento precisado en el resultando anterior; **B)** Reconocer la personería del C. Armando Salinas Torre, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para promover el presente recurso de apelación, y tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito, así como por autorizados, para recibirlas a las personas que indica; **C)** Tener por satisfechos, para el trámite y sustanciación del presente medio de impugnación, los requisitos previstos en el artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, en consecuencia, admitir el recurso de apelación de referencia; **D)** Tener por rendido el informe circunstanciado de ley; **E)** Tener por admitidas las pruebas ofrecidas por el hoy recurrente y la autoridad responsable, y **F)** En virtud de no existir trámite pendiente que realizar, declarar cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 44, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 49-A, párrafo 2, inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral por la que se imponen sanciones a los partidos políticos con motivo de las irregularidades encontradas en la revisión de sus informes anuales de ingresos y gastos, aprobada en la sesión extraordinaria celebrada el nueve de agosto del año en curso.

SEGUNDO. En virtud de que el estudio de las causas de improcedencia es una cuestión de orden público y, por tanto, de análisis preferente, ya sea que las hagan valer las partes o se adviertan de oficio, mas por el hecho de que están relacionadas con la no actualización de los requisitos para la válida instauración del proceso y la consecuente emisión de una sentencia de fondo, en términos de lo dispuesto en los artículos 1o.; 9o.; 10, y 11, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se procede a analizar la invocada por la autoridad responsable.

Al respecto, la autoridad responsable aduce en su informe circunstanciado la causa de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que el partido recurrente impugna única y exclusivamente la resolución del Consejo General respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales presentados por los partidos políticos correspondientes al año dos mil, no así el Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General, por lo que, en concepto de la hoy responsable, todas las irregularidades señaladas en dicho

dictamen y que son la base de las sanciones impuestas al partido recurrente, deben considerarse como consentidas, pues el hecho de no impugnar ese dictamen implica un consentimiento tácito de su contenido.

Dicha causa de improcedencia resulta **inatendible**, por los razonamientos que se exponen a continuación:

Ha sido criterio reiterado de esta Sala Superior, como se sostiene en las resoluciones dictadas el trece de julio del año en curso en los expedientes SUP-RAP-017/2001 y SUP-RAP-018/2001, que los actos de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas no son susceptibles de causar alguna lesión jurídica en la esfera de los partidos políticos, ya que el dictamen consolidado elaborado por la citada Comisión no tiene la fuerza legal suficiente para causar perjuicio, por carecer de efectos vinculatorios para el Consejo General del Instituto Federal Electoral, quien es el órgano directivo que determina con entera libertad de decisión, si las conductas de los partidos políticos reportadas en el citado dictamen, relacionadas con los informes de ingresos y gastos durante determinado ejercicio anual, presentados por ellos, constituyen infracciones legales que ameriten ser sancionadas.

En este sentido, el referido dictamen consolidado es un acto preparatorio y no definitivo para el dictado del acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en donde se establecen, en su caso, las sanciones a imponerse a los diversos partidos políticos por las irregularidades que en su momento se determinen.

En efecto, aun y cuando la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas interviene en el proceso formativo de la resolución antes citada, mediante la revisión de los documentos presentados por los partidos políticos, así como a través de la solicitud de aclaraciones, rectificaciones y observaciones a los informes presentados por éstos, de conformidad con lo establecido en los artículos 49-A, párrafo 2; 49-B, y 82, párrafo 1, inciso w), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, su actividad en este aspecto se encuentra subordinada a la voluntad del Consejo General del Instituto Federal Electoral, quien aprueba o no el dictamen consolidado que aquélla le presenta, en términos de lo dispuesto en el artículo 80, párrafo 3, del propio ordenamiento legal.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis relevante emitida por esta propia Sala, que aparece publicada en *Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,* suplemento número 3, año 2000, páginas 38 y 39, bajo el rubro "COMISIONES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, LOS INFORMES Y PROYECTOS DE DICTAMEN Y RESOLUCION QUE PRESENTEN, NO CAUSAN PERJUICIO A LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES".

En este orden de ideas, el acto que directamente puede causar un agravio a los partidos políticos tratándose de la revisión de sus informes anuales sobre los ingresos y gastos, es la resolución que se dicta por parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en la cual es cierto que se van a conocer y valorar las irregularidades que se hayan encontrado por parte de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, pero la determinación de si tales infracciones ameritan o no sancionarse, así como de la sanción que, en su caso, debe aplicarse, corresponden en forma exclusiva al Consejo General.

De tal forma, basta que el partido político actor impugne la resolución que determina imponer las sanciones por las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos, sin que ello implique, como incorrectamente lo sostiene la autoridad señalada como responsable, que se estén consintiendo los razonamientos y conclusiones contenidos en el dictamen consolidado que presenta la Comisión de mérito.

TERCERO. El análisis del escrito del recurso de apelación evidencia que el actor expresa agravios solamente respecto de tres de las cuatro sanciones que le fueron impuestas al Partido Acción Nacional por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, las cuales se detallan en la parte final de la transcripción del acto impugnado que se encuentra en el resultando III de este fallo, y que en concreto son las sanciones precisadas en los incisos a), b) y d) del punto resolutivo primero, razón por la cual no forma parte de la litis la sanción señalada en el inciso c) del propio punto resolutivo primero, en virtud de no haber sido impugnada dentro de los plazos establecidos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, párrafo 1, parte final del inciso b), en relación con el artículo 8, párrafo 1, de la misma ley general.

De igual forma, debe aplicarse el mismo criterio en cuanto a que el Partido Acción Nacional sólo impugna un aspecto de la sanción contenida en el considerando 5.1, inciso a), de la resolución combatida, ya que el propio partido se concreta a atacar parcialmente las consideraciones de la autoridad responsable, toda vez que sólo expresa argumentos tendentes a combatir la sanción impuesta por la expedición de diversos cheques en una sola de las cuentas, que es la referente a servicios generales, subcuenta de viáticos, por lo

que los razonamientos de la autoridad responsable, en relación con las irregularidades en la cuenta de servicios personales, subcuenta de honorarios, también deben entenderse consentidos, en razón de que tampoco fueron impugnados dentro de los plazos establecidos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, párrafo 1, parte final del inciso b), en relación con el artículo 8, párrafo 1, de la misma ley general.

De la lectura integral del escrito de demanda presentado por el Partido Acción Nacional, así como en aplicación de las tesis de jurisprudencia que este mismo órgano jurisdiccional ha sentado y que figuran con los rubros "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL", y "MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCION DEL ACTOR", las cuales fueron publicadas en el suplemento número 2 de *Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,* año 1998, páginas 11 y 12, así como 70, respectivamente, se desprende que el actor hace valer los siguientes agravios, mismos que esta Sala Superior analiza de manera correlativa, a como se encuentran expresados en el escrito recursal.

I. En cuanto a la sanción contenida en el considerando número 5.1, inciso a), de la resolución combatida, el recurrente alega que le agravia la consideración de la autoridad responsable en el sentido de que se incumplió el artículo 11.5 del reglamento en materia de fiscalización, pues, en concepto del propio recurrente, es errónea la determinación a que arribó la hoy responsable de que en el rubro de servicios generales, en la subcuenta de viáticos, se localizaron comprobantes de gastos que debieron cubrirse en forma individual, es decir, mediante cheques expedidos por cada uno de estos pagos, ya que exceden de cien días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal que equivale a $3,790.00, toda vez que la expedición de cheques nominativos a cargo de la cuenta maestra número 154179-5 del Banco Nacional de México, S.A., fue por concepto de reembolsos a funcionarios y empleados del Partido Acción Nacional, ya que éstos, según expresa el recurrente, efectuaron el gasto de sus hospedajes y con posterioridad se expidió a cada uno de ellos el cheque que cubría el monto del servicio prestado o la diferencia a su favor. En este sentido, el ahora actor aduce que la autoridad no puede considerar insatisfactoria la aclaración que en su momento le sometió a consideración, ya que los gastos sí se cubrieron en forma individual mediante cheques nominativos a favor de cada empleado o funcionario mencionado en los mismos. Asimismo, agrega el recurrente que cada cheque fue expedido con posterioridad a la fecha de la factura para reembolsar un gasto y no para pagar directamente el servicio de hospedaje, siendo que esta forma de pago está contemplada en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, por lo que, según esgrime el propio partido político apelante, sería absurdo que se entregara a cada empleado o funcionario del partido tantos cheques para cubrir los gastos de hospedaje como facturas se van a expedir, ya que ni siquiera se sabe el monto ni la razón social del prestador del servicio de hospedaje, pero puede apreciarse claramente que los cheques se expidieron de manera individualizada para que en cada viaje se cubriera el costo o pago del hospedaje respectivo.

II. Por lo que se refiere a la sanción determinada en el considerando 5.1, inciso b), y el punto resolutivo primero, inciso b), de la resolución combatida, el partido político recurrente alega que la misma le agravia, toda vez que es errónea la determinación de la autoridad responsable en el sentido de que en el rubro de servicios personales, subcuenta de reconocimientos por actividades políticas, existen recibos "REPAP" que exceden el límite de cuatrocientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal por un total de $41,360.00. Lo anterior resulta inexacto, según el ahora apelante, en virtud de que la responsable no tomó en cuenta que el periodo por el cual se realizó el servicio, en el caso concreto, abarca más de un mes, por lo que no se incumplió con la normatividad, ya que los pagos efectuados no exceden los límites reglamentarios ni se efectuaron pagos por mensualidades mayores a los cuatrocientos salarios mínimos generales diarios en el Distrito Federal.

Al efecto, el partido hoy recurrente sostiene que la finalidad de los recibos REPAP fue la de establecer un parámetro o elemento para cuantificar el costo de los servicios esporádicos, no laborales o de apoyo que pudiera prestar un ciudadano mexicano hacia un partido político con el objeto de que las contiendas fueran equitativas, es decir, para efectos de los topes a los gastos de campaña, pero evitando de igual manera que existiera la manera de eludir el pago de las contribuciones fiscales por servicios subordinados o independientes, ajustando el pago mensual al tope de los cuatrocientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, que para el caso concreto asciende a la cantidad de $15,160.00, y los tres mil días como tope anual permitido por persona.

Asimismo, agrega el partido político recurrente que la existencia de un límite mensual o anual para los recibos REPAP no prohíbe que se realice una erogación en determinado momento que abarque un periodo de servicio mayor a la fecha de pago. De igual forma, el hoy apelante esgrime que la interpretación realizada por la Comisión de Fiscalización, respecto de que en el caso bajo estudio se debió de atender a la fecha del pago y no al periodo o fecha de realización de las actividades, se aparta de la finalidad de cuantificar objetivamente un servicio que por su breve temporalidad no puede ser considerado dentro de una relación laboral o de un

servicio profesional prestado de manera independiente, ya que es necesario tomar en cuenta también el concepto por el que se efectuó el gasto mediante el REPAP, es decir, debe observarse que no se trate de una relación de subordinación o de prestación de un servicio independiente y el correspondiente cumplimiento de las normas fiscales y de seguridad social; por lo que, alega el recurrente, la autoridad responsable también debió atender a la fecha de realización de las actividades para determinar si el pago se refiere a aquellas actividades de apoyo político devengadas, pero no pagadas, como sucede en la especie. En este supuesto, argumenta el partido actor, se tiene que cubrir el pago, pues de lo contrario no podría cuantificarse objetivamente el servicio y el hecho de que estos pagos no aparezcan en la nómina o acreditados mediante un recibo de pago por honorarios, se aparta de la realidad de los hechos que, por su temporalidad, no corresponden a servicios subordinados o independientes que implican una relación laboral o de prestación de un servicio independiente. Finalmente, el ahora recurrente alega que se estableció este tipo de documentos para que la autoridad fiscalizadora tuviera un parámetro objetivo para determinar si se excedieron los topes a los gastos de campaña permitidos, es decir, que dichos documentos tienen efectos también para determinar el concepto o duración de la actividad política retribuida.

III. Aduce el partido político hoy apelante que la imposición de la sanción prevista en el considerando 5.1, inciso d), y punto resolutivo primero, inciso d), del acto combatido, viola los principios de constitucionalidad y de legalidad contenidos en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se dejó de observar lo previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, incisos b) y d), fracción III, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Lo anterior, en concepto del ahora apelante, se encuentra indebidamente motivado por la autoridad responsable, ya que la sanción de referencia se determinó por existir discrepancias o diferencias entre la contabilidad agregada de los partidos que conformaron la coalición Alianza por el Cambio y sus respectivos informes, situación que, al decir del hoy recurrente, sólo corresponde al Partido Verde Ecologista de México, pero que no ocurre respecto de la contabilidad del Partido Acción Nacional, además de que la autoridad no hizo de su conocimiento dicha circunstancia durante el procedimiento de revisión de gabinete del informe anual o documental de soporte, conforme con lo previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, inciso b), del Código Electoral Federal, es decir, no se le notificó ni se le otorgó el plazo de diez días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones pertinentes, sino que las irregularidades detectadas por la Comisión de Fiscalización fueron de su conocimiento el siete de agosto del año en curso, cuando ya había concluido el procedimiento de revisión, lo que le dejó en estado de indefensión, ya que no fue oído y vencido y no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento.

Por otra parte, el partido político actor presenta una serie de cuadros comparativos de los saldos que debieron aplicar y aquellos que efectivamente aplicaron los partidos políticos que conformaron la coalición Alianza por el Cambio, de donde pretende desprender que las discrepancias y sus montos corresponden a la contabilidad del Partido Verde Ecologista de México, y concluir que no existe responsabilidad alguna por parte del Partido Acción Nacional, ni mucho menos, violación al artículo 38, párrafo 1, inciso k), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y los artículos 1.9; 2.6; 3.1, inciso b); 3.9, y 7.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos aplicables a los Partidos Políticos Nacionales que forman coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Gastos y en la Presentación de sus Informes; así como los artículos 1.1 y 11.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes.

Finalmente, en el escrito de apelación bajo estudio, el Partido Acción Nacional alega que hizo saber al C. Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización, mediante el oficio número TESO/017/01 del veintiuno de febrero del año en curso, y al propio Partido Verde Ecologista de México, los montos totales de los pasivos documentados, las balanzas de comprobación y auxiliares a último nivel, de donde se localizan los pasivos registrados mediante los oficios sin número de siete de febrero, trece y quince de marzo y el oficio número TESO/057/01 de siete de julio, todos del año en curso, con los cuales se demuestra, según el apelante, que la discrepancia entre los saldos que motivaron la sanción pecuniaria se debe a circunstancias ajenas a la contabilidad del Partido Acción Nacional o de sus informes.

Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estima que los agravios que han quedado resumidos en los apartados I y II son **infundados,** en tanto que el precisado en el punto III es **fundado,** en atención a los siguientes razonamientos.

A. En primer término, por lo que se refiere al agravio identificado con el numeral I que antecede, relativo a la sanción contenida en el considerando número 5.1, inciso a), de la resolución combatida, es necesario tener

presente que el partido político ahora actor expresa argumentos tendentes a sostener que los pagos realizados con motivo de reembolsos a funcionarios y empleados del propio partido, fueron en razón de que éstos efectuaron gastos por sus hospedajes y con posterioridad se les expidió a cada uno un cheque que cubría el monto del servicio prestado o la diferencia a su favor. Dichos cheques, al decir del propio actor, fueron de la cuenta maestra número 154179-5 del Banco Nacional de México, S.A., involucrando un monto de $82,508.47 (Ochenta y dos mil quinientos ocho pesos, 47/100 M.N.).

Sin embargo, de la revisión del inciso a) del considerando 5.1 de la misma resolución impugnada, claramente se puede advertir que la sanción que se impuso al Partido Acción Nacional fue por no realizar mediante cheque, pagos superiores a los cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por un monto total de $215,666.37 (Doscientos quince mil seiscientos sesenta y seis pesos 37/100 M.N.), registrados en las cuentas servicios personales, subcuenta de honorarios, y servicios generales, subcuenta de viáticos, por los montos de $133,157.90 (Ciento treinta y tres mil ciento cincuenta y siete pesos 90/100) y $82,508.47 (Ochenta y dos mil quinientos ocho pesos 47/100 M.N.), respectivamente.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos expresados por el partido político actor, es necesario tener presente el contenido del artículo 11.5 del *Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes:*

> 11.5. Todo pago que efectúen los partidos políticos que rebase la cantidad equivalente a cien veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal deberá realizarse mediante cheque, con excepción de los pagos correspondientes a sueldos y salarios contenidos en nóminas. Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación comprobatoria a que hace referencia este artículo.

De lo dispuesto en este precepto claramente se advierte que, tal y como lo determinó la autoridad responsable, el Partido Acción Nacional incumplió con lo establecido en el artículo 11.5 del reglamento antes precisado, ya que dicho precepto claramente establece que todo pago que efectúen los partidos políticos que rebase la cantidad equivalente a cien veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal deberá realizarse mediante cheque, advirtiéndose que las únicas excepciones a esta regla son los pagos correspondientes a sueldos y salarios contenidos en nóminas.

De tal forma, resulta correcto que la autoridad ahora responsable haya establecido en la resolución combatida que el ahora apelante no subsanó la irregularidad encontrada por la Comisión de Fiscalización, porque, contrariamente a lo que alega el propio partido político recurrente en cuanto a que los cheques se expidieron a nombre de los funcionarios y empleados del Partido Acción Nacional, que efectuaron gastos de hospedaje y con posterioridad se les reembolsó, y que en tal sentido los gastos sí se cubrieron en forma individual mediante cheques nominativos en favor de cada empleado o funcionario, la normativa establece un límite en el monto de recursos que los partidos pueden otorgar sin la emisión de cheque nominativo, esto es, todo monto inferior a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para cada pago, puesto que no se cumple con tal normativa si se expide sólo un cheque para todos los gastos que la persona a la que se le otorgan los viáticos tendría que cubrir y que fueran superiores a cien días de salario mínimo general vigente.

En efecto, el artículo 11.5 del citado reglamento señala que todo pago que rebase la cantidad equivalente a cien veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, deberá realizarse mediante cheque, siendo las únicas excepciones lo relativo a sueldos y salarios contenidos en nóminas, así como el caso del artículo 14.2 del mismo ordenamiento, que se refiere a pagos de reconocimientos por actividades políticas, que pueden realizarse en efectivo, supuestos en que no se encuentra el Partido Acción Nacional en el caso concreto, por lo que es evidente su incumplimiento a la normativa de la materia.

Finalmente, debe señalarse que resulta inexacto el argumento del Partido Acción Nacional, en el sentido de que el pago indirecto es un mecanismo contemplado en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación y que, en consecuencia, debe tenerse en consideración para resolver a su favor en el caso concreto, toda vez que los partidos políticos se encuentran obligados, en primer término, a observar lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en la normativa que de este último deriva, como es el caso del *Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de su ingresos y egresos y en la presentación de sus informes,* y sólo de manera subsidiaria y complementaria, en lo que no sea contrario a la normativa antes anunciada, las reglas contenidas en otras disposiciones legales, que incidan directamente en los derechos y obligaciones de los partidos políticos; sin que esto implique desatender o inobservar todas las obligaciones que como sujetos de derecho se prevean en la normativa vigente en el país.

De tal forma, atendiendo a que las consideraciones de la autoridad responsable para imponer la sanción precisada en el considerando 5.1., inciso a), de la resolución combatida resultan apegadas a derecho y, como consecuencia de ello, que los argumentos expresados por el partido político actor se hayan calificado de infundados, se acredita el incumplimiento a lo establecido en el artículo 11.5 del multicitado reglamento y, por tanto, debe confirmarse la sanción impuesta en el referido apartado, conforme con lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

B. En segundo término, por lo que se refiere a la sanción determinada en el considerando 5.1, inciso b), y el punto resolutivo primero, inciso b), de la resolución combatida, es necesario destacar que de la revisión del *Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de la revisión de los informes anuales de los partidos políticos y organizaciones políticas, correspondientes al ejercicio de 2000,* se aprecia que la referida irregularidad se encontró al revisar los egresos del Partido Acción Nacional, concretamente en la cuenta de servicios personales, subcuenta de reconocimientos por actividades políticas, mismos que, en parte, excedieron el límite mensual de cuatrocientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en el año 2000, equivalentes a $15,160.00 (Quince mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.), conforme con el siguiente cuadro:

REFERENCIA CONTABLE	FOLIO "REPAP"	FECHA	NOMBRE	IMPORTE	TOTAL	DIFERENCIA
Eg-287/08-00	379	10-Ago-00	CUTBERTO VEGA	$10,000.00		
Eg-507/08-00	385	18-Ago-00	CUTBERTO VEGA	5,000.00		
Eg-640/08-00	420	25-Ago-00	CUTBERTO VEGA	5,000.00	$20,000.00	$4,840.00
Eg-428/09-00	470	21-Sep-00	LUISA URRECHA BELTRAN	12,000.00		
Eg-610/09-00	486	29-Sep-00	LUISA URRECHA BELTRAN	12,000.00	24,000.00	8,840.00
Eg-521/12-00	543	21-Dic-00	RICARDO VARGAS AGUAYO	30,000.00	30,000.00	14,480.00
TOTAL				**$74,000.00**	**$74,000.00**	**$28,520.00**

Asimismo, en el referido dictamen, pero en la parte relativa a la revisión en el Estado de Nuevo León, se encontró en la cuenta de servicios personales, subcuenta de reconocimientos por actividades políticas, que también se habían rebasado los límites mensuales antes precisados, como se detalla en el siguiente cuadro.

REFERENCIA CONTABLE	FOLIO "REPAP"	FECHA	NOMBRE	IMPORTE	TOTAL	DIFERENCIA
PE-3012/09-00	004	06-Sep-00	ARMANDO RODRIGUEZ CORONA	$14,000.00		
PE-3014/09-00	005	07-Sep-00	ARMANDO RODRIGUEZ CORONA	14,000.00	$28,000.00	$12,840.00

Como puede advertirse de la información obtenida del dictamen consolidado, concretamente de la columna de "diferencia" la irregularidad determinada por la autoridad responsable consistente en que el partido no comprobó, conforme con los lineamientos de la materia, un monto total de $41,360.00 ($28,520.00 + $12,840.00) registrado en el rubro Servicios Personales, subcuenta Reconocimientos por Actividades Políticas, se debe a que el partido político otorgó cantidades de dinero a algunas personas por este concepto, a través de los recibos "REPAP", que superaron el límite de cuatrocientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un mes, lo que resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 14.4 de los referidos lineamientos.

En efecto, resulta pertinente tener presente el contenido de los artículos del *Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de su ingresos y egresos y en la presentación de sus informes,* relacionados con el aspecto en controversia, y que son los siguientes:

> Artículo 11.1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación que expida a nombre del partido político la persona a quien se efectuó el pago.

Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, con excepción de lo señalado en los siguientes párrafos.

Artículo 14.2. Durante las campañas electorales, los partidos políticos podrán otorgar reconocimientos en efectivo a sus militantes o simpatizantes por su participación en actividades de apoyo político. Dichos reconocimientos deberán estar soportados por recibos foliados que especifiquen el nombre y la firma de la persona a quien se efectuó el pago, su domicilio y teléfono, la campaña electoral correspondiente, el monto y la fecha del pago, el tipo de servicio prestado al partido político, y el periodo de tiempo durante el que se realizó el servicio. Los recibos deberán estar firmados por el funcionario del área que autorizó el pago. Estas erogaciones contarán para los efectos de los topes de gasto de las campañas correspondientes.

Artículo 14.3. Los reconocimientos que los partidos políticos otorguen a personas involucradas en actividades de apoyo político relacionadas con su operación ordinaria, también podrán ser documentados con un recibo que deberá reunir los requisitos a que hace referencia el párrafo anterior, excepto la relativa a la campaña electoral.

Artículo 14.4. Las erogaciones realizadas por los partidos políticos como reconocimientos a una sola persona física por una cantidad equivalente o superior a tres mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, dentro del transcurso de un año, ya sea que se paguen en una o en varias exhibiciones, no podrán ser comprobadas a través de los recibos previstos en los dos párrafos anteriores. Tampoco podrán comprobarse mediante esta clase de recibos los pagos realizados a una sola persona física, por ese concepto, que excedan los cuatrocientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un mes. En ambos casos, tales erogaciones deberán estar soportadas de conformidad con lo establecido en el artículo 11.1 del presente Reglamento.

En este sentido, lo dispuesto en el artículo 14.4 es claro, en el sentido de que una sola persona no puede recibir, en el transcurso de un mes, una cantidad superior al equivalente a cuatrocientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, monto que en el año dos mil equivalía a $15,160.00 (Quince mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.), ello con independencia del periodo durante el cual se hubiesen realizado los servicios de apoyo político por parte del ciudadano hacia el partido político.

Al respecto, es necesario destacar que esta Sala Superior ya ha sostenido un criterio similar, respecto de los preceptos antes transcritos, si bien en el sentido de que los recibos "REPAP" no pueden exceder el límite de cuatrocientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en un mes, y que en el caso de que el periodo por el cual se hayan realizado las actividades políticas por las cuales se hayan otorgado los correspondientes reconocimientos, excedan de dicho plazo, deberían expedirse tantos recibos como fuese necesario, a efecto de no exceder los límites previstos.

En efecto, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-029/2000, el diecinueve de julio del año dos mil, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad de votos, determinó, a fojas 110 a 114 de la sentencia de referencia, lo siguiente:

...

De los preceptos antes transcritos se desprende, en lo que interesa, lo siguiente:

a) Los gastos que realicen los partidos políticos invariablemente, deberán registrarse en la contabilidad del mismo y estar soportados con la documentación que se expida a nombre del partido político.

b) Esta documentación deberá cumplir con los requisitos fiscales aplicables, salvo determinados casos.

c) Los partidos políticos tienen la posibilidad de realizar erogaciones por concepto de gastos en la cuenta servicios personales, debiendo estar soportadas con la documentación atinente y que cumpla los requisitos fiscales, en términos del artículo 11.1, aunque existen casos de excepción.

d) Una de las excepciones de la regla general (documentación con requisitos fiscales), consiste en que se podrá otorgar los reconocimientos en efectivo a los militantes o simpatizantes del propio partido, por el desarrollo de determinadas actividades de apoyo político, hasta un monto de cuatrocientos o tres mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, que se otorgue a una persona física por mes o por año, respectivamente.

En efecto, la documentación justificatoria de las erogaciones hasta por las cantidades de referencia (y por debajo de éstas) podrán realizarse a través de determinados formatos, en los que los únicos requisitos que se exigen, son, a saber, los siguientes: 1) emitir recibos foliados que especifiquen el nombre y firma de la persona a quien se efectuó el pago, su domicilio y teléfono;

2) el monto; 3) la fecha de pago; 4) el tipo de servicio prestado al partido político; 5) el periodo durante el que se realizó el servicio; y 6) la firma del funcionario del área que autorizó el pago.

e) Consecuentemente, las erogaciones superiores a los cuatrocientos y tres mil días de salario arriba especificado, por los periodos mencionados, sin lugar a dudas, tendrán que verificarse en términos del artículo 11.1, es decir, la documentación justificatoria debe reunir los requisitos fiscales aplicables; sin que sea válido justificar estas erogaciones mediante los formatos antes precisados.

Sobre estas bases, y dado que la normatividad reglamentaria de manera nítida establece que los montos superiores a los cuatrocientos y tres mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, por concepto de reconocimientos en efectivo por actividades de apoyo político, no puede avalarse su justificación en un formato que no cumpla con las especificaciones fiscales.

De lo anterior, se advierte que no le asiste la razón al apelante en el sentido de que la documentación que presentó cumple con lo dispuesto por el propio artículo 14.4, puesto que en este precepto se prevé que los gastos que sobrepasen los límites de cuatrocientos y tres mil días de salario antes precisados, no podrán justificarse mediante la expedición de los formatos "REPAP"; y mucho menos que de este precepto se genere la posibilidad de que en un solo formato se rebasen los límites antes enunciados. Consecuentemente, el alegato que en dicho reglamento no se prevé prohibición alguna para realizar pagos de manera retroactiva mediante la expedición de un solo formato, aunque la cantidad que ampare exceda de los límites establecidos, carece de sustento legal, puesto que como se expuso con anterioridad, **la norma es clara en cuanto a que cada formato no podrá rebasar los topes mencionados por concepto de reconocimientos por actividades políticas;** por tanto, el hoy inconforme tuvo la oportunidad de generar tantos recibos como fuese necesario para justificar las erogaciones efectuadas, siempre por debajo de los montos aprobados. Además se precisa que el partido tuvo un periodo de diez días hábiles para subsanar estas irregularidades, sin que así lo haya hecho, no obstante que se le hicieron de su conocimiento con toda oportunidad.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que tal y como lo sostuvo la autoridad responsable, no se puede pasar por alto que se trata de la revisión del informe de ingresos y egresos de una entidad de interés público, en el que por ley su financiamiento predominante es otorgado por el erario público. Incluso, la posibilidad de que presenten los partidos políticos los formatos (REPAP) antes referidos, se dejan a la buena fe del propio partido, sin exigirle mayores requisitos que los enunciados en el artículo 14.2 del Reglamento aplicable.

Sobre estas bases también debe decirse que no le asiste la razón al impetrante cuando manifiesta que no trató de anteponer los mecanismos de control, registro y aplicación de los recursos a la normatividad legal y reglamentaria aplicable, y que sólo explicó las razones del por qué, en su concepto, los recibos mencionados amparaban cantidades superiores a los cuatrocientos días de salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal; ello en virtud de que como quedó precisado, no puede avalarse tal justificación si los documentos en cuestión no satisfacen los requisitos atinentes.

Por estas razones, el presente agravio es infundado.

De tal forma, resulta evidente que atendiendo a la interpretación que esta Sala Superior ha realizado a lo dispuesto en los artículos 11.1; 14.2; 14.3 y 14.4, del *Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes*, el partido político ahora actor debió proceder a expedir tantos recibos REPAP como fuese necesario, pero sin que los mismos queden comprendidos dentro del mismo mes, a efecto de hacer compatible el monto máximo de recursos que un ciudadano puede recibir a través de un recibo REPAP, con el periodo por el cual se realizó el servicio, que en el caso concreto, según se desprende del dictamen consolidado y lo manifestado por el propio actor, así como por la autoridad responsable en la resolución combatida, abarcaron más de un mes, por lo que esta Sala Superior llega a la convicción de que efectivamente el partido político ahora apelante incumplió con la normativa aplicable, ya que los pagos efectuados exceden los límites reglamentarios, pues se efectuaron pagos mayores a cuatrocientos salarios mínimos generales diarios en el Distrito Federal en el transcurso de un mes.

Lo anterior, en forma alguna resulta incompatible con el hecho de que, como lo afirma el partido político ahora actor, la finalidad de los recibos REPAP es la de establecer un parámetro o elemento para cuantificar el costo de los servicios esporádicos, no laborales o de apoyo que pudiera prestar un ciudadano mexicano hacia

un partido político, porque, efectivamente, ello permite conocer las erogaciones que por tal concepto realizan dichos institutos políticos, propiciando que las contenidas electorales sean más equitativas, al poderse establecer controles que impidan se rebasen los topes a los gastos de campaña respectivos, pero además, también permite evitar que con ello se pueda eludir el cumplimiento de determinadas obligaciones fiscales así como el pago de las contribuciones fiscales que por servicios subordinados o independientes corresponda, al establecerse que el pago durante un mes por dicho concepto no exceda del tope de los cuatrocientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, o la cantidad de tres mil días como tope anual permitido por persona.

De tal forma, al existir un límite mensual y anual para el otorgamiento de los reconocimientos por actividades políticas, a través de los recibos REPAP, tal y como lo ha establecido esta autoridad jurisdiccional federal, cuando se realice una erogación que en determinado momento abarque un periodo de servicio mayor al de un mes, el partido político debe proceder a emitir tantos recibos como sea necesario, en el momento en que se estén realizando, a efecto de no violentar las reglas previstas en los lineamientos de referencia. Lo anterior no resulta excesivo ni contrario a las prácticas legales correspondientes, si se atiende al hecho de que si una persona se encuentra prestando su apoyo a un partido político por un lapso mayor a un mes, obviamente existe la vinculación y contacto necesarios para ir expidiéndole y entregándole los recibos correspondientes a cada periodo y, en consecuencia, darle pleno cumplimiento a la normativa antes referida.

En efecto, pese a que se trata de servicios que por su breve temporalidad no pueden ser considerados dentro de una relación laboral o de un servicio profesional prestado de manera independiente, como lo sostiene el partido político ahora actor, pues no se trata de una relación de subordinación o de prestación de un servicio independiente, la propia naturaleza de las actividades desarrolladas permite que exista el contacto necesario entre el partido político y el ciudadano, a efecto de que a medida que se van realizando las actividades de apoyo político, las mismas sean retribuidas.

En términos de lo que se ha expuesto, queda evidenciado que la irregularidad determinada y sancionada por la autoridad responsable sí se actualizó y, por tanto, debe confirmarse la multa impuesta al Partido Acción Nacional en el considerando 5.1, inciso b), de la resolución impugnada.

C. En cambio, por lo que se refiere a la imposición de la sanción prevista en el considerando 5.1, inciso d), y punto resolutivo primero, inciso d), del acto combatido, el alegato del partido político recurrente resulta fundado, toda vez que la autoridad responsable efectivamente desatendió lo previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, incisos b) y d), fracción III, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En efecto, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido reiteradamente el criterio de que el procedimiento de presentación y revisión de los informes de los partidos políticos nacionales previsto en el artículo 49-A, párrafos I, inciso a), fracción I, y 2, incisos a) al d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contempla diferentes etapas, que deben ser atendidas puntualmente, tanto por los partidos políticos nacionales, como por la propia autoridad fiscalizadora.

En este sentido, del citado precepto se desprende, en primer lugar, que los partidos políticos nacionales tienen la obligación de presentar sus informes anuales del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como de su empleo y aplicación, a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte.

Por su parte, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas cuenta con sesenta días para revisar los informes anuales presentados por los partidos políticos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 49-A, párrafo 2, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora bien, conforme con lo dispuesto en el inciso b) del precepto antes invocado, si durante la revisión de los informes la Comisión de Fiscalización advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, debe notificar al partido político para que, en un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes.

Una vez que ha vencido el plazo de sesenta días que tiene la Comisión de Fiscalización para revisar los informes o, en su caso, el concedido para la rectificación de errores u omisiones, la comisión dispone de veinte días para elaborar un dictamen consolidado que debe presentar al Consejo General del Instituto Federal Electoral, dentro de los tres días siguientes a su conclusión.

El referido dictamen debe contener, por lo menos: a) El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos y las agrupaciones políticas; b) En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontradas en los mismos, y c) El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos y las agrupaciones políticas, después de haberles notificado con ese fin.

Es necesario destacar que en el Consejo General del Instituto Federal Electoral se presenta el dictamen y proyecto de resolución que haya formulado la comisión, procediendo a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes, a partir precisamente del contenido del multicitado dictamen consolidado.

Como puede advertirse, con fundamento en el artículo 49-A, párrafo 2, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, si la Comisión de Fiscalización advierte, durante el transcurso de los sesenta días que tiene para revisar los informes de mérito, la existencia de errores u omisiones técnicas, debe notificar al partido político que hubiere incurrido en ellos para que, en un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, realice las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes.

En efecto, como claramente se advierte de las disposiciones que regulan la rendición del informe anual de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, se contemplan expresamente los plazos en que dichos institutos políticos deben presentar su respectivo informe, así como el término con que la Comisión de Fiscalización cuenta para realizar la revisión de los mismos, y también la obligación que tiene dicha comisión de hacer del conocimiento de los partidos políticos la existencia de errores u omisiones técnicas, así como el plazo en que los partidos deben dar cumplimiento a los requerimientos o presentar las aclaraciones que, en su caso, les sean solicitadas, sin que dichas obligaciones y términos puedan dejar de observarse o alterarse a voluntad del partido político o de la autoridad electoral, pues ello atentaría contra el principio de legalidad a que debe sujetarse el actuar de toda autoridad, máxime que dichas disposiciones son de orden público y su cumplimiento no queda al arbitrio de la autoridad o de partidos políticos o agrupaciones.

En este sentido, si la autoridad fiscalizadora advirtió la existencia de errores en el informe rendido por el Partido Acción Nacional, en relación con la información que se desprende del informe de gastos de campaña que como integrante de una coalición presentó, la obligación de la autoridad era hacer del conocimiento del partido político dicha situación, a efecto de que éste tuviera la oportunidad de realizar las aclaraciones que estimara pertinentes. Consecuentemente, si la autoridad fiscalizadora no le brindó la oportunidad de rectificar los errores, tal y como lo prevé el código electoral, y precisamente le impone una sanción derivada de las irregularidades que advirtió pero no hizo previamente del conocimiento del partido político, dicha autoridad actuó contrariamente al principio de legalidad electoral que debe observar, conforme con lo dispuesto en el artículo 41, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, no escapa a este órgano jurisdiccional el hecho de que la autoridad responsable sostiene en su informe circunstanciado que no solicitó al Partido Acción Nacional que explicara y, en su caso, corrigiera las diferencias contables detectadas entre la contabilidad agregada de la coalición Alianza por el Cambio y los informes anuales presentados por los partidos políticos que la integraron, porque a su juicio constituía una irregularidad que no era susceptible de ser subsanada. Dicha afirmación de la hoy responsable sólo podría ser atendible, en su caso, respecto del informe de gastos de campaña de la citada coalición, toda vez que el mismo ya fue objeto de revisión y emisión del dictamen correspondiente, pero no puede serlo en forma alguna respecto del informe anual de ingresos y egresos que se estaba revisando, toda vez que el mismo era susceptible de ser aclarado o rectificado por el propio partido político.

No es inadvertido para este órgano jurisdiccional que la responsable en su informe circunstanciado invoca la existencia de antecedentes similares, en los que se encontraron irregularidades, consistentes en que cuatro topes de gastos de campaña fueron rebasados y, a pesar de que no se les concedió el plazo para formular correcciones, esta Sala Superior confirmó la sanción que al respecto se le impuso a los partidos políticos que integraron la Coalición Alianza por el Cambio.

Al respecto, se tiene en cuenta que el trece de julio de dos mil uno, esta Sala Superior resolvió los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-017/2001 y SUP-RAP-018/2001, interpuestos por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, sin embargo, respecto de la irregularidad que en concreto refiere la autoridad responsable, y que es la relativa a que cuatro topes de gastos de campaña fueron rebasados, a pesar de que este órgano jurisdiccional efectivamente confirmó la sanción que con tal motivo se les impuso, es necesario aclarar que los citados partidos políticos esgrimieron agravios tendentes a combatir lo que consideraron una incorrecta individualización de la pena que se les impuso, así como a pretender evidenciar una excesiva sanción, contraria al principio de proporcionalidad que en su concepto debió observar la autoridad, sin que en esa ocasión se hubiese esgrimido agravio alguno sobre la presunta violación al derecho a garantía de audiencia administrativa a los entonces recurrentes, por lo que resulta inatendible lo afirmado por la autoridad responsable en su informe circunstanciado.

Finalmente, cabe señalar que la autoridad responsable actuó en forma incongruente respecto de la imposición de sanción a la irregularidad que en este apartado se analiza, toda vez que en la propia resolución impugnada, tocante al Partido Verde Ecologista de México, sí hizo del conocimiento de este último instituto político las irregularidades que encontró respecto de que dicho partido no incluyó en sus registros contables lo relativo a su parte proporcional en relación con la coalición de Alianza por el Cambio, del remanente en bancos, pasivos documentados, ingresos en especie y efectivo por aportaciones de los candidatos a sus campañas, aportaciones en especie recibidas por los candidatos de la coalición, ingresos por colectas en mítines y por rendimientos financieros, lo cual llevó a la misma autoridad fiscalizadora a realizar las observaciones y requerimientos correspondientes, a efecto de que el partido político en cuestión realizara las aclaraciones correspondientes.

En efecto, en la *Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio de 2000*, al analizarse el caso del Partido Verde Ecologista de México, puede apreciarse claramente lo siguiente:

d) en el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

De la revisión efectuada a los ingresos y egresos del Partido Verde Ecologista de México, se desprende que dicho partido incumplió con su obligación de registrar contablemente y reportar en su informe anual ingresos obtenidos y egresos realizados por la coalición Alianza por el Cambio.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido por los artículos 38, párrafo 1, inciso K) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1.9, 2.6 y 3.1 inciso b), 3.9 y 7.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos e instructivos aplicables a los partidos políticos nacionales que formen coaliciones en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, así como lo ordenado por el artículo 1.1 y 11.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuenta y guías contabilizadoras aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales".

Mediante oficio No. STCFRPAP/523/01 de fecha 25 de junio de 2001, esta situación se hizo del conocimiento del Partido Verde Ecologista de México, en virtud de que, efectivamente, la Comisión de Fiscalización detectó que dicho partido no incluyó en sus registros contables lo relativo a su parte proporcional, en relación a la Alianza por el Cambio de remanente en bancos, pasivos documentados, ingresos en especie y efectivo por aportaciones de los candidatos a sus campañas aportaciones en especie recibidas por los candidatos de la coalición, ingresos por colectas en mítines y por rendimientos financieros.

Al respecto, el partido expresó, mediante escrito de fecha 9 de julio de 2001, lo que a continuación se reproduce:

"Gastos de Campaña. En lo referente al registro que corresponde al Partido Verde Ecologista de México de los remanentes y gastos de campaña aclaramos a ustedes lo siguiente:

Se anexa pólizas con el registro que aplica el Partido Verde ya que no contamos con la información completa para realizar un adecuado y correcto registro correspondiente a los gastos de campaña".

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la documentación entonces entregada por el partido sólo correspondió a la aplicación de las transferencias efectuadas del partido a la Coalición Alianza por el Cambio a la cuenta correspondiente a Gastos de Campaña, razón por la cual no se consideró satisfactoria la respuesta del partido.

Posteriormente, y de manera extemporánea, el partido manifestó lo siguiente, en escrito fechado el 10 de julio de 2001:

"En lo que corresponde al Partido Verde Ecologista de México de los remanentes y gastos de campaña se realizaron los registros correspondientes".

De la revisión efectuada por la Comisión de Fiscalización a la documentación presentada por el partido, se concluyó que el partido registró efectivamente varias cifras por concepto de Campañas Federales relativas a los rubros Financiamiento proveniente de Militantes, Financiamiento proveniente de Simpatizantes y Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos, Gastos efectuados en Campañas Políticas, de la Alianza por el Cambio. Sin embargo, como puede verse a fojas 13, 14, 15, 16, 19, 20, 45 y 46 del capítulo correspondiente del Dictamen Consolidado, las cifras finales reportadas por ambos partidos no se corresponden con las que reportaron juntos como Coalición en el Informe de campaña que presentaron ante esta autoridad electoral y que ya fue auditado y dictaminado.

La falta, pues, se acredita, y conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Esta autoridad considera que para determinar la sanción que corresponde a cada uno de los partidos coaligados en la Alianza por el Cambio debe tomarse en cuenta si registró o no lo que el órgano de finanzas de la coalición en su momento determinó. Sin embargo, en la medida en que la agregación de los montos registrados por cada uno de los partidos en sus Informes Anuales no coincide con los montos agregados registrados por ellos, en tanto que coalición en el Informe de Campaña entregado por la Alianza por el Cambio, ambos han de ser sancionados. Del contenido del capítulo correspondiente del Dictamen Consolidado, este Consejo General concluye que el Partido Verde Ecologista de México incumplió, ciertamente, con su obligación de registrar y reportar ingresos y egresos, toda vez que las diferencias encontradas entre la

contabilidad agregada de los partidos que conformaron la coalición Alianza por el Cambio y sus respectivos informes anuales, se debe al hecho de que el Partido Verde Ecologista de México omitió incorporar a su contabilidad y a sus registros los resultados contables de las operaciones de la citada Coalición.

La falta se califica como grave, porque provoca dudas en la autoridad respecto de cuál de los datos informados por los partidos en lo individual y por partidos como Coalición resulta cierto y definitivo. Sin embargo, esta autoridad toma en consideración que ésta es la primera ocasión en que el Partido Verde Ecologista de México incurre en esta irregularidad.

Por otra parte, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer al Partido Verde Ecologista de México una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que fija la sanción en una multa de dos mil trescientos cinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

De lo antes transcrito se evidencia que, a pesar de que en su informe circunstanciado la responsable sostiene que en el caso del Partido Acción Nacional encontró irregularidades que no eran susceptibles de aclaración o corrección alguna, en el caso del Partido Verde Ecologista de México, no obstante referirse al mismo aspecto, la autoridad sí observó el procedimiento precisado al inicio de este apartado.

Conforme con lo antes expuesto, al ser fundado el agravio esgrimido por el partido político actor, debe revocarse la sanción impuesta al Partido Acción Nacional en el inciso d) del punto resolutivo primero, de la *Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio de 2000*, aprobada en su sesión extraordinaria del nueve de agosto de dos mil uno, a efecto de que la autoridad responsable reponga el procedimiento por lo que se refiere exclusivamente a la irregularidad precisada en el inciso d), del considerando 5.1, de la referida resolución impugnada, y respecto del Partido Acción Nacional, haciendo del conocimiento de dicho instituto político las observaciones que sobre el particular se realizaron, brindándole el plazo de diez días a efecto de que presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes, y con ello salvaguardar su garantía de audiencia. Hecho lo anterior, deberá continuar con el correspondiente procedimiento, y en su momento deberá dictar la determinación que conforme a derecho corresponda.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento, además, en los artículos 2, 6, 42, 44, 47 y 48 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 1o. y 10 fracción I del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se

RESUELVE:

PRIMERO. Se revoca la sanción impuesta al Partido Acción Nacional en el inciso d) del punto resolutivo primero, de la *Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio de 2000*, aprobada en su sesión extraordinaria del nueve de agosto de dos mil uno, a efecto de que proceda en los términos de lo expuesto en el apartado C del considerando tercero de esta sentencia.

SEGUNDO. Se confirman las sanciones impuestas al Partido Acción Nacional en los incisos a) y b) del punto resolutivo primero de la *Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, correspondientes, al ejercicio de 2000*, aprobada en su sesión extraordinaria del nueve de agosto de dos mil, en términos de lo expuesto en los apartados A y B del considerando tercero de esta ejecutoria.

Notifíquese **personalmente** al partido político actor y **por oficio** a la autoridad responsable, anexando en este último caso copia certificada de la presente resolución; asimismo, a los demás interesados, a través de los estrados de este Tribunal. Hecho lo anterior, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

El Magistrado Presidente, **José Fernando Ojesto Martínez Porcayo**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Leonel Castillo González**, **José Luis de la Peza**, **Eloy Fuentes Cerda**, **Alfonsina Berta Navarro Hidalgo**, **José de Jesús Orozco Henríquez**, **Mauro Miguel Reyes Zapata**.- Rúbricas.- El Secretario General de Acuerdos, **Flavio Galván Rivera**.- Rúbrica.

EL SUSCRITO, DOCTOR **FLAVIO GALVAN RIVERA**, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, CERTIFICA: Que la presente copia, en setenta fojas debidamente cotejadas y selladas, corresponde íntegramente a la sentencia dictada en sesión pública de resolución celebrada en esta fecha, cuyo original obra en el expedientes SUP-RAP-055/2001 integrado con motivo del Recurso de Apelación promovido por el Partido Acción Nacional, radicado en esta Sala Superior. Lo que certifico, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 201, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en cumplimiento de lo ordenado en la propia sentencia. Doy fe.- México, Distrito Federal, a veinticinco de octubre de dos mil uno.- Conste.- Rúbrica.

SENTENCIA de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación interpuesto por la Agrupación Política Nacional Movimiento Social de los Trabajadores, identificada como SUP-RAP-063/2001.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.- Sala Superior.- Secretaría General de Acuerdos.

RECURSO DE APELACION

SUP-RAP-063/2001

RECURRENTE:

AGRUPACION POLITICA NACIONAL MOVIMIENTO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

MAGISTRADO PONENTE:

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA.

SECRETARIA:

AURORA ROJAS BONILLA.

México, Distrito Federal, a catorce de noviembre del año dos mil uno.

VISTOS para resolver los autos del expediente SUP-RAP-063/2001, relativos al recurso de apelación interpuesto por la Agrupación Política Nacional Movimiento Social de los Trabajadores, por conducto de su representante Héctor Barba García, en contra del acuerdo CG98/2001, emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el veinte de septiembre del año dos mil uno, y

RESULTANDO

PRIMERO. El veinte de septiembre del año dos mil uno, el Consejo General del Instituto Federal Electoral celebró sesión ordinaria, en la que emitió el acuerdo CG98/2001, relacionado con la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos totales de las Agrupaciones Políticas Nacionales. Entre tales agrupaciones se encuentra la recurrente, a la que se impuso como sanción, la cancelación de su registro.

SEGUNDO. El citado acuerdo se notificó a la Agrupación Política Nacional Movimiento Social de los Trabajadores el día veintisiete siguiente.

TERCERO. El primero de octubre del año dos mil uno, la Agrupación Política Nacional Movimiento Social de los Trabajadores, por conducto de Héctor Barba García, interpuso recurso de apelación en contra del acuerdo indicado, específicamente, respecto a la cancelación del registro de la citada agrupación, ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

El Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral tramitó el medio de impugnación de referencia y lo remitió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conjuntamente con las constancias atinentes y el informe circunstanciado de ley.

CUARTO. Por auto de presidencia de quince de octubre del año dos mil uno, el expediente se turnó al magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

QUINTO. Mediante proveído de trece de noviembre del año dos mil uno, el magistrado ponente admitió a trámite el recurso de mérito y una vez integrado el expediente cerró la instrucción, con lo cual el asunto quedó en estado de resolución.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el 40, párrafo 1, inciso b), y 44, párrafo 2, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto por una agrupación política en contra de un acuerdo tomado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

SEGUNDO. El acuerdo impugnado por la recurrente, en la parte conducente, dice:

"...

5.18. Agrupación Política Nacional Movimiento Social de los Trabajadores.

En las conclusiones finales del dictamen consolidado se establece lo siguiente:

'La agrupación política no presentó el informe anual sobre el origen y destino de sus recursos correspondientes al ejercicio del año dos mil, ni los anexos correspondientes a los formatos IA-APN, IA-1-APN, IA-2-APN y IA-3APN.

Tal situación constituye, a juicio de esta comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 35, párrafos 11 y 12, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 11 y 12 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del consejo general para efectos de lo establecido en los artículos 35, párrafo 13, inciso c), y 269, párrafo 2, incisos a), b) y e), y párrafos 3 y 4 en relación con el artículo 67, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales'.

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el dictamen consolidado.

Mediante oficio STCFRPAP/944/00 de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil, se hizo de conocimiento de la agrupación, el plazo para la presentación de su informe anual, que concluía el catorce de mayo del año dos mil uno.

Fuera del plazo señalado, el treinta y uno de mayo del año dos mil uno, la agrupación anunció el envío de documentación contable, entre la cual no se encontraba el informe anual, sino un conjunto de balanzas, de estrados de cuenta bancarios y de conciliaciones bancarias relativas a algunos meses del año dos mil.

Posteriormente, el cuatro de julio del año dos mil uno, Marco Antonio Torres se presentó en las oficinas de la Dirección de Análisis de Informes Anuales y de Campaña, en donde se le dijo que la agrupación no había entregado su informe anual con toda la documentación soporte, Marco Antonio Torres se comprometió a enviarla con posterioridad.

No fue sino hasta el seis de agosto, el día en que concluía el plazo para la revisión de los informes, cuando la agrupación envió un oficio anunciando el reenvío de la documentación entregada el treinta y uno de mayo y, el envío también, de diversa documentación, entre la que no se encontraba el informe anual con todos y cada uno de los documentos que deben acompañarlo, de acuerdo con la normatividad.

Por lo tanto, el mismo seis de agosto del año dos mil uno, y dado que ese mismo día era el último para enviar oficios a las agrupaciones con el fin de hacerles observaciones sobre errores u omisiones técnicas, la autoridad electoral requirió a la agrupación política a que entregara su informe anual, todos los formatos que deben acompañarlo, y toda la documentación comprobatoria de ingresos y egresos correspondientes al año dos mil. Dicha solicitud fue comunicada a la agrupación por la vía del oficio número STCFRPAP/637/01, de fecha seis de agosto del año dos mil uno, y se dio a la agrupación diez días para que alegara lo que a su derecho conviniere. Al término del plazo otorgado. la agrupación omitió dar respuesta al requerimiento formulado. Incluso al momento de la elaboración de este proyecto de resolución la secretaría técnica no ha recibido el informe anual de la

agrupación, ni el resto de la documentación que se le solicitó, por oficio fechado el seis de agosto del año dos mil uno.

Así pues, la omisión se tradujo en la imposibilidad material de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas de someter a la agrupación Movimiento Social de los Trabajadores al ejercicio de rendición de cuentas prescrito en el código electoral federal. En vista de ello, la falta se califica como particularmente grave y conforme a lo establecido en los artículos 35, párrafo 13 inciso c), y 269, párrafo 2, incisos a) b) y e) y párrafos 3 y 4, en relación con el artículo 67, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales amerita la máxima sanción.

Efectivamente, el inciso c) del párrafo 13 del artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, que las agrupaciones políticas nacionales perderán su registro, cuando omitan rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos. Asimismo, el artículo 269, párrafo 2, inciso a), b) y e), del mismo ordenamiento establecen, que se sancionará a los partidos y agrupaciones cuando incumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 38 y demás disposiciones aplicables del código electoral federal, cuando incumplan con las resoluciones o acuerdos, del consejo general, y cuando no presenten los informes anuales en los términos y plazos previstos en la misma ley.

Por otro lado, hay que tener presente que el artículo 269, párrafo 3, establece que la sanción prevista en el inciso e) de su primer párrafo es decir, la sanción consistente en la cancelación del registro como agrupación política nacional, sólo podrá imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea particularmente grave o sistemática y, en la especie, esta autoridad no tiene ninguna duda respecto del carácter particularmente grave de la falta cometida por la agrupación.

Los párrafos 3 y 4 del artículo 269, en relación con el párrafo 2 del artículo 67 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen que la sanción consistente en la pérdida de registro sólo puede imponerse cuando la irregularidad sea grave o sistemática, mientras que el párrafo 4 del citado artículo y el párrafo 2 del artículo 67 expresamente regulan lo concerniente a la pérdida de registro de las agrupaciones políticas nacionales.

Es evidente que la agrupación no ha querido, de ninguna manera, someterse al ejercicio de rendición de cuentas que establece la ley, y tal irresponsabilidad no puede, en modo alguno, y bajo ninguna circunstancia, ser tolerado por la autoridad electoral federal. Así lo establece precisamente el artículo 35, párrafo 13, inciso c), es decir, la ley mandata a la autoridad para que cancele el registro de una agrupación cuando ésta omita presentar su informe anual, esto es, cuando simple y llanamente se niegue a someterse al ejercicio de rendición de cuentas a que debe invariablemente sujetarse. Es posible, ciertamente, que una agrupación sea sancionada por errores u omisiones que se deriven de la revisión de su informe anual. Pero en ese caso, aun cuando se sancionen errores, omisiones y conductas desapegadas a derecho, lo cierto es que la agrupación da muestras de su voluntad, imprescindible en un estado democrático de derecho, de someterse a un ejercicio de rendición de cuentas, y al escrutinio de la autoridad pública, máxime si la agrupación recibe recursos públicos que no pueden otorgarse, sin que exista la correlativa obligación por parte del beneficiario de dar a conocer claramente, y con prueba documental, de modo público y transparente, del uso que hizo de dichos recursos. En la especie, sin embargo, eso no sucedió. La agrupación simple y llanamente, al omitir la entrega de su informe, se negó a someterse a dicho ejercicio, con lo cual de modo plástico se puso al margen del sistema normativo que regula la vida de las agrupaciones políticas nacionales, al ostentar una conducta clara e inequívocamente irresponsable, negándose simple y llanamente a dar cuenta de su conducta en relación con el uso de los recursos públicos que recibió durante el año dos mil.

En el pasado, la agrupación Movimiento Social de los Trabajadores se sometió al ejercicio referido. Ciertamente, en el año dos mil fue sancionado por haber entregado su informe anual fuera de plazo. Efectivamente el plazo para la presentación del informe anual de mil novecientos noventa y nueve vencía el treinta de marzo del año dos mil, y la referida agrupación lo entregó el treinta y uno de marzo del año dos mil, es decir, un día después de

que se le venció el plazo. Aun haciéndolo fuera del plazo, lo cierto es que la agrupación cumplió entonces con su obligación de presentar el informe correspondiente, instrumento *sine qua non* para que esta autoridad esté en aptitud de someter a la agrupación a una revisión de legalidad del origen y destino de los recursos con que cuenta. Con todo, es obvio que la agrupación conocía perfectamente de su obligación de presentar en tiempo y forma su informe anual, junto con toda la documentación requerida clara e inequívocamente por los artículos 11 y 12 del reglamento aplicable. Más aún, en mil novecientos noventa y nueve, la agrupación entregó en tiempo y forma su informe anual respecto del año fiscal mil novecientos noventa y ocho, primero respecto del cual rindió cuentas sobre el origen y destino de sus recursos. De modo pues que esta autoridad no tiene ninguna duda respecto del conocimiento claro, preciso y exacto que tenía la agrupación en relación con la obligación de presentar su informe anual, pues en el pasado cumplió con dicha obligación.

En mérito de lo que antecede, este consejo general llega a la convicción de que debe imponer a la agrupación Movimiento de los Trabajadores, la máxima sanción de que puede ser objeto dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es decir, la cancelación de su registro como agrupación política nacional.

...

Decimoctavo. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.18 de la presente resolución, se impone a la Agrupación Política Nacional Movimiento Social de los Trabajadores la sanción consistente en la cancelación de su registro como agrupación política nacional.

...”.

TERCERO. Los agravios hechos valer por la agrupación política recurrente, son los siguientes:

“Violación de los artículos 1o., 9o., 14, 16, 22 y 41 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 67, párrafo 2, y 270, párrafos 1, 2, 3, 4 y 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a contrario sensu, con los artículos 35, párrafos 10, 11 y 13, inciso c), y 269, párrafo 2, incisos a), b) y e), en relación con los párrafos 3 y 4 de dicho ordenamiento.

a) El acuerdo en impugna resulta violatorio de las garantías constitucionales señaladas, porque impone al Movimiento Social de los Trabajadores una sanción inusitada y trascendental, de las que están prohibidas por el artículo 22 constitucional, en la medida de que le priva de la existencia legal y de la posibilidad de realizar sus objetivos constitucional y legalmente garantizados por los artículos 41 constitucional y 33 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En efecto, al cancelarle su registro sin concederle la garantía de audiencia para darle la oportunidad de la debida defensa legal, el Consejo General del Instituto Federal Electoral incurrió en una sanción desproporcionada y excesiva que no responde a los principios rectores de su existencia, previstos en el artículo 41 constitucional.

b) Para el caso de que no estimara procedente el agravio que antecede, supletoriamente se reclama también la resolución, porque es violatoria de garantías, en la medida de que tratándose de un caso de posible cancelación de registro del Movimiento Social de los Trabajadores, la pena máxima que contempla la ley de la materia, la hoy responsable desde el origen incurrió en grave violación de la garantía de audiencia al no habérsela concedido para defenderse de las graves e infundadas imputaciones que en su contra perpetró la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, respecto de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales, correspondientes al ejercicio del año dos mil, habida cuenta que su dictamen propuso nada menos que el equivalente de la pena de muerte a mi representada, sin antes cumplir con los imperativos que establece el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que por la gravedad de la pena, el Consejo General del Instituto Federal Electoral debió cerciorarse, primero, si efectivamente mi representado se había abstenido de presentar el Informe Anual de Origen y Aplicación de sus Recursos, porque si lo hubiera hecho habría advertido que el Informe Anual relativo al año dos mil, sí

se presentó al instituto, como se acredita con el legajo de pruebas documentales que estoy aportando a ese tribunal, del que se desprende que con fecha dos de enero del año dos mil uno, se aportó un legajo de documentación de gastos de ingresos realizados y con anexo al mismo se entregó la contable correspondiente al ejercicio anual de dos mil, las pólizas de ingresos y de egresos y en éstas las facturas correspondientes y pólizas de cheques, pólizas de diario, auxiliar mayor, estado de resultados y la balanza de comprobación, documentos todos ellos en original, así como estados de cuenta bancarios en copia y el balance general al cierre del treinta y uno de diciembre. Posteriormente, el seis de agosto entregamos toda nuestra documentación técnico-contable que contiene la comprobación sobre el origen y aplicación de los recursos correspondientes al año dos mil.

Es pertinente destacar, que ninguno de esos documentos se tomó en cuenta y menos se valoró por la comisión de marras, porque de haberlo hecho habría tenido que reconocer que el auxiliar mayor (sic) correspondiente al periodo (01/01/00-31/12-00) arroja la información sobre el origen y aplicación de nuestros ingresos y los egresos correspondientes al año en comento.

Con toda esa información y comprobantes fiscales soportados en original, que aportamos al Instituto Federal Electoral en dos ocasiones, se configura a plenitud la existencia de nuestro informe anual, sobre el origen y aplicación de los recursos y lo único que no presentamos por una mera omisión involuntaria, fueron los formatos porque la información sí fue presentada completa.

Entonces, resulta que el hecho sancionado con la pena máxima no fue grave, porque la falta de presentación de los formatos citados es plenamente subsanable y porque no existió intención dolosa ni mala fe por parte de la agrupación del Movimiento Social de los Trabajadores, es decir, que no se operó disposición indebida de dichos recursos, sino que fueron destinados al cumplimiento de parte de sus objetivos constitucionales y legales.

Es evidente que la omisión, que no lo fue al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales sino a lo más al reglamento correspondiente, en el peor de los casos se trata de una omisión aislada, reparable y poco trascendente.

Luego entonces resulta desproporcionada la cancelación del registro decretada a sugerencia de la multicitada comisión que al parecer ha venido actuando en contra nuestra en forma sesgada y con intención de perseguirnos y hacernos el más grave de los daños, no se sabe para satisfacer que tipo de objetivos, o consignas de quién o quiénes.

Con lo anteriormente destacado se acredita, que la resolución impugnada carece de fundamentación y debida (sic) resulta conculcatoria de las garantías establecidas en los dispositivos hechas valer en perjuicio de Movimiento Social de los Trabajadores, por lo que debe ser restituido en su pleno goce mediante la resolución que al efecto dicte ese tribunal, revocando la cancelación de registro decretada.

Suplencia de la deficiencia de la queja.

Por los antecedentes y hechos mencionados por equidad y estricto apego a la justicia, procede y así lo solicitamos que ese tribunal nos conceda el beneficio de la suplencia de la posible deficiencia en la queja".

CUARTO. Previamente al estudio de fondo de la controversia planteada, esta sala superior advierte que en el caso se actualiza de manera notoria, la causa de improcedencia prevista en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 10, en relación con el 40, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por cuanto hace a uno de los actos impugnados, consistente en el dictamen 'consolidado que rinde la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral, el catorce de septiembre del año dos mil, respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales, correspondiente al ejercicio del año dos mil.

En efecto, en conformidad con el precepto anteriormente citado, los medios de impugnación son improcedentes, cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor,

es decir, cuando no se surta alguno de los elementos indispensables para justificar la intervención de los órganos electorales jurisdiccionales, como son, la existencia de una lesión a la esfera jurídica del actor y la idoneidad de la providencia solicitada para privar de efectos el acto o resolución generadores de esa lesión.

En el presente caso no se justifica la intervención de este órgano jurisdiccional, por cuanto hace específicamente a la impugnación del dictamen mencionado, porque dicho acto no es apto por sí solo para afectar la esfera de la agrupación política recurrente, dado que los efectos jurídicos que produce sólo tienen trascendencia en el ámbito interno de un cuerpo administrativo, sin que exista la posibilidad legal de que pudieran establecer una vinculación hacia el ámbito externo.

A este respecto, cabe destacar el contenido de los artículos 49-A, párrafo 1, inciso a), párrafo 2, incisos a) al d), fracciones I al III, inciso e), y 49-B, párrafos 1 y 2, inciso h), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El artículo 49-A, párrafo 1, Inciso a), párrafo 2, incisos a) al d), fracciones I al III, inciso e) señala:

"ARTICULO 49-A.

1. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas deberán presentar ante la comisión del Instituto Federal Electoral a que se refiere el párrafo 6 del artículo anterior, los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

a) Informes anuales:

...

2. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos y las agrupaciones políticas se sujetará a las siguientes reglas:

a) La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas contará con sesenta días para revisar los informes anuales y con ciento veinte días para revisar los informes de campaña presentados por los partidos políticos y, en su caso, por las agrupaciones políticas. Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político y a las agrupaciones políticas, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;

b) Si durante la revisión de los informes la comisión advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, notificará al partido político o a la agrupación política que hubiere incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes;

c) Al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de este párrafo o, en su caso, al concedido para la rectificación de errores u omisiones, **la comisión dispondrá de un plazo de veinte días para elaborar un dictamen consolidado que deberá presentar al Consejo General dentro de los tres días siguientes a su conclusión;**

d) El dictamen deberá contener por lo menos:

I. El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos y las agrupaciones políticas;

II. En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontradas en los mismos; y

III. El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos y las agrupaciones políticas, después de haberles notificado con ese fin.

e) **En el Consejo General se presentará el dictamen y proyecto de resolución que haya formulado la comisión**, procediendo a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes;

f)**...**

El artículo 49-B, párrafos 1 y 2, inciso h), del citado ordenamiento dispone:

"ARTICULO 49-B.

1. Para la fiscalización del manejo de los recursos de los partidos políticos y las agrupaciones políticas, así como la recepción, revisión y dictamen a que se refiere el

artículo anterior, la comisión prevista en el párrafo 6 del artículo 49 de este Código, contará con el apoyo y soporte de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, cuyo titular fungirá como secretario técnico de la propia comisión.

2. La **comisión** tendrá a su cargo, entre otras **atribuciones,** las siguientes:

a)...

h) **Presentar al Consejo General los dictámenes** que formulen respecto de las auditorías y verificaciones practicadas;

i) **…"**.

En la transcripción precedente se puede advertir lo siguiente:

1. La comisión de fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas recibe los informes sobre el origen, monto y aplicación de los ingresos que los partidos y agrupaciones políticas reciban por cualquier modalidad de financiamiento. Dicha comisión lleva a cabo el procedimiento de revisión y, en su caso, propone las sanciones respectivas. Asimismo, dicha autoridad formula el dictamen correspondiente, que podrá ser aprobado o no por la autoridad a quien compete emitir la decisión.

2. El Consejo General del Instituto Federal Electoral resuelve respecto de las irregularidades en que incurra un partido o agrupación política, porque es un órgano de decisión, cuyas resoluciones son las que producen vinculación y, por ende, son las que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas para los gobernados, por ejemplo, para una agrupación política.

En tal virtud, el dictamen formulado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el expediente integrado por virtud de un procedimiento de revisión de informes anuales, no afecta de manera directa e inmediata la esfera jurídica de las partes que intervienen en tal procedimiento, pues la figura del dictamen no está instituida en la ley para ese fin, en tanto que se trata de un simple antecedente de la decisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral, pues es éste el que impone o no las sanciones. Esa decisión constituye la resolución definitiva y es la que finalmente vincula a las partes.

Consecuentemente, como el dictamen que se reclama de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas es un acto que queda sujeto a la decisión final que adopte el Consejo General del Instituto Federal Electoral, es manifiesto que dicho dictamen no reúne uno de los requisitos que prevé el artículo 40, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que el acto o resolución impugnado afecte el interés jurídico del recurrente, para la procedencia del recurso de apelación.

Sirve de orientación a lo anterior la tesis relevante publicada en la Revista *Justicia Electoral*, órgano de difusión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento número 3, páginas 38 y 39. El contenido de la tesis de referencia es el siguiente:

"COMISIONES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. LOS INFORMES Y PROYECTOS DE DICTAMEN Y RESOLUCION QUE PRESENTEN, NO CAUSAN PERJUICIO A LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES. Los informes y proyectos de dictamen y proyecto de resolución que emitan las comisiones de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones políticas y de prerrogativas, partidos políticos y radiodifusión del Instituto Federal Electoral, no tiene fuerza legal suficiente para causar un perjuicio a los partidos políticos nacionales, pues se trata de actos preparatorios y no definitivos para el dictado del acuerdo correspondiente del Consejo General del referido Instituto, que en todo caso constituye la resolución definitiva.

Sala Superior. S3EL 017/99

Recurso de apelación. SUP-RAP-016/97. Partido Revolucionario Institucional. 26 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Antonio Valdivia Hernández.

Recurso de apelación. SUP-RAP-008/99. Partido de la Revolución Democrática. 25 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Fernando Ojesto Martínez Porcayo. Secretario: Miguel Lacroix Macosay".

En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, párrafo 1, inciso b), y 11, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se sobresee en el presente recurso de apelación, por lo que respecta al acto reclamado consistente, en el dictamen consolidado rendido el catorce de septiembre del año dos mil, por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales, correspondiente al ejercicio del año dos mil.

Por último, al no advertir esta sala superior la actualización de causa de improcedencia adicional a la que se actualiza en el caso del dictamen consolidado mencionado se concluye, que es procedente realizar el estudio de fondo del presente asunto, sin considerar los razonamientos vinculados, de manera directa, con el dictamen precisado y que se encuentran expuestos a lo largo del escrito del recurso de apelación.

QUINTO. En atención a que en la demanda del presente recurso la actora hace valer motivos de inconformidad, tanto en el capítulo denominado "hechos" como en el capítulo destinado para exponer los "agravios" tendentes a desvirtuar las consideraciones emitidas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, se analizarán todos los motivos de inconformidad planteados en dicho escrito inicial.

Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia clave S3ELJ02/98 que se encuentra publicada en las páginas 11 y 12 del Suplemento Número 2 de la revista "Justicia Electoral" del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente al año de 1998. El texto y rubro de la jurisprudencia mencionada son del siguiente tenor:

> **"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.** Debe estimarse que los agravios aducidos por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición aplicada.
>
> Sala Superior. S3ELJ 02/98
>
> Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 107/97. Partido Revolucionario Institucional. 9 de octubre de 1997. Unanimidad de votos.
>
> Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 041/98. Partido de la Revolución Democrática. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.
>
> Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-043/98. Partido del Trabajo. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.
>
> TESIS DE JURISPRUDENCIA J.2/98. Tercera Epoca. Sala Superior. Materia Electoral. Aprobada por Unanimidad de votos".

Una vez hecha la explicación anterior cabe señalar, que tanto en el capítulo denominado: "hechos" como en el apartado del capítulo de agravios, la agrupación política nacional Movimiento Social de los Trabajadores formula varios argumentos que admiten ser resumidos en lo siguiente:

1. Infracción al artículo 14 constitucional, porque en concepto de la agrupación actora, la resolución combatida determina la cancelación de su registro, sin que se le hubiera respetado el derecho de audiencia.

2. Ilegalidad de la resolución impugnada, toda vez que para imponer la cancelación del registro, la autoridad electoral debió observar el procedimiento previsto en el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que en la especie no ocurrió.

3. Conculcación a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, en virtud de que en el procedimiento respectivo no se siguió lo previsto en el párrafo 2 del artículo 67 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

4. Indebida valoración de cierto oficio y falta de valoración de otro, conforme con los cuales, según la agrupación recurrente acreditó, que presentó el informe anual de sus ingresos y egresos totales correspondiente al ejercicio del año dos mil.

5. Ilegalidad de la cancelación del registro, porque en concepto de la actora, la única omisión en que incurrió (la no presentación de formatos) es poco trascendente y no es grave; por ende, no merece dicha sanción, puesto que no infringió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino en todo caso, conculcó alguna disposición reglamentaria.

6. Violación al artículo 22 constitucional, porque la sanción impugnada es trascendental e inusitada, al equipararse la cancelación del registro de la agrupación política nacional a la pena de muerte. Además, en concepto de la recurrente, la cancelación de su registro constituye una pena excesiva y desproporcionada.

7. Infracción al artículo 16 constitucional, porque la resolución impugnada carece de fundamentación.

Los argumentos contenidos en el apartado 1, relacionados con la infracción a la garantía de audiencia, son infundados.

Para estar en aptitud de dar respuesta al motivo de impugnación precedente, resulta necesario conocer los términos del desarrollo del procedimiento administrativo, previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El artículo 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone, en lo conducente:

> "Artículo 49-A.
>
> 1. Los partidos políticos y **las agrupaciones políticas** deberán presentar ante la comisión del Instituto Federal Electoral a que se refiere el párrafo 6 del artículo anterior, los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:
>
> **a) informes anuales;**
>
> **I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte,** y;
>
> II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos y agrupaciones políticas hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe.
>
> (**...**)
>
> 2. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos y las agrupaciones políticas se sujetará a las siguientes reglas:
>
> **a)** La Comisión y Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas contarán con sesenta días para revisar los informes anuales y con ciento veinte días para revisar los informes de campaña presentados por los partidos políticos y, en su caso, por las agrupaciones políticas. **Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político y a las agrupaciones políticas, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;**
>
> **b)** Si durante la revisión de los informes la comisión advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, **notificará** al partido político o a la agrupación política que hubiere incurrido en ellos, para que **en un plazo de diez días** contados a partir de dicha notificación, **presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes;**
>
> **c)** Al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de este párrafo o, en su caso, al concedido para la rectificación de errores u omisiones, la comisión dispondrá de un plazo de veinte días para elaborar un dictamen consolidado que deberá presentar al Consejo General dentro de los tres días siguientes a su conclusión;
>
> **d) el dictamen deberá contener** por lo menos:
>
> I. El resultado y las conclusiones de la revisión de informes que hayan presentado los partidos políticos y las agrupaciones políticas;

II. En su caso, **la mención de los errores o irregularidades encontradas en los mismos, y**

III. El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos y las agrupaciones políticas, después de haberles notificado con ese fin;

e) En el Consejo General **se presentará** el dictamen y proyecto de resolución que haya formulado la comisión, **procediendo a imponer**, en su caso, las **sanciones** correspondientes,

f) Los partidos así como las agrupaciones políticas, podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el dictamen y resolución que en su caso se emita por el consejo general, en la forma y términos previstos en la ley de la materia, y

...".

Es admisible considerar que una autoridad respeta la garantía de audiencia, si concurren los siguientes elementos.

1. Un hecho, acto u omisión del que derive la posibilidad o probabilidad de afectación a algún derecho de un gobernado, por parte de una autoridad.

2. El conocimiento fehaciente del gobernado de tal situación, ya sea por disposición legal, por acto específico (notificación) o por cualquier otro medio suficiente y oportuno.

3. El derecho del gobernado de fijar su posición sobre los hechos y el derecho de que se trate, y

4. La Posibilidad de que dicha persona aporte los medios de prueba conducentes en beneficio de sus intereses.

Mientras no se actualice la hipótesis mencionada en el punto número 1, no puede considerarse que una autoridad esté constitucionalmente obligada a llamar a los particulares a participar de cualquier modo, en el desempeño de la función administrativa que compete a la autoridad.

El análisis comparativo del procedimiento administrativo que regula la presentación y revisión de los informes anuales por ingresos y egresos totales de los partidos y agrupaciones políticas, previsto en el artículo transcrito, con los elementos que configuran la garantía en comento, evidencia que dichos elementos sí se localizan a lo largo de las fases que integran tal procedimiento.

En efecto, los partidos políticos deben presentar sus informes anuales, respecto del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como de su empleo y aplicación a más tardar, dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte.

En este estadio no se revela que la autoridad electoral vaya a ejercer necesariamente su facultad sancionadora, dado que puede encontrar, que el informe se rindió totalmente conforme con la normatividad aplicable y que ello origine que, en su oportunidad, se tenga por cumplida cabalmente la obligación del partido o agrupación política, y concluya de ese modo el procedimiento administrativo correspondiente.

La probabilidad o posibilidad del ejercicio de la facultad sancionadora con la cual cuenta la autoridad electoral, que actualiza su obligación de respetar la garantía de audiencia de los partidos y agrupaciones políticas, puede surgir cuando, al analizar los informes y la documentación presentada con ellos, la autoridad considere que existe alguna irregularidad en el pretendido cumplimiento de la obligación. Es por esta razón que el precepto en cita dispone, por un lado, que la comisión de fiscalización tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido o agrupación política, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes, y por otro, que si durante la revisión de los informes, la comisión advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, **notificará** al partido o agrupación política que hubiere incurrido en ellos, para que en un **plazo de diez días contados** a partir del día siguiente de dicha notificación, **presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes.**

Una vez que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas culmina con la revisión de los informes anuales o de campaña, dispone de un plazo de veinte días, para elaborar un dictamen consolidado, el cual debe presentar ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Después de conocer el dictamen y proyecto de resolución formulado por la comisión, el consejo general procede a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes.

En esa virtud, el procedimiento administrativo previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sí garantiza la defensa de los partidos y agrupaciones políticas de manera previa a la imposición de la sanción, pues dicho numeral prevé las siguientes fases:

1 El inicio del procedimiento dentro de un periodo específico.

2. La **notificación** al partido o a la agrupación política, del hecho, acto u omisión del que derive la posibilidad de afectación a algún derecho de aquellos por parte de la autoridad.

3. Un **plazo específico** para que el Instituto político o agrupación en cuestión realice **las aclaraciones o rectificaciones pertinentes**, tales como, fijar su postura sobre los hechos y el derecho de que se trate.

4. La plena posibilidad para **aportar las pruebas** conducentes en beneficio de los intereses del partido o agrupación, durante el transcurso del plazo mencionado en el punto precedente.

Lo anterior tiene apoyo en la tesis relevante S3EL026/98, publicada en las páginas 32 y 34 del Suplemento número 2, correspondiente al año de 1998, de la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, denominada "Justicia Electoral". Dicha tesis tiene el siguiente rubro y texto.

> **"AUDIENCIA. ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA GARANTIA DE, EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTICULO 49-A, PARRAFO 2, DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.** En el procedimiento administrativo que regula la presentación y revisión de los informes anuales y de campaña de los partidos y agrupaciones políticas, previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sí se advierten los elementos que configuran la garantía de audiencia. En efecto, un criterio de aceptación generalizada enseña, que la autoridad respeta dicha garantía si concurren los siguientes elementos: 1. Un hecho, acto u omisión del que derive la posibilidad o probabilidad de afectación a algún derecho de un gobernado, por parte de una autoridad; 2. El conocimiento fehaciente del gobernado de tal situación, ya sea por disposición legal, por acto específico (notificación) o por cualquier otro medio suficiente y oportuno; 3. El derecho del gobernado de fijar su posición sobre los hechos y el derecho de que se trate, y 4. La posibilidad de que dicha persona aporte los medios de prueba conducentes en beneficio de sus intereses. Las particularidades que se asignen a cada uno de estos elementos dependerá de la naturaleza del objeto, circunstancias, entorno, etcétera, en que se emita el acto de autoridad. Conforme con el numeral invocado, los partidos políticos deben presentar sus informes anuales, respecto del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como de su empleo y aplicación, a más tardar, dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte. La posibilidad del ejercicio de la facultad sancionadora con la cual cuenta la autoridad electoral, que actualiza su obligación de respetar la garantía de audiencia de los institutos políticos, puede surgir cuando, al analizar los informes y la documentación presentada con ellos, la autoridad considere que existe alguna irregularidad en el pretendido cumplimiento de la obligación. Es por esta razón que el precepto en cita dispone, por un lado, que la comisión de fiscalización tendrá en todo momento, la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político y a las agrupaciones políticas, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes, y por otro, que si durante la revisión de dichos informes, la comisión advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, notificará al partido o agrupación política en cuestión, para que en un plazo de diez días, contados a partir del siguiente de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. Una vez que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas culmina con la revisión de los informes, procede elaborar dentro del plazo fijado legalmente un dictamen consolidado, así como un proyecto de resolución, en la inteligencia de que en dicho dictamen debe constar, el señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron al efecto los institutos políticos. Después de conocer el contenido del dictamen y proyecto de resolución formulado por la comisión, el Consejo General del Instituto Federal Electoral impondrá, en su caso, las sanciones correspondientes. El análisis comparativo del procedimiento administrativo reseñado con los elementos que configuran la garantía en comento, evidencia que éstos sí se surten durante las fases que integran tal procedimiento. Esto es así, al tenerse presente que el numeral en examen prevé: 1. El inicio del procedimiento dentro de un periodo específico; 2. La notificación al partido o a la agrupación política del hecho, acto u omisión del que

derive la posibilidad de afectación a algún derecho de los propios entes, por parte de la autoridad; 3. Un plazo específico para que el instituto político en cuestión realice las aclaraciones o rectificaciones pertinentes, tales como, fijar su posición sobre los hechos y el derecho de que se trate, y 4. La plena posibilidad para aportar pruebas conducentes en beneficio de sus intereses, durante el transcurso del plazo mencionado en el punto anterior. En esta virtud, el procedimiento administrativo contenido en el artículo 42-A, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sí otorga a los Institutos políticos interesados la oportunidad de plena defensa.

Sala Superior S3EL 026/98

Recurso de apelación. SUP-RAP-015/98. Partido Acción Nacional. 24 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Juan García Orozco.

Recurso de apelación SUP-RAP-017/98. Partido del Trabajo. 24 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: David Solís Pérez".

Al aplicar los anteriores conceptos al presente caso se tiene, que la autoridad electoral cumplió con todas las etapas indicadas en el procedimiento previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de tal manera que se otorgó a la agrupación actora, la oportunidad de plena defensa, como se verá a continuación.

En el acuerdo reclamado constan actos realizados por la autoridad electoral, que no están controvertidos por la agrupación recurrente y que conducen a estimar, el cumplimiento de las cuatro fases que han quedado precisadas en el procedimiento de mérito.

Mediante oficio STCFRPAP/944/00 de veintiuno de noviembre del año dos mil, la autoridad electoral respectiva hizo del conocimiento de la agrupación política Movimiento Social de los Trabajadores, el plazo para la presentación de su informe anual, el cual concluía el catorce de mayo del año dos mil uno.

Fuera de ese plazo señalado, el treinta y uno de mayo del año dos mil uno, la agrupación anunció el envío de documentación contable, entre la cual, según la autoridad electoral, no se encontraba el informe anual, sino un conjunto de balanzas, de estados de cuenta bancarios y de conciliaciones bancarias relativas a algunos meses del año dos mil.

Posteriormente, al decir de la autoridad responsable, el cuatro de julio del año dos mil uno, Marco Antonio Torres se presentó en las oficinas de la Dirección de Análisis de Informes Anuales y de Campaña, en donde se le dijo que la agrupación política Movimiento Social de los Trabajadores no había entregado su informe anual ni toda la documentación comprobatoria. Según dicha responsable, el citado Marco Antonio Torres se comprometió a enviarla con posterioridad.

El seis de agosto siguiente, día en que concluía el plazo para la revisión de los informes, la agrupación actora envió un oficio con el que anunció el reenvío de la documentación entregada el treinta y uno de mayo y, el envío también, de diversa documentación, entre la que, en concepto de la autoridad electoral, no se encontraba el informe anual, los formatos ni todos los documentos que debían acompañarlo, de acuerdo con la normatividad.

Por lo tanto, el propio seis de agosto del año dos mil uno, y dado que ese día era el último para enviar oficios a las agrupaciones con el fin de hacerles observaciones sobre errores u omisiones técnicas, la autoridad electoral requirió a la agrupación política Movimiento Social de los Trabajadores, para que entregara su informe anual, todos los formatos que debían acompañarlo y la documentación comprobatoria de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio del año dos mil. Para el cumplimiento del requerimiento citado, se otorgó a la agrupación, el plazo de diez días para que alegara lo que a su derecho conviniera.

Dicho requerimiento fue comunicado a la agrupación Movimiento Social de los Trabajadores, mediante oficio número STCFRPAP/637/01, de seis de agosto del año dos mil uno.

No obstante lo anterior, la agrupación política Movimiento Social de los Trabajadores no dio respuesta al referido requerimiento, al término del plazo otorgado. Incluso, según la responsable, al momento de la elaboración de la resolución reclamada, la secretaría técnica no había recibido el informe anual de la agrupación, ni el resto de la documentación que se le solicitó, por oficio de seis de agosto del año dos mil uno.

Lo descrito evidencia que el procedimiento de mérito se llevó a cabo conforme con la normatividad indicada, puesto que en dicho procedimiento se siguieron las cuatro etapas que han quedado precisadas,

para garantizar la defensa de la agrupación política nacional actora. En efecto, se cumplió con la señalada en el número 1, relacionada con el inicio del procedimiento dentro de un periodo específico, ya que se empezó el seis de agosto del año dos mil uno, en que la autoridad responsable determinó requerir, la rendición del informe anual a la ahora recurrente, ante la omisión de haberlo presentado en el plazo de ley. Una vez notificada de tal requerimiento, la agrupación política Movimiento Social de los Trabajadores contó con el plazo específico de diez días para fijar su posición sobre los hechos materia del requerimiento, por lo que estuvo en condiciones de realizar las aclaraciones pertinentes y de aportar las pruebas conducentes que le reportaran beneficio. Tal procedimiento concluyó con la imposición de la sanción reclamada.

En efecto, la determinación sobre la formulación de un requerimiento a la agrupación política mencionada implicó, el cumplimiento de la fase uno antes señalada.

Se cumplió con la fase precisada en el número 2, consistente en la notificación de la omisión de la que derivara la posibilidad de afectación de algún derecho de la agrupación por parte de la autoridad. Esto es así, porque la autoridad electoral notificó a la agrupación que, con relación al envío de documentación contable el treinta y uno de mayo del año dos mil uno, faltaba el informe anual por lo que requirió su entrega. No obstante ello, el seis de agosto siguiente, la agrupación envió nuevamente la misma documentación; pero, no el informe anual.

Se cumplió también con la etapa 3, consistente en el otorgamiento de un plazo específico para que la agrupación realizara las aclaraciones y rectificaciones pertinentes, puesto que a partir de la notificación del requerimiento, la agrupación política Movimiento Social de los Trabajadores contó con el plazo diez días para entregar su informe anual con todos los formatos y documentación comprobatoria de ingresos y egresos totales correspondiente al año dos mil. Esto es, dicha agrupación estuvo en condiciones tanto de fijar su posición con relación al requerimiento, por ejemplo, aduciendo que el informe ya había sido entregado, o bien, que cabía la posibilidad de rendir tal informe sin sujeción a determinados formatos, etcétera.

Se cumplió con la fase 4, consistente en la plena posibilidad para aportar las pruebas conducentes en beneficio de los intereses de la agrupación actora, puesto que ésta tenía expedito su derecho para hacerlo, en el citado plazo de diez días, sin embargo, la agrupación recurrente no hizo uso de ese derecho, pues no contestó el requerimiento mencionado ni aportó prueba alguna dentro del plazo concedido para tal efecto ni fuera de dicho plazo.

En tales condiciones, lo primero que se destaca es que en el caso se llevó a cabo el procedimiento previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Dentro de ese procedimiento, aun cuando la agrupación actora estuvo en aptitud de presentar su informe anual de ingresos y egresos totales con los formatos respectivos, debidamente requisitados y la documentación comprobatoria correspondiente, dicha agrupación no lo hizo, lo cual no significa que se haya infringido su derecho de audiencia, pues su renuencia a la rendición del informe anual es imputable a la propia agrupación.

Lo relatado pone de manifiesto que, contrariamente a lo sostenido por la agrupación política Movimiento Social de los Trabajadores, sí se respetó su garantía de audiencia en el procedimiento que se viene comentando y, por ende, la autoridad responsable no infringió el artículo 14 constitucional.

En el apartado 2 localizado al inicio de este considerando, se ubicó el agravio aducido por la promovente en el sentido de que, para determinar la cancelación del registro de la actora, la autoridad responsable debió observar el procedimiento previsto en el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esta argumentación es infundada.

Este órgano jurisdiccional ha sostenido reiteradamente el criterio consistente en que, el procedimiento estatuido en el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales constituye la regla general en materia disciplinaria y de imposición de sanciones y que el diverso procedimiento previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, del propio código, se circunscribe a una materia especializada, inherente a los actos cometidos por los partidos y agrupaciones políticas, en relación con los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, en el que se prevé también, la posibilidad de imponer sanciones, sin tener que acudir al diverso establecido en el numeral invocado en primer término.

Para arribar a la anterior conclusión se toma en cuenta lo siguiente:

El examen de los términos en que se desarrolla el procedimiento administrativo especializado a que se refiere el artículo 49-A, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales evidencia, que éste cuenta con las características particulares siguientes:

a) Un órgano sustanciador: la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, cuya función es realizar la revisión de los informes anuales y de campaña de dichos

partidos y agrupaciones políticas, en los términos precisados en el propio numeral, y la elaboración del dictamen consolidado y proyecto de resolución, el que debe presentarse ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el cual determina, de ser el caso, la imposición de alguna sanción.

b) Finalidad única: la revisión de los mencionados informes que rindan los partidos o agrupaciones políticas, según corresponda.

En cambio, las principales características del procedimiento genérico estatuido en el artículo 270 del código en consulta son:

a) Un órgano sustanciador: la Junta General Ejecutiva, cuyas funciones son integrar el expediente respectivo, mediante la recepción de la queja correspondiente, y la subsecuente sustanciación del procedimiento conforme lo establece el numeral en cita; así como formular el dictamen relativo para ser presentado ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para que éste fije, en su caso, la sanción correspondiente.

b) Un objeto genérico: cualquier irregularidad o infracción administrativa a la normatividad electoral en cuestión, con excepción de la materia inherente al financiamiento. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 40, 82, párrafo 1, incisos t), w) y z); 86, párrafo 1, inciso l); 264, 269 y 270 a 272, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el procedimiento establecido en el artículo 270 puede incoarse por las siguientes razones: la presentación de una queja en contra de las agrupaciones políticas (entre otros sujetos), cuando algún órgano del Instituto Federal Electoral tiene conocimiento de que una agrupación política cometió alguna irregularidad; así como, cuando el consejo general requiere a la junta general ejecutiva para la investigación de las actividades de un partido o agrupación política, previa solicitud de un instituto político. En este procedimiento, la junta general ejecutiva es el órgano competente para integrar el expediente mediante la realización de los siguientes actos: a) emplazamiento al presunto responsable o infractor, b) el otorgamiento de un plazo para que se produzca la contestación y se aporten pruebas, c) la posibilidad de solicitar información y documentación para la integración del expediente; d) la elaboración del dictamen correspondiente para presentarlo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Esta autoridad concluye con dicho procedimiento al imponer, en su caso, las sanciones correspondientes.

En esa virtud, si bien conforme con los numerales 49-A, párrafo 2, y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales existen dos procedimientos administrativos de los que puede derivar la imposición de una sanción a los partidos o agrupaciones políticas, la instauración de tales procedimientos depende exclusivamente de la actualización de los supuestos de hecho, previstos en la norma relativa y no de la voluntad del partido o agrupación política interesada.

Lo anterior tiene apoyo en la tesis relevante SUP060.EL1/98, publicada en la página 83 del Suplemento número 2, correspondiente al año de 1998, de la revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación denominada Justicia Electoral. El rubro y texto de dicha tesis son del siguiente tenor:

> **"SANCIONES A LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS POR INFRACCIONES A LAS REGLAS INHERENTES AL FINANCIAMIENTO.** El procedimiento administrativo previsto en el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales constituye la regla general en materia disciplinaria y de imposición de sanciones, en tanto que el diverso procedimiento previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, del propio código se circunscribe a una materia especializada, inherente a los actos cometidos por los partidos y agrupaciones políticas en relación con los informes sobre el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, por lo que para que la autoridad electoral imponga una sanción a los institutos políticos respecto de irregularidades o infracciones cometidas en esta materia especializada no está obligada a seguir el procedimiento genérico indicado. Esta conclusión se obtiene a partir de los numerales invocados, pues los términos en que se desarrolla el procedimiento administrativo especializado a que se refiere el artículo 49-A, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales evidencian, que éste cuenta con las características particulares siguientes: a) un órgano sustanciador: la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, cuya función es realizar la revisión de los informes anuales y de campaña de dichos institutos políticos en los términos precisados en el propio numeral, así como la elaboración del dictamen consolidado y del proyecto de resolución, que deben presentarse ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el cual determina, de ser el caso, la imposición de alguna sanción b) finalidad única la: revisión de los mencionados informes que rindan los partidos o agrupaciones políticas, según corresponda. En cambio, las principales características del procedimiento genérico estatuido en el artículo 270 del código en consulta son: a) un órgano sustanciador: la Junta General Ejecutiva, cuyas funciones son integrar el expediente

respectivo, mediante la recepción de la queja correspondiente y la subsecuente sustanciación del procedimiento conforme lo establece el numeral en cita; así como formular el dictamen relativo para ser presentado ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para que éste fije, en su caso, la sanción correspondiente. b) un objeto genérico: cualquier irregularidad o infracción administrativa a la normatividad electoral en cuestión exceptuando la materia inherente al financiamiento. En esta virtud, si bien conforme con los numerales 49-A y 270 citados existen dos procedimientos administrativos de los que puede derivar la imposición de una sanción a los partidos y agrupaciones políticas, la pretendida aplicación del procedimiento genérico a que se refiere el artículo 270 se ve excluida si las circunstancias del caso concreto se ubican en los supuestos de hecho que prevé el diverso numeral 49-A, ya que en la técnica de la aplicación de la ley, impera el principio general de derecho de que la norma específica priva sobre la norma general.

Sala Superior. S3EL 060/98

Recurso de apelación. SUP-RAP-017/98. Partido del Trabajo. 24 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: David Solís Pérez".

En el caso a estudio, el motivo por el que fue sancionada la agrupación política nacional Movimiento Social de los Trabajadores consiste, en la falta de presentación del informe anual, respecto del origen y monto de los ingresos que recibió por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, en el ejercicio del año dos mil; por tanto, es indudable que el procedimiento aplicable en el caso concreto era el previsto, específicamente, en el artículo 49-A, párrafo 2, tantas veces citado, pues las anteriores circunstancias se ubican perfectamente en los supuestos fácticos previstos en tal precepto, situación que excluye la pretendida aplicación del procedimiento genérico a que se refiere el artículo 270 del código en consulta, pues en la técnica de la aplicación de la ley, lo específico priva sobre lo genérico, principio general del derecho que se invoca en términos del artículo 2, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por todo lo antes razonado, el argumento en estudio debe desestimarse.

Son infundados los argumentos contenidos en el apartado 3 relacionados con la supuesta infracción a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, al no seguirse en el procedimiento, lo previsto en el artículo 67, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ya quedó demostrado que en el presente caso se respetó la garantía de audiencia a la agrupación actora, en el procedimiento relacionado con la revisión del informe anual de sus ingresos y egresos totales, previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esto se estimó así, porque en dicho procedimiento, se cumplieron con todas y cada una de las etapas previstas para otorgar plena defensa a la actora. Dentro de tales fases se encuentra la determinación de requerimiento para que la agrupación recurrente presentara el informe anual de sus ingresos y egresos totales, correspondiente al ejercicio del año dos mil y los formatos respectivos, conjuntamente con la documentación comprobatoria respectiva. Para tal efecto se concedió a la agrupación el término de diez días. La notificación de tal requerimiento; el transcurso de ese plazo de diez días, sin que ella hubiera presentado el citado informe anual, ni hubiera aducido algo para fijar su posición y presentar pruebas.

Sobre la base anterior cabe considerar que la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 49-A, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es la que la autoridad responsable tenía que respetar y respetó en beneficio de la agrupación recurrente; sin embargo, el artículo 67, párrafo 2, del citado ordenamiento legal no es aplicable al presente caso y, por tanto, la autoridad responsable no estaba obligada a seguir el procedimiento de revisión de informes anuales, conforme a lo preceptuado en el numeral citado en último lugar.

En efecto, el artículo 67, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece lo siguiente:

"Artículo 67.

1**...**

2. En los casos a que se refieren los incisos c) al f), del párrafo 13 del artículo 35 y e) al h) del párrafo 1 del artículo anterior, la resolución del Consejo General del Instituto sobre la pérdida del registro de una agrupación política o de un partido político, según sea el caso, se publicará en el **Diario Oficial de la Federación**. No podrá resolverse sobre la pérdida de registro en los supuestos previstos en los incisos d) y e) del párrafo 13 del artículo 35 y e) y

f), del párrafo 1 del artículo 66, sin que previamente se oiga en defensa a la agrupación política o al partido político interesado.

3 **...**".

Por su parte, los artículos 35, párrafo 13, y 66, párrafo 1, incisos e) y f), del ordenamiento legal en consulta disponen:

"Artículo 35.

13. La agrupación política nacional perderá su registro por las siguientes causas:

a) Cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus miembros;

b) Haberse dado las causas de disolución conforme a sus documentos básicos;

c) Omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos;

d) **Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en este Código;**

e) **Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro, y**

f) Las demás que establezca este Código.

Artículo 66.

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:

e) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro;

f) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto Federal Electoral las obligaciones que le señala este Código;

g) **...**".

De la trascripción realizada, en la parte que interesa, es posible advertir lo siguiente:

Para resolver acerca de la pérdida de registro de las agrupaciones políticas nacionales, en los supuestos señalados en los incisos d) y e) del párrafo 13 del artículo 35, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (por incumplimiento de manera grave con las disposiciones del propio código y con los requisitos necesarios para obtener el registro) es necesario que se oiga previamente en defensa a la agrupación política interesada.

Con relación a la cancelación del registro de la agrupación política nacional, por la omisión de rendir su informe anual (inciso c) del párrafo 13 del artículo 35) el artículo 67, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no hace la misma prevención indicada en el párrafo anterior.

La diferencia que hace el párrafo 2 del artículo 67 antes citado, respecto de los incisos d) y e) del párrafo 13 del artículo 35, con relación al inciso c) del propio precepto, se deriva del hecho de que las agrupaciones políticas pueden cometer infracciones o incumplir con otros artículos de la legislación electoral federal que no guarden relación con el régimen de su financiamiento, materia que se encuentra expresamente regulada y que tiene un procedimiento específico para su desahogo, por lo que resulta claro que en el supuesto de que el incumplimiento o infracción no entrañe relación a alguna de las normas que regulan el financiamiento de la agrupación, debe dársele a ésta, el derecho de manifestar lo que a su derecho convenga en relación con los hechos que la llevaron a situarse en las causas de cancelación de registro, consistentes en: I. El incumplimiento de manera grave a las disposiciones contenidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y II. El incumplimiento de los requisitos necesarios para obtener el registro. Esto es, una vez conocida alguna de estas irregularidades debe procederse conforme con lo dispuesto en el artículo 270 del código de la materia, para así respetar el derecho de audiencia a que se refiere el artículo 67, párrafo 2, del citado ordenamiento.

En cambio, en el caso de la pérdida del registro por omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de los recursos de una agrupación (artículo 35, párrafo 13, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) no se establece algún otro procedimiento para oír en defensa a la agrupación política, en virtud de que dentro del procedimiento a cargo de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, las agrupaciones políticas tienen plenamente salvaguardada su garantía de audiencia, tal como se establece en el artículo 49-A, párrafo 2, de la ley electoral federal, puesto que conforme con dicho procedimiento, tales agrupaciones tienen la facultad de manifestar lo que a su derecho convenga en relación con las observaciones, errores y omisiones que se hacen de su conocimiento dentro del procedimiento de mérito, como ya se dejó determinado.

En tales condiciones, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, en el procedimiento a que se ha hecho mención no cabía la aplicación del artículo 67, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y al haberse seguido dicho procedimiento conforme con el artículo 49-A, párrafo 2, de dicho ordenamiento, se respetó la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional.

Son inatendibles los argumentos contenidos en el apartado 4 anterior, referentes a la indebida valoración de cierto oficio y falta de valoración de otro, con los que según la agrupación política recurrente acredita, que presentó su informe anual sobre ingresos y egresos totales correspondiente al ejercicio del año dos mil.

Por principio es conveniente dejar claro, qué debe entenderse por el citado informe anual, para lo que es necesario transcribir los preceptos legales y reglamentarios que se relacionan con el tema.

El artículo 49-A, párrafo 1, inciso a), fracciones I y II, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece:

"Artículo 49-A.

1. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas deberán presentar ante la comisión del Instituto Federal Electoral a que se refiere el párrafo 6 del artículo anterior, **los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación,** atendiendo a las siguientes reglas:

a) informes anuales:

I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte; y

II. En el informe anual serán **reportados los ingresos totales y gastos ordinarios** que los partidos y las agrupaciones políticas hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe.

b) **...**".

Los artículos 11 y 12 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes, disponen:

"Artículo 11.

11.1. Las agrupaciones políticas deberán entregar a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, a través de su secretaría técnica, **los informes anuales del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación.**

11.2. **Los informes** de ingresos y egresos de las agrupaciones políticas **serán presentados en los formatos** incluidos en el presente reglamento, ajustándose a los formatos **"IA-APN", "IA-1-APN", "IA-2-APN" e "IA-3-APN.**

11.3. Los **informes deberán ser presentados debidamente suscritos** por el o los **responsables del órgano de finanzas de la agrupación.**

Artículo 12.

12.1. Los informes anuales deberán ser presentados a más tardar dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año de ejercicio que se reporte. En ellos **serán reportados los ingresos y egresos totales** que las agrupaciones políticas hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe. Todos los ingresos y los gastos que se reporten en dichos informes deberán estar debidamente registrados en la contabilidad de la agrupación, de conformidad con el catálogo de cuentas incluido en este reglamento.

12.2. Con el propósito de facilitar a las agrupaciones políticas el cumplimiento en tiempo de la presentación de los informes, el secretario técnico de la comisión de fiscalización efectuará el cómputo de los plazos, señalando la fecha de inicio y terminación de los mismos, informará de ello por oficio a las agrupaciones y lo publicará en el **Diario Oficial de la Federación** cuando menos diez días antes de la iniciación del plazo.

12.3. Si al final del ejercicio existiera un pasivo en la contabilidad de la agrupación, éste deberá integrarse detalladamente, con mención de montos, nombres, concepto y fechas. Dichos pasivos deberán estar debidamente registrados y soportados documentalmente y autorizados por los funcionarios facultados para ello en el manual de operaciones del órgano de finanzas de la agrupación.

12.4. **Junto con el informe anual deberá remitirse a la autoridad electoral:**

a) Toda la **documentación comprobatoria** de los ingresos y egresos de la agrupación política en el año de ejercicio, incluyendo las pólizas correspondientes;

b) Los **estados de cuenta bancarios** correspondientes al año de ejercicio de las cuentas señaladas en el presente reglamento, que no hubieren sido remitidos anteriormente a la secretaría técnica de la comisión de fiscalización;

c) Las **balanzas** de comprobación mensuales que no hubieren sido remitidas con anterioridad a la secretaría técnica de la comisión de fiscalización, y la balanza anual;

d) Los **controles de folios** a que se refiere el artículo 3.4;

e) El **control de folios** a que se refiere el artículo 10.6 y la relación a que hace referencia el artículo 10.8; y

f) El **inventario físico** a que se refiere el artículo 20 de este reglamento".

De la transcripción realizada se advierte lo siguiente:

a) Los informes anuales son documentos que deben contener una exposición pormenorizada de los datos sobre el origen y monto que reciban las agrupaciones políticas nacionales por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación. Por tanto, tales informes deben reportar, de manera clara, los ingresos y egresos totales que la agrupación haya tenido y realizado en el ejercicio respectivo. Lo reportado debe estar debidamente registrado en la contabilidad de la agrupación.

b) Dichos informes deben presentarse en los formatos IA-APN, lA-1APN, IA-2APN e lA-3APN, tal y como obran en la parte final del reglamento.

c) Los informes que se presenten deben estar suscritos por el o los responsables del órgano de finanzas de la agrupación.

d) Junto con el informe anual debe remitirse a la autoridad electoral, toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la agrupación política, en el año de ejercicio, tales como pólizas, estados de cuenta bancarios, balanzas, etcétera, de acuerdo con los formatos destinados para ello.

Conforme con lo anterior, sólo podría considerarse que una agrupación política nacional cumple con el requisito de presentar el citado informe anual, si además de la documentación comprobatoria de ingresos y gastos totales del ejercicio respectivo, la agrupación exhibiera, por principio, el formato relativo al informe anual y los demás formatos antes mencionados, debidamente requisitados.

Así, por ejemplo, conforme con el formato denominado "H. Formato "IA-APN"-INFORME ANUAL", el informe que presentara la agrupación debería contener una relación de los datos sobre los siguientes cuatro apartados:

I. Ingresos.

En el apartado I de ingresos debe constar el señalamiento de los conceptos sobre:

1) Saldo inicial.

2) El financiamiento público.

3) El financiamiento por los asociados y simpatizantes.

4) El autofinanciamiento.

5) Los financiamientos por rendimientos financieros.

Asimismo, debe asentarse el total de la suma de las cantidades que se señalen por estos conceptos.

Al respecto se deben anexar en los formatos correspondientes, la información detallada en cada rubro.

II. Egresos

En el apartado II sobre egresos, debe anotarse la relación pormenorizada de los montos correspondientes a:

A) Gastos por actividades ordinarias permanentes.

B) Gastos por actividades específicas (educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, tareas editoriales, y

C) Aportaciones a campañas políticas.

Al final del apartado debe anotarse el total de la suma de estos conceptos y anexarse detalle de tales egresos.

III. El resumen sobre ingresos, egresos y el saldo.

En este apartado deben anotarse las cantidades subtotales respectivas que ya se habían puesto en los conceptos de ingresos, egresos y el saldo. Además, debe anexarse detalle de la integración del saldo final, en los formatos correspondientes.

IV. Responsable de la información.

En este apartado, debe constar la identidad del responsable de la información, es decir, el nombre del titular del órgano responsable del financiamiento de la agrupación, su firma y la fecha en que se realiza el informe. Esto es importante porque debe conocerse la autoría de los datos asentados en el informe.

La satisfacción de estos elementos es necesaria para que se cumpla con el objetivo de la revisión de los informes anuales de las agrupaciones políticas nacionales, pues sólo de esta manera, la autoridad electoral estaría en aptitud de hacer una revisión adecuada de los datos anotados por la agrupación con los comprobantes aportados por la propia agrupación, para llegar a la certeza de que los ingresos totales se ocuparon debidamente y que hay coincidencia entre los ingresos y egresos de la agrupación política nacional. Es decir, la auditoría de los recursos de las agrupaciones políticas que está a cargo de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consiste, en comprobar si lo reportado en el informe anual, esto es, en los citados formatos debidamente suscritos por el o los responsables del órgano de finanzas de la agrupación, o en su caso, lo reportado en la documentación que contenga todos los requisitos de esos formatos, coincide con la contabilidad real de dicha agrupación.

Conforme con lo anterior es posible sostener, que la agrupación política Movimiento Social de los Trabajadores no cumplió con la presentación del informe anual sobre el origen y destino de sus recursos totales correspondientes al ejercicio del año dos mil, ni con los anexos correspondientes a los formatos lA-APN, lA-1-APN, IA-2-APN e lA-3-APN, puesto que la documentación que dicha agrupación dice que presentó mediante oficios el dos de enero y seis de agosto del año dos mil uno, no constituye el informe anual del que se viene hablando, como se verá a continuación.

La documentación recibida por la autoridad electoral, que la agrupación política Movimiento Social de los Trabajadores presentó el dos de enero del año dos mil uno, mediante oficio de veintiocho de diciembre del año dos mil, suscrito por Héctor Barba García no constituye el informe anual sobre el origen y destino de los recursos, totales previstos en los artículos 35, párrafo 11, y 49, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El contenido del oficio de referencia es el siguiente:

"Movimiento Social de los Trabajadores

Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez

Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización

de los Recursos de los Partidos Políticos y

Agrupaciones Políticas

Presente:

Por este conducto, envió a usted anexos a la presente la documentación relativa al informe anual, para la presentación de gastos que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 49-B, párrafo 2, inciso b, para las agrupaciones políticas nacionales con registro en su derecho de gozar de financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales, de educación y capacitación política e investigación socioeconómica política.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.
La fuerza de los trabajadores puede cambiar el rumbo.
México, D F, a 28 de diciembre del 2000.
Rúbricas".

En la parte inferior del sello de recibido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas de Partidos Políticos, puesto en el oficio de referencia aparece manuscrita la leyenda: "Recibí 5 formatos FUC-APN'S con documentación original anexa así como de sobres conteniendo evidencia de sus eventos realizados".

Como se advierte en la trascripción realizada, el oficio a que se refiere la agrupación actora contiene, en primer término, la manifestación referente a la presentación de la documentación relativa al informe anual de gastos, que establece el artículo 49-B, párrafo 2, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; sin embargo, más adelante se hace el señalamiento sobre que el informe se refiere al financiamiento público por actividades específicas, esto es, editoriales, de educación y capacitación política e investigación socioeconómica política.

Los anexos que se acompañan al escrito de referencia se relacionan con erogaciones referentes a actividades específicas, es decir, editoriales, de educación y capacitación política e investigación socioeconómica política, puesto que en ellos se hace referencia a los formatos denominados FUC-APN'S, que son formatos únicos de actualización para la comprobación de gastos directos o indirectos por actividades específicas realizada por las agrupaciones políticas nacionales.

El oficio de mérito ni alguna otra documentación anexa contienen los cuatro apartados del formato relativo al informe anual denominado IA-APN, puesto que en tales documentos no se hace referencia, en detalle, a la totalidad de los ingresos, con la explicación de las cantidades totales recibidas por la agrupación, por financiamiento público, por financiamiento, por los asociados y simpatizantes, al autofinanciamiento, los financiamientos por rendimientos financieros, etcétera. Tampoco consta el desglose de egresos de la actora por actividades ordinarias permanentes ni actividades específicas. En la documentación en cita tampoco aparece el resumen sobre los ingresos y egresos y el saldo de la agrupación política actora y menos consta la identidad del responsable de la información ni su firma ni la fecha en que se emitió tal información. De ahí que no pueda considerarse que tal oficio y la documentación anexa constituyan el informe anual a que se ha hecho referencia.

Por otro lado, la documentación presentada en la fecha indicada se refiere al informe de comprobación de gastos por actividades específicas sujetas a financiamiento público (actividades editoriales, educación y capacitación política e investigación socioeconómica y política) que debía presentarse, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, párrafo 10, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a más tardar en el mes de diciembre de cada año y cuya revisión compete a la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión y no a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones políticas, pues incluso el sello de recibido del oficio de referencia indica, que tal documentación se presentó ante la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y no ante la comisión de fiscalización.

El procedimiento para la comprobación de gastos específicos, distinto al de la presentación y revisión de los informes anuales del origen y aplicación de los recursos, por cualquier modalidad de financiamiento, se encontraba entonces regulado por el Acuerdo CG385/2000 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se Reforma, Modifica y Adiciona el Reglamento para el Financiamiento Público a las Agrupaciones Políticas Nacionales por sus Actividades Editoriales, de Educación y Capacitación Política y de Investigación Socioeconómica y Política, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el seis de diciembre del año dos mil. En dicho acuerdo se especifican los términos y formas en que la citada comprobación de erogaciones debe llevarse a cabo, a partir de la entrega del informe de comprobación de gastos, en diciembre de cada año.

De conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafos 7, 10, 11 y 12, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las agrupaciones políticas nacionales deben cumplir con dos obligaciones distintas:

a) Una se refiere a la presentación del informe del ejercicio anterior sobre el origen y destino de todos los recursos (total de ingresos y total de gastos) que reciban por cualquier modalidad, informe previsto en el párrafo 11 de dicho artículo; y

b) La otra obligación se refiere a la presentación de los comprobantes de los gastos realizados, únicamente, en tres tipos de actividades específicas, es decir, actividades editoriales, de educación y capacitación política e investigación socioeconómica política, para el efecto de que las agrupaciones políticas nacionales puedan ser apoyadas con el financiamiento público, previsto en el párrafo 10 del artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Lo referido en el inciso a) se trata del informe anual sobre los ingresos y gastos de la agrupación política, que debe ser presentado a más tardar dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio de que se trató es decir, el informe abarca el reporte sobre todos los ingresos de la agrupación (por financiamiento público, privado, etcétera) y la totalidad de los egresos, que pueden ser de tres clases: gastos en actividades ordinarias permanentes, aportaciones en campañas políticas y erogaciones por actividades específicas. Por tanto, la relación que debe contener dicho informe debe estar apegada a los ingresos y egresos totales de la agrupación.

En cambio, lo señalado en el inciso b) se refiere a la comprobación de gastos, que versa solamente sobre las erogaciones realizadas por la agrupación política nacional en actividades específicas, es decir, editoriales, educación y capacitación política, e investigación socioeconómica y política, que debe presentarse a más tardar en el mes de diciembre de cada año.

Consecuentemente, la documentación presentada el dos de enero del año dos mil uno, mediante el oficio de referencia era la correspondiente a este último informe, es decir, por actividades específicas; pero no constituye el informe anual sobre el origen y monto de los ingresos que reciban las agrupaciones políticas nacionales por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a que se refiere el artículo 49-A, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ya se dieron las razones por las que se considera, que el oficio de referencia y sus anexos no contienen los requisitos indispensables para que puedan ser considerados como el informe anual, previsto en los artículos 35, párrafo 10, y 49-A, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se dejó determinado también, que dicho oficio se relaciona con el informe por actividades específicas de la agrupación actora y que, por tanto, no constituye el informe anual de ingresos y egresos totales de la agrupación correspondiente al ejercicio del año dos mil.

En tales condiciones se estima que, la autoridad responsable no estaba constreñida a valorar tal oficio, puesto que no formaba parte del procedimiento de revisión de informes anuales, sin embargo, aun cuando lo hubiera hecho, habría considerado legalmente, que la recurrente omitió la presentación de dicho informe anual, por lo expuesto con antelación.

Por otro lado, no puede estimarse que la documentación que la agrupación aportó al Instituto Federal Electoral el día seis de agosto del año dos mil uno, constituye el citado informe anual y que lo único que omitió presentar fueron los formatos respectivos.

Como se advierte en la resolución reclamada y en el oficio presentado ante la autoridad electoral en forma extemporánea, el treinta y uno de mayo del año dos mil uno, la agrupación política envió a las oficinas del presidente de la Comisión de Fiscalización de los Partidos y Agrupaciones Políticas “documentación contable”, entre la cual no se encontraba el informe anual, sino la siguiente documentación:

> “Balanza de comprobación mensual enero-diciembre de 2000.
>
> Balanza General a diciembre de 2000.
>
> Estados de resultados de enero a diciembre de 2000
> Conciliaciones bancarias para el periodo enero-noviembre de 2000, y
>
> Copias de los estados de cuenta de Banamex enero-octubre y diciembre de 2000”.

Mediante el oficio presentado el seis de agosto siguiente, a que hace referencia la recurrente en sus agravios, se hace el reenvío de la documentación mencionada.

Esta documentación de ninguna manera constituye el informe anual, puesto que no incluye el formato IA-APN suscrito por el responsable del órgano de finanzas de la agrupación, en el que declare respecto de la totalidad de sus ingresos y gastos anuales, con la explicación suscinta de cada uno de los conceptos explicados con anterioridad, conforme con los apartados que contiene el propio formato.

La falta de presentación de los formatos IA-APN, IA-1-APN, IA-2-APN e IA-3-APN incluidos en el reglamento correspondiente, debidamente requisitados, equivale a la ausencia del informe anual, puesto que los citados formatos constituyen la base de la contabilidad de los ingresos y gastos de las agrupaciones políticas, que permite a la autoridad electoral realizar la revisión correspondiente.

En efecto, la auditoría de los recursos de las agrupaciones políticas que está a cargo de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consiste en comprobar, si lo reportado en el informe anual, esto es, en los citados formatos debidamente suscritos por el o los responsables del órgano de finanzas de la agrupación coincide con la contabilidad real de dicha agrupación. En consecuencia, la falta de los formatos o de documentos que contengan todos los requisitos de tales formatos, incluida la totalidad de los ingresos y erogaciones de los recursos de la agrupación, impide compulsar la veracidad de los datos presentados en la documentación soporte correspondiente.

De la misma manera, sin la existencia de un documento que contenga la totalidad de la información contable de la agrupación, suscrito por el responsable del órgano de finanzas de la agrupación, la autoridad electoral se encontraba imposibilitada para determinar a los responsables de las eventuales irregularidades en el manejo de los recursos que pudiera detectar, puesto que si no existe el informe suscrito por el funcionario previsto en el reglamento, prácticamente no habría persona alguna responsable de la información presentada, a quien imputarle su autoría.

Por tanto, sin el informe anual debidamente requisitado presentado en los formatos incluidos en el reglamento aplicable suscritos por el responsable correspondiente, era imposible verificar si la documentación comprobatoria aportada por la agrupación política constituye la totalidad de sus ingresos y gastos ya que, era necesaria la información de dichos formatos debidamente requisitados en los que se presentaron los montos globales y finales de la contabilidad de la agrupación política, para que tales montos fueran contrastados con la demás documentación contable, a fin de que la autoridad electoral hubiera podido comprobar la veracidad de lo reportado por la agrupación política actora.

En consecuencia, la documentación contable presentada por la agrupación ante la autoridad electoral, el seis de agosto del año dos mil uno, no constituye el informe anual previsto en el artículo 49-A, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y al haberlo considerado así el consejo general actuó legalmente.

No obsta a esta conclusión la circunstancia de que en el capítulo de pruebas del escrito de apelación, la agrupación política recurrente haya ofrecido la prueba pericial contable a cargo del perito Armando Torres Maya.

Por la manera en que la recurrente formula el cuestionario respectivo se advierte, que la finalidad que ese medio de convicción persigue es constatar, si los documentos que dicha agrupación presentó ante la autoridad responsable constituyen, en su conjunto, el informe anual de ingresos y egresos totales, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil de la agrupación Movimiento Social de los Trabajadores.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 7, en relación con el numeral 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desecha la prueba pericial de mérito en atención a lo siguiente.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral es admisible sostener, que el objeto de la prueba es la verificación de las afirmaciones sobre los hechos aducidos por las partes, que integran la litis.

En el presente caso, lo que la agrupación política pretende probar con la prueba pericial en comento no se relaciona, con la verificación de afirmaciones sobre hechos aducidos por la citada agrupación, sino que lo que se pretende probar con el referido medio de convicción son conceptos definidos en una norma jurídica.

En efecto, lo relativo a la manera en que está constituido el informe anual sobre ingresos y egresos totales de las agrupaciones políticas nacionales está previsto en el artículo 49-A, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 11 y 12 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes. Este acuerdo fue elaborado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en virtud de su facultad reglamentaria prevista en el artículo 82, párrafo 1, incisos i) y z), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En los artículos 49-A, párrafo 1, de la legislación electoral federal y 11 y 12 del reglamento mencionado se establece la manera en que está constituido el referido informe anual sobre ingresos y egresos totales de las agrupaciones políticas. Dichos preceptos disponen, de manera categórica que tal informe deberá presentarse en los formatos previstos en el propio reglamento, debidamente requisitados, formatos que contienen los elementos necesarios para que la autoridad electoral esté en aptitud de hacer una revisión adecuada de los datos anotados en tales formatos, con los comprobantes aportados por la agrupación, para llegar a la certeza de que los ingresos totales se ocuparon debidamente y que hay coincidencia entre los ingresos y egresos de la agrupación política nacional.

Lo anterior pone de manifiesto que en virtud de que lo relativo a la constitución del citado informe anual se relaciona con conceptos definidos en las normas jurídicas ya mencionadas, es fácil llegar a la conclusión de que lo que la agrupación actora pretende demostrar con la prueba pericial de mérito no es una situación de hecho que tenga como objetivo la verificación de afirmaciones, sino una situación de derecho que no está sujeta a prueba, porque como ya se vio está prevista en la ley. De ahí que el medio de convicción en comento deba ser desechado.

Son infundados los argumentos contenidos en el apartado 5 relacionados con que la cancelación del registro es ilegal, porque en concepto de la agrupación actora, la única omisión en que incurrió (la no presentación de formatos) es poco trascendente, no es grave, por lo que no infringió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino en todo caso algún precepto reglamentario.

Ya quedó demostrado que con la falta de presentación de los formatos debidamente requisitados, la actora incumplió la obligación de presentar el informe anual. Luego entonces, sin su presentación la autoridad electoral quedó materialmente imposibilitada para auditar la contabilidad de la agrupación política recurrente.

Esta imposibilidad de auditar la contabilidad de la agrupación actora fue provocada por la conducta omisiva de dicha agrupación al no presentar su informe anual, correspondiente al ejercicio del año dos mil, de tal manera que esa conducta sí es trascendente y grave, pues con ella se produjo que la comisión de fiscalización no cumpliera con su obligación de auditora y, por ende, el Consejo General del Instituto Federal Electoral se vio impedido también a cumplir con lo previsto en el artículo 82, párrafo 1, inciso h), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por otro lado, el incumplimiento de rendir el informe anual es una conducta que infringe el artículo 49-A párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues dicho precepto establece la obligación de las agrupaciones políticas nacionales de presentar dicho informe, ante la comisión de fiscalización.

Debe tenerse en cuenta, que no está controvertido por la recurrente, la existencia de dos circunstancias fundamentales invocadas en la resolución reclamada, como son:

a) El hecho de que la agrupación política recibió recursos públicos, y

b) El pleno conocimiento de dicha agrupación política de que, anualmente, debe rendirse informe sobre todos los ingresos y sobre todos los gastos, que hubiera realizado durante un ejercicio anual.

Consecuentemente, si a pesar de que la agrupación política recurrente tenía pleno conocimiento de que debía cumplir con la obligación de rendir el informe anual mencionado y no lo hizo, es patente que provocó que la autoridad electoral no tuviera pleno conocimiento de todos sus ingresos y de todos sus gastos. La propia autoridad tampoco estuvo en aptitud de determinar, si los recursos públicos de que gozó la agrupación política fueron destinados a los fines previstos en la ley.

Por tanto, la omisión de presentar el informe anual constituye una conducta grave de la agrupación política actora que no sólo infringe disposiciones reglamentarias, sino preceptos de ley que quedaron anotados, contrariamente a lo sostenido por la recurrente.

Los argumentos contenidos en el apartado 6 relacionados con que la sanción impugnada es violatoria del artículo 22 constitucional, porque es trascendental e inusitada, son infundados.

El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en la parte que interesa:

> "Artículo 22.
>
> **Quedan prohibidas** las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas **inusitadas y trascendentales.**
>
> **...**
>
> Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar".

Conforme con el espíritu del artículo 22 constitucional, por pena inusitada debe entenderse aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante, excesiva; porque no corresponde a los fines que persigue la penalidad; porque no llene las características de una eficaz sanción, como las de ser moral, personal, divisible, popular, tranquilizadora, reparable y, en cierta forma ejemplar; o bien aquellas penas que, aun cuando no hayan existido, sean de la misma naturaleza o índole de las citadas.

Una pena es inusitada cuando su imposición no obedece a la aplicación de una norma que la contenga, sino al arbitrio de la autoridad que realiza el acto impositivo.

Una pena es trascendental, cuando puede afectar jurídicamente y de modo directo a terceros extraños no incriminados. Antiguamente, se imponía a los parientes más próximos del delincuente y exclusivamente para castigar a éste en su familia.

Estos conceptos han sido tomados en cuenta en materia administrativa, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se ve en la jurisprudencia y tesis aislada publicadas, la primera, en la página 15 del tomo X, correspondiente a noviembre de 1999 y, la segunda, en la página 26 del tomo 63 de marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación:

> "Novena Epoca
> Instancia: Pleno
> Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: X, Noviembre de 1999
Tesis: P./J. 104/99
Página: 5

ACTIVO DE LAS EMPRESAS. EL ARTICULO 9o. DE LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA EL ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL. El artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** del treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, establece modalidades de orden temporal y personal conforme a las cuales puede ejercerse el derecho de los contribuyentes para acreditar el importe del impuesto reclamado en contra de las cantidades que resulten a su cargo por concepto del impuesto sobre la renta correspondiente a sus actividades empresariales, entre ellas, las que se refieren a la prohibición de transmitirlo a terceros y a su extinción por el mero transcurso de cierto tiempo. Por lo tanto, no cabe admitir que dicha disposición infrinja lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 22 constitucional, puesto que no establecer la aplicación total de los bienes del causante en favor del Estado, no constituye una confiscación; tampoco cabe aceptar que la disposición reclamada instituya una pena inusitada, ya que las modalidades de mérito no se identifican con una sanción penal ni, mucho menos, con aquellas que como las de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos o tormentos, están constitucionalmente prohibidas; por las mismas razones esenciales, tampoco pueden considerarse esas modalidades del tributo referido como **penas trascendentales, llamadas así porque se aplican a personas distintas del condenado.**

Amparo en revisión 3775/89. Lubricantes Osvar, S.A. 14 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.

Amparo en revisión 1174/90. Inmobiliaria Ferno, S.A. 14 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.

Amparo en revisión 3283/90. Grupo Daroel, S.A. de C.V. 14 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.
Amparo en revisión 3722/90. Citlali, S.A. 14 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.
Amparo en revisión 2423/96. Impulsora Corporativa de Inmuebles, S.A. de C.V. 31 de agosto de 1998. Once votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Angel Zelonka Vela.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de octubre en curso, aprobó, con el número 104/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
Octava Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Tomo: 63, Marzo de 1993
Tesis: P. XVII/93
Página: 26
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EN ESE JUICIO. EL ARTICULO 209, FRACCION I Y ULTIMO PARRAFO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1989, NO ESTABLECE UNA PENA INUSITADA Y TRASCENDENTAL DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL. No puede considerarse que el desechamiento de una demanda dentro de un juicio contencioso administrativo por no exhibir las copias necesarias para correr traslado a las partes, constituya una pena o sanción inusitada y trascendental, toda vez que por pena **inusitada,** según la interpretación del artículo 22 constitucional, debe entenderse aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante, excesiva y que no corresponda a los fines que persigue, o bien, aquellas penas o sanciones que sean de la misma naturaleza de las citadas, esto es, una pena es inusitada, cuando su imposición no obedece a la aplicación de una norma que la contenga, sino al arbitrio de la autoridad que realiza el acto impositivo. En cuanto al concepto de **trascendentales,** son aquellas que pueden afectar jurídicamente y de modo directo a terceros extraños no incriminados. En esta tesitura, la sanción establecida en el último párrafo del artículo 209 invocado, no es una pena inusitada, en tanto que su imposición no obedece a una conducta arbitraria del juzgador, sino constituye una consecuencia establecida en la ley que, además

no trasciende a terceros extraños, dado que la sanción que prevé sólo se aplica a la persona que interpone la demanda respectiva.

Amparo directo en revisión 6201/90. Transportes Marítimos México, S.A. 3 de febrero de 1993. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Arturo García Torres.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes nueve de marzo en curso, por unanimidad de dieciocho votos de los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número XVII/93, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausentes José Antonio Llanos Duarte y Noé Castañón León. México Distrito Federal, a diez de marzo de mil novecientos noventa y tres".

Al aplicar los anteriores conceptos al presente caso se tiene lo siguiente:

La agrupación política nacional actora fue sancionada con la cancelación de su registro, sobre la base principal de que omitió presentar el informe anual sobre sus ingresos y egresos totales, correspondiente al ejercicio del año dos mil, informe previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La citada sanción de cancelación de registro está prevista en el artículo 35, párrafo 13, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para el caso de que la agrupación política nacional no rinda el citado informe anual, pues dicho precepto establece:

"Artículo 35.

13. La agrupación política nacional perderá su registro por las siguientes causas:

a) ...

c) Omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos;

...".

En consecuencia, si el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé, de manera específica, la cancelación del registro de la agrupación política nacional, que omita rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos totales, resulta claro que dicha sanción no puede ser considerada como inusitada, puesto que por un lado, su imposición obedeció a la aplicación de la norma que la contiene en la hipótesis que se configuró y no al arbitrio de la autoridad que realizó el acto impositivo. Por otro lado, la cancelación del registro no ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante o excesiva.

Tampoco puede ser considerada como pena inusitada, porque el objetivo que persigue dicha sanción es que la agrupación política nacional destine el financiamiento público que se le otorga para los fines previstos en la ley y que se rinda el informe anual, para que de esta manera la autoridad electoral practique la auditoría sobre los ingresos y egresos de la agrupación política nacional, en el procedimiento previsto en el artículo 49-A párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por otro lado, la cancelación del registro de la agrupación política actora no puede ser considerada como pena trascendental, puesto que no es admisible considerar que la cancelación del registro de la agrupación política nacional Movimiento Social de los Trabajadores, pueda afectar a terceros no involucrados en el procedimiento respectivo, puesto que la citada sanción afecta, únicamente de manera directa, a la agrupación política nacional actora. Por tal razón, la cancelación de registro impugnada no puede estimarse como trascendental.

En tal virtud, contrariamente a lo sostenido por la agrupación política recurrente, la cancelación de su registro no constituye una sanción inusitada ni trascendental y, por ende, no es violatoria del artículo 22 constitucional.

En el apartado 6 en estudio, la agrupación política actora aduce también que es ilegal la cancelación de su registro, porque dicha sanción es excesiva y desproporcionada.

Los argumentos formulados al respecto son infundados.

En efecto, las alegaciones de la recurrente se sustentan en la siguientes premisas falsas:

1. Que los argumentos relacionados con la infracción a la garantía de audiencia resultaron fundados; sin embargo, esto no es así, puesto que como ya se dejó determinado, en el procedimiento de revisión de informes anuales sobre ingresos y egresos totales, previsto en el artículo 49, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se otorgó defensa plena a la agrupación actora, mediante la realización de los estadíos previstos para el procedimiento adecuado y, por ende no se infringió el artículo 14 constitucional.

2. Que los argumentos relativos a que la omisión en que incurrió fue poco trascendente y no infringió algún precepto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales sino que, en todo caso disposiciones reglamentarias, resultaron fundados; sin embargo, esto no es así pues como ya se vio, tales argumentos fueron desestimados, sobre la base principal de que la omisión en que incurrió la agrupación política nacional actora sí se consideró como grave y violatoria de lo dispuesto en el artículo 49, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, debido a que dicha agrupación omitió rendir el informe anual de ingresos y egresos totales, correspondiente al ejercicio del año dos mil, es decir, no rindió un informe defectuoso o con irregularidades sino que como ya quedó demostrado la recurrente omitió rendir dicho informe, lo que conforme con el artículo 35 párrafo 13 inciso c) del citado ordenamiento legal, provocaba la cancelación de su registro.

En tales condiciones, al sustentarse los argumentos de la actora en premisas falsas es evidente que la conclusión a la que pretende llegar carece de validez y es insuficiente para combatir la resolución reclamada. De ahí lo infundado del agravio en estudio.

En el apartado 7 que se ha dejado precisado al inciso del presente considerando, la agrupación política actora alega la falta de fundamentación de la resolución reclamada.

Esta argumentación es infundada, porque se sustenta en la base implícita e inexacta de que los agravios sobre la infracción a la garantía de audiencia y sobre la ilegalidad de la cancelación del registro de la agrupación recurrente fueron acogidos; sin embargo, esto no es así porque ya se dejó demostrado fueron desestimados.

Por tanto, al sustentarse las alegaciones de la actora en una base inexacta resulta claro que, la conclusión a la que pretende llegar no es válida para combatir el acuerdo reclamado en este recurso de apelación.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento además en los artículos 94 y 99 párrafo cuarto, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2, 6, 40, 41, 44, 47, y 48 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se resuelve:

PRIMERO. Se sobresee en el presente recurso de apelación, por cuanto hace al acto reclamado consistente, en el dictamen consolidado rendido el catorce de septiembre del año dos mil, por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales, correspondiente al ejercicio del año dos mil.

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo CG98/2001 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el veinte de septiembre del año dos mil uno, por cuanto hace a la cancelación del registro de la agrupación Movimiento Social de los Trabajadores.

NOTIFIQUESE: personalmente a la Agrupación Política Nacional Movimiento Social de los Trabajadores, por oficio acompañado de copia certificada de la presente ejecutoria, al Consejo General del Instituto Federal Electoral y por estrados a los demás interesados; con apoyo en lo que disponen los artículos 26, 27, 28 y 48, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así lo resolvieron, por **unanimidad** de votos, los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ausencia del Magistrado Eloy Fuentes Cerda, por estar en el desempeño de una comisión oficial, ante el Subsecretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe, en ausencia del Doctor Flavio Galván Rivera, Secretario General de Acuerdos, quien también se encuentra desempeñando una comisión oficial. En su oportunidad, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.- El Presidente de la Sala Superior, Magistrado **José Fernando Ojesto Martínez Porcayo**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Leonel Castillo González**, **José Luis de la Peza**, **Alfonsina Berta Navarro Hidalgo**, **José de Jesús Orozco Henríquez**, **Mauro Miguel Reyes Zapata**.- Rúbricas.- El Subsecretario General de Acuerdos, **Mario Torres López**.- Rúbrica.-

EL SUSCRITO, LICENCIADO **MARIO TORRES LOPEZ**, SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, CERTIFICA: Que la presente copia, en setenta y tres fojas debidamente cotejadas y selladas, corresponde íntegramente a la sentencia dictada en sesión pública de resolución celebrada en esta fecha, cuyo original obra en el expediente SUP-RAP-063/2001 integrado con motivo del Recurso de Apelación promovido por Agrupación Política Nacional, denominada Movimiento Social de los Trabajadores, radicado en ésta Sala Superior. Lo que certifico, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 200 y 202 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en cumplimiento de lo ordenado en la propia sentencia. Doy fe.- México, Distrito Federal, a catorce de noviembre de dos mil uno.- Conste.- Rúbrica.

SENTENCIA de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación interpuesto por la Agrupación Política Nacional Campesinos de México por la Democracia, identificada como SUP-RAP-064-2001.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.- Sala Superior.- Secretaría General de Acuerdos.

RECURSO DE APELACION
EXPEDIENTE: SUP-RAP-064/2001
RECURRENTE AGRUPACION POLITICA NACIONAL "CAMPESINOS DE MEXICO POR LA DEMOCRACIA"
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MAGISTRADO PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZALEZ
SECRETARIO: JOSE HERMINIO SOLIS GARCIA

México, Distrito Federal, a catorce de noviembre de dos mil uno.

VISTOS para resolver los autos que integran el recurso de apelación SUP-RAP-064/2001 interpuesto por la Agrupación Política Nacional "Campesinos de México por la Democracia", en contra de la resolución CG98/2001, emitida el veinte de septiembre del año en curso, por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio del año dos mil, en especial, la parte relativa a dicha agrupación política contenida en el Considerando 5. 9. y punto resolutivo Noveno de la propia resolución, y

RESULTANDO

PRIMERO. Antecedentes. La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 49-A, apartado 2, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el catorce de septiembre del año en curso, presentó para la aprobación del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el Dictamen Consolidado correspondiente a la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos que las Agrupaciones Políticas Nacionales están obligadas a presentar, en términos de lo previsto por los artículos 35, apartado 11, y 49-A, apartado 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SEGUNDO. Acto electoral impugnado. En sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, celebrada el veinte de septiembre siguiente, se aprobó la resolución que, entre otras, determina irregularidades cometidas por la Agrupación Política Nacional "Campesinos de México por la Democracia" y le impone la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que le corresponda por el periodo de un año, aplicable en la asignación inmediata posterior a partir de que la resolución quede firme.

Esta resolución fue notificada a la agrupación política nacional interesada el veintiséis de septiembre del año en curso.

TERCERO. Recurso de apelación. Por escrito presentado, ante la Presidencia del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el primero de octubre del año en curso, la Agrupación Política Nacional "Campesinos de México por la Democracia", por conducto del Presidente del Consejo Nacional de dicha agrupación política, con personería acreditada ante el propio Instituto Federal Electoral, interpuso recurso de apelación, en contra de la resolución señalada en el apartado anterior.

El Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral tramitó el medio de impugnación, rindió el informe circunstanciado, y remitió la documentación atinente a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el oficio número SCG/254/2001, de once de octubre siguiente.

Por proveído de quince de octubre, el Magistrado Presidente de este Tribunal turnó el expediente al magistrado Leonel Castillo González, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por acuerdo de trece de noviembre siguiente, se radicó y admitió a trámite el medio de impugnación hecho valer; y, por considerar que el expediente se encontraba debidamente integrado, se declaró cerrada la instrucción, con lo cual los autos quedaron en estado de dictar sentencia.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186 fracción III inciso a) y 189 fracción I inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 44, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto por una agrupación política nacional con registro, en contra de un acto emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, entre dos procesos electorales.

SEGUNDO. El dictamen consolidado y la resolución impugnada que lo aprueba, en lo que atañe a la agrupación política nacional recurrente, en la parte impugnada a través de este medio de impugnación, señala:

Dictamen Consolidado presentado por la Comisión de Fiscalización.

"4.16 Agrupación Política Nacional Campesinos de México por la Democracia.

El día 22 de agosto de 2001, la Agrupación Política Nacional Campesinos de México por la Democracia, entregó en forma extemporánea, en la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, el Informa Anual sobre el origen y destino de los recursos que recibió durante el ejercicio de 2000, teniendo la obligación de presentarlo el día 14 de mayo del mismo año, por lo que incumplió con lo establecido en el artículo 35, párrafos 11 y 12, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el artículo 12.1 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora aplicable a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus informes, aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión del 17 de diciembre de 1999, vigente a partir del 1 de enero de 2000. Cabe tener presente que el día que concluía la revisión de los informes es el 6 de agosto de 2001.

4.16.1 Inicio de los Trabajos de Revisión

Mediante oficio STCFRPAP/930/00 de fecha 21 de noviembre de 2000, recibido por la agrupación el 24 del mismo mes y año, la Comisión de Fiscalización hizo del conocimiento a la agrupación política lo siguiente.

Que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas determinó que el plazo para la presentación de los Informes Anuales sobre el origen y destino de los recursos que recibieron por cualquier modalidad de financiamiento las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2000, iniciaría el 1 de enero y concluiría el 14 de mayo del 2001; y

La presentación de dicho informe debería efectuarse ante la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafos 11 y 12 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de los artículos 11 y 12 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes.

La agrupación política no atendió a la solicitud de la Comisión de Fiscalización, por lo que en términos de lo establecido en el artículo 34, párrafo 4, en relación con el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se le otorgó un plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación, para que presentara las aclaraciones correspondientes, ante esta Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.

La solicitud antes citada fue comunicada a la agrupación mediante oficio No. STCFRPAP/629/01 de fecha 6 de agosto de 2001, recibido por el Instituto político en la misma fecha.

En consecuencia, la agrupación, presentó en forma extemporánea en la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, escrito de fecha 22 de agosto de 2001 manifestando lo siguiente.

"En respuesta a su atento oficio número STCFRPAP/629/01, proporcionamos a usted la documentación solicitada".

De la revisión a la documentación se observó que consiste en:

1. Balanzas de comprobación mensuales de enero a diciembre de 2000.

2. Auxiliares de ingresos y egresos a último nivel, correspondiente al ejercicio de 2000.

3 Estados de cuenta bancarios y conciliaciones bancarias del ejercicio 2000.

4. Pólizas de diario incluyendo documentación soporte de ejercicio 2000.

5. Control de folios "CF-RAF-APN" y recibos "RAF-APN del ejercicio 2000.

4.16.2 Ingresos

La agrupación reportó un total de ingreso por un monto de $1,069,680.00, que fueron clasificados de la siguiente forma:

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
1. Saldo Inicial		$1,297.00	0.12
2. Financiamiento público		577,853.00	54.02
3. Financiamiento por los asociados y simpatizantes		490,530.00	45.86
Efectivo	$490,530.00		
Especie	0.00		
4. Autofinanciamiento		0.00	0.00
5. Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos		0.00	0.00
Total		$ 1,069,680.00	100.00

Verificación Documental

Se llevó a cabo la verificación documental al 100%, determinándose que ésta cumple con el Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas nacionales, a excepción de lo que a continuación se señala:

La agrupación, no proporcionó todos los estados de cuenta bancarios de la cuenta de cheques que a continuación se señala.

BANCO	CUENTA	PERIODO
CITIBANK MEXICO, S.A.	(1)*	FEBRERO, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2000

Por cuestiones de seguridad se omite el número de cuenta.

Por lo antes expuesto la agrupación incumplió con lo dispuesto en el artículo 12.4, inciso b) del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas, que a la letra dice:

"Junto con el informe anual deberá remitirse a la autoridad electoral":

"...b) Los estados de cuenta bancarios correspondientes al año de ejercicio de las cuentas señaladas en el presente Reglamento, que no hubieren sido remitidas anteriormente a la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización".

En términos de los artículos 49-A, párrafo 2, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 14.1. del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas nacionales, la Comisión de Fiscalización contó con un plazo de 60 días para realizar la revisión de los informes anuales presentados por las agrupaciones políticas, sin embargo, ya que la Agrupación Política Nacional Campesinos de México por la Democracia no presentó el informe "IA-APN" y sus respectivos anexos, así como toda la documentación, conforme a lo establecido en los artículos 11 y 12 del Reglamento citado, no fue posible llevar a cabo la revisión correspondiente en el periodo establecido.

Considerando que la agrupación presentó documentación, en forma extemporánea, fuera del plazo con el que contaba la Comisión de Fiscalización para realizar la revisión de los informes anuales (6 de agosto de 2001), estas irregularidades ya no fueron hechas de conocimiento al Instituto Político.

4.16.3 Egresos

La agrupación reportó un total de egresos por un monto de $1'017,910.00, que fueron clasificados de la siguiente forma.

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
A. Gastos en Actividades Ordinarias Permanentes		$5.862.00	0.58
B. Gastos por Actividades Específicas		1,012,048.00	99.42
Tareas Editoriales	$712,048.00		
Educación y Capacitación Política	0.00		
Investigación Socioeconómica y política	300,000.00		
C. Aportaciones a Campañas Políticas		0.00	0.00
Total		**$ 1,017,910.00**	**100.00**

Verificación Documental

Se llevó a cabo la verificación documental al 100%, determinándose que ésta cumple con lo estipulado en el Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas nacionales, a excepción de lo que se señala a continuación.

Gastos de Operación Ordinaria

En la subcuenta Eventos Compartidos, se localizó una póliza que carece, de documentación soporte. A continuación se detalla la póliza en comento:

REFERENCIA CONCEPTO DE LA POLIZA	IMPORTE
PD-1/10-00 Cooperación al Consejo Nal. de APN's	$5,000.00

Por lo antes expuesto, la agrupación incumplió con lo establecido en los artículos 7.1 y 14.2 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas que a la letra se transcriben:

Artículo 7.1

*"*Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación que expida a nombre de la agrupación política la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables...*"*

Artículo 14.2

"Durante el periodo de revisión de los informes, las agrupaciones políticas tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros".

Investigación socioeconómica y Política

Se localizó el registro de una póliza que tiene soporte documental en copia fotostática. A continuación se señala la póliza observada:

REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
PD-/008-00	Factura No. 111 de Rolando Hernández Ramos	$300,000.00

Por lo antes expuesto, la agrupación incumplió con lo estipulado en el citado artículo 14.2 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas.

Tareas Editoriales

Se localizó el registro de pólizas que carecen de documentación soporte. A continuación se detallan las pólizas observadas:

SUBCUENTA	REFERENCIA	IMPORTE
Periódico Mensual	PD 03/01-00	$ 22,425.00
Periódico Mensual	PD 01/02-00	$ 22,425.00
Periódico Mensual	PD 01/03/00	$ 22,425.00
Periódico Mensual	PD 04/04-00	$ 22,425.00
Periódico Mensual	PD 01/05-00	$ 22,425.00
Periódico Mensual	PD 04/06-00	$ 22,425.00
Periódico Mensual	PD 04/07-00	$ 22,425.00
Periódico Mensual	PD 12/08-00	$ 22,425.00
Periódico Mensual	PD 12/09-00	$ 22,425.00
Periódico Mensual	PD 02/10-00	$ 22,425.00
Periódico Mensual	PD 02/11-00	$ 22,425.00
Periódico Mensual	PD 01/12-00	$ 22,425.00
Revista Trimestral	PD 01/03-00	$89,700.00
Revista Trimestral	PD 04/06-00	$89,700.00
Revista Trimestral	PD 12/06-00	$89,700.00
Revista Trimestral	PD 01/12-00	$89,700.00
Total		**$627,900.00**

Por lo antes expuesto la agrupación incumplió con lo estipulado en los artículos 7.1 y 14.2 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas.

Asimismo, no presentó el Kárdex con sus respectivas notas de entradas y salidas, por lo que la agrupación incumplió con lo establecido en el artículo 9.2 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas, que a la letra se transcribe:

*"*Para efectos de las tareas editoriales, se utilizará la cuenta 'gastos por amortizar' como cuenta de almacén, abriendo las subcuentas que requieran. Tanto en estas cuentas, como en las correspondientes a materiales y suministros, en caso de que los bienes sean adquiridos anticipadamente y sean susceptibles de inventariarse, deberán llevarse un control de notas de entradas y salidas de almacén debidamente foliadas y autorizadas, señalando su origen y destino, así como quien entrega o recibe. Se debe llevar un control físico a través de Cardes de almacén...*"*.

De conformidad a lo señalado en el punto Cuarto del acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre el Financiamiento Público a las agrupaciones políticas nacionales para el apoyo de sus Actividades Editoriales, de Educación y Capacitación Política de Investigación Socioeconómica y Política, aprobado el día 6 de abril del año en curso y publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el día 23 del mismo mes y año, que a la letra señala:

"CUARTO. Se previene a las agrupaciones políticas nacionales que no entregaron copias de cheques por diversos motivos, pero las solicitaron a las Instituciones bancarias, para que entreguen dichas copias a más tardar el 31 de julio del presente año, de lo contrario se tendrá como no acreditado el gasto y se harán los ajustes pertinentes al financiamiento público en la ministración de agosto*"*.

Los auditores asignados, procedieron a verificar que la agrupación hubiera cumplido con la entrega de las copias de todos los cheques; sin embargo, de la revisión efectuada se observó que el Instituto Político no proporcionó copia de los cheques por un monto de $115,000.00. A continuación se detallan los cheques en comento:

Actividades Editoriales Cuenta Citibank México S.A. No (*)		
REFERENCIA	**NUMERO DE CHEQUE**	**IMPORTE**
PD-02/06-00	019	$100,000.00

PD-10/09-00	034	15,000.00
Total		**$115,000.00**

(*) Por cuestiones de seguridad se omite el número de cuenta.

Aun cuando se verificó su cobro en el estado de cuenta bancario correspondiente, se considera que la agrupación incumplió con lo establecido en el punto cuarto del acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral antes mencionado.

En términos de los artículos 49-A, párrafo 2, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 14.1 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas nacionales, la Comisión de Fiscalización contó con un plazo de 60 días para realizar la revisión de los informes anuales presentados por las agrupaciones políticas, sin embargo, ya que la Agrupación Política Nacional Campesinos de México por la Democracia no presentó el informe "IA-APN" y sus respectivos anexos, así como toda la documentación, conforme a lo establecido en los artículos 11 y 12 del reglamento citado, no fue posible llevar a cabo la revisión correspondiente en el periodo establecido.

Considerando que la agrupación presentó documentación, en forma extemporánea, fuera del plazo con el que contaba la Comisión de Fiscalización para realizar la revisión de los informes anuales (6 de agosto de 2001), estas irregularidades ya no fueron hechas de conocimiento al instituto político.

Revisión a proveedores.

Se efectuó la verificación de las operaciones de compraventa de bienes realizados con los siguientes prestadores de servicios:

NOMBRE	OFICIO No.	FACTURA	IMPORTE	FECHA DE CONFIRMACION DE OPERACIONES
ROLANDO HERNANDEZ RAMOS	STCFRPAP/275/01	1	$300,000.00	07-JUNIO-01
ALFREDO DE LA ROSA OLGUIN	STCFRPAPI276I01	6	627,900.00	20-AGO-01

Como se puede observar, los proveedores antes mencionados, confirmaron haber efectuado las operaciones referidas con la agrupación política.

Conclusiones

La agrupación política, mediante escrito de fecha 22 de agosto de 2001, entregó en forma extemporánea su informe anual, teniendo la obligación de presentarlo el 14 de mayo del año en curso, incumpliendo con lo establecido en el artículo 35, párrafos 11 y 12, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 12.1 del Reglamento, que fue revisado en una primera instancia para detectar errores y omisiones generales. Cabe aclarar que el día 6 de agosto, se venció el plazo para la revisión de los informes.

Por lo que se refiere a los ingresos, la agrupación cumple con el reglamento que establece los lineamientos para tal fin, siendo las cifras finales de su Informe Anual de 2000, las siguientes:

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
1. Saldo Inicial		$1,297.00	0.12
2 Financiamiento Público		577,853.00	54.02
3. Financiamiento por los asociados y simpatizantes		490,530.00	45.86
Efectivo	490,530.00		
Especie	0.00		
4. Autofinanciamiento		0.00	0.00
5. Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos		0.00	0.00
Total		**$1,069,680.00**	**100.00**

Sin embargo, no quedó subsanado lo siguiente:

La agrupación, no proporcionó los estados de cuenta bancarios de la cuenta de cheques por los meses de febrero, octubre y diciembre, por lo que incumplió con lo dispuesto en el artículo 12.4, inciso b) del reglamento.

A continuación se mencionan el número de recibos impresos así como el último folio utilizado de los formatos Control de Folios "CF-RAF-APN":

RECIBOS IMPRESOS	FOLIOS UTILIZADOS	
	INICIAL	FINAL
100	002	014

Por lo que se refiere a los Egresos, la agrupación cumple con el reglamento que establece los lineamientos tal fin, siendo las cifras finales de su Informe Anual de 2000, las siguientes:

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
A) Gastos en Actividades Ordinarias Permanentes		$5,862.00	0.58
B) Gastos por Actividades Específicas		1,012.048.00	99.42
Tareas Editoriales	$712,048.00		
Educación y capacitación política	0.00		
Investigación Socioeconómica y política	300,000.00		
C) Aportaciones a Campañas Políticas		0.00	0.00
Total		**$1,017,910.00**	**100.00**

Sin embargo, no quedó subsanado lo siguiente:

En la cuenta Gastos de Operación Ordinaria, subcuenta Eventos Compartidos, se localizó una póliza que carece de documentación soporte por un importe de $5,000.00, por lo que la agrupación incumplió con lo establecido en los artículos 7.1 y 14.2 del reglamento.

En la cuenta Gastos en Investigación Socioeconómica y Política, se localizó el registro de una póliza en la que se anexa como documentación soporte fotocopia de la factura por un importe de $300,000.00, por lo que la agrupación incumplió con lo establecido en el artículo 14.2 del reglamento.

En la cuenta Gastos en Tareas Editoriales, se localizó el registro de pólizas de egresos que carecen de documentación soporte por un importe de $627,900.00, por lo que la agrupación incumplió con lo establecido en los artículos 7.1 y 14.2 del reglamento que establece los lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas.

Adicionalmente, no presentó el kárdex con sus respectivas notas de entradas y salidas, por lo que la agrupación incumplió con lo establecido en el artículo 9.2 del reglamento.

La agrupación no entregó copia de dos cheques por un importe de $115,000.00, por lo que incumplió con lo establecido en el punto cuarto del acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral de lo cual se informó a la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión.

En el rubro de Caja y Bancos, la agrupación reportó en sus registros contables al 31 de diciembre de 2000, un monto de $2,417.00, mismo que será reportado como Saldo Inicial en el próximo ejercicio. Dicho saldo se integra como a continuación se señala:

CONCEPTO	IMPORTE
Caja	$0.00
Bancos	2,417.00
Total	**$2,417.00**

Al reportar la agrupación política ingresos por un importe total de $1,069,680.00 y egresos por un monto de $1'017,910.00, su saldo final importa una cantidad de $51,770.00.

5.3.16 Agrupación Política Nacional Campesinos de México por la Democracia.

La agrupación política presentó su informe anual fuera del plazo legal para la revisión de los mismos.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 34, párrafo 4, 35, párrafo 11 y 12 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11.1 y 12.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en los artículos 269, párrafo 2, incisos a), b) y e) y párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Resolución impugnada.

"5.9. Agrupación Política Nacional Campesinos de México por la Democracia.

En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

La agrupación política presentó su informe anual fuera del plazo legal para la revisión de los mismos.

Tal situación constituye, a juicio de esta comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 34, párrafo 4, 35, párrafos 11 y 12 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11.1 y 12.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en los artículos 269, párrafo 2, incisos a), b) y e) y párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el dictamen consolidado.

Mediante oficio STCFRPAP/930/00 de fecha 21 de noviembre de 2000, se hizo de conocimiento de la agrupación el plazo para la presentación de su informe anual, que concluía el 14 de mayo de 2001.

Fuera del plazo señalado, el 22 de agosto de 2001 presentó su informe anual.

Cabe señalar que la agrupación política no sólo entregó su Informe Anual fuera del plazo establecido para hacerlo, sino incluso fuera del plazo de revisión de los informes de las agrupaciones políticas nacionales, pues éste venció el 6 de agosto de 2001. Ese día, el 6 de agosto de 2001, era el último para que la Comisión de Fiscalización enviara los últimos oficios de garantía de audiencia a las agrupaciones políticas nacionales, una vez que de la revisión de los informes presentados en tiempo y forma se llega a la conclusión de que ha lugar a que el partido aclare errores y omisiones técnicas. Por lo tanto, aun cuando la agrupación política hizo entrega de su informe, la fecha en que lo hizo produjo como consecuencia inevitable que la Comisión de Fiscalización estuviese en imposibilidad material de realizar una revisión profunda y dar, una vez concluida, audiencia a la agrupación para que alegara lo que a su derecho conviniese.

Así pues, se insiste, la omisión se tradujo en la imposibilidad material de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas de someter a la agrupación Campesinos de México por la Democracia al ejercicio de rendición de cuentas prescrito en el Código Electoral Federal. En vista de ello, la falta se califica como particularmente grave, y conforme a lo establecido en los artículos 269, párrafo 2, incisos a), b) y e), y párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales amerita la máxima sanción.

Efectivamente, el artículo 269, párrafo 2, incisos a), b) y e), del mismo ordenamiento establecen que se sancionará a los partidos y agrupaciones cuando incumplan con las obligaciones señaladas en el articulo 38 y demás disposiciones aplicables del Código Electoral Federal, cuando incumplan con las resoluciones o acuerdos del Consejo General, y cuando no presenten los informes anuales en los términos y plazos previstos en la misma ley. Ciertamente, no estamos en la situación en la que la agrupación política no hace entrega de su informe. Sin embargo, la entrega es tan extraordinariamente tardía que deja a la autoridad en incapacidad total para realizar un ejercicio

completo de revisión y de comunicación con la agrupación respecto de sus errores y omisiones técnicas.

En vista de ello, la falta se califica como particularmente grave, y conforme a lo establecido en los artículos 269, párrafo 2, incisos a), b y e) y párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Por otro lado, hay que tener presente que el artículo 269, párrafo 3, establece que la sanción prevista en el inciso c) de su primer párrafo, es decir, la sanción consistente en la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que le corresponda como agrupación política nacional, sólo podrá imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea particularmente grave o sistemática, y en la especie esta autoridad no tiene ninguna duda respecto del carácter particularmente grave de la falta cometida por la agrupación.

Es evidente que la agrupación no ha querido, de ninguna manera, someterse al ejercicio de rendición de cuentas que establece la ley, y tal irresponsabilidad no puede, en modo alguno, y bajo ninguna circunstancia, ser tolerado por la autoridad electoral federal. Es posible, ciertamente, que una agrupación sea sancionada por errores u omisiones que se deriven de la revisión de su informe anual. Pero en ese caso, aun cuando se sancionen errores, omisiones y conductas desapegadas a derecho, lo cierto es que la agrupación da muestras de una voluntad, imprescindible en un estado democrático de derecho, de someterse a un ejercicio de rendición de cuentas, de someterse al escrutinio de la autoridad pública, máxime si la agrupación recibe recursos públicos que no pueden otorgarse sin que exista la correlativa obligación por parte del beneficiario de dar a conocer claramente, y con prueba documental, de modo público y transparente, del uso que hizo de dichos recursos. En la especie, sin embargo, eso no sucedió, y la agrupación simple y llanamente, al omitir la entrega de su informe en los plazos en que legal y razonablemente podía realizarse una revisión, se negó a someterse a dicho ejercicio, con lo cual de modo plástico (sic) se puso al margen del sistema normativo que regula la vida de las agrupaciones políticas nacionales, al ostentar una conducta clara e inequívocamente irresponsable.

En el pasado, la agrupación Campesinos de México por la Democracia se sometió al ejercicio referido. Tanto en 1999 respecto del año fiscal 1998, como en 2000 respecto del año fiscal 1999, la agrupación entregó su informe en tiempo. Por lo tanto, es obvio que la agrupación conocía perfectamente de su obligación de presentar en tiempo y forma su informe anual, junto con toda la documentación requerida clara e inequívocamente por los artículos 11 y 12 del reglamento aplicable. De modo pues que esta autoridad no tiene ninguna duda respecto del conocimiento claro, preciso y exacto que tenía la agrupación en relación a su obligación de presentar su informe anual en el plazo correspondiente, pues en el pasado cumplió con dicha obligación.

Es cierto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido en el pasado que aun cuando una agrupación entregue tarde su informe anual, la autoridad tiene la obligación de revisarlo y entrar al fondo del análisis y la auditoría. Eso precisamente hizo la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. Eso queda de manifiesto en el dictamen consolidado, en el capítulo correspondiente. Sin embargo, a la Comisión de Fiscalización le fue imposible hacer un ejercicio completo de revisión, pues para realizarlo es imprescindible entrar en contacto con la agrupación y llevar a cabo un intercambio de oficios que, en términos de ley, permite a la autoridad dar a conocer sus observaciones a la agrupación política nacional respecto de errores u omisiones técnicas, y a ésta presentar las pruebas que considere pertinentes y alegar todo lo que a su derecho convenga. La norma es muy clara en este sentido. El inciso a) del párrafo 2 del artículo 49-A del Código Electoral Federal establece con toda claridad que la Comisión de Fiscalización contará con 60 días para revisar los informes anuales. Este Consejo General interpreta que es en esos 60 días cuando la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas está obligada a revisar los informes de las agrupaciones, aun cuando dichos informes le hayan sido entregados fuera del plazo para su recepción. La autoridad electoral federal puede sancionar el arribo tardío del informe, pero ello no significa que no esté obligada a auditar su contenido y a entrar en contacto con la agrupación para darle a conocer los errores u omisiones técnicas en que incurrió, de modo que esté en posibilidad de completar el ejercicio fiscalizador y de dar cuenta en el dictamen correspondiente del resultado de la revisión, de hacer mención de los errores o irregularidades encontradas en los informes, y de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones después de haberles notificado con ese fin, tal como literalmente establece el artículo 49-A, párrafo 2, inciso d), numeral III. Es pues en el marco de esos 60 días cuando la Comisión de Fiscalización está obligada a realizar su revisión y sus tareas

auditoras, independientemente del día, dentro de ese plazo de 60 días, en que la agrupación hizo entrega de su informe. En el marco pues de esos 60 días, a la agrupación que entrega tardíamente su informe se le sanciona, pero también se le audita porque se está en los plazos en que la autoridad se encuentra realizando sus auditorías.

Sin embargo, esta autoridad electoral entiende también que el artículo 49-A, párrafo 2, inciso c), establece que concluido el plazo de 60 días en que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas revisa los informes anuales, dicha "Comisión dispondrá de un plazo de veinte días para elaborar un dictamen consolidado que deberá presentar al Consejo General dentro de los tres días siguientes a su conclusión". Por lo tanto, en el plazo señalado por el artículo 49-A, párrafo 2, inciso c), no pueden llevarse a cabo actividades propias del plazo señalado en el artículo 49-A, párrafo 2, inciso a). En ese sentido el inciso c) es muy claro cuando inicia su redacción estableciendo: "Al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de este párrafo, o en su caso, al concedido para rectificaciones de errores u omisiones, la comisión dispondrá de un plazo de veinte días...". Debe tenerse presente que la comisión concluyó el plazo señalado en el inciso a) el 6 de agosto de 2001. El mismo 6 de agosto de 2001 se enviaron los últimos oficios que advertían errores u omisiones técnicas. Por lo tanto el plazo "concedido para rectificaciones de errores u omisiones técnicas" concluyó, en términos del inciso b) del multicitado párrafo, 10 días hábiles después del 6 de agosto, es decir, el lunes 20 de agosto. Por lo tanto, en el momento en que el día 22 de agosto la agrupación presenta su Informe Anual, ya es jurídicamente imposible iniciar y completar el ejercicio fiscalizador, ya que la Comisión estaba ya en el plazo señalado en el inciso c), y en ese plazo resultaba claramente desapegado a derecho regresar a realizar actividades propias del plazo señalado en el inciso a). Es así, pues, que la falta se acredita. Al respecto es importante tener presente el siguiente criterio establecido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-026/2000 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

"El procedimiento de revisión de los informes anuales del origen y destino de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, se encuentra detallado con precisión, de tal forma que, como ha quedado señalado, los plazos establecidos son ciertos y determinados, sin que puedan ser modificados a voluntad de la autoridad o de los partidos políticos.

Así pues, el periodo de revisión del informe, a cargo de la Comisión de Fiscalización, es de sesenta días, lapso en el cual dicha comisión puede hacer del conocimiento de los partidos políticos la existencia de errores u omisiones técnicas, y realizar la notificación correspondiente a los mismos, es decir, puede ser desde el primer día hasta el último de los que comprende dicho plazo....

En efecto... el Consejo General del Instituto Federal Electoral no estaba obligado a tener en cuenta los estados de cuenta bancarios presentados el treinta de mayo de dos mil, es decir, un día antes de la realización de la sesión en que se puso a su consideración el dictamen consolidado y aprobación de la resolución correspondiente, toda vez que la sanción deriva directamente de la omisión de haber presentado la documentación requerida en los plazos legalmente previstos y no tanto del análisis de la misma, pues evidentemente éste no pudo realizarse".

Ciertamente, la agrupación entregó un informe, pero también es claro que resultó imposible que pudieran actualizarse las consecuencias jurídicas de la entrega, en términos de una efectiva, real y profunda revisión y auditoría, de la que se derivara el intercambio de oficios que supone el ejercicio del derecho de audiencia, y de ahí se pudiera derivar, a su vez, la emisión de un dictamen que diera cuenta de un ejercicio completo, exhaustivo y cabalmente eficaz de rendición de cuentas.

Por otro lado, hay que tener presente que el artículo 269, párrafo 3, establece que la sanción prevista en el inciso e) de su primer párrafo, es decir, la sanción consistente en la supresión total de la entrega de ministraciones del financiamiento que les corresponda a las Agrupaciones Políticas Nacionales por el periodo que determine la autoridad electoral, sólo podrá imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea particularmente grave o sistemático, y en la especie esta autoridad no tiene ninguna duda respecto del carácter particularmente grave de la falta cometida por la agrupación.

El párrafo 3 del artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que la sanción consistente en la supresión total de la entrega de ministraciones, sólo puede imponerse cuando la irregularidad sea grave o sistemática. En el presente caso, la entrega del informe fuera de los plazos legales para su revisión, imposibilitó que la Comisión de Fiscalización verificara la veracidad de lo reportado por la citada agrupación en su informe.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que debe imponer a la Agrupación Campesinos de México por la Democracia la sanción establecida en el artículo 269, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que le corresponda por el periodo de un año".

Asimismo, en la resolución impugnada, en el punto resolutivo noveno se dice:

"NOVENO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.9 de la presente resolución, se impone a la Agrupación Política Nacional Campesinos de México por la Democracia, la sanción consistente en la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que le corresponda por el periodo de un año, que deberá ser aplicada en la asignación inmediata posterior a partir de que esta resolución haya quedado firme."

TERCERO. Los agravios expuestos por la recurrente son del siguiente tenor:

"Fuente del agravio.- Lo es la resolución y la sanción contenida en la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades u omisiones encontradas en los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio del año 2000 y que fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 20 de septiembre de 2001, sanción impuesta en resolutivo noveno y motivada por los fundamentos expuestos en el considerando 5.9, consistente en la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que le corresponde a mi representada por el periodo de un año.

Primer agravio.- Es motivo de agravio la resolución aprobada por el Pleno del Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante la cual se pronuncia respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondiente al ejercicio del 2000, conforme al dictamen consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización de los recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas ya que dentro del cuerpo de la resolución impugnada se analiza lo que corresponde a mi representada en el considerando 5.9, dentro del cual se cita la conclusión final del dictamen consolidado que establece que la Agrupación Política Nacional "Campesinos de México por la Democracia", presentó su informe anual fuera del plazo legal para la revisión de sus ingresos y gastos constituyendo a juicio de esa comisión incumplimiento a los artículos 34, párrafo 4, 35 párrafos 11 y 12 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, razón por la cual al analizar la irregularidad señalada se concluye que la presentación del informe anual se entregó fuera del plazo establecido que se hizo del conocimiento mediante el oficio STCFRPAP/930/00 de fecha 21 de noviembre de 2000, en donde se estableció el 14 de mayo de 2001, como límite, pero va más aún el Consejo General en su resolución al precisar que el informe anual se entregó fuera del plazo de revisión de los informes de las Agrupaciones Políticas Nacionales que feneció el 6 de agosto de 2001, y en consecuencia se hacía inevitable que la Comisión de Fiscalización estuviera en posibilidad material de realizar una revisión profunda y dar, un vez concluida, audiencia a la Agrupación para que alegara lo que a su derecho conviniese, lo que se traduce a juicio del Consejo General en una falta grave que actualiza la hipótesis establecida en los artículos 269 párrafo 2, incisos a), b) y e) y párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, numeral que se interpreta a conveniencia del Consejo General toda vez que no se establece el orden ni el criterio para aplicar la sanción.

Así pues advertimos que la sanción impuesta a mi representada nace de los términos y plazos de presentación del informe anual de ingresos y gastos a presentarse al Instituto Federal Electoral que por obligación se establece en el artículo 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo el argumento central, que lo extemporáneo de la presentación impide la revisión material de los gastos realizados en el ejercicio del 2000, lo que implica a juicio del Consejo Federal una actitud de no someterse al ejercicio de rendición de cuentas, lo que rompe con un estado democrático y de derecho que impide la fiscalización de los recursos públicos recibidos y su correlativa obligación de dar a conocer en forma transparente el uso dado a los mismos.

De la lectura del considerando que nos ocupa se aprecia que el Consejo General Electoral realiza interpretaciones particularmente fuera del contexto de la legislación aplicable otorgándoles un criterio distinto al prescrito por la normatividad, pues, en primer término se coincide que la obligación de presentar un informe anual de ingresos y gastos por parte de las Agrupaciones Políticas es ineludible, ya que atinadamente se refiere que el uso de recursos públicos trae como contraprestación la obligación del beneficiario de dar a conocer el uso transparente documentado y de todo público del destino de dichos recursos lo cual se realizó aun y cuando la presentación se hiciera fuera del plazo, lo que no es óbice para que la Comisión de Fiscalización se viera imposibilitada materialmente para su revisión y garantía de audiencia a la Agrupación Política y se

estuviera en oportunidad de intercambiar los oficios correspondientes, para las aclaraciones que ha lugar diera el informe, puesto que si bien es cierto el 6 de agosto del presente año, se cerró el plazo prescrito para la revisión de los informes y la existencia de errores u omisiones técnicas y presentar a su vez las aclaraciones o rectificaciones pertinentes, también lo es, que de esa fecha a aquella del 20 de septiembre del presente año, en el que se presenta ante el Consejo Nacional del Instituto Federal, el dictamen consolidado emitido por la Comisión de Fiscalización de los recursos otorgados a las Agrupaciones Políticas, existió el tiempo suficiente para proceder en los términos prescritos por el artículo 49-A, párrafo 2, inciso c), en atención a que lo prescrito por el artículo 49-A, párrafo 2, inciso a) ya se había cumplimentado, aun cuando fuera, esto en forma extemporánea, en consecuencia no existía imposibilidad material para poder entrar al estudio y análisis de la revisión del informe anual tomando en consideración que la finalidad de la Comisión Fiscalizadora, lo es el revisar que los recursos públicos otorgados a las Agrupaciones Políticas Nacionales sean destinados a los fines establecidos en la ley de la materia, sin que se distraigan para otros intereses ya que la aplicación de tales recursos es de interés público.

Sin embargo, la autoridad electoral entiende a su juicio que la presentación extemporánea del informe anual se traduce en una falta de voluntad por parte de mi representada para someterse al escrutinio de los recursos lo que califica como una falta grave lo cual no se actualiza en virtud de que el informe fue presentado, no en tiempo, pero se cumplió con la obligación, luego entonces la voluntad de mi representada fue someterse a la revisión a practicar por la autoridad electoral y no quedar fuera del marco normativo a que se encuentra sujeta.

En mérito de lo anterior los plazos a que se encontraba sujeta la presentación del informe anual no excusan a la Comisión Fiscalizadora para la revisión del informe anual, aun y cuando son ciertos y determinados los plazos sin opción a ser modificados por voluntad de la autoridad o de los partidos o agrupaciones políticas ya que en la especie la revisión prescrita por el artículo 49-A, párrafo 2, incisos a) y c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es de interés público y como se cita en el considerando que nos ocupa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que la entrega tardía del informe anual no exime de la obligación que tiene la autoridad de revisarlo y entrar al fondo del análisis y a la auditoría que corresponda, por consecuencia no se puede interpretar la presentación extemporánea, como una falta de presentación pues son cosas diversas y cada una tendría una sanción diferente de aquellas señaladas en el párrafo 3, del artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

A mayor abundamiento la obligación se cumplió, por lo que la sanción impuesta a mi representada no es congruente con la falta cometida, esto es, la autoridad electoral fue más allá de lo que la propia ley permite al aplicar una sanción de las contenidas en el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ya que no se pretende evadir la responsabilidad en la que se incurrió al presentar fuera del término establecido el informe anual, pero también, no es dable la sanción impuesta a mi representada por la extemporaneidad del cumplimiento de dicha obligación y el criterio interpretativo de la autoridad electoral plasmado en el considerando 5.9 de la resolución impugnada al calificarlo como la voluntad de evadir la obligación por parte de mi representada, no es congruente con los documentos que inclusive cita la autoridad que se considera responsable y en ese orden de ideas a juicio del suscrito la sanción de aplicarse por parte de la autoridad electoral debió de ser una de aquellas contenidas en los incisos a) o b) del precepto legalmente mencionado.

A partir de lo manifestado se advierte que la obligación contenida en el artículo 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se satisfizo y que la irregularidad consistió en lo extemporáneo de su presentación lo cual debe ser sancionado, pero no al extremo de condenar a la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento correspondiente al periodo de un año, ya que lo anterior tendría como consecuencia que mi representada dejara de tener los medios materiales para desarrollar los fines para lo que fue creada sin coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política y fomentar la creación de una opinión pública mejor informada.

Debe decirse que la interpretación hecha en el considerando 5.9 de lo establecido del artículo 269, párrafo 3, en relación con el inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es una facultad exclusiva de la autoridad electoral cuando el incumplimiento sea particularmente grave, calificativa que se otorgó a la presentación extemporánea del informe anual por parte de mi representada lo que ocasionó que la sanción a aplicarse fuera la contenida en el inciso c) del precepto legal antes citado, ya que el Código faculta a la autoridad electoral para que su juicio y prudente arbitrio lo determine, ha de recordarse también que al ser una facultad interpretativa la concedida a la autoridad electoral la parte a la que se le aplica la sanción puede o no estar conforme con el criterio esgrimido para motivar la sanción impuesta y sentirse agraviada con la imposición de la pena por considerar que ésta va más allá de la que dio lugar su conducta como es el

caso, ya que en esencia la obligación se cumplió y existía la posibilidad material que se actualizaran las consecuencias jurídicas de la entrega, no obstante que no se respetaran los plazos que para ello se habían establecido y la no verificación de la veracidad de lo reportado por mi representada no es imputable a la Agrupación, ni a los plazos ni términos no cumplidos por lo que la condena impuesta se traduce en un castigo excesivo que imposibilita a mi representada a realizar los fines para los que fue creada, por lo que se solicita que este Tribunal Federal Electoral previo al análisis concienzudo del hecho fáctico, modifique la sanción impuesta y considere los argumentos esgrimidos a lo largo de este escrito para que no se impida continuar con la función de coadyuvar con el Estado Democrático que vive el país y privar a un grupo de ciudadanos organizados en participar en la política del país fomentando una cultura política adecuada en la que se permita a las diferentes expresiones ser partícipes del desarrollo democrático de una nación".

CUARTO. Son inatendibles los motivos de inconformidad.

La lectura de los agravios pone de manifiesto, que el principal problema a resolver se concentra en determinar, si la sanción impuesta a la organización política recurrente resulta acorde o es incongruente con la irregularidad que se le atribuyó en la resolución combatida.

En efecto, en la mencionada resolución se determinó que la presentación extemporánea del informe anual de ingresos y egresos por parte de la recurrente, constituyó una falta calificada como particularmente grave, y que, con fundamento en el artículo 269, apartado 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ameritaba imponerle una sanción, consistente en la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda, por el plazo de un año.

Para determinar lo anterior, dicha resolución se apoyó en las siguientes consideraciones:

1) El veintiuno de noviembre del año dos mil, se hizo del conocimiento de la agrupación política recurrente, que el tiempo para la presentación de su informe anual de ingresos y egresos, concluiría el catorce de mayo de dos mil uno.

2) El seis de agosto de dos mil uno, aun cuando ya había fenecido el plazo para revisar los informes de las agrupaciones políticas nacionales, se hizo del conocimiento de la aquí recurrente, que ella no había presentado su informe en el plazo indicado, y que hiciera las aclaraciones pertinentes dentro del plazo de diez días hábiles. El referido plazo venció el veinte de ese mismo mes, y sin embargo, fue hasta el día veintidós cuando la agrupación política presentó su informe anual de ingresos y egresos.

3) Lo anterior evidencia que, el informe se presentó fuera del plazo establecido, e incluso fuera del término de sesenta días que la autoridad fiscalizadora tuvo para revisar los informes rendidos por las organizaciones políticas.

4) La presentación extemporánea del informe, impidió a la comisión fiscalizadora realizar una revisión profunda, y dar audiencia a la agrupación para que alegara lo que a su derecho conviniera, porque para entonces ya estaba dentro del plazo para emitir el dictamen consolidado, relacionado con los informes de las agrupaciones políticas nacionales.

5) También se impidió, materialmente, que la comisión de fiscalización auditara a la recurrente, lo cual constituye una **falta particularmente grave.**

6) Si bien, no se está en el supuesto de una falta de presentación del informe anual, de cualquier manera, la presentación de éste por la recurrente fue **extraordinariamente tardía,** lo que impidió a la autoridad fiscalizadora realizar un ejercicio completo de revisión y comunicación con la propia agrupación, respecto de sus errores y omisiones técnicas.

7) Las circunstancias evidenciadas ponen de manifiesto que, la agrupación política no ha querido someterse al ejercicio de rendición de cuentas, establecido por la ley, de modo que no existe duda de que **la infracción cometida es particularmente grave**.

8) La inconforme tenía claro conocimiento de la obligación de presentar su informe anual, en el plazo correspondiente, pues además de que fue notificada para ello, en los ejercicios anteriores sí lo entregó en tiempo, y con la documentación requerida.

9) A pesar de la extemporaneidad con que se presentó el informe, éste se analizó en el dictamen presentado por la comisión fiscalizadora, pero ahí se puso de manifiesto que fue imposible realizar una revisión profunda y completa de dicho informe, y de notificar a la agrupación sobre los posibles errores u omisiones advertidos, para que presentara las aclaraciones y pruebas pertinentes, pues ya se había agotado el plazo para solicitar aclaraciones o documentos, y además, como ya se estaba dentro del plazo para elaborar el dictamen consolidado, no era posible que la autoridad realizara actividades propias de la etapa de

revisión. En consecuencia, resultó imposible realizar una profunda revisión y auditoría para emitir un dictamen que diera cuenta de un ejercicio completo, exhaustivo y cabalmente eficaz.

10) Con base en las circunstancias anteriores, la infracción cometida resulta **particularmente grave**, y amerita la imposición de la sanción, consistente en la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que le corresponda a la agrupación política recurrente, por un año.

En el dictamen consolidado, que aprobó el Consejo General del Instituto Federal Electoral, se hizo constar lo siguiente:

1. Hasta el veintidós de agosto del año en curso, la recurrente presentó su informe anual, acompañando la siguiente documentación.

a) Balanzas de comprobación mensuales, de enero a diciembre del año dos mil.

b) Auxiliares de ingresos y egresos a último nivel, correspondientes al ejercicio de dos mil.

c) Estados de cuenta bancarios y conciliaciones bancarias del ejercicio dos mil.

d) Pólizas de diario, incluyendo documentación soporte del ejercicio dos mil.

e) Control de folios "CF-RAF-APN" y recibos "RAF- APN" del ejercicio dos mil.

2. De la revisión del informe y documentos exhibidos, se advirtió que: a) En el rubro de **Ingresos**, la agrupación no proporcionó todos los estados de cuenta bancarios de la cuenta de cheques abierta a su nombre, en el banco Citibank México, S.A., por los meses de febrero, octubre y diciembre del año dos mil; tampoco presentó el informe "lA-APN" y sus respectivos anexos, ni la documentación a que se refieren los artículos 11 y 12 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales, por lo cual **no fue posible revisar ese rubro en el periodo citado,** y **b)** En el rubro correspondiente a Egresos, en el concepto de *Gastos de Operación Ordinaria*, subcuenta *eventos compartidos*, se encontró una póliza que carece de documentación soporte, en el rubro de *Investigación Socioeconómica y Política*, se localizó una póliza cuyo soporte está en copia fotostática simple; respecto del concepto *Tareas Editoriales*, se localizaron dieciséis pólizas que carecen de documentación soporte; no presentó el *kárdex* con sus respectivas notas de entradas y salidas, y no proporcionó copia de dos cheques de la subcuenta *Actividades Editoriales*, relacionados con la cuenta abierta en Citibank, México, S.A. De esta manera, en esos rubros, **tampoco fue posible llevar a cabo la revisión correspondiente**.

Ahora bien, en sus motivos de inconformidad, la recurrente sostiene que la presentación extemporánea del informe anual de ingresos y egresos del ejercicio del año dos mil, no debe ser sancionada con la supresión total de las ministraciones que le corresponden por el periodo de un año, porque la presentación extemporánea del informe anual, no implica la actitud de no someterse al ejercicio de rendición de cuentas, ni impide la fiscalización de los recursos públicos recibidos, por lo que debió aplicarse, como sanción, alguna de las previstas en el artículo 269, apartado 1, incisos a) o b), del Código Federal Electoral; que la presentación extemporánea del informe anual, no se puede interpretar como una falta de presentación del mismo, pues son cosas distintas, y de esta manera, cada uno de estos supuestos admitiría ser sancionado en forma diferente; de esta manera, la sanción impuesta en el caso, no es congruente con la falta cometida.

Ahora bien, en concepto de esta Sala Superior, la infracción en que incurrió la agrupación política recurrente, por las circunstancias particulares que la rodean, sí se considera **particularmente grave**, y de esta manera, se estima que fue ajustada a derecho la sanción que le impuso la responsable, como a continuación se demuestra:

Los artículos 35, apartado 11, y 49-A, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen la obligación precisa de que las organizaciones políticas presenten, ante la autoridad electoral correspondiente, un informe anual sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad.

Las anteriores normas tienen como propósito claro, que las organizaciones políticas, como formas de asociación ciudadana, que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada, lleven un control adecuado de sus ingresos y egresos, de manera que, a través del ejercicio fiscalizador de la autoridad, se garantice la licitud de los ingresos que obtenga y de su adecuada aplicación, a los fines que tiene encomendados, máxime que una parte de los recursos que podrían obtener, provienen del Estado, y de esta manera, se busca que los recursos que reciban en ese concepto se ejerzan en los términos y bajo las condiciones que establece la normativa electoral.

Ahora bien, el procedimiento que se regula en el artículo 49-A, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo a la presentación y revisión del informe anual, sobre el origen y destino de los ingresos que reciban las agrupaciones políticas, por cualquier modalidad, está compuesto de etapas temporales, coordinadas y sucesivas que resultan idóneas y eficaces, para que, por una parte, tales agrupaciones puedan cumplir con la obligación que se les impone, y por la otra, que la autoridad electoral, encargada de vigilar el origen y destino de los recursos de estos entes políticos, esté en condiciones de realizar todos lo trabajos técnicos y materiales que estime necesarios, para llevar a cabo una adecuada fiscalización, revisión y auditoría, y como consecuencia, de emitir una resolución fundada, sobre el acatamiento o incumplimiento de las bases establecidas en la normas electorales, relacionadas con el uso y destino de tales recursos.

El procedimiento de referencia, se inicia con la presentación de un informe anual de ingresos y egresos, el cual debe presentarse dentro de los noventa días siguientes, al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte, en términos del artículo 35, apartado 12, del Código Federal Electoral. La fijación de este plazo se explica, porque el informe anual comprende todos los gastos realizados en el ejercicio sujeto a revisión, y por tanto, resulta evidente la necesidad de que la agrupación política cuente con un plazo adecuado para preparar completo su informe, a fin de proporcionar a la autoridad los elementos necesarios para dictaminar y resolver, en su oportunidad, sobre el cumplimiento de las normas de control establecidas, y el correcto uso de sus recursos.

Una vez que concluye el plazo de presentación de todos los informes, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, debe revisarlos, para lo cual cuenta con un plazo de sesenta días. Esta tarea revisora, no siempre se concreta a un simple análisis de la documentación presentada, en donde sólo se compruebe la correspondencia de las operaciones aritméticas contenidas en la contabilidad exhibida, pues, para revisar que cada uno de los ingresos y gastos reportados cumplan con el orden y la forma requerida por la normativa aplicable, puede surgir la necesidad de que la comisión fiscalizadora, en conformidad con el artículo 14.3 del Reglamento indicado, decida requerir la presentación de otros documentos o pedir aclaraciones respecto a los que se presentaron, o bien, realizar verificaciones selectivas en la documentación comprobatoria de los ingresos y gastos reportados, mediante la práctica de auditorías a los registros contables de la agrupación política, y estas actividades se deben realizar dentro del mismo plazo de los sesenta días.

Una vez concluida la etapa de revisión de informes, que incluye, en su caso, la realización de auditorías, la legislación prevé que, en respeto a la garantía de audiencia del ente político de que se trate, se le dé oportunidad de que subsane las posibles irregularidades o errores advertidos; para esto, se exige notificar a la interesada, para que en un plazo de diez días, contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. Esto se constata en el artículo 49-A, apartado 2, inciso b), de la legislación electoral en comento.

La siguiente etapa consiste en la elaboración de un dictamen consolidado, por parte de la comisión fiscalizadora, que debe emitirse dentro del plazo de veinte días, el cual deberá contener, por lo menos: 1. Los procedimientos y formas de revisión aplicados; 2. Los resultados y las conclusiones de la revisión de los informes presentados por cada agrupación política; 3. La mención de los errores o irregularidades encontradas en los mismos; 4. Los resultados de todas las auditorías practicadas; 5. Las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones políticas, después de haberles notificado con ese fin; y, 6. Un proyecto de resolución.

Como puede observarse, las anteriores etapas del procedimiento de fiscalización, están diseñadas, no sólo para que la organización política esté en condiciones de rendir su informe anual y proporcionar todos los elementos necesarios que justifiquen la transparencia en el control de sus recursos y su adecuada aplicación, sino también para que la autoridad electoral, dentro de los plazos que las normas precisan, ejerza sus facultades de fiscalización, para obtener el cabal conocimiento de los movimientos relativos a los ingresos y gastos reportados por las agrupaciones políticas nacionales, y esté en condiciones de dictaminar sobre el cumplimiento de las normas electorales, que exigen el adecuado control y uso de los recursos obtenidos, por tales agrupaciones.

De esta manera, cuando una organización política no cumple, en tiempo, con la obligación de informar, a la autoridad electoral sobre el origen y destino de sus recursos, vulnera lo dispuesto por los artículos 35, apartado 11, y 49-A, apartado 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que le imponen esa obligación, y cuyo incumplimiento se convierte en un acto ilícito, sancionado conforme a lo previsto por el artículo 269 apartado 2, inciso a), del propio ordenamiento.

Pero además, la presentación extemporánea del informe de que se trata, se traduce en una obstrucción importante para el desempeño cabal de la función de la autoridad fiscalizadora, cuya gravedad y consecuencias, dependerá de las circunstancias propias de cada situación particular, que concurran con la irregularidad cometida, como pueden ser:

1. El tiempo en que se presente el informe correspondiente, pues de presentarse éste hasta la etapa de aclaraciones, o dentro del término que legalmente tiene la autoridad para elaborar el dictamen consolidado, se constituye en la causa de que el análisis que se realice no sea completo y minucioso, o que de plano no se pueda llevar a cabo ningún trabajo de verificación, revisión y fiscalización, ante la falta de tiempo suficiente para realizar las auditorías o verificaciones necesarias para corroborar eficazmente la veracidad de lo reportado, ya que la autoridad tiene plazos precisos establecidos en la ley para ejercer su función fiscalizadora y proponer la resolución conducente.

2. El mayor o menor grado de dificultad que implique la revisión del informe presentado, que se derive de su contenido o de la cantidad de documentos que tuvieran que analizarse, o bien, de la necesidad de recabar otros que se consideren necesarios para esclarecer irregularidades u omisiones advertidas, o la realización de auditorías o verificaciones a los registros contables del ente político, que sean necesarias para emitir un diagnóstico completo y claro sobre los movimientos contables relacionados con sus ingresos y egresos, y de su aplicación durante el tiempo sujeto a verificación.

Ante estas circunstancias, la presentación extemporánea del informe, no sólo dificulta la revisión adecuada y segura, sino que además, se obstruye fácilmente a la autoridad, electoral en el ejercicio de su función fiscalizadora, pues se impide que, por los plazos en que debe emitir su dictamen, se realicen los actos conducentes para diagnosticar posibles irregularidades en el control, origen y destino de los recursos de dichos entes políticos, con lo cual no se puede tener certeza sobre los movimientos financieros realizados por la agrupación política de que se trate, de modo que todas sus actividades financieras quedan al margen de la legalidad.

Ahora bien, de la lectura completa de los agravios expresados por la recurrente, se pone de manifiesto que no se controvierte la existencia de la infracción atribuida derivada del hecho de haber presentado hasta el veintidós de agosto de dos mil uno, el informe anual de ingresos y egresos, cuando debió presentarlo, a más tardar, el catorce de mayo del propio año.

Tampoco está controvertido que el veinticuatro de noviembre del año dos mil, la autoridad electoral le comunicó que la presentación del informe anual, relativo al registro de sus ingresos y egresos, por el ejercicio de dos mil, iniciaba el primero de enero y concluía el catorce de mayo de dos mil uno.

Igualmente, no está cuestionado que el seis de agosto del año en curso, la autoridad fiscalizadora hizo del conocimiento de la inconforme, que no había presentado su informe anual, y que le otorgó un plazo de diez días hábiles, para que presentara las aclaraciones correspondientes; que ese plazo feneció el día veinte de agosto del propio año, y que fue hasta el veintidós siguiente cuando la agrupación política entregó dicho informe, siendo que para esa fecha, la autoridad ya tenía que estar dedicada, por disposición legal, a elaborar el dictamen consolidado.

Por último, tampoco se controvierte por la recurrente, que en el análisis del informe que presentó extemporáneamente, se detectaron las diversas irregularidades precisadas en el dictamen consolidado, aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mismas que han quedado precisadas con anterioridad.

De todo lo anterior se puede deducir con claridad, lo que sigue:

1. La agrupación política recurrente presentó su informe, sin ninguna justificación, hasta después de haber transcurrido cien días de que concluyó el plazo que tuvo para presentarlo, pues dicho plazo feneció el catorce de mayo, en tanto que el informe lo presentó hasta el veintidós de agosto del año en curso.

2. Que tuvo pleno conocimiento de las fechas de inicio y conclusión del plazo para la presentación de dicho informe, pues fue notificada personalmente de esa circunstancia.

3. Que se le otorgó la oportunidad de hacer las aclaraciones pertinentes sobre la falta de presentación de su informe, sin que dentro del plazo de diez días que se le concedió haya cumplido, pues presentó su informe hasta cuando ya estaba en curso el plazo de la autoridad fiscalizadora para elaborar el dictamen consolidado sobre los informes que debieron rendir las agrupaciones políticas nacionales.

4. Que a pesar de lo anterior, se analizó el informe, pero se encontraron diversas irregularidades y omisiones, en el registro, control y presentación de documentos sobre sus ingresos y egresos.

Estas precisiones ponen de manifiesto, que con la conducta de la recurrente, se obstruyó la labor que tiene la autoridad fiscalizadora, de realizar esas funciones dentro de los plazos establecidos, ya que se impidió que ésta tuviera conocimiento claro y preciso sobre el manejo de todos los ingresos y egresos de la

mencionada agrupación política en el periodo fiscalizado, debido a que, por el tiempo en que se presentó el informe, que fue cuando la autoridad debía emitir su dictamen consolidado, ya no fue posible requerir a la interesada por la presentación de documentos faltantes o de otros nuevos, ni se pudieron realizar las verificaciones que permitieran corroborar la certidumbre de lo reportado en los diversos rubros del informe analizado, pues de su análisis se advirtieron irregularidades que, como se sostuvo en el dictamen, impidieron determinar si los movimientos contables de algunos rubros se apegaron a la normativa electoral aplicable.

Todo esto lleva al convencimiento de que, la conducta adoptada por la inconforme, sí tuvo como consecuencia la de evitar la adecuada fiscalización de sus recursos, lo que se logro, precisamente, por el tiempo en que se presentó el informe.

De esta manera, la irregularidad, de por sí grave, derivada de la presentación tan extemporánea de su informe, adquirió la calidad de particularmente grave, como lo estimó la responsable, ante la concurrencia de todas las irregularidades advertidas del análisis que se realizó de dicho informe, y de las demás circunstancias que giran en torno a la misma, como el hecho de que se tuvo pleno conocimiento de la obligación, se contó con un tiempo, no sólo prudente, sino holgado, para la presentación del informe, y a pesar de esto, se presentó cuando habían fenecido los plazos de un procedimiento ordinario de revisión, para que la autoridad desarrollara su función fiscalizadora.

De esta manera, al estar catalogada como particularmente grave, la infracción sí amerita la sanción que se impuso a la infractora, por actualizarse plenamente el supuesto previsto en el artículo 269, apartado 3, del Código Federal Electoral.

Es verdad que la entrega extemporánea del informe y la falta de presentación de éste, son dos situaciones distintas, pues en el primer supuesto, existe la posibilidad de que dicho informe sea revisado y, de no ser necesaria ninguna otra actividad más que la comparación de cifras y documentos que se hubieran acompañado, da pauta para conocer así el origen y destino de los recursos de la agrupación política, caso en el cual podría imponerse a la infractora una sanción menor, por la simple presentación extemporánea del informe, esto es, si del análisis de éste no se advierten otras irregularidades sobre el control, origen y destino de los recursos fiscalizados, pero no así cuando la falta de presentación del informe, impide de modo importante que se tenga conocimiento y se esté en condiciones de dictaminar sobre el manejo de los recursos de la agrupación política.

Sin embargo, en la resolución impugnada se tomó en cuenta la diferencia entre los supuestos mencionados, pero se advirtió, claramente, que la presentación del informe fue “extraordinariamente tardía” y que con esto se impidió realizar un ejercicio completo de revisión sobre los recursos de la inconforme, lo cual originó que la irregularidad se tornara **particularmente grave** y justificara la sanción aplicada. Lo anterior se estima ajustado a derecho, porque no sólo la falta de informe, sino también la presentación extemporánea de éste, por las condiciones en que se presente, puede obstruir la función de la autoridad fiscalizadora, al grado de impedir que ésta conozca adecuadamente el origen y destino de los recursos del ente político de que se trate, para resolver sobre su correcto o incorrecto control, y ante esta circunstancia, la irregularidad que en principio pudiera considerarse grave, se tornaría particularmente grave, como sucedió precisamente en el caso.

Por otra parte, en el dictamen de la Comisión de Fiscalización, se sostuvo que el informe anual de la recurrente se presentó hasta el veintidós de agosto del año en curso, y que por tal motivo, se impidió auditar en forma completa sus ingresos y egresos. El Consejo General aprobó dicho dictamen, y también razonó que, efectivamente, la presentación extemporánea del informe, por parte de la recurrente, impidió una revisión profunda del informe anual de ingresos y egresos. De esta manera, resulta infundado el argumento que se expone, en el sentido de que la resolución impugnada no está en consonancia con lo considerado en el dictamen consolidado.

Finalmente, como en la resolución impugnada sí se analizó y consideró el informe anual de ingresos y egresos, presentado hasta el veintidós de agosto del año en curso, resulta inoperante el argumento donde la inconforme insiste en que debió estudiarse dicho informe. Además, si cuando se presentó el informe estaba en curso el término legal para que la autoridad fiscalizadora elaborara el dictamen correspondiente, y lo presentara como proyecto de resolución ante el Consejo General, es inconcuso que no se estaba en la etapa correspondiente para requerir a la inconforme sobre la presentación de documentos o aclaraciones, sobre las irregularidades advertidas, esto quiere decir, que fue la propia recurrente la que propició que ya no fuera requerida para aclarar o subsanar posibles irregularidades.

En atención a las anteriores consideraciones, procede confirmar la resolución impugnada, en la parte que corresponde a la Agrupación Política Nacional “Campesinos de México por la Democracia”.

Por lo expuesto y fundado, además, en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 47, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se

RESUELVE:

UNICO. Se confirma el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el veinte de septiembre del año dos mil uno, en la parte que determinó imponer a la Agrupación Política Nacional "Campesinos de México por la Democracia", la sanción consistente en la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento por el periodo de un año.

NOTIFIQUESE. Personalmente a la Agrupación Política Nacional "Campesinos de México por la Democracia", en el domicilio ubicado en la calle Eligio Ancona, número 67, Colonia Santa María la Rivera, código postal 06400, Delegación Cuauhtémoc; por oficio, con copia certificada anexa de la presente sentencia, al Instituto Federal Electoral; por estrados, a los demás interesados. Todo esto de conformidad con lo previsto por los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General, del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de seis votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ausencia del magistrado Eloy Fuentes Cerda, quien se encuentra desempeñando una comisión oficial.- El Subsecretario General de Acuerdos que autoriza y da fe, con la ausencia del Doctor Flavio Galván Rivera, Secretario General de Acuerdos, quien también se encuentra desempeñando una comisión oficial.- El Magistrado Presidente, **José Fernando Ojesto Martínez Porcayo**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Leonel Castillo González**, **José Luis de la Peza**, **Alfonsina Berta Navarro Hidalgo**, **José de Jesús Orozco Henríquez** y **Mauro Miguel Reyes Zapata**.- Rúbricas.- El Subsecretario General de Acuerdos, **Mario Torres López**.- Rúbrica.

EL SUSCRITO, LICENCIADO **MARIO TORRES LOPEZ**, SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, CERTIFICA: Que la presente copia, en cuarenta y cuatro fojas debidamente cotejadas y selladas, corresponde íntegramente a la sentencia dictada en sesión pública de resolución celebrada en esta fecha, cuyo original obra en el expediente SUP-RAP-064/2001 integrado con motivo del Recurso de Apelación promovido por Agrupación Política Nacional, "Campesinos de México por la Democracia", radicado en esta Sala Superior. Lo que certifico, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 200 y 202 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en cumplimiento de lo ordenado en la propia sentencia. Doy fe.- México, Distrito Federal, a catorce de noviembre de dos mil uno.- Conste.- Rúbrica.